MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES	SECRETARÍA GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL ETIQUETADO ACCESIBLE DE PRODUCTOS DE CONSUMO

……

RESUMEN EJECUTIVO

Ministerio/Órgano proponente	Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Dirección General de Consumo y Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad	**Fecha**	25 de mayo de 2026
Título de la norma	Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo		
Tipo de Memoria	Normal ☒ Abreviada ☐		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Motivación	El proyecto de real decreto da cumplimiento al mandato recogido en la disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, por la que se mandata al Gobierno a regular reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables. Asimismo, este real decreto cumple con la obligación contenida en el artículo 4 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad a través de la implantación del etiquetado accesible como medida para garantizar la accesibilidad universal en los bienes y productos de consumo regulados, cumpliendo así el gobierno español con el compromiso de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, mediante la aprobación de esta medida legislativa.		
Objetivos que se persiguen	Con esta norma se pretende regular un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos inclusivos, que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual en tanto que personas consumidoras		

	vulnerables.
Principales alternativas consideradas	La disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, insta al gobierno a regular reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables. Este real decreto da cumplimiento a la mencionada disposición adicional. No se pueden considerar otras alternativas.
Plan Anual Normativo	La presente norma se encuentra recogida en el Plan Anual Normativo de 2025
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
Tipo de norma	Real Decreto
Estructura de la Norma	El proyecto de real decreto consta de un preámbulo y cuenta con un total de 6 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, cuatro disposiciones finales y un anexo.
Consulta pública previa (artículo 26.2 Ley 50/1997)	De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se sustanció el trámite de consulta pública a través del portal web del Ministerio, con fecha desde el 18 de julio de 2022 al 1 de septiembre de 2022.
Trámite de audiencia **(artículo 26.6 Ley 50/1997)**	El proyecto de real decreto se sometió al trámite de audiencia e información públicas conforme a lo dispuesto en los artículos 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, haciendo accesible el texto del mismo al público general a través de la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del 16

	de marzo al 12 de abril de 2026.
Informes recabados (artículo 26 Ley 50/1997)	Se han recabado los siguientes informes: - Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática - Ministerio de Hacienda - Ministerio de Sanidad - Ministerio de Industria y Turismo - Ministerio de Economía, Comercio y Empresa - Ministerio de Trabajo y Economía Social - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones - Agencia Española de Protección de Datos - Informe de las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. - Informe de las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, a través de la Conferencia Sectorial de Consumo. - Agencia Española de Protección de Datos. - Consejo Nacional de la Discapacidad. - Consejo de Consumidores y Usuarios. Se ha solicitado el siguiente informe: - Oficina de Coordinación y Calidad Normativa Se solicitarán los siguientes informes: - Secretaría General Técnica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Abogacía del Estado. - Aprobación previa del Transformación Digital y Función Pública (26.5 Ley 50/1997) - Asimismo se recabará Dictamen del Consejo de Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.3 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
ANÁLISIS DE IMPACTOS	

Adecuación al orden de competencias	El proyecto de real decreto se dicta al amparo del título competencial del artículo 149.1. 1ª y 13ª de la Constitución.	
Impacto económico y presupuestario	Efectos sobre la economía en general	La norma genera impacto sobre la economía
	En relación con la competencia	☒ la norma no tiene efectos significativos sobre la competencia ☐ la norma tiene efectos positivos sobre la competencia ☐ la norma tiene efectos negativos sobre la competencia
	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	☐ supone una reducción de cargas administrativas. Cuantificación estimada _____ ☐ incorpora nuevas cargas administrativas. Cuantificación estimada _____ ☒ no afecta a las cargas administrativas
	Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma ☐ Afecta a los presupuestos de la Administración del Estado ☐ Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales	
Impacto de Género	La norma tiene un impacto de género	Negativo ☐ Nulo ☒ Positivo ☐
Impacto en la familia		Negativo ☐

		Nulo ☒ Positivo ☐
Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad		Negativo ☐ Nulo ☐ Positivo ☒
Impacto en la infancia y en la adolescencia		Negativo ☐ Nulo ☒ Positivo ☐
Impacto por razón de mitigación y adaptación al cambio climático		Negativo ☐ Nulo ☒ Positivo ☐
Impacto para la ciudadanía y para la Administración desde la perspectiva del desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración Digital		Negativo ☐ Nulo ☒ Positivo ☐
Otros impactos	Impacto positivo no solo desde el punto de la accesibilidad, sino desde la condición de persona consumidora.	Negativo ☐ Nulo ☐ Positivo ☒

EVALUACIÓN EX POST

En virtud de lo previsto en el artículo 2.1.j) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre,

considerado lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley del Gobierno, y en el artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa y conforme a lo que figura en el Plan Anual Normativo correspondiente a 2025 se someterá la norma a una evaluación basada en un informe de balance sobre la aplicación del presente real decreto y la situación y evolución del etiquetado accesible, con especial atención a la del etiquetado en el sistema braille.

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL ETIQUETADO ACCESIBLE DE PRODUCTOS DE CONSUMO

La presente memoria se elabora de conformidad con el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

La tramitación del proyecto se inició con la consulta pública previa a través de la página web del Departamento que se produjo del 18 de julio de 2022 al 01 de septiembre de 2022, siguiendo con el trámite de audiencia e información pública, del 16 de marzo y el 12 de abril de 2026.

I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

1. Motivación

a. Causas de la propuesta

La regulación de un etiquetado en formato accesible para determinados productos y servicios trae causa en la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Así, el proyecto de real decreto constituye un desarrollo de la Disposición adicional primera de dicha ley, que dispone lo siguiente: *"El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables".* Asimismo, este real decreto cumple con la obligación contenida en el artículo 4 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad a través de la implantación del etiquetado accesible como medida para garantizar la accesibilidad universal en los bienes y productos de consumo regulados, cumpliendo así el gobierno

español con el compromiso de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, mediante la aprobación de esta medida legislativa.

b. Interés público y colectivo afectados

La justificación de esta disposición y el presente desarrollo reglamentario se encuentra en la situación de vulnerabilidad en que pueden incurrir las personas con discapacidad en el marco de sus relaciones de consumo. Así, de acuerdo con la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2020, el número de personas con alguna discapacidad se elevaba a 4.380.000 personas.

Estas personas se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo dependiendo de la capacidad de respuesta. En tal sentido, estas personas están más expuestas a la quiebra y vulneración de sus derechos como personas consumidoras, por cuanto en muchas ocasiones el mercado de bienes, productos y servicios carece de condiciones de accesibilidad universal, dificultando su desempeño como personas consumidoras protegidas. Igualmente cabe destacar las dificultades en el acceso a la información, la necesidad de una protección más intensa contra exclusiones, discriminaciones y abusos, o el sobrecoste económico de la discapacidad, entre otras causas. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual pueden ver impedido el acceso a la información que incorporan las etiquetas de los productos de uso cotidiano.

Cabe mencionar a este respecto que las personas con discapacidad visual han de entenderse como un colectivo amplio y diverso, en el que la intensidad de la deficiencia visual varía y esta, además, puede coexistir con otras deficiencias. En definitiva, el colectivo de personas cuya calidad de vida va a verse directamente impactada por esta norma abarca desde aquellas con una discapacidad visual leve, conocedoras o no del sistema braille, que pueden recurrir a códigos QR -o similar- para visualizar o leer la información proporcionada por este, siempre que su contenido sea en formato accesible, hasta las personas sordociegas que, con toda probabilidad

harán un uso intensivo de los recursos de accesibilidad previstos en la norma. A todas ellas se las ha de entender comprendidas en el concepto de *persona con discapacidad visual* al que hace referencia el real decreto.

2. Objetivos

El objetivo del Real Decreto es regular un etiquetado accesible, mediante el uso del alfabeto braille, así como otros formatos inclusivos, que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.

3. Análisis de alternativas

El proyecto de real decreto regula esta materia *ex novo,* en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero.

Por tanto, no se han considerado otras alternativas diferentes a la elaboración de un real decreto.

4. Adecuación a los principios de buena regulación

Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Así, el proyecto de real decreto atiende al principio de necesidad. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, se atiende a la necesidad de dar cumplimiento al mandato contenido en la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de aprobar un reglamento que regule un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial

relevancia, siendo la regulación prevista eficaz y proporcionada en el cumplimiento de este propósito y afectando al interés de un segmento considerable de la población consumidora que se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

El proyecto de real decreto también se ajusta al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para garantizar la inclusión de las personas consumidoras con discapacidad, especialmente visual, en aquellos productos que por sus características son considerados de especial relevancia. La regulación prevista se entiende adecuada y suficiente para los fines que se persiguen.

Respecto al principio de seguridad jurídica, el real decreto es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional, al constituir, junto a la Ley 4/2022, de 25 de febrero, un marco normativo estable, predecible, integrado y claro de las características y exigencias para los operadores económicos para la introducción del etiquetado accesible.

En cuanto al principio de transparencia, además de quedar claramente identificados la motivación y los objetivos que persigue el real decreto en su preámbulo, así como en la memoria de análisis de impacto normativo, el proyecto se acomoda a los trámites propios de la participación pública, esto es, de consulta pública previa (con fecha 19 de julio de 2022 a 01 de septiembre de 2022) y de audiencia e información públicas (con fecha 16 de marzo a 12 de abril de 2026), posibilitando, por lo tanto, su conocimiento por sus destinatarios.

Por último, en relación con el principio de eficiencia se manifiesta que el proyecto no impone nuevas cargas administrativas a los ciudadanos ni nuevas obligaciones presupuestarias.

Cabe mencionar en este punto que, el presente proyecto tiene un inmediato antecedente que respondía al mismo objetivo (la regulación del etiquetado accesible) pero que recogía un contenido sustancialmente distinto. Dicho proyecto se sometió al trámite previsto en la DIRECTIVA (UE) 2015/1535 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de septiembre de 2015 por la que se establece un procedimiento

de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (versión codificada), obteniendo significativos reparos[1] que determinaron la retirada del texto y a la elaboración de una nueva propuesta.

5. Plan Anual Normativo

La presente norma se encontraba recogida en el Plan Anual Normativo correspondiente al ejercicio 2025 y se ha propuesto su inclusión en el Plan de 2026.

II. CONTENIDO

1. Principales novedades

El proyecto de real decreto puede ser calificado de pionero en el conjunto de la Unión Europea, pues no existen precedentes que coincidan plenamente con la materia que se pretende regular.

Sin perjuicio de lo anterior, existen algunos precedentes relevantes, como por ejemplo la obligatoriedad de incorporar el braille en los productos farmacéuticos, prevista en la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004. Esta no se refiere a los productos incluidos en el proyecto, pero sí constituye un referente regulatorio en la defensa de los derechos de las personas consumidoras, puesto que lo que dicho proyecto pretende es, precisamente, ampliar la protección prevista en dicha directiva -y la normativa nacional que la ha traspuesto- a otros productos que también presentan una relevancia capital para las personas.

Asimismo, el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, indicaba en su artículo 15.5 que "*a fin de garantizar el acceso a la*

[1] El trámite puede consultarse íntegramente en el siguiente enlace: https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/es/notification/27007

información de las personas invidentes o con discapacidad visual, en todos los envases de los medicamentos deberán figurar impresos en alfabeto braille los datos necesarios para su correcta identificación. El titular de la autorización garantizará que, previa solicitud de las asociaciones de pacientes afectados, el prospecto esté disponible en formatos apropiados para las personas invidentes o con visión parcial".

No obstante, el contenido concreto de este real decreto no se ha abordado con anterioridad.

2. Contenido

El proyecto de real decreto consta de un preámbulo en el que se destaca que este proyecto trae causa de la disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, que insta al Gobierno a regular reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.

La norma cuenta con un total de 6 artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, cuatro disposiciones finales y un anexo.

El artículo 1 aborda el objeto y ámbito de aplicación, de tal forma que se indica que tiene por objeto la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad visual, como personas consumidoras vulnerables. Estas previsiones se aplicarán a los bienes y productos de consumo incluidos en el anexo de la norma que se comercialicen en España, en los establecimientos comerciales con una superficie de venta y exposición igual o superior a 1.000 m^2.

El artículo 2 define el concepto de etiquetado accesible, indicando que se entiende por etiquetado accesible las menciones, indicaciones, marcas, dibujos o signos relacionados con un bien o producto que figuren en cualquier etiqueta que acompañe o se refiera a dicho bien o producto y que permita que las personas con discapacidad, con especial atención a las que tienen discapacidad visual, obtengan, de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales. Asimismo, plantea la utilización del sistema braille y de otras fórmulas de accesibilidad de los etiquetados, señalando que las indicaciones obligatorias del etiquetado accesible deberán figurar, al menos, en castellano.

El artículo 3 establece las obligaciones de accesibilidad para aquellos operadores económicos que gestionen establecimientos comerciales que cumplan los requisitos señalados. Entre estas obligaciones se destaca la impresión en braille de cierta información, tanto si la compra se realiza en un establecimiento físico o por vía electrónica, en aquellos establecimientos comerciales con una superficie de venta y exposición igual o superior a 1.000 m^2; la atención personalizada en todos los establecimientos comerciales, con independencia de su superficie de venta y exposición;; así como la gratuidad en la prestación de estos servicios y en las mismas condiciones que para el resto de personas consumidoras.

El artículo 4 aborda el fomento del etiquetado accesible, indicando la actividad de fomento que deberá desarrollarse por parte de las Administraciones Publicas dirigido a extender su uso.
Asimismo, se regula también como medida de fomento la posibilidad de que los operadores privados incorporen al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal.

El artículo 5 se centra en el asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad, donde, por un lado, se destaca el desarrollo de marcos de colaboración en la materia por parte de los

establecimientos comerciales entre sí o con la ONCE, a través de la Comisión Braille Española, las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad y con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias. Y, por otro lado, se prevé la cooperación de las Administraciones Públicas con las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad, y con los Centros Asesores del Real Patronato sobre Discapacidad y el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Imserso.

Por último, el artículo 6 aborda el régimen sancionador, indicando que para sancionar procede la aplicación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y de la legislación autonómica en materia de calidad alimentaria o protección de la salud.

La disposición adicional primera regula la exención del cumplimiento de las obligaciones de etiquetado accesible reguladas para aquellos productos que ya estén etiquetados en braille, siempre y cuando incluyan la información mínima obligatoria, y la disposición adicional segunda establece la obligación de informar sobre las medidas de accesibilidad disponibles en cada establecimiento.

La disposición transitoria única aborda el régimen transitorio de aplicación de lo contenido en la norma, de tal forma que los establecimientos comerciales a los que aplique esta norma, tendrán un máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta norma para adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

La disposición final primera se refiere al título competencial señalando al efecto lo dispuesto en el artículo 149.1. 1.ª, 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado, respectivamente, la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos; sobre la legislación civil; y sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

La disposición final segunda se refiere a la evaluación de la norma de tal forma que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 elaborará un informe de balance sobre la aplicación del presente real decreto y la situación y evolución del etiquetado accesible, con especial atención a la del etiquetado en el sistema braille, a los efectos de servir de base para futuras propuestas de desarrollo o modificación del mismo.

La disposición final tercera se refiere al desarrollo normativo, facultando a la persona titular del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Y, por último, una disposición final cuarta, sobre la entrada en vigor que señala que la norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

III. ANÁLISIS JURÍDICO

1. Fundamento jurídico y rango normativo

El rango de real decreto es el adecuado pues la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, indica en su disposición adicional primera, sobre etiquetado inclusivo, que el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.

Desde el punto de vista de la legalidad formal, el proyecto es igualmente conforme con la atribución genérica al Gobierno del ejercicio de la potestad reglamentaria en el artículo 97 de la Constitución, concretada a favor del Consejo de ministros en el artículo 5.1.h) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Por último, la adecuación del rango del real decreto proyectado lo es también de conformidad con el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que exige que las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia del Consejo de Ministros adopten la forma de reales decretos.

Por lo tanto, el instrumento jurídico para acometer esta regulación es el real decreto.

2. Congruencia con las normas de carácter internacional y Derecho de la Unión Europea

A nivel internacional, la norma guarda relación con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Por lo tanto, a través de este real decreto se garantiza la no discriminación de las personas con discapacidad y, especialmente, de las personas con discapacidad visual, a través de la accesibilidad de los bienes y productos de consumo de especial relevancia.

Por otra parte, a nivel de la Unión Europea, el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé que "*En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual*", y el artículo 26 consagra que "*La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad".*
Por su parte, este real decreto es coherente y complementa, en el territorio español, la regulación europea en materia de accesibilidad de productos y, particularmente, la

Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios.
Este proyecto de real decreto no transpone normativa alguna.

El proyecto se someterá a la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en adelante, TRIS.

3. Congruencia con el ordenamiento jurídico español.

En relación con el engarce con el ordenamiento jurídico español, en primer lugar, cabe hacer referencia al artículo 49 de la Constitución Española, que establece:

"1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

Por su parte, el artículo 51 de la Constitución Española establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias protegiendo mediante procedimientos eficaces su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos, promoviendo también la información y la educación de las mismas.

Asimismo, el proyecto guarda relación con diversas normas del ordenamiento jurídico español, fundamentalmente, la Ley 4/2022, de 25 de febrero, que desarrolla reglamentariamente. Esta ley, en su disposición adicional primera, y como se mencionó previamente, insta al gobierno a regular un etiquetado en alfabeto braille y

otros formatos que garanticen la accesibilidad universal, especialmente para personas con discapacidad visual.

También es coherente con el Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos, con el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos y con el Real Decreto 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores, tal y como se establece en el anexo de este real decreto que regula los productos de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida afectados por esta norma.

Igualmente, el proyecto se relaciona con otras normas:

- El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (TRLGDCU), cuyo artículo 3.2 define (a raíz de la modificación operada por la Ley 4/2022, de 25 de febrero, el concepto de "persona consumidora vulnerable": "*tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad*". En este sentido, y en línea con el preámbulo del proyecto, las personas con discapacidad deben considerarse personas consumidoras en situación de vulnerabilidad cuando las quiebras de accesibilidad en este ámbito comprometan el ejercicio de sus derechos como consumidoras y usuarias en condiciones de igualdad y no discriminación.

Además, el artículo 18.2 del TRLGDCU contiene un listado de información que todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar en su etiquetado, que el artículo 3.1 del proyecto replica, añadiendo la información sobre alérgenos o intolerancias.

Asimismo, el artículo 6.1 del proyecto se remite al TRLGDCU y a otras leyes complementarias a la hora de fijar el régimen sancionador.

- El texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, consagra, en su artículo 6, el respeto a la autonomía de las personas con discapacidad, "*para lo cual la información y el consentimiento deberán efectuarse en formatos adecuados y de acuerdo con las circunstancias personales, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño universal o diseño para todas las personas, de manera que les resulten accesibles y comprensibles"* (artículo 6.2).

- La legislación autonómica en materia de defensa de la calidad alimentaria y de protección de la salud, que el artículo 6.2 del proyecto también cita.

Otras normas relacionadas y con las que el proyecto es congruente son la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, que busca eliminar obstáculos a la libre circulación de productos y servicios accesibles, garantizando que sean comprensibles y utilizables por todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad; el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público; o la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

4. Entrada en vigor y vigencia

La disposición final cuarta se refiere a la entrada en vigor que señala que la norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Debe indicarse que el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno señala que "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación." No obstante, el régimen transitorio previsto en la disposición transitoria única del texto ya prevé que los establecimientos comerciales a los que aplique esta norma, tendrán un máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta norma para adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. Por lo tanto, no resulta preciso diferir la entrada en vigor ni al 2 de enero ni al 1 de julio. Con ello, independientemente del momento en que se apruebe la norma, se garantiza un plazo transitorio adecuado para la adaptación de las empresas a este nuevo marco.

5. Derogación normativa

El presente real decreto regula con carácter *ex novo* los requisitos de un etiquetado accesible. Por lo tanto, no se deroga ninguna norma.

IV. ADECUACIÓN AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS

La disposición final segunda se refiere al título competencia señalando al efecto lo dispuesto en el artículo 149.1. 1.ª y 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado, respectivamente, la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos; sobre la legislación civil; y sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

V. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS

1. Tramite de consulta pública previa

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se sustanció el trámite de consulta pública a través del portal web del Ministerio, con fecha desde el 18 de julio de 2022 al 1 de septiembre de 2022.

Se recibieron 30 aportaciones, cuyo contenido y valoración se explica en el Anexo I de este documento.

2. Trámite de audiencia e información pública

Se sustanció el trámite de audiencia e información pública de acuerdo con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre de 1997, del 16 de marzo al 12 de abril de 2026.

Asimismo, se consultó a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, con base en el deber general de cooperación entre las Administraciones Públicas impuesto por el artículo 3.1.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Esta consulta se sustanció tanto en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo, del 13 al 24 de abril de 2026, como en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del 17 al 27 de abril de 2026.

Adicionalmente, se ha recabado potestativamente la opinión de las entidades representativas de los intereses de los sectores afectados por el proyecto, de acuerdo con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de 1997, a través de consulta a través del Consejo de Consumidores y Usuarios.

El anexo de esta MAIN contiene un cuadro con las observaciones recibidas y la valoración de este Ministerio al respecto.

3. Informes evacuados y valoración de las aportaciones más relevantes

Se recabará informe de la Secretaria General Técnica del departamento (artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre de 1997).

Asimismo, se ha recabado el informe del Ministerio de Política Territorial (actual Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) en lo relativo a la adecuación del proyecto al orden de distribución constitucional de competencias (26.5, párrafo sexto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre de 1997).

Se solicitará la aprobación previa del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública (art.26.5 párrafo cinco, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre de 1997).

Se ha solicitado el informe de calidad normativa de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre de 1997).

Igualmente se ha recabado informe de los siguientes departamentos (art.26.5 párrafo uno, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre de 1997):

- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Sanidad
- Ministerio de Industria y Turismo
- Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
- Ministerio de Trabajo y Economía Social
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Agencia Española de Protección de Datos

Por otro lado, se ha recabado el correspondiente informe de las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, a través del Consejo Territorial de Servicios

Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y de la Conferencia Sectorial de Consumo.

Asimismo, se ha recabado el informe del Consejo Nacional de la Discapacidad, este último de conformidad con el artículo 2.1.d) del Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad, que establece que entre las funciones del citado consejo se encuentra la de emitir dictámenes e informes, de carácter preceptivo y no vinculante, sobre aquellos proyectos normativos y otras iniciativas relacionadas con el objeto del Consejo que se sometan a su consideración y, en especial, en el desarrollo de la normativa de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Se ha recabado el informe del Consejo de Consumidores y Usuarios según el art. 39.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, dada la no concurrencia de dichos supuestos.

Finalmente, se solicitará el dictamen preceptivo del Consejo de Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 3/1980.

4. Sometimiento al procedimiento TRIS

Esta norma, en su versión anterior, fue sometida al procedimiento regulado en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015 (TRIS), obteniendo como respuesta de la Comisión Europea un dictamen circunstanciado en el que se indicaba que las obligaciones notificadas podían crear obstáculos injustificados al comercio dentro de la UE y equivaler a restricciones cuantitativas a las importaciones o medidas de efecto equivalente, prohibidas por el artículo 34 del TFUE. Además, el dictamen señala que la medida debe ser adecuada para garantizar la consecución del objetivo perseguido y no ir más allá de lo necesario para alcanzarlo.

Por lo tanto, se decidió retirar la anterior versión y elaborar un nuevo texto que tuviera en cuenta las advertencias de la Comisión Europea. Como consecuencia, el mayor

cambio respecto a la versión anterior es la modificación sobre quién recaen las obligaciones del etiquetado, para evitar los problemas señalados en el dictamen circunstanciado y para garantizar que la medida sea proporcional al objetivo perseguido, teniendo en cuenta la perspectiva del mercado interior, dado que, en la versión actual dicha obligación recae en los operadores económicos que gestionen establecimientos comerciales con los requisitos regulados en el artículo 3.1.

No obstante, y tal y como se ha señalado en el apartado III.2, este nuevo texto volverá a ser sometido al TRIS.

VI. ANÁLISIS DE IMPACTOS

1. Impacto económico

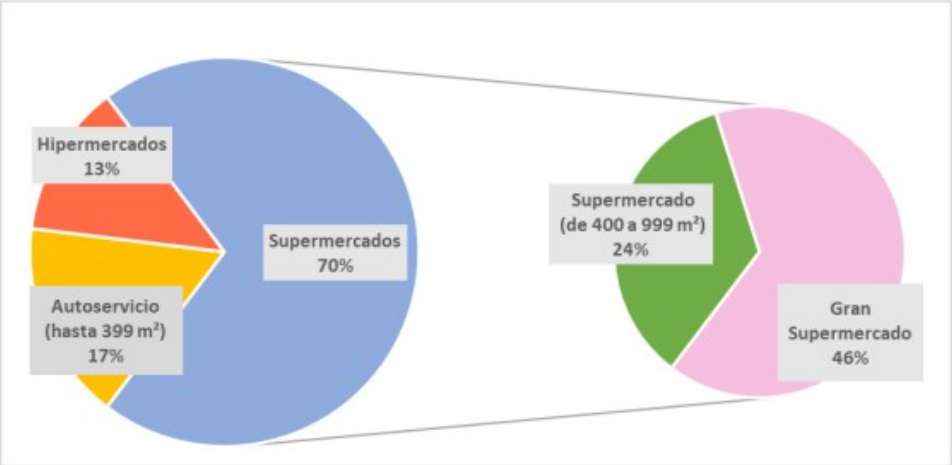
En esta sección se analizan los costes asociados a las obligaciones reguladas en el artículo 3 para aquellos establecimientos comerciales con una superficie de venta y exposición igual o superior a 1.000 m^2.

La elección del tipo de establecimiento comercial así como de la dimensión de los mismos ha sido tomada en base a los datos ofrecidos por el sector y, concretamente sobre la información proporcionada por la CNMC[2] y ANGED[3]. Según los datos de la CNMC, en términos de superficie de venta, el formato de venta supermercado sigue siendo el formato prevalente de venta de bienes de consumo diario en España, con un 70% de la cuota, y dentro de este segmento, el gran supermercado, con una superficie de venta de 1.000 a 2.500 metros cuadrados, representa el 46% del mercado. Por lo que, en total, se estaría cubriendo con esta norma un 46% de la superficie de venta en España, lo que supone, aproximadamente un total de 6.000 establecimientos comerciales.

[2] Estudio sobre la traslación de la reducción del IVA en el sector alimentario (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)): 4840416.pdf

[3] Informe económico del comercio 2024 (ANGED) https://anged.es/wp-content/uploads/2024/12/Informe-economico-comercio-2024-ANGED.pdf

Figura 5: reparto de la superficie de venta de la distribución comercial por formato, a 31 de diciembre de 2022.



Fuente: Informe 2023 sobre la Distribución Alimentaria en España por superficie, Alimarket (2023).

Evolución del número de establecimientos por formato y variación de centros y superficie comercial

	Nº Centros	M²	
Formatos	**2023**	**2023-2008**	**% 2023-2008**
Hipermercados	495	54	4%
Supermercados (800-2.499m²)	5.897	3.046	98%
Supermercados (300-799m²)	6.947	2.116	5%
Supermercados (menos de 300m²)	9.796	781	-23%
Independientes (menos de 300m²)	25.600	-10.097	2%
Perf. Drog. Organizada*	3.198	-2.137	-30%
Drog. Perf. Tradicional*	4.104	-4.954	-33%
TOTAL ESTABLECIMIENTOS	**55.542**	**-11.696**	**22%**

Fuente: ANGED con datos AC Nielsen.
(*) Península y Baleares

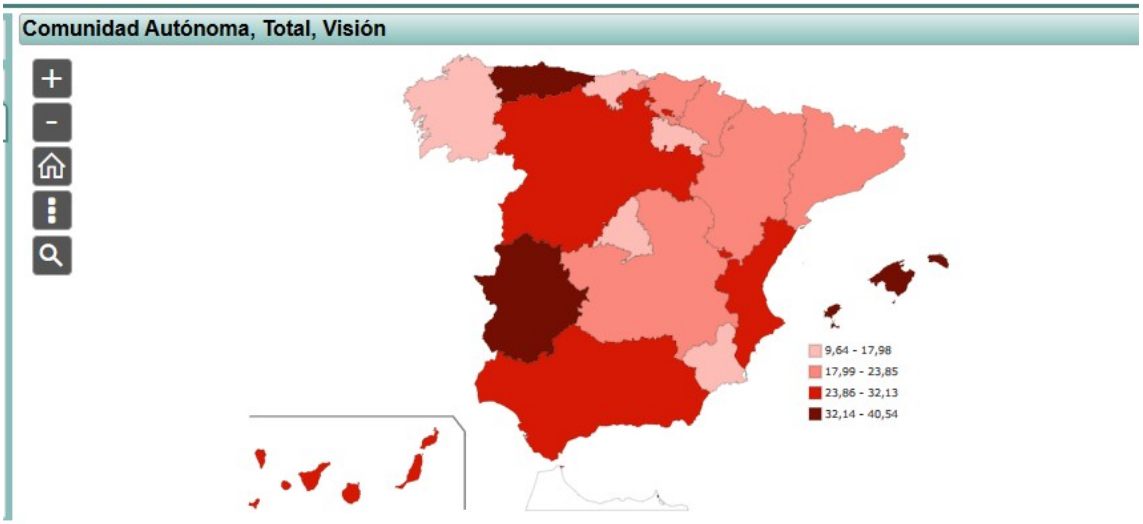
4.1 Superficie comercial y establecimientos

TIPOLOGÍA ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS	EJERCICIO 2024	
	NÚMERO ESTABLECIMIENTOS	SUPERFICIE M²
HIPERMERCADOS	352	2.860.199
GRANDES ALMACENES	406	2.019.725
SUPERMERCADOS+ AUTOSERVICIOS (ALIMENTACIÓN)	4.133	1.981.624
TEXTIL	840	
AGENCIAS DE VIAJES	834	
ESTACIONES DE SERVICIO	243	2.313.914
GRANDES SUPERFICIES ESPECIALIZADAS	330	
OTROS (ELECTRÓNICA, BAZAR, DUTY FREE, ACCESORIOS AUTOMÓVILES...)	519	
PLATAFORMAS	109	2.487.192
TOTAL ESPAÑA	7.766	11.662.654
TOTAL ESPAÑA SIN PLATAFORMAS	7.657	9.175.462

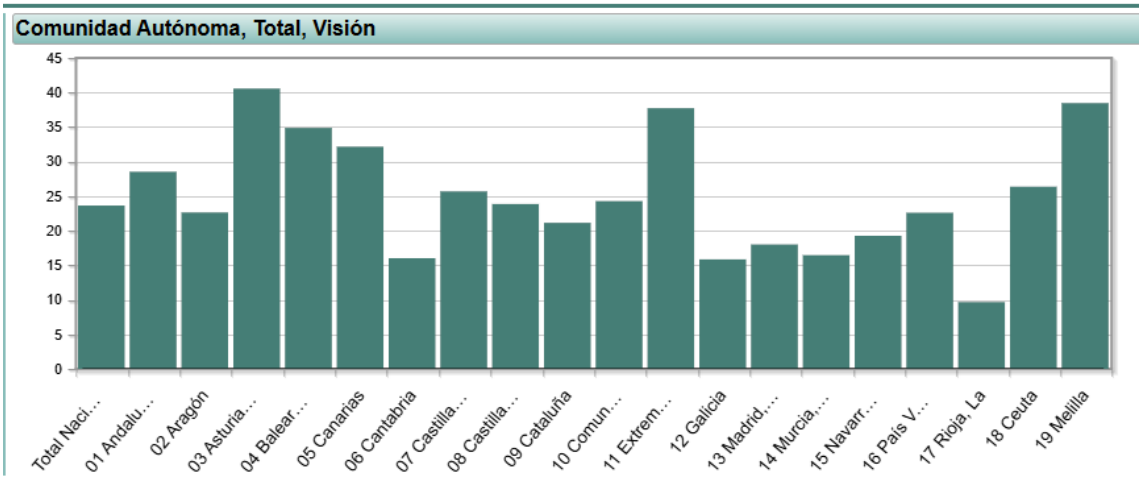
Fuente: LA DISTRIBUCIÓN ANGED según datos aportados por empresas asociadas en 2024

En relación con los datos sobre personas con discapacidad, de acuerdo con la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en el año 2024, más de 404.644 personas (193.471 hombres y 211.173 mujeres) tenían discapacidad visual como primera deficiencia, y más de 1.014 personas tenían sordoceguera como primera deficiencia.

Fuente: INE 1



Fuente: INE 2



Fuente: INE 3

Tras el análisis general respecto a los establecimientos comerciales a los que afecta esta norma, así como a la población beneficiaria de la misma, en este caso, las personas con discapacidad y, especialmente, con discapacidad visual, se analizan concretamente las obligaciones impuestas por la norma.

Por un lado, se requiere tanto una atención personalizada para personas con discapacidad visual en el acceso a los productos expuestos, como una ayuda puntual para aquellas personas que, por razón de su discapacidad, lo requieren durante el proceso de compra. En principio, estas obligaciones no supondrían un coste adicional dado que sería el propio personal del establecimiento quien realizaría esta función.
No obstante, si se contratara una persona adicional para realizar estas funciones, y conforme a los datos más recientes del INE[4], la ganancia media anual por persona trabajadora de los servicios de restauración y comercio en 2023 era de 18.028,33€. Asimismo, y conforme a la Resolución de 30 de mayo de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de grandes almacenes, para el grupo base, el salario anual es de 15.705,65€.

Por lo tanto y según los datos disponibles, el coste total para la empresa suele ser entre un 30% y un 35% superior al salario bruto, por lo que tomando como referencia los datos más altos, el coste total para la empresa por persona trabajadora sería de 24.338,25€ anuales.

Como consecuencia, si se contratara una persona adicional en cada uno de los establecimientos comerciales en los que la norma es de aplicación -lo cual, como se ha comentado con anterioridad, no parece realista puesto que estas tareas podrían asumirla el personal que ya está contratado por el establecimiento-, el coste total de la medida sería de 146.029.500 € (24.338,25*6.000).

El convenio de supermercados establece un número máximo de horas de trabajo anuales de 1.770, por lo que el coste por hora trabajada es de 14,74 €/hora. Por lo que si una persona visita el supermercado un máximo de 12 veces al mes[5] se puede

[4] https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=28186#_tabs-tabla
[5] https://www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/-coste-cesta-compra-basica-se-ha-disparado-un-47-solo-cuatro-anos-5265089/?utm_source=chatgpt.com

estimar un máximo de 25 millones de visitas al supermercado anuales de personas con discapacidad visual. Por lo tanto, si cada visita dura aproximadamente media hora, podemos concluir que el coste anual de esta asistencia sería: 25 millones x 0,5 horas x 14,75€ = 184,37 millones de €.

Por otro lado, la obligación de imprimir en braille en el momento de la compra y en una etiqueta por producto de la información señalada en el artículo 3.3.b sí que supone un coste adicional, dado que en cada establecimiento comercial deberán disponer de una etiquetadora en braille.

El precio de estas etiquetadoras varía en función del modelo, siendo uno de los modelos más avanzados y específicos la impresora braille Everest-D V5[6] cuyo precio ronda los 4.000€. El coste de los rollos de etiquetas no se incluye por considerarse residual. No obstante, cabe señalar que existen en el mercado otras opciones que tendrían un coste menor, aunque con características de uso diferentes, como, por ejemplo, la rotuladora braille Dymo[7] o la Reizen Etiquetadora Braille RL-350 cuyo precio es de 72€.

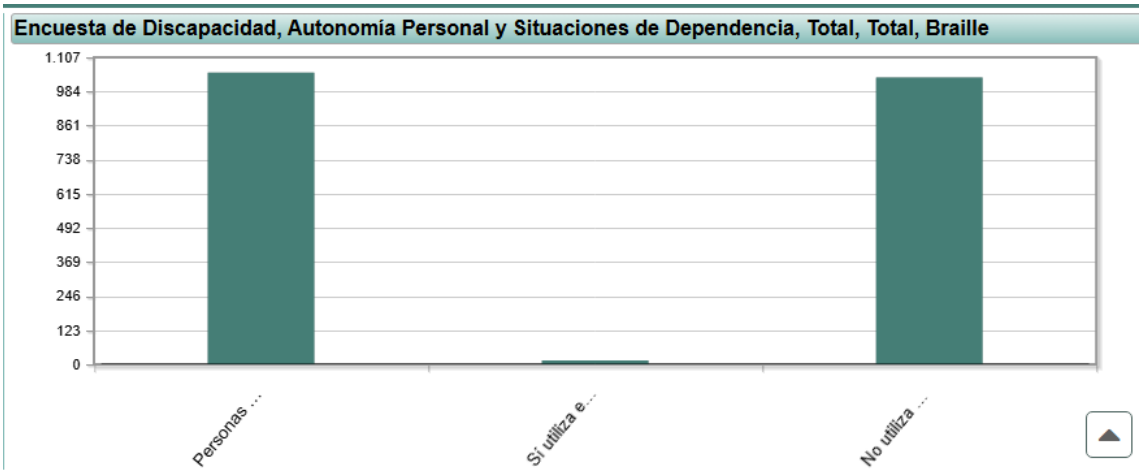
Por lo tanto, el coste total de esta medida, si se elige la etiquetadora de menor precio y poniendo un precio estimado de 100€ sería de 600.000€ € (100*6.000).

El tiempo vinculado a la impresión y colocación de la etiqueta se encuentran subsumidos en el coste calculado para la asistencia personal.

A continuación, se adjuntan una tabla y un gráfico con los datos más recientes publicados por el INE [8]relativo a las personas con discapacidad visual que utilizan el sistema braille, de la Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia. 2020.

[6]https://www.once.es/cti/biblioteca/Anotadores%2C%20Lineas%20Braille%20e%20Impresoras/Impresora_braille_Index_Basic_D_V5/Manual_INDEX_Basic-D_V5.pdf

[7] https://www.once.es/cti/biblioteca/CTIInformacion/catalogo/pdf/Catalogo_Completo.pdf
[8] https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=2589&capsel=8494



INE 1

Discapacidad. Cifras absolutas Discapacidades y deficiencias

Utilización del sistema braille por sexo y edad. Población de 6 y más años con discapacidad de visión.

- *Unidades: miles de personas*

	Personas con discapacidad de visión	Sí utiliza el sistema braille	No utiliza el sistema braille
Total			
Total	1.051,3	14,4	1.034,5
De 6 a 64 años	381,3	10,8	369,0
De 65 a 79 años	294,7	2,7	291,7
De 80 y más años	375,3	0,9	373,8
Hombre			
Total	400,4	6,1	393,2
De 6 a 64 años	159,8	5,2	153,9
De 65 a 79 años	110,9	0,9	109,6
De 80 y más años	129,7	0,0	129,7
Mujer			
Total	650,9	8,3	641,3
De 6 a 64 años	221,4	5,6	215,1
De 65 a 79 años	183,8	1,7	182,0
De 80 y más años	245,7	0,9	244,2

INE 2

No obstante, y conforme a la información aportada por la Comisión Braille Española, el número total de personas que utilizan el sistema braille es de 10.000 personas en España.

Finalmente, se incluye en una tabla el coste total asociado a las obligaciones analizadas anteriormente:

Atención personalizada[9]	Impresora braille[10]	Coste total
146.029.500 €	6.000 €	146.035.500 €

2. Impacto presupuestario.

No se generan costes para la Administración.

La aplicación del proyecto de real decreto no supone incremento del gasto público ni disminución de los ingresos públicos, por lo que su repercusión presupuestaria es nula, conforme a lo previsto en el artículo 26.3.d) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre de 1997, y el artículo 2.1.d) 2º del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre de 2017, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Las funciones para las Administraciones previstas en la norma se incardinan en el haz de facultades habituales de las unidades concernidas, sin que quepa destacar un especial impacto presupuestario.

Por ello, su repercusión presupuestaria es nula.

3. Impacto sobre las cargas administrativas.

[9] Coste en base a la contratación de una persona adicional por cada supermercado de 1.000 o más metros cuadrados.
[10] Coste en base a la compra de una rotuladora braille por cada supermercado de 1.000 o más metros cuadrados.

Se consideran cargas administrativas todas aquellas tareas de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y los ciudadanos y ciudadanas para cumplir con las obligaciones derivadas de la norma.

Por lo que respecta a la posible generación de estas cargas por parte del proyecto, el artículo 2.1.e) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, obliga a que en el contenido de la misma se realice una “detección y medición de dichas cargas administrativas”.

Dado que el proyecto de norma no afecta en modo alguno al ámbito procedimental administrativo ni conlleva la realización de ninguna tarea de esa naturaleza, se considera no que hay impactos sobre las cargas administrativas.

4. Impacto por razón de género.

La finalidad de los informes de impacto de género es analizar y valorar los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto. El informe de impacto de género es una herramienta básica para obtener información sobre la realidad social, desde una perspectiva de género, del conjunto de la ciudadanía en la que incidirá la norma con el fin de identificar y valorar los diferentes resultados que las disposiciones normativas, en apariencia neutras, pudieran producir sobre mujeres y hombres; en definitiva, percibir las posibles desigualdades existentes y los posibles efectos que la norma propuesta puede producir sobre ambos sexos.

Respecto al análisis de impacto de género de este proyecto debemos partir del hecho de que la normativa tiene por objeto regular un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos inclusivos, que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas discapacidad visual en tanto que personas consumidoras vulnerables.

En definitiva, el impacto en función del género del proyecto es nulo, a efectos de lo previsto en el artículo 26.3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre de 1997, y el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

5. Impacto en la infancia y adolescencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede analizar el impacto de la norma en la infancia y en la adolescencia, significándose que de sus contenidos no se deduce impacto alguno a este respecto, que debe en consecuencia calificarse como nulo.

6. Impacto en la familia.

Según lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, debe analizarse el impacto de la norma proyectada en la familia. No se aprecia que de sus contenidos pueda deducirse incidencia alguna a este respecto, por lo cual el impacto en la familia debe calificarse como nulo.

7. Impacto por razón de mitigación y adaptación al cambio climático.

El impacto de este proyecto, en términos de mitigación y adaptación al cambio climático, es nulo.

8. Otros impactos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.3 in fine de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre de 1997, y en el artículo 2.1.g) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre de 2017, el proyecto no tiene impacto medioambiental directo, ni social, dado su contenido.

No obstante, sí pueden Identificarse que existen impactos en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, dado que la norma tiene por objeto regular un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos inclusivos, que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas con discapacidad visual en tanto que personas consumidoras vulnerables.

Actualmente, 4,38 millones de personas en España tienen algún tipo de discapacidad según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, EDAD 2020, del Instituto Nacional de Estadística, y, por lo tanto, se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo debido a que, en numerosas ocasiones, el mercado de bienes y productos carece de condiciones de accesibilidad universal.

Asimismo, las personas con discapacidad suelen tener dificultades en el acceso a la información, especialmente las personas con discapacidad visual en relación con el acceso a la información que incorporan las etiquetas de los bienes y productos de uso cotidiano. De acuerdo con la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en el año 2022, más de 218.000 personas tenían discapacidad visual como primera deficiencia.

La norma aborda los siguientes aspectos:

- La protección de las personas consumidoras con discapacidad contra los riesgos que puedan afectar a su seguridad, integridad y calidad de vida.
- La prevención ante posibles daños y perjuicios sufridos por no entender el etiquetado.
- La información accesible sobre los productos y la generación de una corriente de accesibilidad en el contexto del consumo, que promueva la toma de conciencia hacia la inclusión de las personas con discapacidad

Esta norma trata de resolver, en definitiva, la falta de información correcta, suficiente y comprensible en el etiquetado de ciertos productos que provoca dependencia de terceros o problemas de seguridad alimentaria o sanitaria. La persona consumidora y usuaria con discapacidad tiene derecho a recibir una información completa, que cumpla los requisitos de accesibilidad universal sobre los productos y que le permita el acceso y disfrute de los mismos en las mismas condiciones que el resto de las personas consumidoras y usuarias. Las barreras en una cuestión tan básica como el etiquetado constituyen la traba principal para el ejercicio de los derechos a la protección jurídica, administrativa y técnica, y del derecho a la indemnización o reparación de daños y perjuicios por parte de las personas con discapacidad.

Así pues, la falta de accesibilidad en el etiquetado ofrece, limita o imposibilita a las personas con discapacidad el acceso a los productos y/o su disfrute en iguales condiciones que el resto de las personas consumidoras. Esta norma de etiquetado accesible asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación ante el consumo, mitigando la vulnerabilidad de las personas con discapacidad como personas consumidoras y usuarias.

Por lo tanto, lo contenido en este proyecto normativo genera un impacto rotundamente beneficioso para garantizar la accesibilidad de todas esas personas.

VII. EVALUACIÓN EX POST

En virtud de lo previsto en el artículo 2.1.j) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, considerado lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley del Gobierno, y en el artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa y conforme a lo que figura en el Plan Anual Normativo correspondiente a 2023, se prevé evaluación ex post de la norma por razón de impacto sobre la economía en su conjunto o sobre sectores destacados de la misma.

Dicha evaluación se realizará, de acuerdo con la disposición final segunda, que establece que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 elaborará un informe de balance sobre la aplicación del presente real decreto y la situación y evolución del etiquetado accesible, con especial atención a la del etiquetado en el sistema braille, a los efectos de servir de base para futuras propuestas de desarrollo o modificación del mismo.

ANEXO I

RESUMEN DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN LA AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo	Interesado	Posición / Respuesta	Valoración
OBSERVACIONES GENERALES			
Observaciones Generales	**Persona Física: - Xabier Garciandia Peiro (CRÍA FELINA)**	Se adjunta dictamen para la armonización con el Reglamento (UE) 2023/0447. Se solicita: * Art. 3.3.f.1: Elevar el límite a 5 camadas anuales (ratio 1:1 con las 5 hembras permitidas) para evitar patologías por estasis hormonal. * Censo: Límite de 15 individuos totales para permitir el retiro digno de ejemplares. * ANEXO III: Aplicar los tiempos de salud reproductiva y destete de 12 semanas que marca la normativa europea.	No aplica a este Proyecto de RD de Etiquetado Accesible
Observaciones Generales	**Persona Física: -Inmaculada García Marín**	Incluir etiquetas navilens en todos los productos. Fácil identificación de los códigos de barrras, en donde se pueda encontrar información del producto	**Se rechaza:** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la

			Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.
Observaciones Generales	**NaviLens**	**OBSERVACIONES AL MODELO PREVISTO** Consideramos que el modelo previsto se apoya principalmente en la asistencia manual: atención personalizada y emisión de una etiqueta braille a solicitud en el momento de la compra. Ese enfoque puede servir como apoyo, pero no debería ser la respuesta principal del sistema. La accesibilidad real empieza antes de pagar: cuando la persona puede orientarse en el establecimiento, localizar el producto, identificarlo y consultar por sí misma la información esencial. Cuando la solución exige pedir ayuda, esperar a una impresión o depender de un tercero, no se está garantizando la máxima autonomía posible. La propia norma reconoce que los formatos accesibles basados en la tecnología son fundamentales para el acceso a la información y que los avances tecnológicos ofrecen un enorme potencial para un consumo accesible. Sin	**Se rechaza:** La Disposición adicional única de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, indica: El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia

		embargo, esa idea no se traduce en una integración real dentro del modelo obligatorio, sino que queda relegada a una previsión secundaria. Ahí está, a nuestro juicio, la principal debilidad del proyecto. La **memoria económica del propio proyecto** confirma, además, que el sistema escogido no es el más eficiente. Se plantea un modelo muy costoso para las empresas, centrado en asistencia manual y equipamiento específico, cuando ya existen soluciones tecnológicas que permiten una accesibilidad más autónoma, escalable y eficiente. El sistema previsto es también más susceptible de error en datos críticos. La exigencia de trasladar manualmente información como la **fecha de caducidad o de consumo preferente** introduce un riesgo evitable de transcripción incorrecta, desactualización o confusión. En una materia vinculada a la seguridad y a la protección de la salud, el diseño regulatorio debería minimizar al máximo ese riesgo, no asumirlo como parte normal del sistema. CASO REAL: NAVILENS + CINFA Y LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO:	para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables. Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatorio.

		Existe ya un caso real y operativo en España en colaboración con Cinfa y la Agencia Española del Medicamento. Los códigos NaviLens incorporados a medicamentos permiten acceder por voz al nombre del producto, su presentación, la fecha de caducidad, el lote y el contenido completo del prospecto. Este ejemplo demuestra que la tecnología existe, funciona y permite ofrecer de manera fiable precisamente la información crítica que la norma quiere proteger. https://www.youtube.com/watch?v=4CkiDIQ6CCg **LA NORMA DEJA FUERA A MÁS DEL 90% DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL** DATO CLAVE: La norma, al centrarse en el braille como mecanismo principal, deja fuera a más del 90% de las personas con discapacidad visual, que no pueden leer braille. Por ello, consideramos que deben potenciarse soluciones que cumplan con los principios de diseño universal y sean accesibles para toda la diversidad de perfiles dentro de este colectivo. **LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: GUIADO AUTÓNOMO EN EL PUNTO DE VENTA** En cuanto al guiado en el supermercado, la tecnología NaviLens permite incorporar un código accesible en la misma etiqueta de precio del	

		lineal, de forma que una persona con discapacidad visual pueda orientarse de forma completamente autónoma en el establecimiento, localizar el artículo y acceder directamente a su información sin depender de asistencia personal, siendo mucho más eficiente y brindando una autonomía real al consumidor. Los códigos NaviLens pueden detectarse sin localizar con precisión dónde están colocados, sin necesidad de enfocar y con lectura a distancia y desde ángulos amplios, lo que los hace especialmente adecuados para entornos de compra. **<u>SOLICITUDES CONCRETAS</u>** Por todo ello, solicitamos que el texto final del Real Decreto: • Incorpore expresamente los sistemas tecnológicos accesibles, como NaviLens u otras soluciones equivalentes, no como una opción secundaria o de fomento, sino como un medio válido y suficiente de cumplimiento cuando garanticen accesibilidad universal, gratuidad para la persona usuaria, ausencia de tratamiento de datos personales y fidelidad de la información. • Configure la atención personalizada como apoyo complementario y no como eje principal	

		del sistema. • Permita que la accesibilidad pueda situarse en la propia etiqueta de precio en el lineal o en el producto, para que la persona pueda comprar de forma autónoma antes de llegar a caja. • Garantice que los datos críticos —como la fecha de caducidad o consumo preferente— no dependan de una transcripción manual en el momento de la compra. **PROPUESTA DE REDACCIÓN NORMATIVA** FRASE NORMATIVA SUGERIDA "*Se considerará también etiquetado accesible la incorporación en el propio producto, lineal o etiqueta de precio de sistemas tecnológicos accesibles, como códigos NaviLens u otros análogos, que permitan a la persona consumidora con discapacidad visual acceder de forma autónoma, gratuita, inequívoca y actualizada a la información esencial del producto, sin necesidad de asistencia personal ni tratamiento manual de datos.*" **CONCLUSIÓN** La accesibilidad no debe traducirse en dependencia. La mejor regulación no es la que obliga a pedir ayuda, sino la que hace posible que una persona con discapacidad visual pueda **orientarse, elegir, acceder a toda la**	

		información y comprar por sí misma, con seguridad y en igualdad de condiciones. Cuando ya existen soluciones tecnológicas que lo permiten, la norma debe integrarlas de forma expresa. Ese enfoque protege mejor a la persona consumidora, reduce errores, mejora la eficiencia y cumple de manera más plena con el objetivo de autonomía e independencia.	
Observaciones Generales	**Laboratorios CINFA**	**1. OBSERVACIONES AL MODELO PREVISTO** Consideramos que el modelo previsto se apoya principalmente en la asistencia manual: atención personalizada y emisión de una etiqueta braille a solicitud en el momento de la compra. Ese enfoque puede servir como apoyo, pero no debería ser la respuesta principal del sistema. La accesibilidad real empieza antes de pagar: cuando la persona puede orientarse en el establecimiento, localizar el producto, identificarlo y consultar por sí misma la información esencial. Cuando la solución exige pedir ayuda, esperar a una impresión o depender de un tercero, no se está garantizando la máxima autonomía posible. La propia norma reconoce que los formatos	**Se rechaza:** La Disposición adicional única de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, indica: El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en

		accesibles basados en la tecnología son fundamentales para el acceso a la información y que los avances tecnológicos ofrecen un enorme potencial para un consumo accesible. Sin embargo, esa idea no se traduce en una integración real dentro del modelo obligatorio, sino que queda relegada a una previsión secundaria. Ahí está, a nuestro juicio, la principal debilidad del proyecto. La memoria económica del propio proyecto confirma, además, que el sistema escogido no es el más eficiente. Se plantea un modelo muy costoso para las empresas, centrado en asistencia manual y equipamiento específico, cuando ya existen soluciones tecnológicas que permiten una accesibilidad más autónoma, escalable y eficiente. El sistema previsto es también más susceptible de error en datos críticos. La exigencia de trasladar manualmente información como la fecha de caducidad o de consumo preferente introduce un riesgo evitable de transcripción incorrecta, desactualización o confusión. En una materia vinculada a la seguridad y a la protección de la salud, el diseño regulatorio debería minimizar al máximo ese riesgo, no asumirlo como parte normal del sistema.	otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables. Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatorio.

		CASO REAL: NAVILENS + CINFA Y LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO Existe ya un caso real y operativo en España en colaboración con Cinfa y la Agencia Española del Medicamento. Los códigos NaviLens incorporados a medicamentos permiten acceder por voz al nombre del producto, su presentación, la fecha de caducidad, el lote y el contenido completo del prospecto. Este ejemplo demuestra que la tecnología existe, funciona y permite ofrecer de manera fiable precisamente la información crítica que la norma quiere proteger. https://www.youtube.com/watch?v=4CkiDIQ6CCg **2. LA NORMA DEJA FUERA A MÁS DEL 90% DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL** ⚠ DATO CLAVE La norma, al centrarse en el braille como mecanismo principal, deja fuera a más del 90% de las personas con discapacidad visual, que no pueden leer braille (Fuente: iamhable.com). Por ello, consideramos que deben potenciarse soluciones que cumplan con los principios de diseño universal y sean accesibles para toda la diversidad de perfiles dentro de este colectivo.	

		3. LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: GUIADO AUTÓNOMO EN EL PUNTO DE VENTA En cuanto al guiado en el supermercado, la tecnología NaviLens permite incorporar un código accesible en la misma etiqueta de precio del lineal, de forma que una persona con discapacidad visual pueda orientarse de forma completamente autónoma en el establecimiento, localizar el artículo y acceder directamente a su información mediante voz y sin depender de asistencia personal, siendo mucho más eficiente y brindando una autonomía real al consumidor. Los códigos NaviLens pueden detectarse sin localizar con precisión dónde están colocados, sin necesidad de enfocar y con capacidad de locutar la información a distancia y desde ángulos amplios, lo que los hace especialmente adecuados para entornos de compra. **4. SOLICITUDES CONCRETAS** Por todo ello, solicitamos que el texto final del Real Decreto: • Incorpore expresamente los sistemas tecnológicos accesibles, como NaviLens u otras soluciones equivalentes, no como una opción secundaria o de fomento, sino como un medio válido y suficiente de cumplimiento cuando garanticen accesibilidad universal, gratuidad para	

		la persona usuaria, ausencia de tratamiento de datos personales y fidelidad de la información. • Configure la atención personalizada como apoyo complementario y no como eje principal del sistema. • Permita que la accesibilidad pueda situarse en la propia etiqueta de precio en el lineal o en el producto, para que la persona pueda comprar de forma autónoma antes de llegar a caja. • Garantice que los datos críticos —como la fecha de caducidad o consumo preferente— no dependan de una transcripción manual en el momento de la compra. **5. PROPUESTA DE REDACCIÓN NORMATIVA** FRASE NORMATIVA SUGERIDA "Se considerará también etiquetado accesible la incorporación en el propio producto, lineal o etiqueta de precio de sistemas tecnológicos accesibles, como códigos NaviLens u otros análogos, que permitan a la persona consumidora con discapacidad visual acceder de forma autónoma, gratuita, inequívoca y actualizada a la información esencial del producto, sin necesidad de asistencia personal ni tratamiento manual de datos." **6. CONCLUSIÓN** La accesibilidad no debe traducirse en	

		dependencia. La mejor regulación no es la que obliga a pedir ayuda, sino la que hace posible que una persona con discapacidad visual pueda orientarse, elegir, acceder a toda la información y comprar por sí misma, con seguridad y en igualdad de condiciones. Cuando ya existen soluciones tecnológicas que lo permiten, la norma debe integrarlas de forma expresa. Ese enfoque protege mejor a la persona consumidora, reduce errores, mejora la eficiencia y cumple de manera más plena con el objetivo de autonomía e independencia.	
Observaciones Generales	**Persona Física. Elias Torres Meroño**	Se trata de, igual que se pretende atender a personas con discapacidad visual, que se incluya a otras personas que tambien tenemos un alto grado de discapacidad por Insuficiencia Renal Crónica. Resulta que tenemos un grave problema a la hora de consumir productos , especialmente productos elaborados, y es que no existe obligación legal de saber los **niveles de Potasio y de Fósoforo en los alimento**; siendo que saberlo es importante para no jugarnos no solo la salud, sino incluso la vida, pues niveles altos de ambos productos nos pueden llevar a una muerte segura. Resulta chocante que se pongan todas las calorías para quien QUIERE CUIDAR SU LINEA, pero no sobre Potasio o Fósforo para quienes DEBEMOS CUIDAR NUESTRA SALUD. Así, tenemos	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde

		apps que nos dicen los contenidos de alimentos frescos, pero NADA pueden decir sobre alimentos elaborados. Y no sólo por a mezcla de productos, sino tambien por los ADITIVOS (Es, etc) que suelen añadir Fósforo o Potasio a granel. Soy consciente que no es la materia de este Decreto, pero afecta gravemente tambiñen a un colectivo de personas con discapacidad, al tener el mismo rango que el Decreto sobre información nutricional obligatoria, puede perfectamente añadir un apartado que modifique dicho Reglamento; sin necesidad de abrir un nuevo proceso. Y como hay participación cruzada de varios departamentos ministeriales en muchos Reglamentos, perfectamente puede ponerse en conocimiento del Ministerio de Alimentación o de Consumo (no sé cual será el adecuado, o si serían los dos) para rematar este Decreto con dicha incorporación en los procesos posteriores de elaboración y aprobación.	la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la norma va principalmente dirigida a las personas con discapacidad visual.
Observaciones Generales	**Federación Nacional de Industrias**	(...) **1)** Si bien, la disposición adicional primera de la citada Ley 4/2022, de 25 de febrero, insta al	**1) Se acepta.** El texto será sometido a TRIS

	Lácteas	Gobierno a regular reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables, consideramos que dichas medidas tienen que ser proporcionales y ajustarse al marco legislativo aplicable, es decir, a nivel europeo, de forma armonizada y pudiendo así atender las necesidades de toda la población vulnerable de la UE y no causar distorsiones en el mercado interior. En este sentido, la Directiva 2019/882 (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 11/2023), armoniza las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en lo relativo a los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios, en particular, eliminando y evitando los obstáculos a la libre circulación de determinados productos y servicios accesibles, derivados de las divergencias en los requisitos de accesibilidad en los Estados miembros. De ahí que, la normativa española debería estar alineada con la Directiva europea	**2 y 3) Se rechazan:** El texto da cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y

		para evitar introducir barreras en el mercado interior. Por tanto, entendemos que, dado que ya existe un marco legal armonizado sobre la información facilitada al consumidor, el Reglamento (UE) Nº 1169/2011, consideramos que **el proyecto de Real Decreto debería ser notificado a través del procedimiento establecido por la Directiva (UE) 2015/1535 (TRIS) debido a que esta medida podría contravenir la unidad de mercado y la armonización normativa frente otros países de la Unión Europea**. Dudamos de que un Estado miembro disponga de la suficiente competencia para imponer de manera unilateral y obligatoria una medida como la adopción del etiquetado en alfabeto Braille en determinados productos ya regulados a través de un Reglamento que busca la armonización para todos los consumidores de la Unión y que podría implicar una distorsión del mercado comunitario, por lo que **su aplicación en todo caso debería ser de carácter voluntario**, aunque esta obligación recaiga sobre los comercios que operan en territorio nacional. **2)** De acuerdo con la propia Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en España	calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, tanto la norma como la obligación de un etiquetado en braille nacen de un mandato legal.

		menos del 2% de las personas con discapacidad visual son capaces de leer braille (es decir, aproximadamente 10.000 personas). Este dato pone de manifiesto que el braille constituye una solución de alcance muy limitado, que no permite dar respuesta al objetivo principal del proyecto: garantizar la accesibilidad universal. En consecuencia, la medida resulta desproporcionada e inadecuada para la consecución del objeto de la norma, definido en su artículo 1 como la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad visual. El proyecto presenta serias dificultades de proporcionalidad, al imponer obligaciones que no resultan ni necesarias ni equilibradas en relación con el objetivo perseguido, ya que no se acredita con evidencia suficiente que el etiquetado en braille constituya el medio más eficaz para mejorar el acceso a la información de las personas con discapacidad visual y no se valoran alternativas menos restrictivas ya disponibles y que las empresas vienen aplicando de forma	

		efectiva, tales como el acompañamiento en el punto de venta. **3)** En tercer lugar, la medida implica una carga económica significativa, especialmente gravosa para las pequeñas y medianas empresas, con un impacto directo sobre su competitividad y que, a la vez, introduce un elemento que tiene un claro impacto inflacionista, que debería tenerse en consideración, especialmente en el desafiante actual contexto económico global. A este respecto, la propia Memoria de Análisis de Impacto Normativo pone de manifiesto la magnitud de dicha carga: •Más de 13.339 establecimientos se verían afectados. • Los establecimientos deberían afrontar inversiones aproximadas de 52.000.000 euros por equipo de impresión, que junto con los costes asociados a la atención personalizada (316.397.250 euros) conllevan un total de 368.397.250 euros. La introducción de obligaciones de carácter nacional no armonizadas a nivel europeo genera asimetrías competitivas en el mercado interior, penalizando a los operadores que desarrollan su actividad en España frente a aquellos que operan	

		en otros Estados miembros, tal y como se detalla en el punto siguiente. En suma, la medida, tal y como está planteada, presenta un impacto económico y operativo acumulativo y transversal, que compromete la eficiencia, la capacidad operativa y la competitividad de la cadena de valor en su conjunto, sin que se haya acreditado de manera suficiente su proporcionalidad. En este sentido, la experiencia comparada refuerza este análisis: en Portugal, donde existe una regulación similar con un ámbito de aplicación más limitado, no se registran solicitudes de impresión en braille en los comercios, lo que evidencia la escasa demanda real de este tipo de soluciones. A la luz de las consideraciones expuestas, resulta necesario replantear el enfoque regulatorio propuesto, orientándolo hacia un modelo voluntario que garantice una accesibilidad real, efectiva y alineada con las necesidades actuales del mercado y de las personas con discapacidad visual. Cualquier iniciativa normativa que plateara un modelo obligatorio, debería ser armonizada a nivel de la UE, basarse en criterios de flexibilidad y proporcionalidad, permitiendo a las empresas	

		seleccionar las soluciones que mejor se adapten a sus características operativas y a las necesidades reales de los consumidores. El proyecto de real decreto persigue un objetivo compartido y plenamente legítimo, como es el refuerzo de la accesibilidad universal en las relaciones de consumo y la mejora de la autonomía de las personas con discapacidad, en particular de aquellas con discapacidad visual. Desde el ámbito empresarial se comparte este enfoque y se reconoce la importancia de avanzar hacia entornos cada vez más inclusivos. No obstante, resulta necesario poner de manifiesto que la configuración concreta de algunas de las obligaciones previstas en la norma suscita dudas desde la perspectiva de los principios de buena regulación, en particular en lo relativo a la proporcionalidad y a la eficiencia. En este sentido, la medida proyectada se apoya en datos agregados del conjunto de personas con discapacidad, sin diferenciar adecuadamente el colectivo específico que hace uso efectivo del sistema braille, que constituye una minoría dentro de las personas con discapacidad visual. Como conclusión, por todo lo anteriormente comentado, desde FIAB se solicita:	

		• La retirada del proyecto con su redacción actual. • La apertura de un proceso de diálogo con el sector, orientado a definir soluciones más eficaces, proporcionadas y alineadas con el marco europeo, que permitan a las empresas, de forma voluntaria, escoger la alternativa que más les convenga. Todo ello con el objetivo de garantizar una accesibilidad real y efectiva, compatible con la competitividad empresarial y con el correcto funcionamiento del mercado comunitario.	
Observaciones Generales	**ANFACO-CYTMA**	El 16.03.2026, se ha abierto el trámite de audiencia e información pública en la web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo. ANFACO-CYTMA desea hacer constar lo siguiente: - Falta de eficacia de la solución braille: Hay un consenso en el sector con relación a mejorar la interacción de los consumidores con los productos pesqueros y acuícolas ante personas con deficiencia visual y ceguera. Por ello, desde ANFACO-CYTMA consideramos que la solución debiera tener un alcance universal, pensando también, por ejemplo, en personas de avanzada	**Se rechaza** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde

		edad. Por ello, la inclusión de un código QR u otras soluciones basadas en las tecnologías digitales (navilens) se presenta como una aproximación a estudiar frente al braille. Habida cuenta del gran avance tecnológico que está existiendo en el ámbito de la accesibilidad de las personas con problemas de capacidad visual, y que se manejan mediante la ayuda de dispositivos móviles, debiera plantearse adoptar las soluciones digitales que serán mucho más económicas, sostenibles y universales. - Riesgos técnicos en la seguridad alimentaria: En el sector de la pesca, la fecha de caducidad y la información sobre alérgenos son datos variables y críticos. Delegar la transcripción de esta información sensible al braille en el punto de venta (distribución) aumenta exponencialmente el riesgo de errores manuales, lo que compromete la salud del consumidor y genera un conflicto de responsabilidad legal para el fabricante, quien pierde el control sobre la veracidad de la información comunicada. - Vulneración de la Unidad de Mercado y Derecho de la UE: La imposición unilateral de requisitos de etiquetado físicos no armonizados en la Unión Europea constituye una barrera a la libre circulación de mercancías. Esta normativa penaliza a los operadores que actúan en España frente a competidores de otros Estados	la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria.

		miembros, contraviniendo los principios de eficiencia y buena regulación. - Carácter voluntario y diálogo sectorial: Cualquier medida de accesibilidad debe tener un carácter voluntario para el comercio y basarse en un modelo flexible que permita a las empresas seleccionar las soluciones tecnológicas que mejor se adapten a sus capacidades operativas sin comprometer la competitividad de la cadena de valor.	
Observaciones Generales	**Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios HISPACOOP**	**CONSIDERACIONES GENERALES.** El Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo tiene por objeto regular un sistema de etiquetado accesible dirigido, principalmente, a garantizar la accesibilidad de la información de determinados productos de consumo a las personas con discapacidad visual, consideradas como personas consumidoras vulnerables. Con este respecto el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo determina que el objeto es la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto

		visual, como personas consumidoras vulnerables. En este sentido se centra en el etiquetado accesible de productos de consumo para las personas con discapacidad visual. Nuestro compromiso como organización representativa de las personas consumidoras y usuarias es dotar de un marco normativo que permita garantizar la accesibilidad de la información sobre los bienes y productos de consumo a las personas consumidoras. En este sentido apoyamos medidas que pretendan mejorar la accesibilidad de la información para las personas con discapacidad, en especial, las personas con discapacidad visual, siempre al amparo del marco regulatorio europeo en esta materia. A este respecto debemos indicar aspectos clave a considerar en tal propuesta normativa para evitar, en la medida de lo posible, su retirada nuevamente en el procedimiento TRIS (Technical Regulation Information System). La Comisión Europea emitió un dictamen razonado sobre el proyecto presentado con anterioridad, que suponía obstáculos injustificados al mercado único de la Unión Europea, en especial en los productos y bienes de consumo afectados. Con el	braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo que la inclusión del braille es obligatoria.

		dictamen emitido por la Comisión Europea se produjo la suspensión automática del procedimiento, obligando a España a revisar en profundidad el contenido, no solo por los riesgos de posibles fragmentaciones del mercado único, al ser únicamente una existencia a nivel nacional pero no armonizada en el ámbito europeo, y, por otra parte, por la desproporcionalidad a nivel técnico de las medidas propuestas, junto con los impactos económicos y operativos de las mismas en relación con los envases de estos productos de consumo. Por consiguiente, la propuesta normativa debe analizarse a la luz de los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y adecuación al Derecho de la Unión Europea. En todo caso, el propósito de garantizar la accesibilidad es compartido; las dudas se ubican en el instrumento elegido y en su adecuación a los principios de necesidad y proporcionalidad, así como a la coherencia con el acervo europeo en materia de información de producto y accesibilidad. En este sentido, destacamos que la seguridad de la persona consumidora se basa en la existencia de una base de datos electrónica fiable y	

		normalizada que proporciona datos completos y actualizados de los productos. La modificación de esta estandarización puede suponer un incremento sustancial del riego para las personas consumidoras ya que requeriría la captura manual de datos variables (lote, fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, alergenos, peligrosidad…), lo que impediría facilitar un consumo seguro a las personas con discapacidad visual. Otra consideración general importante es la preminencia del sistema braille en el Proyecto de Real Decreto. Así, la baja prevalencia del sistema Braille entre la población con discapacidad visual, que tiende a apoyarse en otras soluciones de lectura y reconocimiento, reforzaría la conveniencia de priorizar canales digitales accesibles que sí dieran cobertura a la totalidad del colectivo objetivo y vulnerable. La propia memoria de impacto normativo establece la poca utilización de este sistema entre las personas con discapacidad de visión, estimando los posibles usuarios en no más de 10.000. De esta manera, la utilización del sistema Braille resuelve el tema solo para las personas que sepan usarlo, que son solo una parte, pequeña y decreciente, de los que tienen discapacidad	

		visual, dejando sin solución a las que no lo sepan, lo cual generaría una discriminación entre las personas con discapacidad visual según sepa o no usar el sistema Braille, algo que va en contra de la vocación y espíritu de la norma. Una solución diferente, por el contrario, basada en un código QR u otro tipo de soporte de datos digital normalizado, no solo es absolutamente inclusiva de todas las personas con discapacidad visual, sino que también es una ayuda para otros colectivos vulnerables, como por ejemplo personas con baja visión, o personas mayores que no sean capaces de leer con comodidad la letra pequeña de los envases o etiquetado, etc. Por último, el empleo de un código QR u otro tipo de soporte de datos digital normalizado y abierto, que permita obtener información relevante sobre el producto envasado, no solo es compatible, sino que ofrece una solución técnica para atender otras necesidades y obligaciones, como, por ejemplo, el uso de otras lenguas oficiales.	
Observaciones Generales	**Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE**	**Enmienda a la totalidad del texto.** **Donde dice:** Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo. **Debería decir:**	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección

		~~Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo.~~ **Justificación:** La propuesta normativa, aun respondiendo a una finalidad de mejora de la accesibilidad, presenta serias dificultades de proporcionalidad, eficacia práctica y sostenibilidad económica en su configuración actual, lo que justifica la presentación de una enmienda a la totalidad. En primer lugar, la medida no resulta plenamente adecuada desde la perspectiva de su eficacia real. El braille constituye una herramienta para una parte del colectivo, pero no es el sistema de acceso utilizado de forma generalizada por todas las personas con discapacidad visual. Contrariamente, un porcentaje minoritario de personas con discapacidad visual conocen el alfabeto braille. En segundo lugar, la medida se proyecta únicamente sobre determinados operadores de mayor tamaño, pese a que la necesidad de accesibilidad de las personas con discapacidad visual es la misma con independencia del formato comercial. Esta diferencia de trato genera una carga regulatoria desigual y plantea dudas desde la perspectiva de la coherencia de la norma y de	de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables."

		la neutralidad competitiva. En consecuencia, en este punto no se garantiza el requisito de proporcionalidad de la medida, pues deja fuera operadores en los que las personas con discapacidad visual también pueden realizar sus compras. Esta medida, además, rompe la unidad de mercado favoreciendo la implantación de operadores pequeños y perjudicando a los establecimientos con más metros cuadrados, en tanto en cuanto la norma hace precisamente referencia a metros cuadrados sin tener en cuenta otras variables. En tercer lugar, las medidas previstas imponen a los operadores comerciales una carga económica elevada, valorada en 368M€. La implantación de sistemas de información en braille, tanto en tienda física como en el canal online, exige adaptaciones técnicas, actualización constante de contenidos y reorganización de procesos internos, todo ello en un sector de alta rotación y sin poder garantizar la correcta información alimentaria obligatoria que viene regulada en normativa europea y que está atribuida a la razón social bajo la que se comercializa el producto. A ello se añade la eventual prestación de atención personalizada durante la compra, con el consiguiente impacto en personal, operativa y	Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria. Por otra parte, la medida se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400m2 según la clasificación de la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad por poder constituir una carga desproporcionada. Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2

		costes.	
Observaciones Generales	**FIAB**	(…) **1)** Si bien, la disposición adicional primera de la citada Ley 4/2022, de 25 de febrero, insta al Gobierno a regular reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables, consideramos que dichas medidas tienen que ser proporcionales y ajustarse al marco legislativo aplicable, es decir, a nivel europeo, de forma armonizada y pudiendo así atender las necesidades de toda la población vulnerable de la UE y no causar distorsiones en el mercado interior. En este sentido, la Directiva 2019/882 (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 11/2023), armoniza las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en lo relativo a los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios, en particular, eliminando y evitando los obstáculos a la libre circulación de determinados productos y servicios	**1) Se acepta.** El texto será sometido a TRIS **2 y 3) Se rechazan:** El texto da cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y

		accesibles, derivados de las divergencias en los requisitos de accesibilidad en los Estados miembros. De ahí que, la normativa española debería estar alineada con la Directiva europea para evitar introducir barreras en el mercado interior. Por tanto, entendemos que, dado que ya existe un marco legal armonizado sobre la información facilitada al consumidor, el Reglamento (UE) Nº 1169/2011, consideramos que **el proyecto de Real Decreto debería ser notificado a través del procedimiento establecido por la Directiva (UE) 2015/1535 (TRIS) debido a que esta medida podría contravenir la unidad de mercado y la armonización normativa frente otros países de la Unión Europea**. Dudamos de que un Estado miembro disponga de la suficiente competencia para imponer de manera unilateral y obligatoria una medida como la adopción del etiquetado en alfabeto Braille en determinados productos ya regulados a través de un Reglamento que busca la armonización para todos los consumidores de la Unión y que podría implicar una distorsión del mercado comunitario, por lo que **su aplicación en todo caso debería ser de carácter voluntario**, aunque esta obligación recaiga sobre los comercios que operan en territorio nacional.	productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, tanto la norma como la obligación de un etiquetado en braille nacen de un mandato legal.

		2) De acuerdo con la propia Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en España menos del 2% de las personas con discapacidad visual son capaces de leer braille (es decir, aproximadamente 10.000 personas). Este dato pone de manifiesto que el braille constituye una solución de alcance muy limitado, que no permite dar respuesta al objetivo principal del proyecto: garantizar la accesibilidad universal. En consecuencia, la medida resulta desproporcionada e inadecuada para la consecución del objeto de la norma, definido en su artículo 1 como la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad visual. El proyecto presenta serias dificultades de proporcionalidad, al imponer obligaciones que no resultan ni necesarias ni equilibradas en relación con el objetivo perseguido, ya que no se acredita con evidencia suficiente que el etiquetado en braille constituya el medio más eficaz para	

		mejorar el acceso a la información de las personas con discapacidad visual y no se valoran alternativas menos restrictivas ya disponibles y que las empresas vienen aplicando de forma efectiva, tales como el acompañamiento en el punto de venta. **3)** En tercer lugar, la medida implica una carga económica significativa, especialmente gravosa para las pequeñas y medianas empresas, con un impacto directo sobre su competitividad y que, a la vez, introduce un elemento que tiene un claro impacto inflacionista, que debería tenerse en consideración, especialmente en el desafiante actual contexto económico global. A este respecto, la propia Memoria de Análisis de Impacto Normativo pone de manifiesto la magnitud de dicha carga: •Más de 13.339 establecimientos se verían afectados. • Los establecimientos deberían afrontar inversiones aproximadas de 52.000.000 euros por equipo de impresión, que junto con los costes asociados a la atención personalizada (316.397.250 euros) conllevan un total de 368.397.250 euros. La introducción de obligaciones de carácter	

		nacional no armonizadas a nivel europeo genera asimetrías competitivas en el mercado interior, penalizando a los operadores que desarrollan su actividad en España frente a aquellos que operan en otros Estados miembros, tal y como se detalla en el punto siguiente. En suma, la medida, tal y como está planteada, presenta un impacto económico y operativo acumulativo y transversal, que compromete la eficiencia, la capacidad operativa y la competitividad de la cadena de valor en su conjunto, sin que se haya acreditado de manera suficiente su proporcionalidad. En este sentido, la experiencia comparada refuerza este análisis: en Portugal, donde existe una regulación similar con un ámbito de aplicación más limitado, no se registran solicitudes de impresión en braille en los comercios, lo que evidencia la escasa demanda real de este tipo de soluciones. A la luz de las consideraciones expuestas, resulta necesario replantear el enfoque regulatorio propuesto, orientándolo hacia un modelo voluntario que garantice una accesibilidad real, efectiva y alineada con las necesidades actuales del mercado y de las personas con discapacidad visual.	

		Cualquier iniciativa normativa que plateara un modelo obligatorio, debería ser armonizada a nivel de la UE, basarse en criterios de flexibilidad y proporcionalidad, permitiendo a las empresas seleccionar las soluciones que mejor se adapten a sus características operativas y a las necesidades reales de los consumidores. El proyecto de real decreto persigue un objetivo compartido y plenamente legítimo, como es el refuerzo de la accesibilidad universal en las relaciones de consumo y la mejora de la autonomía de las personas con discapacidad, en particular de aquellas con discapacidad visual. Desde el ámbito empresarial se comparte este enfoque y se reconoce la importancia de avanzar hacia entornos cada vez más inclusivos. No obstante, resulta necesario poner de manifiesto que la configuración concreta de algunas de las obligaciones previstas en la norma suscita dudas desde la perspectiva de los principios de buena regulación, en particular en lo relativo a la proporcionalidad y a la eficiencia. En este sentido, la medida proyectada se apoya en datos agregados del conjunto de personas con discapacidad, sin diferenciar adecuadamente el colectivo específico que hace uso efectivo del sistema braille, que constituye una minoría	

		dentro de las personas con discapacidad visual. Como conclusión, por todo lo anteriormente comentado, desde FIAB se solicita: **• La retirada del proyecto con su redacción actual.** • La apertura de un proceso de diálogo con el sector, orientado a definir soluciones más eficaces, proporcionadas y alineadas con el marco europeo, que permitan a las empresas, de forma voluntaria, escoger la alternativa que más les convenga. Todo ello con el objetivo de garantizar una accesibilidad real y efectiva, compatible con la competitividad empresarial y con el correcto funcionamiento del mercado comunitario.	
Observaciones Generales	**Confederación Plena inclusión España**	**Comentario general 2: Propuestas para la garantía de la accesibilidad universal en origen.** De manera general, se considera que la responsabilidad de un correcto etiquetado accesible no debe recaer sobre la superficie comercial sino en el fabricante por los siguientes motivos: <u>1. Vulneración del principio de igualdad y discriminación territorial</u> El actual borrador, al vincular la obligatoriedad de	**1)** La medida se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por poder constituir una

		la medida únicamente a superficies superiores a 400m2, genera una brecha de accesibilidad basada en la residencia del ciudadano. La mayoría de los establecimientos en zonas rurales o de baja densidad demográfica no alcanzan dicha superficie. Esto condena a las personas con discapacidad en estas zonas a desplazarse largas distancias para ejercer su derecho a la información básica, contraviniendo el principio de cohesión territorial. Asimismo, se crea una jerarquía de consumidores donde solo aquellos que tienen acceso a grandes núcleos urbanos disfrutan de plena autonomía en la compra. <u>2. Ineficiencia de la responsabilidad delegada (Fabricante vs. Distribuidor)</u> La responsabilidad debe recaer en el fabricante (en origen) y no en el distribuidor (en destino) por razones de trazabilidad y economía de escala: La manipulación de etiquetas por parte de la superficie comercial puede comprometer la visibilidad de otras informaciones obligatorias (lote, caducidad, alérgenos) o la integridad del envase. Del mismo modo, es más eficiente que un fabricante adapte una línea de producción para	carga desproporcionada, sin perjuicio de que establecimientos de superficie menor puedan aplicarla de manera voluntaria. Las personas con discapacidad visual pueden comprar en el comercio de su elección, pero únicamente se les ofrecerán los servicios incluidos en el Real Decreto en los de superficie superior a 1.000 m2. **2) Se rechaza:** Modificar los requisitos de envasado y etiquetado para determinados productos presenta obstáculos técnicos al comercio, según el REGLAMENTO (CE) No 1223/2009 DEL

		millones de unidades que obligar a miles de comercios a implementar procesos manuales o tecnológicos individuales. <u>3. Insuficiencia del régimen sancionador y riesgo de incumplimiento rentable</u> Existe el riesgo de que las grandes superficies realicen un análisis de costebeneficio. Si la sanción administrativa es inferior al coste operativo de implementar sistemas de etiquetado accesible (personal, tecnología, tiempos), las empresas podrán optar por la provisión de fondos para multas, dejando el derecho ciudadano desatendido. <u>4. Sostenibilidad y residuos:</u> El re-etiquetado en el punto de venta genera un desperdicio adicional de materiales (plásticos, adhesivos, energía) que se evitaría si el diseño universal se aplicara en la fase de envasado original.	PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, el REGLAMENTO (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las

			Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 608/2004 de la Comisión y el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. **3)** No se modifican los regímenes sancionadores en el ámbito de consumo ni de discapacidad, únicamente se añaden nuevas infracciones

			dentro de los mismos derivadas de este Real Decreto. **4) Se rechaza:** Modificar los requisitos de envasado y etiquetado para determinados productos presenta obstáculos técnicos al comercio, según el REGLAMENTO (CE) No 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, el REGLAMENTO (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o

			1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 608/2004 de la Comisión y el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que

			se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
Observaciones Generales	**Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética STANPA**	**CONSIDERACIONES GENERALES** STANPA está comprometida con la accesibilidad en toda la cadena de valor, sobre todo enfocada al consumidor y en especial al vulnerable, así como con la transformación digital y el uso de las nuevas herramientas tecnológicas por parte de las empresas para ser más competitivas, sostenibles y eficientes. Ante los nuevos requisitos contemplados en este proyecto de Real Decreto, creemos que la mejor forma de facilitar la accesibilidad a la información de sus productos a los colectivos de consumidores vulnerables es mediante la implantación de soluciones basadas en las tecnologías digitales. Actualmente ya existen sistemas basados en soluciones tecnológicas que permiten cubrir las necesidades planteadas por este proyecto de Real Decreto y que hoy en día están siendo	**Se rechaza:** La norma da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la

		usadas por las empresas, así como por los consumidores con discapacidad: los códigos QR, códigos Navilens, etc. Estos mecanismos conducen a entornos web adaptados que pueden dar cumplimiento a los requerimientos exigidos en este proyecto normativo. Además, no sólo los elementos del etiquetado requeridos en el proyecto de Real Decreto, sino que mediante la utilización de soluciones digitales se puede acceder a una información incluso más completa que la que figura en la etiqueta, contenidos accesibles mediante la utilización de funciones estándar por defecto ya instaladas en los actuales teléfonos móviles, cuyas prestaciones pueden ser utilizadas por personas con discapacidad. Por tanto, abogar por garantizar la accesibilidad de la información de los productos mediante sistemas basados en tecnologías digitales ofrece un compromiso óptimo tanto para permitir el acceso universal a todos los consumidores como la viabilidad, competitividad de los productores, fabricantes y distribuidores de los bienes de consumo y productos de especial relevancia. En todo caso, entendemos que sería preferible abordar este tipo de medidas de manera armonizada a nivel europeo, evitando así regulaciones nacionales diversas que puedan	accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria.

		llegar a poner en riesgo la unidad de mercado Adicionalmente, se podrían establecer mecanismos para fomentar un modelo de etiquetado Braille desde el incentivo y no desde la obligación. Por ejemplo, mediante el establecimiento de subvenciones o mecanismos similares a través de los fondos europeos, para las compañías o establecimientos que apuesten por este alfabeto.	
Observaciones Generales	**Confederación Empresarial Española de la Economía Social CEPES**	En el marco de este trámite de audiencia pública del sobre el PRD por el que se regula el etiquetado accesible de los productos de consumo, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda2030, desde la Confederación Empresarial Española de Economía Social, CEPES, se formula el presente escrito con el objetivo de trasladar una serie de consideraciones sobre su contenido y su impacto. Como se recoge en más detalle a continuación, el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo establece un nuevo marco orientado a garantizar la autonomía de las personas con discapacidad visual, reconociéndolas como consumidores vulnerables y reforzando su derecho a una información accesible. En este sentido, cualquier	**1.1)** La medida se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400m2 según la clasificación de la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad por poder constituir una carga desproporcionada. Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2 **1.2)** Los

		medida que contribuya a mejorar la accesibilidad y el desarrollo de la vida diaria de las personas con discapacidad es valorada desde la Economía Social positivamente. No obstante, se considera igualmente necesario alcanzar un adecuado equilibrio entre la loable finalidad perseguida por este proyecto de Real Decreto y las medidas que, éste desarrolla para garantizarla, de forma que, sin perder efectividad, resulten proporcionadas y lo menos lesivas posibles desde el punto de vista económico y de gestión para los operadores comerciales obligados a su implantación. Desde esta óptica, se formulan las siguientes **CONSIDERACIONES:** **1.1** En primer lugar, se aprecia que el umbral de aplicación basado en una superficie mínima de 400 m² resulta un criterio arbitrario y poco ajustado a la realidad del sector comercial. Este enfoque puede generar distorsiones tanto desde el punto de vista de la competencia como de la protección del consumidor, al dejar fuera a numerosos puntos de venta relevantes y, simultáneamente, imponer cargas desproporcionadas a establecimientos de proximidad con recursos limitados. Además, introduce una desigualdad en el acceso a la información, supeditando el derecho del	establecimientos con superficie de venta y exposición superior a 1.000 m2 tendrán la obligación de etiquetar en braille cuando hagan ventas online. **1.3) Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en

		consumidor al tamaño del establecimiento. **1.2** En segundo lugar, se observa una importante laguna en la exclusión del comercio electrónico y de los marketplaces. En un contexto de creciente digitalización del consumo, limitar el alcance de la norma al comercio físico reduce significativamente su eficacia y puede generar desequilibrios competitivos entre canales de venta. **1.3** Asimismo, se considera problemático el énfasis predominante en el sistema braille como solución central o única. Si bien constituye una herramienta valiosa, su uso efectivo es limitado entre la población destinataria, especialmente entre personas mayores o con baja visión. La imposición de este sistema como estándar principal puede resultar excluyente y técnicamente inviable en determinados formatos de producto, como envases de reducido tamaño. **1.4** Por otro lado, la obligación de que los establecimientos reproduzcan o transcriban información sensible bajo demanda introduce riesgos relevantes en términos de seguridad jurídica y protección del consumidor. La manipulación manual de datos variables —como fechas de caducidad, alérgenos o advertencias de seguridad— incrementa la probabilidad de error humano, comprometiendo la fiabilidad de información que está sujeta a estrictos requisitos	otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria. **1.4)** No se introduce la obligación de que esta transcripción se haga bajo demanda en los establecimientos, se pueden tener preparadas para los productos del establecimiento.

		regulatorios. **1.5** Igualmente, conviene tener en cuenta la necesidad de asegurar la compatibilidad del futuro marco normativo con el Derecho de la Unión Europea. La introducción de requisitos nacionales no armonizados puede suponer obstáculos al mercado interior, tal y como ya se ha señalado en procedimientos previos de evaluación a nivel comunitario. A la luz de estas consideraciones, se plantean las siguientes **PROPUESTAS:** **2.1** Se estima prioritario que la responsabilidad sobre la generación de información accesible recaiga en el fabricante u operador responsable del producto, integrando el etiquetado accesible en origen. Este enfoque garantiza la trazabilidad, veracidad y coherencia de la información desde su diseño inicial. **2.2** Asimismo, se recomienda fomentar el uso de soluciones tecnológicas inclusivas, tales como códigos QR, etiquetas digitales o sistemas de audio. Estas herramientas permiten ofrecer información completa, actualizada y accesible para un espectro más amplio de usuarios, incluyendo personas mayores o con baja visión, sin limitarse a un único soporte físico. **2.3** En relación con el ámbito de aplicación, sería	**1.5)** La norma, en su redacción actual, no establece obstáculos técnicos al comercio, ya que es una medida a aplicar en el punto de venta y a todos los productos que se vendan y entren en el ámbito de aplicación del Real Decreto. Si en un futuro se regula la misma materia a nivel europeo, la norma se adaptará convenientemente. ---- **2.1) Se rechaza:** Modificar los requisitos de envasado y etiquetado para determinados productos presenta obstáculos técnicos al

		conveniente revisar los criterios actuales, incorporando variables más ajustadas a la capacidad real de los operadores, como el volumen de negocio o la pertenencia a grandes cadenas, en lugar de un umbral rígido basado exclusivamente en la superficie comercial. **2.4** Por lo que respecta a las obligaciones del punto de venta, se considera más adecuado configurarlas como un deber de facilitar el acceso a la información ya existente mediante mecanismos de apoyo razonable al cliente, en lugar de imponer la generación de nuevas etiquetas o la transcripción de información regulada. **2.5** Del mismo modo, resulta esencial alinear la norma con la regulación europea vigente, aprovechando los avances en materia de digitalización de la información al consumidor y evitando la fragmentación normativa. **2.6** Finalmente, se propone establecer un régimen transitorio amplio y realista, acompañado de incentivos o mecanismos de apoyo que permitan a los operadores, especialmente a los de menor tamaño, adaptarse de forma progresiva a las nuevas exigencias.	comercio, según el REGLAMENTO (CE) No 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, el REGLAMENTO (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la

			Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 608/2004 de la Comisión y el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. **2.2) Se acepta parcialmente:** Se incluye en el artículo 4, si bien de forma

			opcional. **2.3)** Se ha hecho teniendo en cuenta el umbral de superficie de venta y exposición para que la medida tenga la mayor capilaridad posible. **2.4) Se rechaza:** Son obligaciones independientes, la asistencia tiene por objeto que la persona con discapacidad visual pueda realizar sus compras con las menores barreras posibles, mientras que la etiqueta es útil para que pueda identificar los productos en todo momento. **2.5)** Como se ha expuesto anteriormente, en caso de que haya normativa

			europea en un futuro, se adaptará la norma convenientemente. **2.6) Se acepta.** Se anplia el plazo transitorio
Observaciones Generales	**Unión Detallistas Españoles Sociedad Cooperativa UNIDE**	**1. Sobre la necesidad de una aplicación proporcionada en función del tipo de establecimiento** El Proyecto de Real Decreto traslada la obligación de garantizar servicios avanzados de accesibilidad (incluida la impresión en braille bajo demanda) a establecimientos comerciales con una superficie de exposición y venta igual o superior a 400 m² (Art. 1). Desde el punto de vista de los principios de necesidad y proporcionalidad, este umbral: - No se corresponde con la estructura real del sector minorista español. - Impone obligaciones desproporcionadas a establecimientos de proximidad cuya organización operativa y de plantilla es estructuralmente reducida, - Traslada la obligación a un personal trabajador en establecimientos comerciales en muchos	**1.1) Se rechaza:** Modificar los requisitos de envasado y etiquetado para determinados productos presenta obstáculos técnicos al comercio, según el REGLAMENTO (CE) No 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, el REGLAMENTO (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al

		casos carente de la formación necesaria para asumir la responsabilidad de trasladar información legal ligada a la seguridad de los productos. - Puede generar desigualdades entre consumidores dependiendo solo del tamaño del establecimiento. Delimitar el alcance por superficie de establecimiento no garantiza una protección efectiva del consumidor vulnerable, especialmente en zonas rurales o entornos de proximidad. **Propuesta.** **1.1** Fomentar un etiquetado accesible integrado en el propio producto, realizado en origen; es decir, por su fabricante. **1.2** Eximir a los establecimientos comerciales, sea cual fuere su superficie de venta y exposición, de garantizar la accesibilidad en términos de impresión de etiquetado, atendiendo a la imposibilidad real y operativa de llevarlo a cabo. **1.3** En su defecto, introducir criterios adicionales además de la superficie (volumen de negocio, pertenencia a cadena, disponibilidad de personal, o naturaleza del producto). **1.4** Incorporar una implantación gradualmente	consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 608/2004 de la Comisión y el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación,

		escalonada, evitando cargas operativas inasumibles por el comercio de proximidad.	etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. **1.2) Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un

			etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria. **1.3) Se rechaza:** La medida se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400m2 según la clasificación de la

			CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad por poder constituir una carga desproporcionada. Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2 **1.4) Se rechaza**
Observaciones Generales	**Unión Detallistas Españoles Sociedad Cooperativa UNIDE**	**2. Sobre la centralidad del sistema braille como herramienta obligatoria** La imposición de un sistema único —el braille— no se ajusta al principio de accesibilidad universal ni a la realidad estadística: - Información oficial señala que solo unos 10.000 usuarios en España utilizan braille de forma efectiva. - En las franjas de edad avanzadas la utilización es casi inexistente. - La accesibilidad debe abarcar a todas las personas con discapacidad visual, incluidos quienes usan tecnologías digitales, asistentes de lectura, pictogramas o soluciones de accesibilidad cognitiva.	**Se rechaza:** Como se ha explicado anteriormente, modificar los requisitos de envasado y etiquetado para determinados productos presenta obstáculos técnicos al comercio, según el REGLAMENTO (CE) No 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, el REGLAMENTO (UE) N o

		La obligatoriedad exclusiva del braille puede crear discriminaciones internas dentro del colectivo, contraviniendo la finalidad de la norma. **<u>Propuesta</u>** **2.1** Reincorporar la redacción del PRD 2024 que permitía braille, QR táctiles, sistemas digitales accesibles y soluciones tecnológicas normalizadas como alternativas igualmente válidas. **2.2** Garantizar que el etiquetado accesible responda al principio de diseño universal, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2013. **2.3** Fomentar un etiquetado accesible integrado en el propio producto, realizado en origen; es decir, por su fabricante.	1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 608/2004 de la Comisión y el

			Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
Observaciones Generales	**Unión Detallistas Españoles Sociedad Cooperativa UNIDE**	**3. Sobre el modelo de etiquetado bajo demanda en el establecimiento** El modelo previsto obliga a ciertos establecimientos a: - imprimir etiquetas en braille bajo demanda, - colocar la información en el envase, - y disponer de personal capaz de asistir en el proceso. Esta obligación presenta importantes objeciones de necesidad, seguridad jurídica y proporcionalidad, porque:	**3.1. Se rechaza:** Modificar los requisitos de envasado y etiquetado para determinados productos presenta obstáculos técnicos al comercio, según el REGLAMENTO (CE) No 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos

		- Traslada a un punto de venta minorista la responsabilidad de reproducir información legalmente regulada (alérgenos, advertencias CLP, fechas, ingredientes). - Multiplica el riesgo de errores o inconsistencias, sancionables. - Fragmenta el mercado nacional al generar potencialmente múltiples versiones de etiquetado accesible no homogéneas. - Impone tareas técnicas que normalmente corresponden a fabricantes y distribuidores, sujetos obligados por el Reglamento (UE) 1169/2011 y el Reglamento (CE) 1272/2008. Es necesario evitar sistemas que requieran captura manual de datos variables y que comprometan la seguridad de la información. **<u>Propuesta.</u>** **3.1** Fomentar un etiquetado accesible integrado en el propio producto, realizado en origen; es decir, por su fabricante. **3.2** El establecimiento debe limitarse a ofrecer asistencia razonable, pero no a generar información legal del producto. **3.3** Eximir a los establecimientos comerciales, sea cual fuere su superficie de venta y exposición, de garantizar la accesibilidad en términos de impresión de etiquetado, atendiendo	cosméticos, el REGLAMENTO (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o

		a la imposibilidad real y operativa de llevarlo a cabo.	608/2004 de la Comisión y el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. **3.2. Se rechaza:** La información ya está generada en el etiquetado no accesible del producto, la única obligación es dar traslado de dicha información al etiquetado accesible. **3.3. Se rechaza:** El

			Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida,

			especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria.

Observaciones Generales	**Unión Detallistas Españoles Sociedad Cooperativa UNIDE**	**4. Sobre la atención personalizada obligatoria** El principio de accesibilidad debe equilibrarse con el principio de proporcionalidad organizativa: • La atención personalizada obligatoria y continuada puede resultar incompatible con la estructura operativa de establecimientos de proximidad, sin que ello suponga desatender a consumidores vulnerables. • Debe evitarse generar situaciones de dependencia o cargas innecesarias para el personal. **<u>Propuesta.</u>** **4.1** Sustituir la atención “permanente” por una atención bajo demanda razonable y en función de los recursos disponibles. **4.2** Impulsar herramientas tecnológicas que faciliten la autonomía del consumidor, reduciendo la necesidad de interacción obligada.	**Se rechaza:** La atención es permanente cuando la persona con discapacidad visual esté realizando sus compras, debido a que es la única manera de que pueda encontrar los productos que necesita.

Observaciones Generales	**Unión Detallistas Españoles Sociedad Cooperativa UNIDE**	**5. Sobre la memoria económica y el análisis de cargas** El impacto económico previsto se basa en supuestos que: - No reflejan la realidad de los establecimientos minoristas de proximidad. - No valoran adecuadamente la carga efectiva de reorganización de procesos. - Suman obligaciones operativas y tecnológicas que podrían resultar inasumibles sin apoyo financiero o sin alternativas más eficientes. Las medidas deben evitar efectos desproporcionados y garantizar que no existan obstáculos al mercado interior. **<u>Propuesta.</u>** **5.1** Incorporar alternativas no presenciales, digitales y normalizadas. **5.2** Fomentar un etiquetado accesible integrado en el propio producto, realizado en origen; es decir, por su fabricante, evaluando un régimen transitorio más amplio y ajustado al mercado minorista. **5.3** Introducir incentivos o programas públicos de adaptación tecnológica.	**Se rechaza:** No es posible modificar los requisitos de envasado y etiquetado en origen para determinados productos, ya que presenta obstáculos técnicos al comercio, según el REGLAMENTO (CE) No 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, el REGLAMENTO (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y

			del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 608/2004 de la Comisión y el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y

			1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
Observaciones Generales	**Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución ANGED**	**ENMIENDA ÚNICA** Enmienda para la NO tramitación del proyecto de Real Decreto **<u>Justificación:</u>** Se propone la NO tramitación del proyecto de Real Decreto en base a las siguientes consideraciones: Con carácter previo hay que poner de manifiesto que, desde nuestra organización se comparte plenamente el objetivo de garantizar el acceso a la información para las personas con discapacidad visual y reafirma su compromiso, como siempre lo ha hecho, sin necesidad de mandatos legales, con la accesibilidad. En este sentido, somos plenamente conscientes de la necesidad de una regulación como la pretendida, al existir un mandato legal expreso, si bien, como se dirá, no de la forma y manera que se propone. **COMENTARIOS:** **A. LA NECESIDAD DE LA REGULACIÓN SE ENCUENTRA FUNDAMENTADA.** **La norma no parte de cero, sino que existe**	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo

		un mandato legal expreso. La memoria insiste, en reiteradas ocasiones, que el proyecto no nace de una mera conveniencia política, sino del desarrollo reglamentario de la disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que ordena regular un etiquetado en braille “así como en otros formatos” para bienes y productos de especial relevancia para la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de personas ciegas y con discapacidad visual como consumidoras vulnerables. La memoria llega a afirmar que “no se pueden considerar otras alternativas” respecto de la necesidad de dictar el real decreto, precisamente porque hay un mandato legal previo. Eso no significa que no puedan discutirse las alternativas regulatorias internas dentro del real decreto, pero sí que el expediente acredita bien la necesidad de una respuesta normativa de algún tipo. El bien jurídico protegido es intenso: seguridad, salud, autonomía e igualdad. El proyecto no se refiere a cualquier información comercial irrelevante, sino a productos que el anexo identifica como alimentación, detergentes/limpiadores y cosméticos/cuidado	de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el mandato exige un etiquetado en braille, para lo cual se han valorado su inclusión en el etiquetado original, solución que, de acuerdo al dictamen circunstanciado de la Comisión en el marco del procedimiento TRIS, genera obstáculos técnicos al comercio, y su impresión en punto de venta, siguiendo el modelo ya puesto en práctica en Protugal con algunas

		personal. Son categorías vinculadas directamente con alergias, intolerancias, riesgos químicos, caducidad y correcta identificación del producto. El art. 3.2.b exige precisamente que, cuando se imprima la etiqueta accesible, consten el tipo de producto y marca, la indicación de peligro, la referencia a alérgenos/intolerancias y la fecha de caducidad o consumo preferente en alimentos. La memoria expresa, con claridad, la lógica material de la intervención: la falta de información accesible puede generar dependencia de terceros, problemas de seguridad alimentaria o sanitaria, y una quiebra del derecho a consumir en condiciones de igualdad. Incluso lo formula en términos de protección frente a daños y perjuicios por no entender el etiquetado. Por tanto, la necesidad no descansa en una pretensión abstracta de inclusión simbólica, sino en un problema real de protección del consumidor vulnerable. **El expediente identifica un colectivo relevante y objetivamente expuesto.** El texto utiliza varias cifras, no siempre perfectamente consistentes entre sí, pero todas conducen a una misma idea: existe un colectivo numeroso de personas con discapacidad, y dentro	adaptaciones.

		de él un subgrupo con discapacidad visual que encuentra especiales barreras en el acceso a la información de consumo. El preámbulo menciona 4,3 millones de personas con discapacidad y más de 218.000 con discapacidad visual como primera deficiencia. La memoria habla de 4,38 millones de personas con discapacidad y, en otro punto, de 3.361.444 personas con valoración de discapacidad, además de incorporar cifras específicas sobre discapacidad visual. La inconsistencia numérica debilita la precisión del expediente, pero no destruye su conclusión básica: el problema no es marginal y afecta a un conjunto amplio de consumidores vulnerables. **La vulnerabilidad no es hipotética, sino estructural.** El expediente no se limita a afirmar que hay personas con discapacidad visual; añade que la vulnerabilidad surge porque “en numerosas ocasiones” el mercado carece de condiciones de accesibilidad universal, dificultando el desempeño como personas consumidoras protegidas. También subraya la necesidad de una protección más intensa frente a exclusiones, discriminaciones y abusos, así como el acceso a información comprensible y suficiente. Ese razonamiento enlaza con la definición legal	

		de “persona consumidora vulnerable”, que la propia memoria reproduce desde el TRLGDCU: personas que, por sus circunstancias, se encuentran en una situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide ejercer sus derechos como consumidoras en igualdad. En otras palabras, la necesidad regulatoria está bien apoyada porque el expediente acredita un déficit de accesibilidad con incidencia directa en derechos de consumo, salud y autonomía. No obstante, **La necesidad de regulación no equivale a validar cualquier técnica regulatoria.** Aquí reside el núcleo del problema. El expediente confunde en varios pasajes la pregunta “¿hay que regular?” con otra muy distinta: “¿es proporcionado hacerlo de este modo?”. La primera recibe una respuesta convincente; la segunda, se responde con un, en absoluto. La memoria afirma que la norma es proporcionada porque limita la obligación a supuestos en que el servicio es demandado por la persona consumidora y porque no impone una obligación general sobre todos los productos. Pero esa afirmación es más conclusiva que demostrativa: no contrasta de forma seria el	

		braille a demanda con otras alternativas menos costosas y más inclusivas.	
Observaciones Generales	**Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución ANGED**	**COMENTARIOS:** **B. LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA A TRAVÉS DEL BRAILLE.** **1) <u>Primer problema</u>: el propio mandato legal no imponía una respuesta solo braille.**_ La Ley 4/2022, según repite el expediente, ordena regular un etiquetado en braille “así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal”. Es decir, el legislador de habilitación no configuró el braille como solución exclusiva, sino como una pieza dentro de una solución más amplia. Sin embargo, el proyecto formula en el art. 2.2 una regla categórica: “El etiquetado accesible hará uso del sistema braille”. Después permite fórmulas simultáneas, pero el deber jurídicamente operativo del art. 3 se centra en la impresión en braille en el momento de la compra. Los códigos QR y otras herramientas quedan relegados al art. 4 como meras posibilidades voluntarias: “podrán incorporar”. Esa arquitectura revela una tensión interna: el	**1)** Se entiende de la propia redacción de la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica: "desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille", que la inclusión del braille es obligatorio. **2)** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y

		expediente invoca una base legal plural y multimodal, pero la obligación efectiva que diseña es esencialmente monomodal y braille-céntrica. **2) <u>Segundo problema</u>: el braille no es el formato de acceso mayoritario del colectivo afectado.** Este es el punto más fuerte contra la proporcionalidad de la técnica elegida. La memoria incorpora una tabla del INE sobre utilización del sistema braille por personas de 6 y más años con discapacidad de visión: 1.051,3 miles de personas con discapacidad de visión, de las que solo 14,4 miles "sí utiliza el sistema braille", frente a 1.034,5 miles que no lo utilizan. Además, añade que, según la Comisión Braille Española, el número total de personas que utilizan el braille en España es de 10.000. Este dato, tomado al pie de la letra, es demoledor desde la óptica de la proporcionalidad: - el formato sobre el que se construye la obligación principal no es el utilizado por la inmensa mayoría de las personas con discapacidad visual; - por tanto, el braille puede ser un recurso indispensable para una minoría, pero no el vehículo más apto para garantizar por sí solo la	económica, hace especial referencia al braille. **3)** Se contemplan alternativas, pero la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022 hace especial referencia al braille. **4)** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, de tal forma que la compra de la persona con discapacidad visual pudiera ser más autónoma. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.

		accesibilidad universal. Y eso lo reconoce indirectamente la propia memoria cuando afirma que el colectivo de personas con discapacidad visual es “amplio y diverso”, que incluye desde personas con discapacidad visual leve que pueden recurrir a QR o similares, hasta personas sordociegas que probablemente harán un uso intensivo de los recursos de accesibilidad. Si el grupo destinatario es heterogéneo y la mayoría no usa braille, una obligación centrada en braille impreso no parece responder al patrón de máxima adecuación con mínima carga que exige la proporcionalidad. **3) <u>Tercer problema</u>: el expediente reconoce la validez de alternativas, pero no las incorpora como obligación equivalente.** El preámbulo y la memoria son expresos al valorar positivamente los avances tecnológicos, la digitalización, los códigos QR y otras herramientas análogas. El art. 4.2 incluso contempla QR, sistemas análogos y elementos vinculados a accesibilidad cognitiva o a la información y comunicación. Y el anexo de aportaciones recibidas dice que las propuestas de sistemas digitales, QR, NaviLens o pictogramas	**5)** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio. **6)** Es la propia Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, la que lo

		“se aceptan”. Pero el salto normativo no se produce. Las alternativas tecnológicas: - no pasan a ser una obligación, - no se configuran como cumplimiento equivalente, - no operan como opción prioritaria o complementaria exigible, - y quedan al albur de la voluntad empresarial. Es decir, el expediente admite la necesidad de pluralidad de formatos pero la norma no la garantiza jurídicamente. Desde la proporcionalidad, esto es problemático porque, si las alternativas son útiles y más aptas para una mayoría y si la ley habilitante las menciona expresamente, entonces, no se entiende por qué el reglamento solo hace obligatoria la solución menos extendida entre los destinatarios. **4) <u>Cuarto problema</u>: la medida es tardía y dependiente, no autónoma.** La impresión en braille se prevé “a solicitud” de la persona consumidora y “en el momento de la compra”, con una etiqueta por producto. Además, el establecimiento debe ofrecer atención personalizada para acceder a los productos expuestos.	convierte en el núcleo de la obligación. **7)** La medida se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por poder constituir una carga desproporcionada. Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2

		Eso significa que el sistema no garantiza una accesibilidad verdaderamente autónoma en la fase previa de elección del producto. La secuencia real es esta: 1. la persona llega al establecimiento; 2. solicita ayuda; 3. recibe atención personalizada; 4. en el momento de la compra pide la impresión braille. Por tanto, la medida no asegura plenamente que la persona pueda comparar, examinar y decidir por sí misma entre varios productos en el lineal con la misma inmediatez que el resto de los consumidores. Garantiza más bien una accesibilidad asistida y ex post, no una accesibilidad autónoma e integrada. Eso debilita mucho la proporcionalidad en sentido funcional: la medida tiene valor, sí, pero su capacidad para alcanzar el fin declarado —autonomía, información clara y ejercicio en igualdad— es parcial. **5) <u>Quinto problema</u>: los costes se calculan en serio, pero no se comparan con alternativas menos gravosas.** La memoria sí hace un esfuerzo económico, aunque con varias debilidades metodológicas.	

		Estima que la norma abarcaría aproximadamente 13.339 establecimientos, y después utiliza una cifra redondeada de 13.000 para hacer cálculos. Sobre esa base, proyecta: - un coste total de hasta 316.397.250 € si se contratara una persona adicional por establecimiento para asistencia personalizada, aunque admite que “no parece realista” porque esas tareas podría asumirlas el personal existente; - un coste alternativo de asistencia de 184,37 millones € si se calcula por tiempo de acompañamiento; - y un coste de 52.000.000 € por la compra de una impresora braille de 4.000 € por establecimiento, más un coste residual de etiquetas. Pero el problema no es solo la magnitud del coste, sino que la memoria no hace un verdadero análisis comparado con otras opciones: - QR accesible integrado en el envase; - enlaces a contenido accesible; - soluciones sonoras; - sistemas de identificación universal; - pictogramas reforzados; - o fórmulas combinadas obligatorias según tipo de producto y riesgo.	

		El art. 4.2 sugiere esas posibilidades, pero la memoria no cuantifica ni compara su costeefectividad frente al modelo braille a demanda. Sin comparación de alternativas, la afirmación de proporcionalidad queda metodológicamente incompleta. **6) <u>Sexto problema</u>: la memoria llega a una conclusión fuerte con una base empírica insuficiente.** En varios pasajes la memoria afirma que el impacto es “rotundamente beneficioso” o positivo desde la igualdad de oportunidades y la accesibilidad. Eso puede ser cierto en términos generales, pero no demuestra que la técnica escogida sea la mejor. De hecho, la propia memoria reconoce que el proyecto tiene un antecedente retirado tras “significativos reparos” en el procedimiento europeo de reglamentaciones técnicas, lo que demuestra que no se trata de una materia sencilla ni exenta de objeciones serias. Tampoco ayuda que existan inconsistencias o cambios de base estadística dentro del mismo expediente: - 4,3 millones de personas con discapacidad;	

		- 4,38 millones; - 3,361 millones con valoración; - 218.000 con discapacidad visual como primera deficiencia; - 84.579 personas con discapacidad visual según otros datos; - 1.051,3 miles de personas con discapacidad de visión en la tabla de braille. La dispersión estadística no impide regular, pero sí hace más difícil sostener con rotundidad que el modelo elegido está empíricamente calibrado. **La desproporción no radica en exigir braille, sino en convertirlo en el núcleo de la obligación.** Esta es una precisión importante. No sería correcto decir que el braille carece de justificación. El expediente muestra lo contrario: para una parte del colectivo, especialmente ciertas personas ciegas o sordociegas, el braille es un instrumento esencial de acceso autónomo a la información. Además, hay precedentes regulatorios como los medicamentos, que la memoria cita como referente. El problema no es, pues, la presencia del braille en la norma. El problema es su posición estructural dentro de la norma:	

		- obligatorio en el concepto operativo, - central en las obligaciones del art. 3, - y relegando otras tecnologías a mero fomento voluntario. Una regulación proporcionada habría podido hacer otra cosa: imponer un deber de accesibilidad efectiva y multimodal, dentro del cual el braille fuese obligatorio para ciertos supuestos o disponible como una de varias vías de cumplimiento equivalentes y garantizadas. Eso se ajustaría mejor a lo que el propio expediente dice sobre diversidad del colectivo y pluralidad de recursos. **La proporcionalidad falla en sus tres subjuicios clásicos.** **<u>Idoneidad.</u>** La medida es parcialmente idónea, porque efectivamente mejora el acceso de algunas personas usuarias de braille y permite introducir información crítica sobre riesgos, alérgenos y caducidad. Pero su idoneidad es limitada para el conjunto del colectivo afectado, porque la mayoría no utiliza braille y porque la impresión a demanda en caja no resuelve bien la accesibilidad en la fase de selección y comparación.	

		<u>Necesidad.</u> La medida no supera claramente el juicio de necesidad, porque el propio expediente identifica alternativas menos restrictivas o costosas —QR y sistemas análogos— sin explicar por qué no pueden articularse como obligación equivalente. Cuando una norma reconoce alternativas funcionalmente aptas y no justifica su descarte, el juicio de necesidad queda debilitado. **<u>Proporcionalidad en sentido estricto.</u>** Aquí el desequilibrio es más visible: se imponen costes organizativos y de equipamiento relevantes a miles de establecimientos, para una técnica de acceso principal que el propio expediente reconoce como utilizada por una minoría reducida. Eso no significa que el coste sea automáticamente ilegítimo, pero sí que la relación entre cargas y beneficios marginales del modelo braille-céntrico aparece insuficientemente justificada. **7)** Por último, cabría realizar una **CRÍTICA ADICIONAL:** <u>Discriminación injustificada</u> La norma determina las obligaciones de accesibilidad para todos los establecimientos	

		comerciales con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2, que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en su Anexo. Si, además, dichos establecimientos tienen servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en la norma. Esto quiere decir, sensu contrario, que aquellos operadores que únicamente efectúen la comercialización y venta de los productos descritos en el Anexo de la norma, sin establecimiento físico, estarán al margen de la aplicación de la disposición. Sin embargo, no se justifica razón alguna por la que el comercio que opera únicamente en línea deba de estar exento de las obligaciones que se imponen cuando el objetivo perseguido es garantizar la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad visual, como personas consumidoras vulnerables. Objetivo que se mantiene en las operaciones que se realizan también on line. No existiendo una justificación razonable en el trato diferenciado, la norma resulta discriminatoria y contraria a Ley.	

		<u>Incoherencia entre “accesibilidad universal” y solución residual.</u> La norma dice perseguir la “accesibilidad universal”. Sin embargo, los datos de uso del braille muestran que ese formato no puede considerarse universal dentro del universo de personas con discapacidad visual. A lo sumo, puede ser indispensable para un subgrupo. Por eso hay una fricción conceptual importante: - fin declarado: accesibilidad universal; - medio central impuesto: un sistema residual entre la población destinataria, dirigido únicamente a quienes conocen el lenguaje braille. La universalidad exigiría, precisamente, lo contrario: una combinación de soportes que cubra perfiles diferentes de discapacidad visual y necesidades diversas. PRECEDENTE REGULACIÓN EN PORTUGAL - DEMUESTRA INCOSISTENCIA DE LA MEDIDA Existe un precedente normativo en Portugal que se emplea para justificar la propuesta. En concreto, se trata de la Lei n.º 33/2008 cuyo ámbito de aplicación se extiende únicamente a las cadenas con más de 5 establecimientos de “comercio mixto” (alimentación + no alimentación) y con más de 300 m² por tienda.	

		Entre las obligaciones principales que se establecen sobre determinados establecimientos seleccionados es el del acompañamiento personalizado al cliente con discapacidad visual, así como la impresión en Braille en el acto de compra mediante una etiqueta que recoja el nombre / características principales y fecha de caducidad, atribuyendo la obligación, al menos a un establecimiento por concelho (municipio). <u>Usabilidad de las máquinas.</u> Aunque no hay estadísticas oficiales públicas sólidas, sí hay indicadores cualitativos y parciales, bastante reveladores. Así, partiendo de los pocos datos existentes y cruzándolos con demografía, comportamiento y diseño del sistema, se puede dar una aproximación técnica bastante sólida. Con los datos empíricos se obtiene: - 1.198 usuarios del servicio - 620 tiendas equipadas Esto arroja un resultado de aproximadamente 1,9 usuarios por tienda/año (primer año de vigencia). Si se efectúa un ajuste por “usuarios reales” (no todos usan braille), es preciso corregir algo clave que es el hecho de que no todas las personas con discapacidad visual usan braille. En Portugal, la estimación de usuarios potenciales es muy pequeña y la frecuencia de uso por cliente en una estimación razonable indica que se hace entre 1 y	

		2 usos al mes por usuario activo (no más). En cuanto a la estimación global de uso por tienda, en un escenario conservador (más realista) sería de 2–5 usuarios activos por tienda (muy pocos usuarios reales) y de 1 uso/mes por usuario. El resultado sería de 2–5 usos al mes por tienda. En un escenario optimista (probablemente alto) tendríamos 10 usuarios activos, con 2 usos/mes, esto es, 20 usos al mes por tienda. Con estos datos tenemos que: - Escenario realista: 0,1 – 0,2 usos al día - Escenario alto: 0,6 usos/día Todo ello concluye que las máquinas están prácticamente ociosas la mayor parte del tiempo - una máquina de etiquetado Braille en supermercado probablemente se usa del orden de 1 vez cada varios días, lo que implica una utilización inferior al 1 % de su capacidad - y encaja perfectamente con el comportamiento observado de los consumidores, este es, los clientes prefieren la asistencia humana y el uso de apps móviles. <u>Crítica de las asociaciones de personas con discapacidad visual.</u> Las asociaciones de personas con discapacidad visual en Portugal —especialmente ACAPO— valoraron la ley como un avance importante, pero insuficiente en la práctica y necesitado de	

		revisión. Según dicha asociación, la ley no cumple plenamente las expectativas y han señalado problemas sustanciales como la calidad y utilidad de las etiquetas; la información incompleta y poco estandarizada; las dificultades de su uso en compras normales y la falta de respuesta a sus necesidades dado que el Braille no es suficiente como solución única al no se utilizado por todos los usuarios. Al tiempo señalan la necesidad de soluciones digitales que tiene mayor impacto real en la autonomía. Información digital accesible que es apuntada en todas las tendencias europeas a través del uso de: - apps móviles - códigos escaneables - bases de datos accesibles - integración con asistentes de voz Lo que permite más información, mayor rapidez y el uso en cualquier tienda. Las ventajas del modelo digital son indudables y se centran, básicamente, en su carácter universal (sirve a casi todos los usuarios), es escalable, es actualizable y no depende del punto de venta. En definitiva, la experiencia de la regulación en Portugal permite afirmar en el modelo propuesto en esta iniciativa es un modelo de fracaso, que no cumple con las expectativas de las personas con discapacidad, que supone un coste económico	

		desproporcionado y que existen alternativas tecnológicas ampliamente solicitadas por el colectivo al que pretende protegerse. Por todo ello, esta Asociación propone la no continuidad en la tramitación del presente proyecto de Real Decreto.	
Observaciones Generales	**Asociación Profesional de Detallistas APRODE**	**CONSIDERACIONES GENERALES** La Asociación Profesional de Detallistas de la alimentación de España (APRODE), en representación del tejido comercial de proximidad, manifiesta su firme compromiso con la autonomía de las personas con discapacidad, como consumidores especialmente vulnerables. No obstante, tras un análisis técnico-jurídico del Proyecto de Real Decreto, detectamos una quiebra de los principios de proporcionalidad, eficacia y realidad operativa. El comercio minorista es el eslabón más débil de la cadena de valor, caracterizado por infraestructuras limitadas y márgenes de beneficio estrechos. Imponer al detallista la obligación de intervenir en el etiquetado de productos envasados en origen no solo contraviene la normativa europea de seguridad alimentaria, sino que supone una carga	**1) Se rechaza:** El Real Decreto se centra en proporcionar información accesible, materia distinta y no regulada por el Reglamento (UE) 1169/2011. **2)** La medida se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por poder constituir una carga

		administrativa y económica que amenaza la supervivencia del comercio de barrio, sin que ello se traduzca en una mejora real y universal de la accesibilidad para el colectivo destinatario. Estas alegaciones se formulan desde una perspectiva operativa técnica y jurídica, con la finalidad de contribuir a la adecuada configuración de una norma coherente con el marco legal y competencial del mercado único europeo y con la realidad de los miles de detallistas de la alimentación que trabajan a diario para prestar un servicio esencial a barrios y pueblos de toda España. **1). Vulneración del principio de responsabilidad en la cadena de suministro: atribución de la carga de etiquetado al detallista.** El proyecto pretende que el minorista sea quien garantice el etiquetado en braille a demanda. Sin embargo, el Reglamento (UE) 1169/2011 establece que la responsabilidad de la información alimentaria recae sobre el operador bajo cuyo nombre se comercializa el alimento, es decir, el fabricante o envasador. **Justificación:** El minorista no tiene capacidad legal ni técnica para manipular el envase original o añadir etiquetas que puedan ocultar	desproporcionada. Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2 **3)** Como se apunta anteriormente, la medida se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por poder constituir una carga desproporcionada. **4)** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un

		información obligatoria de seguridad alimentaria (alérgenos, fechas de caducidad). Exigir que el detallista realice este etiquetado "a solicitud" desvirtúa la trazabilidad y la integridad del embalaje original. **2). Inviabilidad técnica: limitaciones del formato de venta minorista.** Los establecimientos de proximidad manejan miles de Unidades de Mantenimiento de Stock (SKUs). La implementación de sistemas de impresión braille en el punto de venta requiere maquinaria específica y software especializado del que las tiendas de barrio carecen. **Justificación**: El etiquetado braille no es una mera impresión; requiere un relieve con parámetros de altura y distancia normalizados (UNE-EN 15823). Un error en la impresión por parte de un personal no cualificado en este lenguaje podría inducir a error al consumidor vulnerable, generando una responsabilidad civil inasumible para el pequeño comerciante. **3). Desproporcionalidad económica y carga administrativa** El pequeño comercio opera con márgenes de beneficio reducidos. La obligación de disponer de medios para etiquetar de forma accesible a demanda supone un coste profundo (adquisición	código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio. **5)** No se especifican tiempos concretos. **6) Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de

		de equipos, mantenimiento, formación del personal y consumibles) que no guarda relación con el volumen de negocio del sector. **<u>Justificación:</u>** Según el principio de "proporcionalidad" de la normativa europea, las cargas administrativas deben ser mínimas para las PYMES. Esta exigencia actúa como una barrera de entrada y un agravio comparativo frente a las grandes superficies, que pueden amortizar estos costes con mayor facilidad. **4). Ineficacia del etiquetado manual frente a Soluciones Digitales** Obligar a etiquetar físicamente en la tienda es una medida ineficiente en el siglo XXI. La normativa debería fomentar el etiquetado digital (códigos QR accesibles, Navilens, etc.) incorporado desde el origen por el fabricante. **<u>Justificación:</u>** El etiquetado físico en tienda es efímero y propenso al deterioro por manipulación. Un sistema basado en soluciones tecnológicas globales permitiría al consumidor acceder a la información de forma autónoma mediante su smartphone, sin necesidad de que el minorista intervenga en la integridad del producto, garantizando una información siempre actualizada y veraz. **5). Ambigüedad jurídica e indefensión del**	esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria. **7) Se acepta:** Una de las medidas del Real Decreto es la atención personalizada.

		comerciante El texto actual no define los tiempos de espera ni el procedimiento para dicha solicitud. ¿Debe el comerciante etiquetar el producto al instante mientras el cliente espera? ¿Qué ocurre con los productos frescos o de rotación rápida? **Justificación:** La falta de concreción genera una inseguridad jurídica absoluta. Ante una inspección o una reclamación de consumo, el detallista queda indefenso al no existir un protocolo estandarizado de actuación que sea compatible con el ritmo de trabajo de una tienda de alimentación en horas punta. **6). Inefectividad de la medida y desajuste estadístico** El proyecto fundamenta la accesibilidad casi exclusivamente en el sistema braille físico. Sin embargo, según los datos de la última Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del INE y registros de la ONCE, se estima que en España apenas unas 10.000 a 12.000 personas son usuarias alfabetizadas en braille, lo que representa un porcentaje mínimo dentro del colectivo de personas con discapacidad visual (más de un millón de personas). **Justificación:** Imponer una infraestructura técnica compleja y costosa en miles de puntos de	

		venta para un sistema que solo utiliza una fracción residual del colectivo es ineficiente por diseño. La norma ignora a la mayoría de las personas con baja visión o discapacidad sobrevenida en edad avanzada que no conocen el braille, y que se beneficiarían mucho más de tecnologías de lectura de voz o atención directa. **7). La atención personalizada como alternativa proporcional** El artículo 13 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores ya establece el concepto de "consumidor vulnerable". APRODE defiende que la accesibilidad en el comercio de proximidad se garantiza de forma más efectiva y humana mediante la atención personalizada y el acompañamiento en el punto de venta. **Justificación:** El detallista de alimentación ya ejerce, de facto, una labor de asistencia. Establecer un protocolo de atención prioritaria y asistencia en la lectura de etiquetas es una solución "permanentemente disponible", de coste cero en infraestructura y mucho más inclusiva, ya que cubre a cualquier consumidor con dificultades (visuales, cognitivas o de edad), y no solo a los usuarios de braille. **CONCLUSIÓN Y PROPUESTA** Por todo lo expuesto, APRODE solicita que se	

		exonere al comercio minorista -sea cual fuere su superficie de exposición y venta- de la obligación de garantizar el etiquetado accesible en el establecimiento, trasladando dicha responsabilidad exclusivamente a los productores y envasadores en origen, e insta a la Administración a replantear el Proyecto de Real Decreto hacia un modelo de accesibilidad cognitiva y humana, evitando imponer barreras burocráticas y técnicas que resultan ineficaces para los ciudadanos y letales para el pequeño comercio español.	
Observaciones Generales	**Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores AECOC**	**Argumentación** **1). Inadecuación de la solución propuesta** De acuerdo con la propia Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, menos del 2% de las personas con discapacidad visual son capaces de leer braille. Este dato pone de manifiesto que el braille constituye una solución de alcance muy limitado, que no permite dar respuesta al objetivo principal del proyecto: garantizar la accesibilidad universal. En consecuencia, la medida resulta ineficaz e inadecuada para la consecución del objeto de la norma, definido en su artículo 1, consistente en la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de determinados bienes y	**1) Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará

		productos de consumo para personas con discapacidad visual. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 1. El presente real decreto tiene por objeto la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad visual, como personas consumidoras vulnerables. **2). Falta de proporcionalidad** El proyecto no supera un adecuado análisis de proporcionalidad, al imponer obligaciones que no resultan ni necesarias ni equilibradas en relación con el objetivo perseguido. En primer lugar, no se acredita con evidencia suficiente que el etiquetado en braille constituya el medio más eficaz para mejorar el acceso a la información de las personas con discapacidad visual. En segundo lugar, no se valoran alternativas voluntarias menos restrictivas que ya están disponibles y que las empresas vienen aplicando de forma progresiva y efectiva, tales como el	reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es de obligado cumplimineto. **2) Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de

		acompañamiento en el punto de venta o diversas soluciones tecnológicas, incluido el etiquetado digital accesible, que permiten alcanzar un mayor nivel de accesibilidad de forma más eficiente. En tercer lugar, la medida implica una carga económica significativa, especialmente gravosa para las pequeñas y medianas empresas, con un impacto directo sobre su competitividad que debería tenerse en consideración, especialmente en el contexto inflacionista global derivados de los conflictos existentes. A este respecto, la propia Memoria de Análisis de Impacto Normativo pone de manifiesto la magnitud de dicha carga: - Más de 13.000 establecimientos se verían afectados. - Cada establecimiento debería afrontar inversiones aproximadas de 4.000 euros por equipo de impresión, sin perjuicio de los costes asociados a la atención personalizada. - Todo ello para atender a un colectivo estimado en torno a 10.000 personas usuarias de braille, según la Comisión de Braille, aunque hay estudios que indican que son menos personas las que sepan leer el lenguaje Braille.	febrero, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria. Por otra parte, en el

		Todo ello sin tener en cuenta los costes asociados al mantenimiento del sistema de información y actualización de los productos afectados por la normativa, en los términos expuesto en el punto siguiente, y que se deberían haber considerado, también, en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo. Este desequilibrio entre los costes impuestos (tanto los cuantificados en la normativa, como los que se han obviado) y el número de potenciales beneficiarios evidencia el carácter desproporcionado de la medida, generando cargas excesivas e injustificadas para el tejido empresarial. El principio de proporcionalidad exige que las medidas sean adecuadas, necesarias y las menos restrictivas posibles para el mercado, requisitos que no se cumplen en este caso. Por ello, resulta imprescindible replantear el enfoque regulatorio, de modo que las eventuales medidas tengan carácter voluntario y se orienten hacia soluciones alternativas menos lesivas para las empresas. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las empresas, de manera progresiva, ya están implementando los mecanismos alternativos, los cuales resultan muy eficaces para garantizar la	artículo 4 se regulan otras alternativas para complementar dicho etiquetado braille, que serán voluntarias. **3)** La medida se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, y que puedan tener mayor capacidad para afrontar la medida, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por poder constituir una carga desproporcionada. Si bien se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2 **4) Se rechaza:** La medida no introduce

		accesibilidad, tales como el acompañamiento en el punto de venta o el uso de tecnologías accesibles, que resultan más adecuados y proporcionados para la finalidad perseguida. Finalmente, la experiencia comparada refuerza este análisis: en Portugal, donde existe una regulación similar con un ámbito de aplicación más limitado, no se registran solicitudes de impresión en braille en los comercios, lo que evidencia la escasa demanda real de este tipo de soluciones. **3). Afectación a la competitividad de la cadena de valor** La implementación de esta medida, en los términos previstos en el punto anterior, supondría una carga económica y operativa difícilmente asumible para las empresas, afectando directamente a más de 13.000 establecimientos en España y, de forma indirecta, al conjunto de la cadena de valor. En particular, la obligación de dotarse de equipos específicos de impresión en Braille y su integración en la operativa diaria implica inversiones muy significativas, así como costes recurrentes asociados a su mantenimiento, gestión y uso. A estos costes se añaden exigencias operativas	obstáculos técnicos al comercio, ya que se trata de una atención y etiquetado destinados a las personas con discapacidad visual en el punto de venta y, por lo tanto, es de carácter estrictamente nacional. Por otra parte, si se adopta una normativa a nivel europeo que aborde plenamente la accesibilidad de los etiquetados para las personas con discapacidad visual, se adaptará la norma de forma acorde. **5)** Sobre la propuesta de retirada del Proyecto de RD: **Se rechaza**: El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley

		de carácter estructural, como la gestión individualizada de solicitudes en el punto de venta, la actualización constante de la información de productos, la coordinación con proveedores y sistemas de inventario, y la necesidad de formación y dedicación de recursos humanos específicos. En conjunto, estas obligaciones introducen ineficiencias relevantes en la operativa diaria, reduciendo la capacidad de respuesta, la eficiencia y la flexibilidad de los operadores. Este impacto se ve agravado por el actual contexto macroeconómico, caracterizado por un entorno inflacionista persistente a escala global, impulsado en gran medida por tensiones geopolíticas, disrupciones en las cadenas de suministro y el encarecimiento sostenido de la energía y las materias primas. En este escenario, las empresas ya afrontan incrementos generalizados de costes y operan con márgenes especialmente tensionados, lo que limita de forma muy significativa su capacidad para absorber nuevas cargas estructurales sin comprometer su viabilidad económica. Asimismo, la imposición de obligaciones de carácter nacional no armonizadas a nivel europeo, en un contexto de creciente presión	4/2022, de 25 de febrero, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, es una obligación derivada de una ley.

		regulatoria en el conjunto de la Unión, genera asimetrías competitivas en el mercado interior, penalizando a los operadores en España frente a los de otros Estados miembros, que no están sujetos al mismo nivel de exigencia, tal y como se detalla en el punto siguiente. En definitiva, la medida presenta un impacto económico y operativo acumulativo y transversal que compromete la eficiencia, la capacidad operativa y la competitividad de la cadena de valor en su conjunto, sin que se haya justificado adecuadamente su proporcionalidad ni la inexistencia de alternativas más eficaces, tecnológicamente viables y menos gravosas. **4). Riesgos para la unidad de mercado europea** Existen dudas fundadas sobre la compatibilidad de esta iniciativa con el Derecho de la Unión Europea, en particular en lo relativo al principio de unidad de mercado y libre circulación de mercancías. La introducción de requisitos específicos de etiquetado -aunque sean en punto de venta- aplicables exclusivamente en España supone, en la práctica, la creación de barreras regulatorias adicionales que pueden obstaculizar el normal funcionamiento del mercado interior.	

		En el marco del procedimiento TRIS, la Comisión Europea ha reiterado que las regulaciones nacionales en materia de etiquetado deben analizarse con cautela, en la medida en que pueden constituir medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, debiendo, en su caso, abordarse desde un enfoque armonizado a nivel comunitario. En este contexto, resulta especialmente relevante que la propia Unión Europea esté avanzando hacia modelos comunes, voluntarios y alternativos de digitalización de la información al consumidor, promoviendo soluciones basadas en etiquetado digital que permitan mejorar la accesibilidad sin generar cargas desproporcionadas ni fragmentación normativa. De hecho, ya existen precedentes regulatorios en sectores como el vitivinícola, donde la normativa europea contempla la posibilidad de facilitar determinada información a través de soportes digitales, garantizando al mismo tiempo la coherencia del mercado interior. Frente a esta tendencia, la propuesta introduce un modelo nacional que se aparta de los desarrollos europeos, lo que podría obligar a los operadores a adaptar productos, procesos y formatos específicos para el mercado español,	

		generando costes adicionales, ineficiencias y riesgos de distorsión competitiva. En consecuencia, la medida podría derivar en una fragmentación normativa del mercado interior, obstaculizar la libre circulación de mercancías e invadir un ámbito regulatorio que, por su propia naturaleza, requiere de armonización a nivel de la Unión Europea, tal y como viene señalando la propia Comisión. **<u>Conclusión</u>** A la luz de las consideraciones expuestas, resulta necesario retirar el Proyecto de Real Decreto y replantear el enfoque regulatorio propuesto, orientándolo hacia un modelo que garantice una accesibilidad real y efectiva, alineada con las necesidades actuales del mercado y de las personas con discapacidad visual. Este nuevo enfoque debería basarse en principios de flexibilidad, voluntariedad, proporcionalidad y armonización a nivel de la Unión Europea, permitiendo a las empresas seleccionar las soluciones que mejor se adapten a sus características operativas y a las necesidades reales de los consumidores. En este marco, debe priorizarse la promoción de	

		soluciones alternativas y voluntarias ya existentes en el mercado que se están implementando de forma progresiva, frente a enfoques regulatorios de alcance limitado. Estas soluciones permiten ofrecer información de forma más amplia, adaptable y eficiente, respondiendo mejor a la diversidad de necesidades. En particular, el etiquetado digital accesible se configura como una alternativa especialmente adecuada, al tratarse de una realidad ya consolidada en el ámbito europeo, tanto como estándar emergente, como línea de desarrollo regulatorio y como herramienta empresarial de comunicación con el consumidor. Por todo lo anterior, AECOC solicita: - **La retirada del proyecto en su formulación actual.** - La apertura de un proceso de diálogo con el sector, orientado a definir soluciones más eficaces, proporcionadas y alineadas con el marco europeo, que permitan a las empresas, de forma voluntaria, escoger la alternativa que más les convenga. Todo ello con el objetivo de garantizar una accesibilidad real y efectiva, compatible con la competitividad empresarial y con el correcto	

		funcionamiento del mercado comunitario.	
Observaciones Generales	**Junta de Castilla y León Dirección General de Comercio y Consumo**	A lo largo del texto se observa el empleo reiterado de la expresión “bienes y productos”, sin que parezca existir una justificación normativa o conceptual que exija esta distinción. Así, el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, define el concepto «producto» como “todo bien mueble conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil” y «bienes» “a las cosas muebles corporales”. De estas definiciones se infiere que todos los productos son bienes, al ser bienes muebles, aunque no todos los bienes son productos, dado que los bienes inmuebles no tienen la consideración de productos. En consecuencia, si la finalidad del proyecto es regular la forma de presentación de determinada información en la “etiqueta”, a juicio de esta Dirección General, dicha información debe referirse necesariamente a la etiqueta del producto, puesto que los bienes inmuebles no son susceptibles de etiquetado en el sentido jurídico que a esta figura otorga la normativa vigente.	**Se rechaza:** El Real Decreto utiliza la misma terminología que la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras

		Con ello, se evita redundancia terminológica y se mejora la coherencia interna de la norma, recomendándose emplear únicamente el término “producto”.	vulnerables."

Observaciones Generales	**Junta de Castilla y León Dirección General de Comercio y Consumo**	En consecuencia, y a la vista de las alegaciones expuestas —muy especialmente la relativa a la falta de procedencia de incluir en el régimen sancionador referencias al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre—, esta Dirección General considera necesaria una revisión del texto propuesto que incluya la eliminación de las referencias a la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios y la supresión de las infracciones vinculadas a dicha materia. No obstante, se desea dejar constancia de la oposición expresa de esta Dirección General a la elevación del texto para su aprobación por la Conferencia Sectorial de Consumo.	**Se rechaza** La referencia al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre en el artículo 6. Régimen sancionador, en ningún caso incorpora nuevas obligaciones a las autoridades de consumo, que únicamente serán competentes de las incorrecciones en el etiquetado general, como ya lo vienen siendo.

Observaciones Generales			
Observaciones Generales			
PREÁMBULO			
Preámbulo	**Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos CNLSE**	**Observación:** Inclusión de la lengua de signos en el preámbulo del real decreto Se propone modificar el preámbulo, en el apartado I, incorporando un nuevo inciso, marcado en azul, tras el párrafo relativo a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, con la siguiente redacción: "Por tanto, asegurar los derechos de las personas con discapacidad ante el consumo es un factor determinante para su inclusión social y su autonomía personal, conforme a los mandatos de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española y en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Asimismo, se tendrá en cuenta la accesibilidad a la información y a la comunicación, incluyendo el	**Se rechaza.** La Disposición adicional única de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, indica: El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia

		uso de la lengua de signos como medio reconocido legalmente, de conformidad con lo previsto en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 674/2023, de 18 de julio." **Justificación:** El preámbulo del proyecto fundamenta la norma en la accesibilidad universal y el acceso a la información y la comunicación en condiciones de igualdad, conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este contexto, este tipo de accesibilidad constituye una dimensión esencial de la accesibilidad universal, especialmente para las personas sordas y sordociegas. La lengua de signos española, y la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico, es un medio de comunicación reconocido legalmente en la Ley 27/2007 y desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 674/2023, configurándose como un instrumento necesario para garantizar el acceso a la información en igualdad de condiciones. Su incorporación en el preámbulo refuerza la coherencia normativa sin alterar el objeto del real decreto, y contribuye a una interpretación más inclusiva del concepto de accesibilidad universal en el ámbito del consumo.	para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables. Por lo tanto, este RD no regula el uso de lengua de signos como medio reconocido para acceder a la información por parte de las personas consumidoras.

Preámbulo	**Confederación Plena inclusión España**	**Apartado I, párrafo 8:** **Texto original:** Actualmente, 4.300.000 personas en España tienen algún tipo de discapacidad según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2020, del Instituto Nacional de Estadística y, por lo tanto, se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo. **Propuesta de redacción:** Actualmente, 4.300.000 personas en España tienen algún tipo de discapacidad según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2020, del Instituto Nacional de Estadística. **A ellas deben sumarse aquellas personas que tienen dificultades de comprensión y, por lo tanto, precisan de la accesibilidad cognitiva para acceder en igualdad de condiciones a las demás y desenvolverse en las relaciones de consumo.** **Hablamos de falta de comprensión por cuestiones de origen y falta de acceso al idioma, personas con dificultades de comprensión lectora a causa de analfabetismo, dislexia u otras; deterioro**	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, : "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida,

		cognitivo a causa de la edad, problemas de salud mental y cualquier persona en un momento determinado. ~~y, por lo tanto,~~ Todas ellas se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo. **Justificación:** La modificación propuesta se justifica por la necesidad de superar el enfoque estrictamente médico de la discapacidad para adoptar el modelo social de accesibilidad universal, el cual reconoce que las barreras de comprensión afectan a un espectro de población mucho más amplio que el reflejado en las estadísticas oficiales. Esta propuesta encuentra su base jurídica en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que protege de forma específica la figura del consumidor vulnerable ante situaciones de desventaja o indefensión. Al incorporar a personas con dificultades de comprensión lectora, barreras idiomáticas o deterioro cognitivo, el texto se alinea, además,	especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, sin perjuicio que se contemplen igualmente otras discapacidades, el texto aborda principalmente la situación de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables

		con la Ley 6/2022, de 31 de marzo, que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para establecer de forma explícita que la accesibilidad cognitiva es una dimensión esencial de la accesibilidad universal y de obligado cumplimiento. De este modo, la norma deja de ser una medida asistencial para convertirse en un estándar de seguridad jurídica y autonomía individual que protege a sectores transversales de la población, incluyendo a la población de edad avanzada y a personas con discapacidades invisibles que, sin contar necesariamente con un certificado administrativo de discapacidad, sufren la misma exclusión ante un etiquetado ininteligible o complejo.	
Preámbulo	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	A la exposición de motivos. **De modificación.** **1).** A continuación de donde dice: "De acuerdo con la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en el año 2022, más de 218.000 personas tenían discapacidad visual como primera deficiencia," **Añadir:**	**Se acepta** Se incluye la redacción propuesta en el texto, la cual queda redactada de la siguiente manera: "(...) De acuerdo con la base de Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de

		“**y más de 1.014 personas tenían sordoceguera como primera deficiencia**." **2).** A continuación de donde dice: "Por este motivo, la disposición adicional primera de la citada Ley 4/2022, de 25 de febrero, insta al Gobierno a regular reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." **añadir:** "Así mismo, en concordancia con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y con el espíritu de la mencionada disposición adicional, resulta imprescindible incorporar en el concepto de personas consumidoras vulnerables incluidas en el ámbito de protección del presente Real Decreto, a las personas consumidoras con sordoceguera, para quienes, el braille, es un elemento de comunicación fundamental, y a las personas con baja visión, que necesitan de un etiquetado accesible que les permita acceder a la información de los productos de consumo, bien	Discapacidad del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en el año 2024, más de 404.644 personas (193.471 hombres y 211.173 mujeres) tenían discapacidad visual como primera deficiencia y más de 1.014 personas tenían sordoceguera como primera deficiencia. "

		mediante el braille o bien mediante la letra en tinta ampliada y contrastada utilizando su resto visual. En efecto, dentro del colectivo de personas con discapacidad visual deben incluirse aquellas con baja visión, cuyas necesidades de acceso a la información no siempre se satisfacen exclusivamente mediante el sistema braille, requiriendo también condiciones adecuadas de legibilidad en tinta, tales como el uso de letra ampliada, contraste suficiente, tipografía clara y diseño visual accesible.”". **Justificación.** La accesibilidad universal exige una formulación inclusiva y ajustada a la pluralidad de situaciones funcionales existentes dentro de la discapacidad visual. La mención expresa de las personas sordociegas y con baja visión evita interpretaciones restrictivas y mejora la seguridad jurídica del texto.	
Preámbulo	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	A la exposición de motivos. **De adición.** A continuación del párrafo en el que se indica que la Comisión Braille Española constituye la instancia experta de referencia en España para la fijación de normas de uso y desarrollo del sistema braille, **añadir el siguiente párrafo**: “Asimismo, el presente real decreto debe garantizar que el etiquetado accesible no se	**Se rechaza.** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, de tal forma que la compra de la persona con discapacidad visual

		limite al braille, sino que incorpore también condiciones de legibilidad en tinta adecuadas para las personas con baja visión, mediante letra ampliada, contraste suficiente, tipografía clara y diseño visual comprensible, así como soluciones tecnológicas accesibles, cumulativas y no excluyentes." **Justificación**. Existe un amplio colectivo de personas con baja visión que no accede en condiciones de igualdad a la información contenida en envases y etiquetas si esta no presenta unas condiciones materiales mínimas de legibilidad visual.	pudiera ser más autónoma. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.
Preámbulo	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	A la exposición de motivos. **De modificación.** Se propone modificar la redacción del bloque tercero, que queda del siguiente tenor: "III En cuanto a la estructura de este reglamento, el mismo se compone de siete artículos, así como dos disposiciones adicionales, una transitoria, cuatro disposiciones finales y un anexo. En el artículo 1 se especifica su objeto y ámbito de aplicación, el artículo 2 explicita la naturaleza del etiquetado accesible y el artículo 3 establece con carácter universal el derecho de asistencia personalizada a las personas consumidoras con	**Se rechaza.** No se valora modificar la estructura del Real Decreto.

		discapacidad, y aborda el etiquetado accesible que podrá acompañar a aquellos productos puestos a disposición del público en los establecimientos que cumplan con determinadas características. Los artículos 4 y 5 se orientan al fomento del etiquetado accesible y la colaboración público-privada para este fin, el artículo 6 establece el procedimiento de inspección y control, y el artículo 7 establece el régimen sancionador. Mediante la disposición adicional primera, se incluye la obligación a las Administraciones públicas de llevar y difundir listados actualizados y accesibles de los establecimientos comerciales que cumplen el Real Decreto, garantizando su utilización a los consumidores, y facilitando su inspección y control. En virtud de la disposición adicional segunda se incluye una excepción en la aplicación de la norma para aquellos productos ya etiquetados en braille, así como se incluye una disposición transitoria única por la que se establece un plazo transitorio de 3 meses para garantizar el derecho de asistencia personalizada a las personas con discapacidad en los establecimientos comerciales, y el plazo de un año para la	

		adaptación a la norma en cuanto al etiquetado accesible. Por último, las disposiciones finales incluyen los títulos competenciales, la obligación de evaluación ex post de la norma, así como la posibilidad de desarrollo normativo por parte de la persona titular del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.” En definitiva, el presente real decreto incorpora un enfoque progresivo y de efectividad real en la implantación del etiquetado accesible, diferenciando entre obligaciones de carácter organizativo, de exigibilidad más inmediata, y aquellas de carácter técnico que requieren un período de adaptación razonable. Asimismo, se prevé la necesidad de acompañar la aplicación de la norma con medidas de apoyo, seguimiento, publicidad, evaluación e inspección, que permitan garantizar su adecuada implementación y, en su caso, su futura ampliación, en coherencia con el principio de accesibilidad universal y con los objetivos de inclusión social.”	
Preámbulo	**Junta de Castilla y León Dirección**	En la exposición de motivos del mencionado proyecto de Real Decreto se recoge, entre otros,	**Se rechaza.** La referencia al Texto Refundido de la Ley

	General de Comercio y Consumo	el siguiente extremo: "Por tanto, asegurar los derechos de las personas con discapacidad ante el consumo es un factor determinante para la inclusión social de estas personas, conforme a los mandatos de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Así, el citado texto refundido indica en su artículo 6, relativo al respeto a la autonomía de las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad tienen derecho a la libre toma de decisiones, para lo cual la información y el consentimiento deberán efectuarse en formatos adecuados y de acuerdo con las circunstancias personales, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño universal o diseño para todas las personas, de manera que les resulten accesibles y comprensibles. Y, precisamente, para garantizar esa accesibilidad universal, se prevé en su Título III la regulación del régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y	General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre en el artículo 6. Régimen sancionador, en ningún caso incorpora nuevas obligaciones a las autoridades de consumo, que únicamente serán competentes de las incorrecciones en el etiquetado general, como ya lo vienen siendo.

		accesibilidad universal de las personas con discapacidad" (énfasis añadido).el marco competencial en el que se fundamenta y desarrolla la propuesta normativa, cuyo objeto es establecer un marco reglamentario específico para garantizar la accesibilidad universal en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. (énfasis añadido). Teniendo en cuenta dicho marco competencial y considerando que la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios tiene un carácter general, a juicio de esta Dirección General, no resulta procedente atribuir competencias inspectoras y sancionadoras a las autoridades de consumo en el ámbito material regulado por el proyecto. En consecuencia, la competencia correspondería a la Dirección General que tenga atribuidas las funciones en materia de discapacidad, por ser el órgano especializado y sectorialmente competente para la supervisión, control y, en su caso, el ejercicio de la potestad sancionadora en este ámbito específico. A este respecto, conviene señalar que la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad	

		de trato y la no discriminación, en su artículo 17, reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la oferta al público de bienes y servicios estableciendo la prohibición de cualquier trato discriminatorio —directo o indirecto— en el acceso, disfrute y utilización de dichos bienes y servicios. El citado precepto dispone: “1. Las administraciones públicas, las entidades, empresas o particulares que ofrezcan al público bienes y servicios, en el marco de una actividad comercial o profesional, tales como servicios financieros, de transporte, formación, ocio o similares, no podrán discriminar en el acceso a los mismos por las causas mencionadas en el artículo 2 de la presente ley. Lo previsto en el párrafo anterior no impedirá la existencia de organizaciones, actividades o servicios destinados exclusivamente a la promoción de grupos identificados por algunas de las causas mencionadas en el artículo 2. 2. No podrá denegarse el acceso a la contratación de seguros o servicios financieros afines ni establecerse diferencias de trato en las condiciones de los mismos por razón de alguna de las causas mencionadas en el artículo 2 salvo	

		las que resulten proporcionadas a la finalidad del seguro o servicio y a las condiciones objetivas de las personas solicitantes en los términos previstos en la normativa en materia de seguros. 3. Los sitios web y las aplicaciones informáticas tenderán a cumplir los requisitos de accesibilidad para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores". Por su parte, el artículo 46 de la misma Ley 15/2022, de 12 de julio, relativo a su objeto y ámbito de aplicación establece: "1. El presente Título tiene por objeto establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de trato y no discriminación. Este régimen de condiciones básicas podrá ser objeto de desarrollo y tipificación específica, en el ámbito de sus competencias, por la legislación autonómica, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en materia de potestad sancionadora en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.	

		2. En aquellas comunidades autónomas en las que existan regímenes especiales de infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación, en cualquiera de los ámbitos de aplicación de esta ley, los mismos resultarán de aplicación preferente al previsto en esta ley. En todo caso, en relación con las personas con discapacidad será de aplicación lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. En el orden social, el régimen aplicable será el regulado por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto". En concordancia con lo anterior, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, refuerza su atribución competencial. En concreto, su artículo 105, relativo a las Autoridades competentes, determina: "1. El órgano competente para iniciar el	

		procedimiento será el órgano directivo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con rango de Dirección General, que tenga atribuidas las competencias en materia de discapacidad".	
Preámbulo			
ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN			
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Cátedra de Gastronomía Mediterránea UCO**	Punto 2 del artículo 1. **Propuesta de modificación:** Incluir leche y lácteos Propuesta de texto: …con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2, **en el caso de establecimientos con oferta de productos alimenticios y de limpieza pertenecientes a cadenas de distribución deberán estar en todos los establecimientos, independientemente de la superficie, máxime en zonas de una cercanía de un radio de 500 m con respecto a las sedes de la ONCE** **Los establecimientos comerciales** serán los responsables de garantizar el cumplimiento de las obligaciones introducidas por esta norma.	**Se rechaza:** Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2. El umbral propuesto se considera proporcionado.

		<u>Justificación:</u> En la actualidad está existiendo un desarrollo de establecimientos de proximidad pertenecientes a grandes cadenas de distribución con una superficie menor de 400 m2. En la proximidad de las sedes de la ONCE hay una gran afluencia de personas con discapacidad visual que acuden a realizar la compra de productos, sobre todo alimenticios.	
<u>Artículo 1</u>. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Real Academia Europea de Doctores**	Punto 2 del artículo 1. **Propuesta de modificación:** Incluir leche y lácteos Propuesta de texto: …con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2, **en el caso de establecimientos con oferta de productos alimenticios y de limpieza pertenecientes a cadenas de distribución deberán estar en todos los establecimientos, independientemente de la superficie, máxime en zonas de una cercanía de un radio de 500 m con respecto a las sedes de la ONCE** **Los establecimientos comerciales** serán los	**Se rechaza:** Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2. El umbral propuesto se considera proporcionado.

		responsables de garantizar el cumplimiento de las obligaciones introducidas por esta norma. **<u>Justificación:</u>** En la actualidad está existiendo un desarrollo de establecimientos de proximidad pertenecientes a grandes cadenas de distribución con una superficie menor de 400 m2. En la proximidad de las sedes de la ONCE hay una gran afluencia de personas con discapacidad visual que acuden a realizar la compra de productos, sobre todo alimenticios.	
<u>Artículo 1</u>. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios HISPACOOP**	ÁMBITO DE APLICACIÓN. El proyecto de Real Decreto delimita su ámbito a los bienes y productos de consumo siguientes: (…) Esta delimitación plantea varias objeciones: - Restricción subjetiva injustificada: dado que se imponen obligaciones exclusivamente a determinados establecimientos, dejando fuera a otros operadores económicos (fabricantes, distribuidores, comercio electrónico o plataformas digitales), lo que puede vulnerar el principio de igualdad en la aplicación de las cargas regulatorias. - Falta de coherencia con la realidad del mercado: el creciente peso del comercio electrónico hace que limitar las obligaciones a establecimientos	Se responde por puntos: **1. Se rechaza:** Se imponen las obligaciones a los establecimientos con una superficie de venta y exposición superior a 1.000 m2 debido que son los que tienen la consideración de supermercados de acuerdo a la clasificación realizada por la CNMC. **2. Se rechaza.**

		físicos de cierto tamaño resulte desalineado con los hábitos actuales de consumo. - Posible distorsión de la competencia: la imposición de obligaciones solo a ciertos operadores puede generar ventajas competitivas indebidas para aquellos no sujetos a la norma. Por tanto, desde una perspectiva jurídica, estas limitaciones no parecen superar un juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Y además conllevaría una disminución de derechos de la persona con deficiencia visual dependiendo del canal utilizado para hacer su compra.	La propuesta podría implicar obstáculos al comercio interior de la Unión Europea **3.Se rechaza:** Las obligaciones se imponen a establecimientos considerados supermercados, excluyendo a los autoservicios y servicios de proximidad, para los que podría suponer una carga desproporcionada.
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE**	Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Punto 2. **Donde dice:** Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. […] 2. Las previsiones contenidas en el presente real decreto se aplicarán a los establecimientos comerciales en territorio español con una superficie en tienda mayor a 400 m2 cada uno. Estos serán los responsables del cumplimiento de	**Se rechaza:** La medida propuesta puede dejar sin efecto la norma en gran cantidad de superficies de venta. Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2

		las obligaciones introducidas por este real decreto. **Debe decir:** Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación . […] 2. Las previsiones contenidas en el presente real decreto se aplicarán a los establecimientos comerciales en territorio español con una superficie en tienda mayor a 400 m2 cada uno **destinados al menos en un setenta y cinco por ciento (75%) de su superficie a la comercialización de productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida**. Estos serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones introducidas por este real decreto. **<u>Justificación:</u>** Se propone la inclusión de una doble condición de aplicación de la norma con el fin de no discriminar, innecesaria e injustificadamente, a establecimientos comerciales cuya superficie destinada a los productos que el reglamentador considera de especial relevancia es secundaria o incluso residual. De esta forma, el establecimiento se ve obligado a asumir una serie de costes importantes que no compensa el	

		ingreso por la venta de dichos productos, por cuanto la decisión a la que se ve abocado es reducir su surtido, y con ello su oferta comercial, viéndose perjudicado el consumidor; y quedando afectada la libertad de comercio consignada en el artículo 38 de la Constitución.	
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados ASEDAS**	**Modificación del Art. 1.2. Enmienda de modificación.** **Donde dice:** 2. Las previsiones contenidas en el presente real decreto se aplicarán a los establecimientos comerciales en territorio español con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2, que serán los responsables de garantizar el cumplimiento de las obligaciones introducidas por esta norma. **Debería decir:** 2. Las previsiones contenidas en el presente real decreto se aplicarán **a los productos a los que se refiere el anexo de esta norma. Serán responsables del cumplimiento de las obligaciones introducidas por este real decreto los operadores con cuyo nombre o razón social se comercialice el producto o, en caso de que no esté establecido en la Unión Europea, el importador del alimento al mercado de la Unión Europea.**	**Se rechaza:** Modificar los requisitos de envasado y etiquetado para determinados productos presenta obstáculos técnicos al comercio, según el REGLAMENTO (CE) No 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, el REGLAMENTO (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el

		<u>Justificación:</u> Se debería redactar de la manera propuesta, de forma que el responsable sea el fabricante o envasador, sin perjuicio de que los operadores distribuidores deban prestar determinados servicios de atención, conforme se detalla en el artículo 3. Y ello porque debe considerarse que precisamente son ellos quienes ya vienen obligados a consignar la información obligatoria del etiquetado y es inasumible para los distribuidores no solo tener dicha responsabilidad, si no la forma en la que se ha trasladado, es decir, únicamente en formato braille que debe disponerse en el punto de venta.	que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 608/2004 de la Comisión y el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado

			de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Confederación Plena inclusión España**	**Artículo 1 apartado 1 -y posteriores-** Texto original: El presente real decreto tiene por objeto la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad visual, como personas consumidoras vulnerables. **Propuesta de redacción:** El presente real decreto tiene por objeto la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad **y otras personas con necesidades de accesibilidad**, en especial de las personas con	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que

		discapacidad visual y **necesidades de accesibilidad cognitiva**, como personas consumidoras vulnerables. NOTA: Esta sustitución se propone para todos aquellos apartados del Real Decreto que apelen a las personas que precisan de estas medidas. **<u>Justificación:</u>** La modificación del objeto del real decreto para incluir explícitamente a otras personas con necesidades de accesibilidad se justifica por la voluntad de dotar a la norma de una eficacia real y transversal, acorde con el concepto de diseño para todas las personas. Esta ampliación permite que el marco normativo no se limite exclusivamente a quienes poseen un grado de discapacidad administrativamente reconocido, sino que ampare también a colectivos que enfrentan barreras idénticas en su vida cotidiana, como las personas mayores con pérdida de facultades sensoriales, personas con dificultades de comprensión lectora o aquellos ciudadanos con limitaciones cognitivas de carácter transitorio. Jurídicamente, esta redacción se fundamenta en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de	garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, sin perjuicio que se contemplen igualmente otras discapacidades, el texto aborda principalmente la situación de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables

		noviembre, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que define la vulnerabilidad de forma amplia y situacional, y se refuerza con la Ley 6/2022, de 31 de marzo, que reconoce la accesibilidad cognitiva como una dimensión fundamental de la accesibilidad universal. Al incorporar este matiz, la norma garantiza que la seguridad y la autonomía en el consumo sean derechos efectivos para cualquier ciudadano que presente una necesidad de apoyo en la interacción con el etiquetado, evitando así que el criterio burocrático de la discapacidad se convierta en una barrera excluyente para el ejercicio de los derechos fundamentales de los consumidores.	
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	Al artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. **De modificación y adición.** Se propone dar a los apartados 1 y 2 del artículo 1 la siguiente redacción y adicionar un apartado 3 del siguiente tenor: “1. El presente real decreto tiene por objeto ~~la regulación de un~~ regular un sistema de etiquetado accesible que garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad,	**Se rechaza.** Se considera que la redacción inicial es la adecuada ya que, por un lado, con la denominación de "discapacidad visual" ya se engloba a todas aquellas personas con problema visual. Y, por otro lado, la propuesta de adición que se traslada duplicaría la

		autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial de las personas ~~con discapacidad visual~~ ciegas, sordociegas y con baja visión, como personas consumidoras vulnerables. El sistema de etiquetado accesible deberá permitir el acceso autónomo, claro, gratuito inequívoco, comprensible e inmediato, al menos, a la identificación del producto, a los elementos relevantes para la salud o la seguridad como la peligrosidad del producto o su composición cuando pueda contener alergógenos o provocar intolerancia, y la fecha de caducidad o de consumo preferente si consta. Además, podrá incluir información sobre su composición, sus características esenciales, así como las instrucciones de uso necesarias para su utilización segura. Los bienes y productos de consumo a los que se refiere este apartado son los incluidos en el Anexo de esta norma. El Gobierno, en desarrollo de este Real Decreto, podrá modificar el anexo para ampliar el listado de productos". Así mismo, es objeto del presente real Decreto, garantizar a las personas consumidoras vulnerables incluidas en su ámbito de aplicación,	información que viene recogida más adelante, pues en el artículo 3.2.b), se recogen cuál es la información obligatoria que debe aportarse a los consumidores y se da la opción de que los establecimientos añadan toda información adicional que consideren oportuna.

		el derecho de asistencia y acompañamiento en el proceso de compra en los establecimientos comerciales que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma". "2. la obligación de garantizar el derecho de asistencia y acompañamiento en el proceso de compra establecida en el número 1 del artículo 3 del presente Real Decreto, será aplicable a todos los establecimientos comerciales en territorio español que comercialicen los productos de consumo incluidos en el anexo I. de esta norma, en los plazos y términos previstos en el presente Real Decreto. 3.Las previsiones ~~contenidas en el~~ sobre el etiquetado accesible establecidas en el apartado 2 del artículo 3 del presente Real Decreto, se aplicarán inicialmente a los establecimientos comerciales en territorio español que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2, que serán los responsables de garantizar el cumplimiento de las obligaciones introducidas por esta norma, sin perjuicio de que pueda extenderse progresivamente su aplicación al resto de establecimientos comerciales.	

		<u>Justificación:</u> Se propone la modificación del apartado 1, porque Conviene precisar mejor la finalidad material de la norma y el contenido mínimo del derecho de acceso a la información, incorporando los extremos esenciales para un consumo seguro y autónomo, así como incluyendo en el concepto de personas consumidoras vulnerables, a todos los colectivos a quienes va dirigida. Así mismo, conviene incorporar en el objeto del Decreto, la garantía del derecho de asistencia y acompañamiento en el proceso de compra a las personas consumidoras vulnerables. En cuanto a los apartados 2, y 3, tienen por objeto delimitar el ámbito de aplicación de las diversas obligaciones que establece el Real Decreto. Entendemos que el derecho de asistencia a las personas vulnerables debe aplicarse universalmente, y que el etiquetado accesible necesita una implantación progresiva.	
<u>Artículo 1</u>. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Junta de Castilla y León Dirección General de Comercio y**	En cuanto al resto del articulado, cabe señalar que: En el artículo 1 del proyecto de Real Decreto se establece que el objeto de la norma es la	**Se rechaza.** No se considera necesaria la inclusión de un apartado de definiciones que

	Consumo	regulación de un “etiquetado”. No obstante, dicho concepto no se define en el texto, lo que puede inducir a confusión y llevar a interpretar que la regulación se refiere exclusivamente a la forma de presentación de determinada información en la “etiqueta” del producto. Conviene recordar que el concepto de etiquetado tiene un alcance jurídico amplio. Así, el artículo 2.2.j) del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor define «etiquetado» como “las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un alimento y que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho alimento”. Por su parte, el artículo 5.4 del Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, define «etiquetado» como “toda información escrita, impresa o gráfica relativa a un producto industrial, que	exprese qué se entiende por "etiqueta" y "etiquetado. El concepto de "Etiquetado" cuenta ya con una definición expresa y delimitada a normativa tanto nacional como europea, lo cual resulta redundante el añadirla de nuevo en este Proyecto de Real Decreto. De este modo, la incorporación de definiciones que reproduzcan o reformulen las ya previstas en la normativa citada supondría una duplicación innecesaria de conceptos jurídicos ya consolidados, sin que ello aporte un valor añadido en términos de

		preceptivamente debe acompañar a este cuando se presenta para la venta al consumidor". Ambas definiciones evidencian que el término "etiquetado" es más amplio que el de "etiqueta", al incluir toda la información que acompaña o se refiere al producto, con independencia del soporte físico concreto en el que se presente. Por ello, se considera necesaria la inclusión en el proyecto de un artículo de definiciones, en el que se recojan, entre otros, los conceptos de "etiquetado" y "etiqueta", a fin de evitar interpretaciones divergentes y garantizar seguridad jurídica.	claridad o seguridad jurídica, y pudiendo, por el contrario, generar eventuales divergencias interpretativas
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**			

Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**			
ARTÍCULO 2. ETIQUETADO ACCESIBLE			
Artículo 2. Etiquetado accesible	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 2. Etiquetado accesible. Propuesta de modificación: En el apartado 2, se propone añadir al final del párrafo “, complementado, según proceda, con la información necesaria mediante un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve. El contenido del mencionado código deberá ser accesible según lo establecido en la Ley 11/2023, de 8 de mayo.”, quedando el párrafo de la siguiente manera: 2. El etiquetado accesible hará uso del sistema braille, **complementado, según proceda, con la información necesaria mediante un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve. El contenido del mencionado código deberá ser accesible según lo establecido en la Ley 11/2023, de 8 de mayo**.	**Se rechaza:** Esta previsión se ha añadido como voluntaria en el artículo 4.2: “2. Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a

		<u>Justificación:</u> Como todo el braille no va a ser posible incorporarlo en el envase, con el fin de garantizar que las personas ciegas puedan acceder de forma clara y autónoma a la información esencial del producto, es necesaria la incorporación de un código QR o similar accesible, situado en un área visible y fácilmente escaneable. Se considera imprescindible que los códigos QR u otros soportes digitales incorporen una marca táctil identificable, que permita a la persona ciega detectar, en primer lugar, para saber que dicho código existe y, en segundo lugar, para localizarlo. Es importante que se recoja expresamente la referencia a la Ley 11/2023 para que el contenido al que remita el código QR cumpla criterios de accesibilidad, garantizando que la información pueda ser utilizada de manera efectiva.	través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario." La razón para no incorporar estos códigos al etiquetado es la dificultad técnica de imprimir etiquetas con un código que contenga toda la información sobre un producto en concreto en el punto de venta.
<u>Artículo 2</u>. **Etiquetado accesible**	**Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios HISPACOOP**	**ETIQUETADO ACCESIBLE Y OBLIGATORIEDAD DEL BRAILLE** El artículo 2 del proyecto determina que se entenderá por etiquetado accesible, y añade que el etiquetado accesible hará uso del sistema Braille. Asimismo, recoge que las diferentes	El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y

		fórmulas de accesibilidad de los etiquetados podrán aplicarse de manera simultánea en un mismo producto. Y que, sin perjuicio de las excepciones previstas legal o reglamentariamente, las indicaciones obligatorias del etiquetado accesible deberán figurar, al menos, en castellano. El Proyecto establece la utilización del sistema braille como elemento central del etiquetado accesible. Sin embargo, la imposición obligatoria del braille no se justifica adecuadamente en términos de necesidad, especialmente cuando existen alternativas tecnológicas más amplias e inclusivas. El propio texto reconoce la existencia de múltiples fórmulas de accesibilidad aplicables simultáneamente, lo que evidencia que el braille no es el único medio idóneo para garantizar la accesibilidad en la información proporcionada en estos productos de consumo. El sistema braille no cubre a la totalidad de personas con discapacidad visual ni a otros colectivos de personas vulnerables, lo que limita su eficacia real y a nivel práctica. Recordemos que el propio texto indica “que las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados podrán aplicarse de manera	usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables."

		simultánea en un mismo producto.” Por lo que da por hecho la existencia de otras tecnologías y sistemas que permitan la accesibilidad al etiquetado de estos productos para obtener información que es igualmente relevante a la hora de comprar y consumir un producto (composición, instrucciones de uso, duración una vez abierto, en los productos alimenticios, los ingredientes, fechas de consumo, alérgenos, etc.) Por tanto, la aplicación simultánea de otras fórmulas de accesibilidad diferentes al sistema braille de los etiquetados implica que en todo caso estos sistemas ofrecerán a información relevante sobre el producto a las personas con discapacidad. Además, las dificultades técnicas en estos productos de pequeño tamaño hay que tenerlo en consideración al hilo de la normativa de aplicación en materia de envases.	Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria.
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios HISPACOOP**	**INCOMPATIBILIDAD O FALTA DE ALINEACIÓN CON LA NORMATIVA DE RANGO SUPERIOR Y DEL DERECHO DE LA EUROPEA** El Proyecto debe interpretarse en el marco de normativa europea directamente aplicable, como es el Reglamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y

		2024, sobre los envases y residuos de envases, y el Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, entre otros. El Reglamento (UE) 2025/40 prevé expresamente el uso de códigos QR u otros soportes digitales normalizados y abiertos, y el acceso a información ampliada del producto; y soluciones que garanticen un acceso no discriminatorio, especialmente para personas con discapacidad visual Por tanto, el propio Derecho de la Unión Europea reconoce y promueve soluciones digitales como mecanismo válido de accesibilidad, lo que cuestiona la necesidad de imponer el braille como obligación general. Así, ante la exigencia obligatoria del uso del sistema Braille, y ante el análisis sobre la normativa de aplicación existente en materia de envases, solo estaría justificada la utilización obligatoria del sistema Braille si no existieran en el mercado otras alternativas que garantizan la accesibilidad a la información relevante sobre el producto envasado.	usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables."

		Actualmente, los avances tecnológicos como son los etiquetados digitales mediante el QR u otro tipo de soporte de datos digital normalizado y abierto, permiten obtener toda esta información actual y, además, toda la información que establece y fija las normativas en materia de envases y su etiquetado. Por lo tanto, establecer la obligatoriedad del uso del braille supone una medida desproporcionada y, solo podría entenderse o estaría suficientemente justificada si no existieran otros instrumentos que garanticen la accesibilidad del etiquetado. Actualmente existen soluciones tecnológicas consolidadas que permiten un acceso inmediato a información completa y actualizada, la adaptación a diferentes tipos de discapacidad, la compatibilidad con lectores de pantalla y dispositivos móviles que favorecen el conocimiento de toda la información relevante y pertinente en el momento de la compra y el consumo del producto. Destacamos los códigos QR, las etiquetas digitales, los sistemas de voz accesibles, etc. Estas herramientas permiten ofrecer información sobre ingredientes, alérgenos, fechas de	Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria.

		consumo, producto, marca, instrucciones de uso, pictogramas de seguridad, etc. En consecuencia, desde un punto de vista técnico y jurídico, la imposición del braille no supera la justificación para una necesidad puesto que existen medios menos restrictivos y más inclusivos.	
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE**	Artículo 2. Etiquetado accesible. Puntos 2 y 3. **Donde dice:** Artículo 2. Etiquetado accesible. […] 2. El etiquetado accesible hará uso del sistema braille. 3. Las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados podrán aplicarse de manera simultánea en un mismo producto. **Debe decir:** Artículo 2. Etiquetado accesible. […] 2. El etiquetado accesible hará uso del sistema braille **o de cualquier fórmula, sistema o método de etiquetado accesible que garantice la accesibilidad universal de los productos de consumo de especial relevancia para la protección de la**	**Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal

		seguridad, integridad y calidad de vida, ~~especialmente mediante códigos de respuesta rápida (QR)~~. 3. Las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados podrán aplicarse de manera ~~simultánea~~ **alternativa** en un mismo producto **<u>Justificación:</u>** Se propone la modificación de los apartados 2 y 3 del artículo 2 del borrador de RD, por cuanto entendemos que el uso de fórmulas, sistemas o métodos de etiquetado que cubran los objetivos que plantea la norma, y especialmente como el código de respuesta rápida (QR), son perfectamente válidos para personas, no sólo con algún tipo de discapacidad visual, sino con otras diferentes, cubriendo un espectro más amplio y no viéndose discriminadas o perjudicadas, por la especialidad incluida a favor de las personas con la discapacidad visual (cuya especificidad no justifica la obligatoriedad del lenguaje braille dado el limitado uso que actualmente tiene (gozando las nuevas tecnologías de una mayor utilidad, más funcionalidad, mayor accesibilidad…). Obligar a etiquetar estos productos en braille supondría un gran coste que asumirán las	de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria.

		empresas ~~que producen productos sujetos a la norma que~~ y no estaría justificado en términos de utilidad, acceso y cobertura de necesidades para el principal destinatario de la norma. Por el contrario, los códigos QR u otros sistemas similares son medidas o mecanismos de ajuste razonable, más adecuados para en términos del necesario equilibrio entre fin-beneficio real-coste efectivo.	
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados ASEDAS**	Adición al artículo 2 (nuevo punto 5) **Debería decir:** 5. Todas las obligaciones correspondientes al etiquetado braille se entenderán cumplidas cuando el producto lleve impreso un código de respuesta rápida (QR) accesible para personas invidentes. **Justificación:** Lo que se pretende con la adición de este apartado es garantizar la accesibilidad para todas las personas con discapacidad visual, independientemente de si leen o no alfabeto braille. Es decir, de esta forma se amplía las personas a las que va dirigida esta normativa y que precisamente requieren de especial protección, por ello, es necesario buscar formatos alternativos que garanticen que la totalidad del colectivo es capaz de acceder a la información	**Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la

		alimentaria obligatoria.	accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo que la inclusión del braille es obligatoria.
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Confederación Plena inclusión España**	**Artículo 2 apartado 1: Etiquetado Accesible** **Texto original:** Se entiende por etiquetado accesible las menciones, indicaciones, marcas, dibujos o signos relacionados con un bien o producto que figuren en cualquier etiqueta que acompañe o se refiera a dicho bien o producto y que permita que las personas con discapacidad, con especial atención a las que tienen discapacidad visual, obtengan, de forma inequívoca, clara y comprensible, la	**Se rechaza:** Se intenta definir "etiquetado accesible" de la forma más precisa posible.

		identificación, información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de estos bienes o productos. **Propuesta:** Se entiende por etiquetado accesible ~~las menciones, indicaciones, marcas, dibujos o signos relacionados con un bien o producto que figuren en~~ cualquier etiqueta que acompañe o se refiera a dicho bien o producto y que **incorpore medidas de accesibilidad universal para facilitar** ~~permita que las personas con discapacidad, con especial atención a las que tienen discapacidad visual, obtengan~~, de forma inequívoca, clara y comprensible, la identificación, información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de estos bienes o productos. **<u>Justificación:</u>** La modificación de la definición de etiquetado accesible se justifica por la necesidad de dotar a la norma de una mayor precisión técnica y jurídica, sustituyendo una descripción para enfocarla en el cumplimiento de estándares de accesibilidad universal. En este sentido, se elimina la enumeración restrictiva de menciones o dibujos - que además	

		no se vinculan con herramientas específicas de accesibilidad- y se centra la definición en la incorporación de medidas de accesibilidad universal, asegurando que el concepto sea neutro y capaz de adaptarse a futuras innovaciones sin necesidad de reformar el reglamento. Estas modificaciones ligeras, consideramos, evitan un enfoque segregador que señala a colectivos específicos, optando en su lugar por un estándar de calidad del producto que beneficia de forma transversal a todos los consumidores, garantizando que las características esenciales de los bienes sean comunicadas de manera objetiva y autónoma bajo el marco del Real Decreto Legislativo 1/2013 de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.	
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Confederación Plena inclusión España**	**Artículo 2 apartado 2: Etiquetado Accesible** **Texto original:** El etiquetado accesible hará uso del sistema braille. **Propuesta:** El etiquetado accesible hará uso del sistema braille **y lectura fácil.** **Justificación:**	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica:

		La propuesta de incorporar la lectura fácil junto al sistema Braille se justifica por la necesidad de garantizar una accesibilidad universal efectiva que atienda a la diversidad de la población, superando un enfoque centrado exclusivamente en la discapacidad sensorial visual. Mientras que el Braille garantiza el acceso a la información para aquellas personas ciegas que emplean esta herramienta, la lectura fácil resulta imprescindible para asegurar la comprensión de millones de personas con discapacidad intelectual, dificultades de aprendizaje, deterioro cognitivo asociado a la edad o barreras lingüísticas, sectores que conforman una parte significativa de los consumidores vulnerables. Esta modificación es imperativa para cumplir con la Ley 6/2022, de 31 de marzo, la cual establece que la accesibilidad cognitiva es una dimensión inseparable de la accesibilidad universal y que la comunicación debe ser comprensible y de fácil acceso para todas las personas. Al unificar ambos sistemas, el Real Decreto deja de ofrecer una solución parcial para proporcionar una respuesta integral y coherente con el principio de diseño para todas las personas, asegurando que la información esencial del	"El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, es necesario incidir en que el etiquetado accesible hará uso del sistema braille, sin especificar

		producto llegue de manera autónoma y veraz a todos los ciudadanos bajo los estándares de calidad exigidos por el Real Decreto Legislativo 1/2013 de derechos de las personas con discapacidad.	otras opciones.
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Confederación Plena inclusión España**	**Artículo 2 apartado 3: Etiquetado Accesible** **Texto original:** Las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados podrán aplicarse de manera simultánea en un mismo producto. **Propuesta:** Las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados ~~podrán~~ **deberán** aplicarse de manera simultánea en un mismo producto. **Justificación:** La sustitución del término "podrán" por el imperativo "deberán" se justifica por la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo del principio de accesibilidad universal y evitar que la protección de los consumidores vulnerables quede sujeta a la voluntad o arbitrio del sujeto obligado. Al establecer la simultaneidad de las fórmulas de accesibilidad como una obligación, se asegura que el etiquetado sea verdaderamente inclusivo y	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y

		no segregador, permitiendo que un mismo producto sea accesible para personas con diferentes tipos de discapacidad, como la visual y la cognitiva, de forma concurrente. Esta obligatoriedad es coherente con el espíritu del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que define la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos y productos para ser comprensibles y utilizables por todas las personas de la manera más natural y autónoma posible. Jurídicamente, el uso de fórmulas imperativas es indispensable para dotar a la norma de seguridad y fuerza coercitiva, impidiendo que la coexistencia de medidas de accesibilidad sea percibida como una opción secundaria o facultativa, y reafirmando que la accesibilidad integral es un derecho fundamental y un estándar de calidad obligatorio en el mercado actual para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación.	productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el único etiquetado accesible obligatorio es el braille.
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Confederación Plena inclusión España**	**Artículo 2 apartado 4: Etiquetado Accesible** **Texto original:** Sin perjuicio de las excepciones previstas legal o	**Se rechaza:** Deberá figurar en castellano, sin perjuicio de que se pueda etiquetar también en

		reglamentariamente, las indicaciones obligatorias del etiquetado accesible deberán figurar, al menos, en castellano **Propuesta:** Sin perjuicio de las excepciones previstas legal o reglamentariamente, las indicaciones obligatorias del etiquetado accesible deberán figurar, ~~al menos,~~ en castellano **y en la lengua cooficial de cada territorio.** **<u>Justificación:</u>** La modificación propuesta se justifica por la necesidad de garantizar que el derecho a la información accesible sea efectivo en todo el territorio nacional, respetando el marco constitucional y los estatutos de autonomía que reconocen la cooficialidad de las lenguas. Al eliminar la expresión "al menos" e imponer la obligatoriedad de incluir la lengua cooficial de cada territorio, se asegura que el etiquetado accesible no sea solo una traducción técnica, sino una herramienta de inclusión real que respete la lengua habitual y de comprensión del consumidor vulnerable en su entorno cotidiano. Esta medida es coherente con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de	las lenguas cooficiales.

		Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece el derecho de los consumidores a recibir información veraz en términos comprensibles, lo cual, en las comunidades con lengua propia, implica necesariamente el uso de dicha lengua para evitar cualquier barrera cognitiva o de exclusión. Además, fortalece la seguridad del consumidor vulnerable al garantizar que el acceso a productos de especial relevancia para su integridad y calidad de vida se produzca sin discriminación lingüística, cumpliendo así con el mandato de accesibilidad universal que exige la adaptación de los canales de información a la realidad social y cultural de cada ciudadano en su propio territorio.	
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	Al artículo 2. Etiquetado accesible. **De modificación.** Se propone dar la siguiente redacción a los apartados 1 2 3 y 4 del artículo 2: "1. Se entiende por etiquetado accesible el conjunto de menciones, indicaciones, marcas, ~~dibujos o~~ signos, elementos visuales, táctiles o tecnológicos relacionados con un bien o producto que figuren en ~~cualquier~~ su etiquetado, envase o soporte asociado ~~que acompañe o se refiera a~~	**1. Se rechaza:** Se entiende que la definición establecida de etiquetado accesible es adecuada. **2. Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y

		~~dicho bien o producto~~ y que permitan ~~que~~ a las personas ~~con discapacidad, con especial atención a las que tienen discapacidad visual, obtengan~~ ciegas, sordociegas y con baja visión, obtener de forma inequívoca, clara, ~~y~~ comprensible, autónoma, gratuita, e inmediata la identificación, información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de dichos bienes o productos en igualdad con el resto de personas consumidoras. 2. El etiquetado accesible hará uso en todo caso del sistema braille, y de la tinta en condiciones de legibilidad suficiente mediante letra ampliada y contrastada. 3.Además del braille y la tinta en condiciones de legibilidad suficiente, podrán incorporarse en su caso al etiquetado accesible, códigos de respuesta rápida (QR) u otros sistemas análogos accesibles, debidamente localizables mediante señal táctil o relieve que, conforme al estado de la técnica, garanticen el acceso a la información. Las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados podrán aplicarse de manera simultánea y no excluyente en un mismo producto. 4. Sin perjuicio de las excepciones previstas legal	usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto,

		o reglamentariamente, las indicaciones obligatorias del etiquetado accesible deberán figurar ~~al menos,~~ en castellano y en las demás lenguas cooficiales de España en los territorios donde existan. **Justificación.** La accesibilidad universal no queda satisfecha mediante una única solución técnica. Es preciso reconocer expresamente la complementariedad entre braille y legibilidad visual reforzada y medios tecnológicos accesibles. Además, conviene garantizar el uso de todas las lenguas españolas.	únicamente el etiquetado en braille es obligatorio de acuerdo a la ley. **3. Se acepta:** El artículo 4.2 ya incluye estas opciones. **4. Se rechaza:** El etiquetado debe ir al menos en castellano, debido al reducido espacio, sin perjuicio de que se pueda incluir en otras lenguas.
Artículo 2. **Etiquetado accesible**			

Artículo 2. **Etiquetado accesible**			
ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DE ACCESIBILIDAD			
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos CNLSE**	**Observación:** Modificación del artículo 3.2.a) para incluir medios de comunicación accesibles Se propone modificar el artículo 3.2.a), añadiendo una referencia a la accesibilidad a la comunicación . Propuesta de redacción (añadido final del apartado a): "2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior deberán ofrecer los siguientes servicios: a) Atención personalizada a personas con discapacidad visual acreditada en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas	**Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que

		que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra, **garantizando, cuando sea necesario, el acceso a medios de comunicación accesibles, incluida la lengua de signos.** **Justificación:** El artículo 3.2.a) contempla la atención personalizada a personas con discapacidad visual, pero no incorpora de forma expresa otras dimensiones de la accesibilidad, en particular la accesibilidad a la información y la comunicación. Sin embargo, el principio de accesibilidad universal exige atender a la diversidad de necesidades de las personas con discapacidad, incluidas las personas sordas y sordociegas. En este sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 9 la obligación de los Estados de garantizar la accesibilidad, incluyendo expresamente la información y las comunicaciones, así como otros servicios abiertos al público, incorporando entre las medidas pertinentes el uso de la lengua de signos. Asimismo, el artículo 21 de la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la información y a la comunicación en igualdad de condiciones,	garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la norma debe ir prioritariamente destinada a personas con discapacidad visual.

		incluyendo el uso de la lengua de signos. Por su parte, el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, establece la accesibilidad universal como un principio rector y reconoce el derecho a la accesibilidad en la comunicación y la información como condición para la igualdad de oportunidades. La redacción propuesta introduce una obligación flexible y proporcionada, compatible con el diseño del proyecto del real decreto y con el principio de proporcionalidad recogido en el mismo, al permitir su implementación mediante soluciones adaptadas y no necesariamente estructurales.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. Propuesta de modificación: Se propone la **fusión de los apartados 1 y principio del 2**, y en consecuencia, modificación de la numeración de los apartados de este artículo, quedando el nuevo apartado 1 redactado de la siguiente manera: **1. Los establecimientos comerciales con una**	**Se rechaza:** El apartado 1 se refiere a los obligados, mientras el apartado 2 se refiere a las obligaciones.

		superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2, que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán garantizar los siguientes servicios: **Justificación:** El punto 1 y el inicio del punto 2 son redundantes. Al eliminar un apartado, se simplifica la redacción del RD.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. Propuesta de modificación: En el apartado 2 b), se propone añadir " y su adhesión o unión al producto" quedando redactado de la siguiente manera: b) La impresión en braille **y su adhesión o unión al producto**, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información: **Justificación:** No se establece la obligación de que la etiqueta accesible quede adherida o unida de forma segura al producto, lo que implica que, una vez	**Se acepta parcialmente** Se modifica redacción del texto (artículo 3. 2, 4º) quedando de la siguiente manera: "La etiqueta ~~podrá adherirse~~ **se adherirá** al propio producto o **se proporcionará** en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente."

		en el domicilio, la persona ciega tendrá que realizar exactamente lo mismo que en la actualidad: preguntar a qué producto corresponde cada etiqueta, perdiéndose el objetivo de identificación autónoma.	
Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. Propuesta de modificación: En el apartado 2 b) 2º., sustituir “Indicación de “p=”” por “Indicación de “p=” o de la palabra “peligro”, si el espacio lo permite,” quedando de la siguiente manera: 2º Indicación de “p=” **o de la palabra “peligro”, si el espacio lo permite**, en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. **Justificación:** La palabra completa, si el espacio lo permite es mucho mas garante de que la persona va a entender que el producto es peligroso.	Se elimina punto del texto

		No obstante, se observa que el CLP ya exige que los envases de sustancias y mezclas peligrosas destinadas al público lleven un aviso táctil de peligro. Además. La ISO/EN 11683 define donde debe colocarse el símbolo táctil obligatorio.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. Propuesta de modificación: En el apartado 2 b) 3º, se traslada al final del párrafo el texto " Indicación de la referencia "a/i", y se une al párrafo que se añade al final "En caso de existir espacio disponible, se hará referencia al alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia," y añadir al final del párrafo "En caso contrario, indicación de la referencia "a/i", en cuyo caso, deberá incluirse en el envase un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve, que identifique de forma inequívoca los alérgenos y coadyuvantes presentes en el producto." Además, se añade al principio del párrafo " En caso de existir espacio disponible" y se sustituye "en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias," por "se hará referencia al nombre completo del alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia,"	**Se rechaza:** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio. Se puede incluir de forma voluntaria, según el artículo 4.2.

		Quedando de la siguiente manera: 3º. **En caso de existir espacio disponible, se hará referencia al nombre completo del alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia**, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. **En caso contrario, indicación de la referencia "a/i", en cuyo caso, deberá incluirse en el envase un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve, que identifique de forma inequívoca los alérgenos y coadyuvantes presentes en el producto**. **Justificación:** Con el fin de garantizar que las personas ciegas	

		puedan acceder de forma clara y autónoma a la información esencial del producto, es necesaria la incorporación en el etiquetado del alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia y si no hay que implementar un código QR o similar accesible en el envase, situado en un área visible y fácilmente escaneable. Además, el QR deberá enlazar a un contenido digital plenamente accesible, compatible con lectores de pantalla y estructurado de forma clara, de acuerdo con las necesidades de acceso a la información para usuarios ciegos. Las personas ciegas, al no poder leer la etiqueta impresa de manera visual, dependen exclusivamente de la accesibilidad técnica del contenido para conocer esta información, que resulta crítica para preservar la salud, prevenir reacciones alérgicas, y garantizar un uso seguro del producto.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. Propuesta de modificación: En el apartado 2 b) 4º, se propone añadir al final del primer párrafo “, cosméticos y de cuidado personal”, y “pudiendo incorporarse esta información en un código QR o similar”. ”, quedando la redacción de la siguiente manera:	**Se rechaza:** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un

		4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios, **cosméticos y de cuidado personal, pudiendo incorporarse esta información en un código QR o similar**. **Justificación:** La incorporación en braille de la fecha de caducidad puede suponer un problema para los distribuidores, se da como alternativa la opción de hacerlo mediante QR o similar accesible. La fecha de caducidad o consumo preferente solo se contempla para los productos alimenticios, sin tener en cuenta que los productos cosméticos y de cuidado personal también pueden llevar fechas de caducidad o de uso preferente, información esencial para la seguridad y la salud.	código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio. Se puede incluir de forma voluntaria, según el artículo 4.2.
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. Propuesta de modificación: En el apartado 3, se propone añadir “adherida o unida a cada producto”, y “la información”, quedando el texto de la siguiente manera: 3. Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía	**Se acepta parcialmente** Se modifica redacción del texto (artículo 3. 2, 4º) quedando de la siguiente manera: "La etiqueta ~~podrá adherirse~~ **se adherirá** al propio producto o **se proporcionará** en un

		electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta **adherida o unida a cada producto y la información** prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual. **Justificación:** No se establece la obligación de que la etiqueta accesible quede adherida o unida de forma segura al producto, lo que implica que, una vez en el domicilio, la persona ciega tendrá que realizar exactamente lo mismo que en la actualidad: preguntar a qué producto corresponde cada etiqueta, perdiéndose el objetivo de identificación autónoma. Además, toda la información no tiene por qué venir en la etiqueta, es posible que haya un código QR complementándola.	etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente."
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios HISPACOOP**	**OBLIGACIONES DE ACCESIBILIDAD** El artículo 3 establece las obligaciones de accesibilidad, estableciendo la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra.	**Se rechaza.** La propuesta podría implicar obstáculos al comercio interior de la Unión Europea

		Consideramos positivo que se establezcan protocolos de atención personalizada bajo demanda que permitan ayudar a los colectivos de personas con discapacidad en general (lecturas de los etiquetados o envases de los productos, asistencia con herramientas digitales, etc.) dado que pueden proporcionar soluciones inclusivas que favorece la autonomía de las personas con discapacidad, reduce los riesgos o la exposición a errores a nivel practico, y se alinea esta norma con la evolución tecnológica existente. Por otra parte, la propuesta no aborda la accesibilidad del etiquetado en cuando a las compras de estos mismos productos afectados realizadas a través de plataformas de **comercio electrónico o marketplaces**, con independencia del tamaño de los establecimientos a los que se hace referencia. Esta forma de distribución es cada vez más utilizada por las personas consumidoras por lo que, a nuestro juicio, no está suficientemente justificada la imposición de las obligaciones solo a los establecimientos comerciales con una superficie de venta física, que comercialicen los bienes y productos de consumo afectados. En tal supuesto, no puede hacerse tal distinción dejando fuera a operadores que vendan sus	

		productos a través de comercio electrónico o mediante plataformas de marketplaces puesto que igualmente deberían garantizar un etiquetado accesible en estos productos de consumo para todos los colectivos de las personas consumidoras vulnerables. Esta omisión compromete la eficacia real de la norma. Por ello, solicitamos que se busquen soluciones más eficientes para garantizar la accesibilidad de la información relevante de los productos de consumo a los colectivos de personas consumidoras con discapacidad visual.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE**	Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad Punto 1. **Donde dice:** Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. 1. Los establecimientos comerciales con una superficie en tienda mayor a 400 m2 cada uno, que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el anexo de esta norma, deberán garantizar los servicios mencionados en el apartado. […] **Debe decir:** Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. 1. Los establecimientos comerciales con una	**Se rechaza:** La medida propuesta puede dejar sin efecto la norma en gran cantidad de superficies de venta. Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2

		superficie en tienda mayor a 400 m2 ~~cada uno~~ **destinados al menos en un setenta y cinco por ciento (75%) de su superficie a la comercialización de productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida,** ~~que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el anexo de esta norma, deberán garantizar los servicios mencionados en el apartado.~~ […] **<u>Justificación:</u>** Se propone la inclusión de una doble condición de aplicación de la norma con el fin de no discriminar, innecesaria e injustificadamente, a establecimientos comerciales cuya superficie destinada a los productos que el reglamentador considera de especial relevancia es secundaria o incluso residual. De esta forma, el establecimiento se ve obligado a asumir una serie de costes importantes que no compensa el ingreso por la venta de dichos productos, por cuanto la decisión a la que se ve abocado es reducir su surtido, y con ello su oferta comercial, viéndose perjudicado el consumidor; y quedando afectada la libertad de comercio consignada en el artículo 38 de la Constitución.	
<u>Artículo 3</u>.	**Confederación**	Artículo 3 Obligaciones de accesibilidad.	**Se acepta**

Obligaciones de accesibilidad	**Española de Organizaciones Empresariales CEOE**	Punto 2.a) **Donde dice:** 2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior deberán ofrecer los siguientes servicios: a) Atención personalizada a personas con discapacidad visual acreditada en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra. **Debería decir:** 2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior ~~deberán~~ **podrán facilitar, en el marco de su organización interna**, los siguientes servicios: a) Atención personalizada a personas con discapacidad visual acreditada **con el fin de favorecer** el acceso a los productos expuestos. Asimismo, **respecto de aquellas personas que**, por razón de su discapacidad, pudieran precisar apoyo puntual durante el proceso de compra, **podrán articularse medidas de asistencia puntual cuando las circunstancias del caso lo permitan, de acuerdo con la organización y disponibilidad del establecimiento**.	**parcialmente**: Se acepta la eliminación de la obligación de la acreditación al entenderse que únicamente aquellas personas con discapacidad visual que lo precisen harán uso de esta ayuda. La obligación de acreditación, además, puede demorar los tiempos de la prestación y tener implicaciones, además, en la protección de datos de la persona consumidora. La disposición quedaría redactada del siguiente modo: "4. Todos los establecimientos comerciales, con independencia de su superficie de venta y exposición, que

		Justificación: La finalidad inclusiva de la norma puede alcanzarse de manera más eficaz mediante la configuración de un deber claro de facilitar el acceso a los productos expuestos, evitando, al mismo tiempo, la imposición generalizada de una obligación asistencial durante el proceso de compra que, por su elevado impacto organizativo, puede generar dificultades de cumplimiento, una aplicación desigual entre operadores y un coste operativo significativo. En este sentido, se considera preferible una regulación más flexible, que permita a los operadores económicos garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, adaptar las medidas de apoyo a sus procesos internos de organización y funcionamiento.	comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán ofrecer atención personalizada a personas con discapacidad visual ~~**acreditada**~~ en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra, en los términos previstos en el artículo 11 del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de

			los bienes y servicios a disposición del público.
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE**	Artículo 3 Obligaciones de accesibilidad. Punto 2.b) **Donde dice:** 2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior deberán ofrecer los siguientes servicios: b) La impresión en braille, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información: 1º. Tipo de producto y marca comercial. 2º. Indicación de “p=”, en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 3º. Indicación de la referencia “a/i”, en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento	**Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida,

		Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. 4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios. La etiqueta podrá adherirse al propio producto o en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente. Los establecimientos comerciales podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria. 3. Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2.b), a solicitud	especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria.

		de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual. 4. La prestación de los servicios previstos en este artículo no podrá implicar coste alguno para las personas consumidoras y usuarias con discapacidad, y deberá realizarse en las mismas condiciones que para el resto de las personas consumidoras. **Debería decir:** 2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior ~~deberán~~ **podrán facilita**r, en el marco de su organización interna, los siguientes servicios: b) La ~~impresión en braille~~, **puesta a disposición** a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual ~~en el momento de la compra~~, **de la información en formato accesible, pudiendo facilitarse mediante** ~~y en~~ una etiqueta por producto, **o documento físico independiente** de la siguiente información: 1º. Tipo de producto y marca comercial. 2º. Indicación de “p=”, en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de	

		diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 3º. Indicación de la referencia “a/i”, en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. 4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios. La etiqueta podrá adherirse al propio producto o en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente. **Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales**	

		obligados podrán utilizar cualquier sistema análogo con el que se cumpla la finalidad de la presente norma. Los establecimientos comerciales podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria. 3. Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán podrán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual. 4. La prestación de los servicios previstos en este artículo no podrá implicar coste alguno para las personas consumidoras y usuarias con discapacidad, y deberá realizarse en las mismas condiciones que para el resto de las personas consumidoras. **<u>Justificación:</u>** Este artículo impone a algunos operadores de distribución una obligación desproporcionada, tanto por su complejidad de aplicación como por su coste. La impresión en braille por producto, a	

		demanda, en tienda física y también en el canal online no se adecúa a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia del artículo 129 de la Ley 39/2015. Asimismo, imponiendo un único sistema se limita la posibilidad de todas las personas con discapacidad visual, favoreciendo únicamente al colectivo minoritario conocedor del alfabeto braille. Es más, llama poderosamente la atención que precisamente la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y el propio articulado sí permita el uso de sistemas similares, como el QR pero establezca obligatoriamente la utilización del alfabeto braille. En su caso, lo conveniente sería establecer no solo la voluntariedad de la medida sino también diferentes alternativas entre las que los operadores pudieran escoger la que mejor se adapte a sus necesidades y garantice que la mayoría de consumidores con discapacidad visual podrán acceder a la información alimentaria obligatoria. Adicionalmente, la exigencia de que dicha información deba materializarse necesariamente en una etiqueta por producto introduce dificultades técnicas y operativas que agravan el carácter desproporcionado de la medida. La diversidad de formatos, tamaños y materiales de los envases dificulta en muchos casos la	

		incorporación de etiquetas adicionales sin afectar a la integridad del producto, al diseño del envase o a la legibilidad del etiquetado obligatorio, que se encuentra además armonizado a nivel europeo. Desde el punto de vista operativo, la impresión y colocación de etiquetas individualizadas por producto, bajo demanda, incrementa la complejidad de los procesos en tienda, especialmente en contextos de alta rotación, y eleva el riesgo de errores. En este sentido, el objetivo de la norma (garantizar el acceso a la información) puede alcanzarse de forma equivalente mediante la puesta a disposición de dicha información en otros soportes accesibles, como documentos independientes u otras soluciones, que permiten una mayor flexibilidad. Asimismo, la obligación proyectada también se superpone a un ámbito ya regulado por la normativa europea sobre información alimentaria y etiquetado de productos, en particular por el Reglamento (UE) 1169/2011 y por el Reglamento (CE) 1272/2008. Por ello, introduce una carga adicional sobre un marco ya armonizado, con riesgo de descoordinación y de alteración del reparto legal de responsabilidades.	
Artículo 3.	**Asociación**		**Se acepta**

Obligaciones de accesibilidad	**Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados ASEDAS**	**Modificación artículo 3. 2. A**. Enmienda de modificación **Donde dice:** 2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior deberán ofrecer los siguientes servicios: a) Atención personalizada a personas con discapacidad visual acreditada en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra. **Debería decir:** 2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior ~~deberán ofrecer~~ **podrán facilitar, en el marco de su organización interna**, los siguientes servicios: a) Atención ~~personalizada~~ a personas con discapacidad visual acreditada con el fin de favorecer el acceso a los productos expuestos. Asimismo, respecto de aquellas personas que, por razón de su discapacidad, pudieran precisar apoyo puntual durante el proceso de compra, **podrán articularse medidas de asistencia puntual cuando las circunstancias del caso lo permitan, de acuerdo con la organización**	**parcialmente**: Se acepta la eliminación de la obligación de la acreditación al entenderse que únicamente aquellas personas con discapacidad visual que lo precisen harán uso de esta ayuda. La obligación de acreditación, además, puede demorar los tiempos de la prestación y tener implicaciones, además, en la protección de datos de la persona consumidora. La disposición quedaría redactada del siguiente modo: "4. Todos los establecimientos comerciales, con independencia de su superficie de venta y exposición, que

		y disponibilidad del establecimiento. **<u>Justificación:</u>** La propuesta de articular esta asistencia en función de los recursos disponibles optimiza la organización, ya que permite adaptarla al funcionamiento normal del establecimiento con tal de evitar interrupciones en los pasillos. La redacción propuesta permite cumplir con el objetivo de accesibilidad sin imponer una carga operativa que resulte inasumible para el volumen de artículos y para la planificación de la plantilla actual o que ponga en riesgo la seguridad y el normal funcionamiento del establecimiento en cuestión. Es decir, la finalidad inclusiva de la norma puede alcanzarse de manera más eficaz mediante la configuración de un deber claro de facilitar el acceso a los productos expuestos, evitando, al mismo tiempo, la imposición generalizada de una obligación asistencial durante el proceso de compra que, por su elevado impacto organizativo, puede generar dificultades de cumplimiento, una aplicación desigual entre operadores y un coste operativo significativo. En este sentido, se considera preferible una regulación más flexible, que permita a los operadores económicos garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, adaptar las	comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán ofrecer atención personalizada a personas con discapacidad visual ~~**acreditada**~~ en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra, en los términos previstos en el artículo 11 del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de

		medidas de apoyo a sus procesos internos de organización y funcionamiento.	los bienes y servicios a disposición del público.
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados ASEDAS**	**Modificación artículo 3. 2. B.** Enmienda de modificación **Donde dice:** 2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior deberán ofrecer los siguientes servicios: b) La impresión en braille, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información: 1º. Tipo de producto y marca comercial. 2º. Indicación de “p=”, en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 3º. Indicación de la referencia “a/i”, en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o	**Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y

		intolerancias, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. 4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios. La etiqueta podrá adherirse al propio producto o en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente. Los establecimientos comerciales podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria. 3. Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos	calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo que la inclusión del braille es obligatoria. Por otra parte, el Real Decreto no impone la adhesión de la etiqueta.

		adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual. 4. La prestación de los servicios previstos en este artículo no podrá implicar coste alguno para las personas consumidoras y usuarias con discapacidad, y deberá realizarse en las mismas condiciones que para el resto de las personas consumidoras. **Debería decir:** 2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior ~~deberán ofrecer~~ **podrán facilitar**, en el marco de su organización interna, los siguientes servicios: b) La impresión en braille, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información: 1º. Tipo de producto y marca comercial. 2º. Indicación de “p=”, en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación,	

		etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 3º. Indicación de la referencia “a/i”, en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. 4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios. La etiqueta podrá adherirse al propio producto o en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente.	

		Quedarán exentos de la obligación de etiquetado físico adicional aquellos productos cuyos envases, por suscaracterísticas técnicas, tamaño o normativa específica de seguridad, impidan la adhesión de etiquetas sin comprometer la integridad del producto o su identificación legal, como es el caso de las aguas minerales naturales y otros productos con envases de reducidas dimensiones. Existen productos alimentarios, como las aguas minerales, donde el diseño y tamaño del envase hace técnicamente incompatible la adición de etiquetas braille sin ocultar información obligatoria o comprometer la ergonomía del envase. La norma debe contemplar estas limitaciones técnicas para evitar la discriminación de determinados subsectores de la alimentación. Los establecimientos comerciales podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria. **Sin perjuicio de lo anterior, el acceso a la información accesible se garantizará preferentemente mediante soluciones digitales (como códigos QR, o sistemas**	

		análogos) integradas en el envase por el fabricante en origen, que permitan la lectura autónoma de los datos previstos en este apartado sin la necesidad de requerir la intervención manual del personal del establecimiento". La información accesible se proporcionará de forma que en ningún caso se solape, oculte o induzca a error respecto a la información obligatoria establecida en el Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 3. Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, ~~deberán~~ **podrán** incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual. 4. La prestación de los servicios previstos en este artículo no podrá implicar coste alguno para las personas consumidoras y usuarias con discapacidad, y deberá realizarse en las mismas condiciones que para el resto de las personas consumidoras.	

		<u>Justificación:</u> Este artículo impone a algunos operadores de distribución una obligación desproporcionada, tanto por su complejidad de aplicación como por su coste. La impresión en braille por producto, a demanda, en tienda física y también en el canal online no se adecúa a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia del artículo 129 de la Ley 39/2015. Asimismo, imponiendo un único sistema se limita la posibilidad de todas las personas con discapacidad visual, favoreciendo únicamente al colectivo minoritario conocedor del alfabeto braille. En la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y el propio articulado sí permita el uso de sistemas similares, como el QR pero establezca obligatoriamente la utilización del alfabeto braille. En su caso, lo conveniente sería establecer no solo la voluntariedad de la medida sino también diferentes alternativas entre las que los operadores pudieran escoger la que mejor se adapte a sus necesidades y garantice que la mayoría de consumidores con discapacidad visual podrán acceder a la información alimentaria obligatoria. Además, conforme ya se ha puesto de manifiesto y ahora se reitera, la medida desplaza hacia la	

		distribución obligaciones que, con carácter general, corresponden al operador responsable de la información alimentaria. El Reglamento (UE) 1169/2011 atribuye esa responsabilidad al operador bajo cuyo nombre o razón social se comercializa el alimento, o al importador cuando proceda. Sin embargo, el precepto obliga al distribuidor a reproducir y entregar en braille información cuyo contenido originario no define este operador, si no un tercero fabricante, responsable de la misma. Por eso mismo se perjudica gravemente la veracidad e idoneidad de la información en el punto de venta, ya que quien sea responsable de entregar la impresión no tiene por qué ser conocedor del alfabeto braille y, por tanto, no puede contrastar que la información impresa es correcta y acorde con el etiquetado impreso del producto que el fabricante consigna y garantiza. Asimismo, la obligación proyectada también se superpone a un ámbito ya regulado por la normativa europea sobre información alimentaria y etiquetado de productos, en particular por el Reglamento (UE) 1169/2011 y por el Reglamento (CE) 1272/2008. Por ello, introduce una carga adicional sobre un marco ya armonizado, con riesgo de descoordinación y de alteración del reparto legal de responsabilidades.	

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Confederación Plena inclusión España**	**Artículo 3. 2 apartado a. Obligaciones de accesibilidad.** **Texto original:** Atención personalizada a personas con discapacidad visual acreditada en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra. **Propuesta de redacción:** Atención personalizada a personas con **necesidades de accesibilidad** ~~discapacidad visual acreditada~~ en el acceso a los productos expuestos. ~~Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad~~, **cuando** la soliciten durante el proceso de compra. **Justificación:** La propuesta de modificar este apartado se justifica por la necesidad de eliminar el requisito de "acreditación" de la discapacidad, el cual constituye una carga administrativa desproporcionada y un obstáculo para el ejercicio inmediato de los derechos del consumidor en el punto de venta.	**Se acepta parcialmente**: Se acepta la eliminación de la obligación de la acreditación al entenderse que únicamente aquellas personas con discapacidad visual que lo precisen harán uso de esta ayuda. La obligación de acreditación, además, puede demorar los tiempos de la prestación y tener implicaciones, además, en la protección de datos de la persona consumidora. La disposición quedaría redactada del siguiente modo: "4. Todos los establecimientos comerciales, con independencia de su superficie de venta y

		Al sustituir la mención a la discapacidad visual acreditada por el concepto más amplio de "necesidades de accesibilidad", la norma se adapta a la realidad del consumo, donde la vulnerabilidad puede ser temporal, situacional o no estar sujeta a un reconocimiento administrativo formal, como ocurre en el caso de personas mayores con pérdida de autonomía o personas con discapacidades invisibles. Asimismo, se considera que esta redacción es más coherente con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que insta a los poderes públicos a garantizar una protección reforzada a los consumidores vulnerables sin imponer trabas que dificulten su acceso a los bienes. Además, al eliminar la referencia a la "ayuda puntual por razón de discapacidad" y centrarla en la solicitud del cliente por necesidades de accesibilidad, se garantiza un trato digno y no discriminatorio, transformando la asistencia de un acto asistencial condicionado en un derecho de atención al cliente que lo precisa.	exposición, que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán ofrecer atención personalizada a personas con discapacidad visual ~~**acreditada**~~ en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra, en los términos previstos en el artículo 11 del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el

			acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Confederación Plena inclusión España**	**Artículo 3. 2 apartado b. Obligaciones de accesibilidad.** **Texto original:** La impresión en braille, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información: 1º. Tipo de producto y marca comercial. 2º. Indicación de “p=”, en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 3º. Indicación de la referencia “a/i”, en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias, incluidos en el anexo II del	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia

		Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. 4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios. La etiqueta podrá adherirse al propio producto o en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente. Los establecimientos comerciales podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria. **Propuesta:** La **etiqueta accesible deberá estar, al menos, en formatos de** ~~impresión en~~ braille y **lectura fácil**, ~~a solicitud de la persona~~	para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el único etiquetado accesible obligatorio es el braille.

		~~consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de~~ **y deberán contener, al menos,** la siguiente información: 1º. Tipo de producto y marca comercial. 2º. ~~Indicación de "p="~~, En el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. **En el caso de etiqueta braille Indicación de "p=".** 3º~~. Indicación de la referencia "a/i"~~, En el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del	

		Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. En el caso de etiqueta braille, indicación de la referencia “a/i”. 4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios. La etiqueta podrá adherirse al propio producto o en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente. Los establecimientos comerciales podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria. **Justificación:** La modificación de este apartado se justifica por la necesidad de garantizar que la accesibilidad sea una característica intrínseca y permanente del producto, eliminando la barrera que supone obligar al consumidor a solicitar la información de manera expresa en el momento de la compra. Al suprimir la frase "a solicitud de la persona	

		consumidora", la norma pasa de un modelo de asistencia bajo demanda a un modelo de autonomía plena, en cumplimiento con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que exige que los productos sean utilizables por todas las personas de forma independiente. Asimismo, la incorporación de la lectura fácil como formato obligatorio, junto al Braille, responde al mandato de la Ley 6/2022, de 31 de marzo, asegurando que la información sobre peligrosidad y alérgenos sea comprensible para personas con discapacidad cognitiva o dificultades de comprensión. La modificación de la situación de los códigos simplificados en el caso del Braille al final del párrafo responde a una cuestión de mejora de la comprensión del texto al incorporar otras medidas de accesibilidad, como la lectura fácil.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Confederación Plena inclusión España**	**Artículo 3. 3. Obligaciones de accesibilidad.** **Texto original:** Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la	**Se rechaza:** Como se ha establecido anteriormente, el Real Decreto va principalmente destinado a personas con discapacidad visual.

		etiqueta prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual. **Propuesta de redacción:** Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria ~~con discapacidad visual.~~ **Justificación:** Misma justificación de apartados anteriores.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	Al artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. **De modificación.** Se propone **sustituir los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3 por el siguiente texto**: "1. Todos Los establecimientos comerciales en territorio español que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán garantizar el derecho a la atención personalizada en el proceso de compra a las personas con discapacidad reconocida que lo soliciten, y en especial a las personas con	**1. Se rechaza:** Las medidas se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por poder constituir una carga

		ceguera total, baja visión, o sordoceguera. El apoyo se dispensará a solicitud de la persona consumidora, tanto en el acceso a los productos expuestos como a la información relevante para su elección y uso seguro. Este servicio se prestará sin coste adicional alguno para la persona consumidora. ~~1.~~ 2. los establecimientos comerciales en territorio español que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2, ~~que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán~~ garantizarán ~~los servicios mencionados en el apartado 2 de este artículo~~la impresión en braille o en tinta con letra ampliada y contrastada: a solicitud de la persona consumidora o usuaria con discapacidad, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información: ~~2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior deberán ofrecer los siguientes servicios:~~ ~~a) Atención personalizada a personas con discapacidad visual acreditada en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas~~	desproporcionada. Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2 **2. Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022 se centra en el etiquetado braille, sin perjuicio de otros sistemas, y así se refleja en el proyecto. **3. Se rechaza:** La redacción se considera adecuada sin necesidad de mayor detalle.

		~~que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra.~~ ~~b) La impresión en braille, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información:~~ 1°. Tipo de producto y marca comercial. 2°. Indicación de "p=", en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) n° 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006. 3°. Indicación de la referencia "a/i", en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) n° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 1924/2006 y (CE) n° 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE	

		de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n° 608/2004 de la Comisión. 4°. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios. Además de lo anterior, los establecimientos comerciales podrán incluir en braille, o en soporte tecnológico, la información adicional que se considere necesaria, tal como la composición, características principales del producto, información para su correcta utilización, o Cualquier otra información sensible o particularmente relevante para la seguridad de la persona consumidora, cuando sea solicitada por esta. La etiqueta podrá adherirse al propio producto ~~o en un etiquetado~~ o figurar en soporte adicional ~~en el caso de que~~ cuando la superficie ~~del producto~~ del envase no sea adecuada o suficiente. ~~Los establecimientos comerciales podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria.~~	

		3.Los establecimientos referenciados en el apartado 2, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2~~.b)~~, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con ~~discapacidad visual~~ ceguera total, baja visión o sordoceguera.” **Justificación.** El derecho de asistencia y acompañamiento en el proceso de compra debe estar garantizado a toda persona con discapacidad que lo solicite, y en especial a las personas ciegas, sordociegas, con baja visión, y con discapacidad física o cognitiva. La asistencia no debe comprender únicamente el acceso a los productos escogidos, sino a información que garantice su libre elección por el consumidor, como ofertas, características, modo seguro de uso, etc. Y ese derecho debe garantizarse en todos los establecimientos comerciales. El etiquetado en braille o letra ampliada y contrastada debe asegurar el acceso a la	

		información necesaria para un uso seguro del producto: incluyendo su identificación, peligrosidad, alérgenos, fecha de caducidad y correcta utilización. El resto de información puede facilitarse en braille si es posible, o mediante medios electrónicos accesibles. La obligación debe exigirse a los establecimientos comerciales en territorio español que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2, y también en la venta por internet.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**			

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**			
ARTÍCULO 4. FOMENTO DEL ETIQUETADO ACCESIBLE			
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos CNLSE**	**Observación.** Inclusión de la lengua de signos en el artículo 4.1 (fomento del etiquetado accesible) Se propone modificar el artículo 4.1 para incorporar expresamente la lengua de signos como formato de accesibilidad. Propuesta de redacción: "1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la toma de conciencia entre los fabricantes de productos, los operadores económicos que gestionen establecimientos comerciales y las asociaciones sectoriales sobre la necesidad de	**Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará

		extender el etiquetado accesible, con especial atención al etiquetado en el sistema braille **y a otros formatos que garanticen la accesibilidad universal, incluida la lengua de signos**, a todos los productos y bienes de consumo." **Justificación:** El artículo 4.1 ya contempla la extensión del etiquetado accesible. La inclusión de la lengua de signos refuerza el enfoque de accesibilidad universal sin generar obligaciones jurídicas directas, al tratarse de una medida de fomento.	reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la norma debe ir prioritariamente destinada a personas con discapacidad visual.
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos**	**Observación.** Inclusión de la lengua de signos en el artículo 4.2 (sistemas digitales como QR) Se propone modificar el artículo 4.2 para incorporar expresamente la lengua de signos	**Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección

	CNLSE	como formato de accesibilidad. <u>Propuesta de redacción:</u> Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal, **incluyendo la incorporación de contenidos en lengua de signos**. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. **<u>Justificación</u>:** El artículo 4.2 prevé el uso de medios tecnológicos, como códigos de respuesta rápida (QR) u otros sistemas análogos, para facilitar la accesibilidad a la información y a la comunicación. En este contexto, la incorporación de contenidos en lengua de signos se ajusta a este enfoque y contribuye a mejorar el acceso a la información por parte de las personas sordas y sordociegas. Su inclusión resulta coherente con el objetivo general de la norma y no altera su carácter ni su naturaleza no obligatoria.	de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables."

			Por lo tanto, la norma debe ir prioritariamente destinada a personas con discapacidad visual.
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 4. Fomento del etiquetado accesible. Propuesta de modificación: En el apartado 2, se propone añadir “si procede” y sustituir, en la primera línea, “podrán” por “deberán”. Además, se propone añadir “ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve” Quedando de la siguiente manera: 2. Los operadores económicos, **si procede**,– ~~**podrán**~~ **deberán** incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, **ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve** o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario.	**Se rechaza:** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.

		Justificación: La redacción actual elimina la obligatoriedad del código QR accesible dejándolo en una opción voluntaria. No es suficiente. Existe el riesgo de que, en la práctica, no se implemente, siendo en casos de alergias o intolerancias, obligatorio. Los códigos deben estar identificados mediante señal táctil o en relieve, requisito imprescindible para que una persona ciega pueda localizarlo de forma autónoma. Esta condición es clave, ya que un código que no puede encontrarse al tacto no es accesible, aunque su contenido sí lo sea.	
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 4.2. Fomento del etiquetado accesible Se propone modificar el punto 2 del artículo 4 tal como se indica: 2. Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva, **entre ellos pictogramas y versión de texto en lectura fácil**, o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir	**Se rechaza.** Ya queda implícito.

		identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. Justificación: La propuesta especifica el formato de los elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva, desarrollando así el mandato expreso de la Disposición adicional primera. de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que claramente emplaza a tener presente otros formatos que otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.	

Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Cátedra de Gastronomía Mediterránea UCO**	Artículo 4. Punto 2 **Propuesta de modificación:** Los operadores económicos podrán incorporar **de forma complementaria** al etiquetado de los productos que comercialicen un código…. **Justificación:** Todos estos mecanismos deberían establecerse como información complementaria al etiquetado, tanto en este caso como en cualquier otra situación en el futuro para para otrs posibles vías información o comunicación más allá de la existente del etiquetado regulado en la UE.	**Se rechaza:** La incorporación del etiquetado en braille será obligatoria, mientras que los códigos QR o análogos serán opcionales, por lo tanto, ya se entiende que es complementario.

Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Real Academia Europea de Doctores**	Artículo 4. Punto 2 **Propuesta de modificación:** Los operadores económicos podrán incorporar **de forma complementaria** al etiquetado de los productos que comercialicen un código…. **Justificación:** Todos estos mecanismos deberían establecerse como información complementaria al etiquetado, tanto en este caso como en cualquier otra situación en el futuro para para otrs posibles vías información o comunicación más allá de la existente del etiquetado regulado en la UE.	**Se rechaza:** La incorporación del etiquetado en braille será obligatoria, mientras que los códigos QR o análogos serán opcionales, por lo tanto, ya se entiende que es complementario.
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Confederación Plena inclusión España**	**Artículo 4. 2. Fomento del etiquetado accesible** **Texto original**: Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad	**Se rechaza:** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la

		universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. **Propuesta:** Los operadores económicos ~~podrán~~ **deberán** incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, ~~o~~ **y** elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o **para facilitar** ~~a la accesibilidad a la información y a~~ la comunicación, ~~así como cualquier otro que~~, a través de medios **humanos y** tecnológicos, **que** promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. **<u>Justificación:</u>** La sustitución del término "podrán" por "deberán" en este apartado se justifica por la necesidad de asegurar que la incorporación de medidas de accesibilidad no sea una opción discrecional para el operador, sino un compromiso. Al obligar a la incorporación de sistemas análogos, se garantiza que la información detallada del producto esté disponible en formatos dinámicos y adaptables a las necesidades de cada persona, de acuerdo con el	Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.

		diseño universal. Se considera fundamental la inclusión de la referencia a los "medios humanos", ya que la tecnología por sí sola puede suponer una nueva brecha para personas con escasas competencias digitales o sin acceso a dispositivos inteligentes; la combinación de apoyo técnico y humano asegura una accesibilidad universal real y sin exclusiones.	
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	Al artículo 4. Fomento del etiquetado accesible. De modificación. Se propone **añadir un nuevo apartado 3** al artículo 4, con la siguiente redacción: "3. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán líneas de apoyo, asesoramiento, formación y, en su caso, ayudas económicas o incentivos para facilitar a los operadores económicos la implantación efectiva del etiquetado accesible y de los medios técnicos necesarios para su prestación, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas no obligadas inicialmente a garantizarlo." **Justificación.** La efectividad de la norma mejora notablemente si se acompaña de instrumentos de apoyo al	**Se rechaza:** No es objeto de este Real Decreto proporcionar ayuda económica a los operadores.

		cumplimiento, favoreciendo su extensión real y reduciendo resistencias de implantación.	
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**			
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**			
ARTÍCULO 5. ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE ETIQUETADO ACCESIBLE Y TRATO ADECUADO HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
Artículo 5. **Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.**	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 5. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. Propuesta de modificación: En el apartado 1, se propone sustituir “con la Comisión Braille Española“ por “con la ONCE, a través de la Comisión Braille Española como órgano asesor competente en materia de braille,”	**Se acepta parcialmente** La redacción del punto 2 queda de la siguiente manera: "1. (...) entre sí, con la ONCE, a través de la Comisión Braille Española, con (...)"

		quedando de la siguiente manera: 1.Los operadores económicos que gestionen establecimientos comerciales, a título individual o a través de sus organizaciones de representación empresarial colectiva, podrán establecer marcos de colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad, entre sí, ~~**con la Comisión Braille Española**~~ **con la ONCE**, con las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad y con las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, a los efectos de impulsar la protección de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad. **Justificación:** La CBE no tiene entidad jurídica propia.	
Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 5. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. Propuesta de modificación: En el apartado 2, se propone sustituir “Comisión Braille Española” por el texto “ ONCE, a través de la Comisión Braille Española como órgano asesor	**Se acepta parcialmente** La redacción del punto 2 queda de la siguiente manera: "2. (…) de la ONCE, a través de la Comisión Braille Española, de (…)"

		competente en materia de braille," quedando de la siguiente manera: 2. Sin perjuicio del resto de actuaciones que otros poderes públicos puedan llevar a cabo en el ámbito concreto de sus competencias, las Administraciones Públicas competentes podrán solicitar la cooperación de la **ONCE, a través de la Comisión Braille Española como órgano asesor competente en materia de braille**, de las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad y de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias en el fomento, promoción, difusión y garantía del buen uso del sistema braille en el ámbito de consumo, todo ello en los términos establecidos en el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles. **Justificación:** La CBE no tiene entidad jurídica propia.	
Artículo 5. **Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.**	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Artículo 5. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Se rechaza.** Si bien se procede a modificar la redacción quedando de la siguiente forma: "3. Las

		Propuesta de modificación: En el apartado 3, se propone sustituir “Comisión Braille Española” por “ONCE”. quedando de la siguiente manera: 3. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con la ~~**Comisión Braille Española**~~ **ONCE** en cuestiones relacionadas, entre otras, con el ámbito de aplicación del real decreto, así como recibir el asesoramiento del Real Patronato sobre Discapacidad, a través de sus Centros Asesores, en los términos previstos en el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad y demás normativa reguladora. **Justificación:** Además de que la CBE no tiene entidad jurídica propia, su ámbito se restringe al uso del braille y a la simbología en relieve, los temas de tiflotecnología o tecnología accesible y autonomía corresponden a otras áreas dentro de ONCE.	Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con **las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad** ~~la Comisión Braille Española~~ en cuestiones relacionadas (...)"
Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	Al artículo 5. Asesoramiento y colaboración. De modificación. Se propone **añadir**, tras la referencia a la Comisión Braille Española y a las entidades del tercer sector, **la siguiente mención**:	**Se rechaza.** Se entiende implícita.

		“incluidas las organizaciones representativas de personas sordociegas y de personas con baja visión”. **<u>Justificación.</u>** La participación de las organizaciones representativas de los distintos subgrupos afectados fortalece la adecuación técnica y práctica de la norma.	
<u>Artículo 5</u>. **Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.**			

Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.			
ARTÍCULO 6. RÉGIMEN SANCIONADOR			
Artículo 6. Régimen sancionador	**Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados ASEDAS**	Artículo 6 (Régimen sancionador). Enmienda de Adición (nuevo apartado 3) **Debería decir:** 3. En ningún caso se considerará infracción imputable al establecimiento comercial el error en la información facilitada cuando éste derive de la trascripción manual de datos técnicos complejos (alérgenos, fechas) que no hayan sido etiquetados de forma accesible en origen por el fabricante. **Justificación:** Resulta desproporcionado exigir una inversión de más de 368 millones de euros para una medida física manual que traslada la responsabilidad de la seguridad alimentaria y sanitaria del fabricante al distribuidor. Es necesario proteger al punto de venta frente a errores humanos derivados de obligaciones físicas irrealizables que deben ser	**Se rechaza:** El establecimiento debe buscar la forma de cumplir sus obligaciones legales.

		resueltas mediante la automatización en origen.	
<u>Artículo 6</u>. Régimen sancionador	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	Al artículo 6. Régimen sancionador. De modificación y adición. Se propone **modificar** el ordinal del artículo para pasar a ser artículo 7. Se propone **añadir un nuevo apartado 3** al nuevo artículo 7, con la siguiente redacción: "3. Tendrá asimismo la consideración de incumplimiento sancionable la exigencia de precio, recargo o condición económica adicional alguna por la prestación de los servicios de etiquetado accesible, asistencia personalizada o apoyos complementarios previstos en este real decreto." **<u>Justificación.</u>** La gratuidad de las medidas de accesibilidad debe quedar reforzada expresamente en sede sancionadora para evitar prácticas disuasorias o discriminatorias. En cuanto al cambio de ordinal, procede por sistemática, ya que conviene añadir un artículo 6 sobre la inspección y control administrativo de la implementación de las obligaciones que establece el Decreto.	**Se acepta parcialmente:** El artículo 3.4 establece: "4. La prestación de los servicios previstos en este artículo no podrá implicar coste alguno para las personas consumidoras y usuarias con discapacidad, y deberá realizarse en las mismas condiciones que para el resto de las personas consumidoras." Mientras que el artículo 6 establece: "1. El incumplimiento de las obligaciones de accesibilidad contenidas en el artículo 3, así como la provisión de información por medios accesibles que no sea

			fiel reflejo de la que se proporcione en el etiquetado por otros medios, tendrán la consideración de infracción en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81.3. b) del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre." Por lo tanto, se entiende ya incluida.

<u>Artículo 6</u>. Régimen sancionador	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	De adición. Se propone añadir un artículo 6, del siguiente tenor: “artículo 6. **Inspección, control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de etiquetado accesible**. 1. Competencias de inspección y control. Corresponderá a las Administraciones Públicas competentes en materia de consumo, así como, en su caso, en materia de servicios sociales, discapacidad, sanidad y calidad alimentaria, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales y funcionales, la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las obligaciones previstas en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos conforme a la normativa sectorial aplicable. 2. Facultades del personal inspector. El personal funcionario que desempeñe funciones de inspección estará facultado para: a) Acceder libremente, previa identificación, a los establecimientos comerciales incluidos en el ámbito de aplicación de la norma, en los términos previstos en la legislación vigente. b) Requerir la exhibición de productos, etiquetas, dispositivos de impresión braille, sistemas digitales de accesibilidad y cualquier otro	**Se rechaza.** Dicha obligación ya queda reflejada en otra normativa. A su vez, en este RD ya se establece bajo qué normativa se realiza el control de cada aspecto.

		elemento relacionado con el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado accesible. c) Solicitar información, documentación o datos, en soporte físico o electrónico, necesarios para verificar el cumplimiento de la normativa. d) Realizar pruebas, comprobaciones o simulaciones de compra para verificar la efectividad real de los servicios de accesibilidad previstos en el artículo 3. e) Levantar actas de inspección con valor probatorio conforme a la normativa aplicable. 3. Actuaciones de control. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse: a) De oficio, conforme a los planes de inspección aprobados por las Administraciones competentes. b) Como consecuencia de denuncias, reclamaciones o comunicaciones de personas consumidoras, asociaciones representativas o entidades del ámbito de la discapacidad. 4. Planes de inspección y coordinación administrativa. Las Administraciones competentes podrán aprobar planes periódicos de inspección que incluyan objetivos, criterios de riesgo, sectores prioritarios y mecanismos de evaluación. Asimismo, se fomentará la cooperación y	

		coordinación interadministrativa, especialmente a través de órganos de cooperación como la Conferencia Sectorial de Consumo, con el fin de garantizar una aplicación homogénea del real decreto en todo el territorio nacional. 5. Medidas provisionales. Cuando se detecten incumplimientos que puedan afectar a la seguridad, salud o derechos de las personas consumidoras con discapacidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, medidas provisionales conforme a la legislación general administrativa, incluyendo: a) Requerimientos de subsanación inmediata. b) Suspensión temporal de la comercialización del producto afectado en tanto no se garantice el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad. c) Cualquier otra medida necesaria para evitar la persistencia del riesgo o perjuicio. 6. Obligación de colaboración. Los establecimientos comerciales incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto estarán obligados a colaborar con la actuación inspectora, facilitando el acceso a sus instalaciones, productos, sistemas de etiquetado y documentación, así como proporcionando la información requerida de forma veraz, completa y	

		en plazo. 7. Seguimiento y evaluación. Las Administraciones Públicas competentes podrán recopilar y sistematizar la información derivada de las actuaciones inspectoras, a efectos de evaluar el grado de cumplimiento de la norma y contribuir al informe de evaluación previsto en la disposición final segunda del presente Real Decreto. 8. Relación con el régimen sancionador. Las actuaciones inspectoras se regirán por lo dispuesto en este artículo y, en lo no previsto, por la normativa general de inspección y procedimiento sancionador, siendo de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en el artículo 7 del presente real decreto.” **Justificación.** Entendemos que, para asegurar una plena implantación de las obligaciones previstas en el Real Decreto, y su correcta evaluación, con carácter previo al procedimiento sancionador, última ratio, debe habilitarse un procedimiento administrativo de inspección y control.	
Artículo 6.	**Junta de Castilla**		La verificación del

Régimen sancionador	**y León Dirección General de Comercio y Consumo**	En relación con el régimen sancionador previsto en el artículo 6.2. del citado proyecto de Real Decreto, en el que se califica como infracción en materia de defensa de los consumidores o de defensa de la calidad alimentaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.1.g) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, así como en la legislación autonómica aplicable en materia de defensa de la calidad alimentaria, lo siguiente: “Cuando el incumplimiento se deba a la traslación a la parte accesible del etiquetado de defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto” (el subrayado es nuestro). Tal y como se ha expuesto en la anterior alegación, a juicio de esta Dirección General no resulta procedente y carece de todo fundamento atribuir a las autoridades competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios, funciones de control orientadas a verificar si la información incluida en el etiquetado accesible corresponde efectivamente con la que figure en un etiquetado no accesible que presente “defectos, incorrecciones u omisiones”.	incumplimiento de la obligación de accesibilidad establecida en este Proyecto de RD recae sobre las autoridades competentes en materia de personas con discapacidad. Mientras que la competencia de las autoridades de consumo recae sobre la evaluación y verificación de que la información del etiquetado no accesible cumple con la normativa correspondiente, como se ha hecho hasta el momento actual.

		En efecto, para determinar este tipo de incumplimiento, los servicios de inspección de consumo deberían analizar previamente los posibles “defectos, incorrecciones u omisiones” del etiquetado no accesible y, posteriormente, comprobar y determinar si tales “defectos, incorrecciones u omisiones” han sido trasladados “de forma correcta” al etiquetado accesible. Sin embargo, si la información trasladada no constituye un reflejo fiel de la disponible en el etiquetado no accesible, la infracción resultante tendría la consideración de infracción en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tal y como se indica en el apartado 1 del citado artículo 6, y no una infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios. En consecuencia, la atribución de funciones a las autoridades de consumo carece de todo fundamento jurídico y resulta imposible de cumplir en la práctica, al exigir conocimientos técnicos muy específicos para determinar la correspondencia entre ambos tipos de etiquetado y la naturaleza de la información accesible que debe figurar.	

		Asimismo, debe tenerse en cuenta que los incumplimientos relativos al etiquetado y a la publicidad de los productos cosméticos no son competencia de las autoridades de consumo, sino de las autoridades sanitarias, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos y, en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Del mismo modo, tampoco corresponde a las autoridades de consumo, sino a las sanitarias, la potestad sancionadora prevista en la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que la modifica.	
Artículo 6. Régimen sancionador	**Generalitat de Catalunya Agencia Catalana de Consumo**	Comentario General: El artículo 6 del Proyecto del Real Decreto regula el régimen sancionador: **Incumplimientos en materia de etiquetado accesible: infracción administrativa en materia igualdad, no discriminación y**	No requiere de valoración

		accesibilidad universal. El marco legal de referencia es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social En este contexto debe destacarse que en Cataluña la competencia en materia de accesibilidad corresponde al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión. De conformidad con el **Decreto 133/2024**, de 11 de agosto, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos en los que se organiza el Gobierno y la Administración de la Generalitat de Catalunya, y las normas de estructura correspondientes, corresponde al **Departamento de Derechos Sociales e Inclusión** de la Generalitat de Catalunya, el ejercicio de las funciones siguientes: la política de las personas con discapacidad y dependencias, así como las políticas de inclusión social, de accesibilidad universal y las políticas de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. El **Decreto 209/2023**, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Código de accesibilidad de	

		Catalunya, regula en su capítulo décimo la actividad de inspección y control, así como el procedimiento sancionador. Se define la competencia, las funciones y las condiciones del ejercicio de la inspección, así como el contenido mínimo de las actas. La Agencia Catalana del Consumo **valora positivamente** que las funciones de inspección y control del etiquetado accesible no correspondan a la Administración de consumo, puesto que el control de estos mecanismos de información al usuario podría comportar, especialmente en el caso del Braille, una limitación para el personal inspector de consumo que actualmente no dispone de capacitación específica ni de formación adecuada para la lectura de dicho lenguaje. **Incumplimientos en materia de etiquetado no accesible: infracción administrativa en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias.** El marco legal de referencia es el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.	

		El reparto competencial establecido en el proyecto normativo encaja con el ámbito funcional de la Administración de consumo, a la cual corresponde controlar el etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios y no alimenticios, incluidos todos ellos en el anexo del proyecto. El control se extiende a la veracidad, eficacia y suficiencia del etiquetado, el cual no debe inducir, en modo alguno, a engaño o error a las personas consumidoras. La Agencia Catalana del Consumo **valora positivamente** la atribución competencial en materia de inspección y régimen sancionador derivada de los incumplimientos de la parte no accesible del etiquetado que originen defectos, incorrecciones u omisiones en el etiquetado accesible. La Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Catalunya, establece que los poderes públicos deben fomentar la inclusión del sistema Braille en el etiquetado de los bienes, en especial respecto a los bienes que afecten a la salud y la seguridad. No obstante, la norma no tipifica específicamente ningún incumplimiento normativo en materia de accesibilidad universal.	

		En el marco de las relaciones de consumo, la Ley 22/2010 establece que la información que figura en los envases, embalajes y etiquetas de los productos debe ser veraz y suficiente. En particular, en lo que se refiere a los bienes que contengan sustancias y preparados clasificados como peligrosos (incluidos en el anexo del proyecto normativo), deben ser fabricados y comercializados con las condiciones y datos de seguridad, de envasado y de etiquetado correspondientes y deben llevar incorporados los símbolos y las indicaciones de los peligros que conllevan y la explicación de las medidas adecuadas para contrarrestar y mitigar los posibles efectos perjudiciales para la salud y seguridad. La norma tipifica como infracción administrativa en materia de protección de las personas consumidoras el hecho de no cumplir las disposiciones que regulan el marcado, etiquetado y envasado de productos.	
<u>Artículo 6</u>. Régimen sancionador	**Generalitat de Catalunya Agencia Catalana de Consumo**	**PROPUESTAS DE LA AGENCIA CATALANA DEL CONSUMO EN LA FASE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA.** El anexo del proyecto normativo en la fase de consulta pública incluía las siguientes categorías	**No aplica**

		de productos considerados como productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida: productos cosméticos; sustancias y mezclas peligrosas; productos alimenticios; productos alimenticios con uno o varios de los ingredientes o coadyuvantes tecnológicos del Reglamento 1169/2011. **Propuesta núm. 1** En relación a los **productos cosméticos**, en el ámbito de Cataluña el control de las condiciones de comercialización, incluido su etiquetado, presentación y publicidad, corresponde al **Departamento de Salud** de la Generalitat de Catalunya. De conformidad con el **Decreto 129/2022**, de 28 de junio, de reestructuración del **Departamento de Salud,** corresponde al Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, el ejercicio de las funciones siguientes: el control y la inspección de las actividades relacionadas con la fabricación, comercialización y publicidad de los cosméticos, así como la mejora de la seguridad y calidad de los cosméticos. La Agencia Catalana del Consumo no ejerce competencias de control del etiquetado de los	

		productos cosméticos. A nivel estatal, el **Real Decreto 85/2018**, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos, se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación general de la sanidad. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) gestiona el registro de ámbito estatal de empresas fabricantes e importadoras de productos cosméticos. Por este motivo, la Agencia Catalana del Consumo **propuso en su momento** que en el artículo 6.2 se incluya una referencia expresa a la legislación autonómica aplicable en **materia de protección de la salud**. Dicha propuesta ya ha sido incorporada en el texto del proyecto normativo. **Propuesta núm. 2** En relación a las **sustancias y mezclas peligrosas**, en el ámbito de Cataluña el control de las condiciones de comercialización al consumidor final, incluido el control de su etiquetado, corresponde al **Departamento de Salud** de la Generalitat de Catalunya.	

		La **Ley 8/2010**, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), se dicta con el objetivo de garantizar un elevado nivel de **protección de la salud humana** y del medio ambiente. De conformidad con el **Decreto 129/2022**, de 28 de junio, de reestructuración del Departamento de Salud, corresponde al **Departamento de Salud** de la Generalitat de Catalunya, el ejercicio de las funciones siguientes: coordinación e impulso de las redes de alerta de productos químicos en Cataluña y su integración en los sistemas de alerta estatal y europea, en lo que se refiere a los riesgos sobre la salud pública de los productos. El control del cumplimiento de los requisitos de clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias y mezclas peligrosas corresponde a las autoridades sanitarias. La Agencia Catalana del Consumo no ejerce competencias de control del etiquetado de las sustancias y mezclas peligrosas.	

		Por este motivo, la Agencia Catalana del Consumo propuso en su momento que en el artículo 6.2 se incluya una referencia expresa a la legislación autonómica aplicable en **materia de protección de la salud**. Dicha propuesta ya ha sido incorporada en el texto del proyecto normativo. **Propuesta núm. 3** Con el fin de dar cumplimiento a las dos propuestas anteriores, la Agencia Catalana del Consumo **propuso en la fase de consulta pública previa** que el artículo 6.2 del proyecto normativo incluyese una referencia expresa a la **legislación autonómica aplicable en materia de protección de la salud**, mediante la redacción siguiente: 2. Cuando el incumplimiento se deba a la traslación a la parte accesible del etiquetado de defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto, este tendrá la consideración de infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios, de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1 g) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y	

		Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en legislación autonómica aplicable en materia de defensa de la calidad alimentaria, y en la legislación autonómica aplicable en materia de protección de la salud, respectivamente. Dicha propuesta ya ha sido incorporada en el texto del proyecto normativo.	
Artículo 6. Régimen sancionador	**Generalitat de Catalunya Agencia Catalana de Consumo**	**2. Propuestas de la Agencia Catalana del Consumo en la fase de audiencia e información pública.** Analizado el texto del Proyecto de Real Decreto en fase de audiencia e información pública, la Agencia Catalana del Consumo propone corregir un error en la redacción del texto del artículo 6.2 relativo al régimen sancionador, en el cual debe sustituirse la referencia al artículo "**47.1. g)**" por la referencia al artículo "**47 g)**", al no existir ningún apartado primero en el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 1/2007. Por lo que se refiere al resto del proyecto normativo, la Agencia Catalana del Consumo no formula observaciones, por cuanto el proyecto ha recogido satisfactoriamente la propuesta	**Se acepta** la propuesta de modificación

		formulada por esta Agencia en la fase de consulta pública previa. En efecto, la redacción actual del precepto incorpora, junto a las referencias a la defensa de los consumidores y usuarios, a la defensa de la calidad alimentaria, la mención expresa a la protección de la salud, así como el reconocimiento de la legislación autonómica aplicable en estas materias. Esta incorporación permite delimitar con claridad el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad sancionadora, en lo relativo a cada una de las materias afectadas por la regulación.	
Artículo 6. Régimen sancionador			
Artículo 6. Régimen sancionador			
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA			

Disposición adicional única. **Exención por etiquetado preexistente en braille.**	**Fundación Derecho y Discapacidad**	**OBSERVACIÓN** Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille. Propuesta de modificación: Se propone añadir el texto “en la forma indicada”, quedando el párrafo de la siguiente manera: Quedan eximidos del cumplimiento de las obligaciones de etiquetado accesible reguladas en los apartados 2.b) y 4 del artículo 3, aquellos productos que ya estén etiquetados en braille, siempre y cuando incluyan **en la forma indicada**, al menos, la información mínima contenida en el artículo 3.2.b). **Justificación:** Al incluir parte de la información en QR, si la fecha de caducidad ya estuviera en el QR o similar, también cumplirían con la norma. A los fabricantes que ya incluyen el braille en sus productos se les da la posibilidad de una opción más sencilla.	**Se rechaza.** No es necesario incluir dicha modificación.
Disposición adicional única. **Exención por etiquetado preexistente en braille.**	**Asociación Catalana para la Integración de**	De adición de una **nueva disposición adicional primera sobre publicidad**. Se propone incorporar una nueva disposición	**Se rechaza.** La publicidad del contenido de la norma

	las Personas Ciegas ACIC	adicional con la siguiente redacción: “Disposición adicional primera. Publicidad de los establecimientos que ofrecen etiquetado accesible. La Dirección General de Consumo, así como los organismos análogos correspondientes de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, elaborarán y difundirán listados actualizados y accesibles de los establecimientos comerciales que dispongan de etiquetado accesible, a fin de facilitar su conocimiento y utilización del servicio por las personas usuarias y favorecer su inspección y control.” **Justificación.** La publicidad accesible del sistema favorece su conocimiento, su utilización efectiva y el control social y administrativo de su implantación.	se entiende cumplida con su publicidad en el BOE. Se añade la "Disposición adicional segunda. Información sobre las medidas de accesibilidad disponibles en los establecimientos comerciales. Los operadores económicos deberán proporcionar, a través de sus páginas web, información completa sobre los establecimientos que disponen de los servicios a los que se refiere el artículo 3.2, así como su localización y horario de apertura."

Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille.	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	**De modificación.** Se propone **modificar el título** de la Disposición adicional única para que pase a ser la disposición adicional segunda. Quedaría así: Disposición Adicional Segunda. Exención por etiquetado preexistente en braille".	**Se rechaza.** No se considera adecuado incluir la disposición adicional primera propuesta.
Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille.			
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA			
Disposición transitoria única. **Régimen transitorio**	**Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas ACIC**	A la disposición transitoria única. De modificación. Se propone **sustituir su redacción por la siguiente**: "Los establecimientos comerciales a los que ~~aplique~~ resulta de aplicación esta norma dispondrán de un plazo máximo de tres meses desde su ~~tendrán un máximo de un año desde la~~ entrada en vigor ~~de esta norma~~ para ~~adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento~~ implantar la garantía del derecho de asistencia personalizada al proceso de compra.	**Se rechaza.** Se considera que el plazo propuesto es proporcional a las medidas que deben implantarse y se da el tiempo suficiente para ello.

		Los establecimientos a que se refiere el número 3 del artículo 2 del presente Real Decreto, dispondrán del plazo máximo de un año para adoptar las restantes medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar el etiquetado accesible en los términos previstos por esta norma. Reglamentariamente o mediante resolución del órgano competente podrán preverse medidas de despliegue progresivo, seguimiento y apoyo para facilitar la implantación efectiva del sistema.” **Justificación.** Conviene diferenciar entre medidas organizativas de inmediata exigibilidad y medidas técnicas que pueden requerir un plazo de adaptación, sin dilatar indebidamente la efectividad del derecho.	
Disposición transitoria única. Régimen transitorio			
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA			

Disposición final primera. Títulos competenciales			
Disposición final primera. **Títulos competenciales**			
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA			
Disposicion final segunda. Evaluación de la norma	**Asociación Catalana para la**	A la disposición final segunda. Evaluación de la	**Se rechaza.** No se estima necesario

	Integración de las Personas Ciegas ACIC	norma. De modificación. Se propone **añadir al final del precepto**: “En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 elaborará un informe de balance sobre su aplicación y la situación y evolución del etiquetado accesible, a los efectos de servir de base para futuras propuestas de desarrollo o modificación del mismo. Dicho informe evaluará específicamente el grado de cumplimiento del Real Decreto, La cobertura territorial de los establecimientos obligados, el uso efectivo de los distintos formatos accesibles, la atención a las personas ciegas, sordociegas y con baja visión, la suficiencia del contenido informativo accesible, y la conveniencia de ampliar el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la norma.” **Justificación.** La evaluación ex post debe medir la efectividad material de la regulación y no limitarse a una valoración genérica.	detallar el contenido de dicho informe.

Disposicion final segunda. Evaluación de la norma			
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA			
Disposición final tercera. Desarrollo normativo			
Disposición final tercera. Desarrollo normativo			
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA			
Disposicion final cuarta. Entrada en vigor			
Disposicion final cuarta. Entrada en vigor			
ANEXO. PRODUCTOS DE CONSUMO DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y CALIDAD DE VIDA.			
Anexo. Productos de consumo de	**Asociación Nacional de**	Anexo. Productos de consumo de especial	**Se rechaza:** El artículo 2 del Real

esperial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida.	**Perfumería y Cosmética STANPA**	relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida **Enmienda de modificación** **Donde dice:** Anexo. Productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida a) Productos cosméticos y de cuidado personal, de conformidad con el Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos, y, en lo que resulte aplicable, el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos. […] **Debe decir:** Anexo. Productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida a) **Productos cosméticos, según la definición dada en el Reglamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos**, y productos cosméticos y de cuidado personal de conformidad con el Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos, y, en lo que resulte aplicable del Real Decreto	Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos consméticos, indica: "Artículo 2. Definiciones. A los efectos de este real decreto, se aplicarán las definiciones del artículo 2 del Reglamento sobre productos cosméticos." Por lo tanto, la cita es válida.

		1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos. […] **Justificación y Observaciones** La cita al Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos, pudiera resultar incompleta, toda vez que ese mismo real decreto, en su artículo 1, hace constar que tiene por objeto regular normas complementarias para la aplicación del Reglamento (CE) nº 1223/2009, de 30 de noviembre de 2009, sobre productos cosméticos. Se considera necesaria la cita expresa a este Reglamento europeo, de aplicación directa en España y donde se contiene la concreta regulación (y, en particular, la propia definición) de los productos cosméticos.	
<u>Anexo</u>. **Productos de consumo de esperial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida.**			

Artículo	Interesado	Posición / Respuesta	Valoración
OBSERVACIONES GENERALES			
Observaciones Generales	**Cantabria**	**OBSERVACIONES Y ALEGACIONES** **<u>PRIMERA</u>. Incorrecta delimitación material y competencial de la norma** El proyecto presenta el etiquetado accesible como una medida vinculada a la protección de las personas consumidoras, remitiendo en diversos pasajes a la normativa general de defensa de los consumidores y usuarios. Sin embargo, el contenido material de la regulación se encuadra principalmente en el ámbito de la accesibilidad, la discapacidad y la igualdad de trato, por lo que resulta cuestionable su inserción en el marco general del derecho de consumo y, especialmente, la atribución de funciones de control y sanción a las autoridades autonómicas de consumo. El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como la Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación, configuran un régimen específico, sectorial y especializado que debería operar de forma preferente.	**PRIMERA:** Se regula de manera compartida, ya que en el ámbito de control y sanción se hace referencia a normativa de distintos ámbitos, de consumo, discapacidad, sanitaria y alimentaria **SEGUNDA:** El régimen sancionador está claramente delimitado, haciendo referencia a normativa de distintos sectores para cada tipo de infracción y, en concreto, a la del sector de la discapacidad para el etiquetado accesible. **TERCERA:** **Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional

		<u>SEGUNDA</u>. Inadecuación del régimen sancionador previsto El artículo 6 del proyecto contempla la calificación de determinadas conductas como infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios, cuando el incumplimiento derive de defectos, incorrecciones u omisiones en la traslación de la información al etiquetado accesible. Esta previsión plantea graves problemas de seguridad jurídica, al: • generar solapamientos entre regímenes sancionadores distintos, • introducir riesgos de vulneración del principio non bis in idem, y • exigir a los servicios de inspección de consumo comprobaciones técnicas complejas, incluyendo la verificación de información en lenguaje braille, ajenas a su ámbito funcional ordinario. A juicio de esta Dirección General, estos supuestos deberían calificarse exclusivamente como infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, quedando fuera del ámbito sancionador propio del derecho de consumo.	primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión de un etiquetado en braille es de obligado cumplimiento.

		<u>TERCERA</u>. Imposición desproporcionada de medios técnicos concretos El proyecto impone, para los establecimientos comerciales de más de 400 m², la obligación de disponer de medios materiales específicos —impresoras braille en el punto de venta— para garantizar el acceso inmediato a la información. Esta opción regulatoria: • impone un medio técnico concreto, en lugar de establecer una obligación de resultado, • limita innecesariamente la libertad organizativa de los operadores económicos, y • genera un impacto económico y organizativo muy significativo, que la propia Memoria cuantifica en un volumen global extraordinariamente elevado. Todo ello resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que el número de personas usuarias habituales del sistema braille es reducido en relación con el conjunto de personas con discapacidad visual, lo que plantea dudas fundadas sobre la proporcionalidad y eficiencia de la medida. **<u>CUARTA</u>. Umbral de aplicación basado en la superficie del establecimiento** El criterio elegido por el proyecto —superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m²— presenta un carácter arbitrario, al no:	La medida se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por poder constituir una carga desproporcionada. Si bien se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2 **CUARTA:** La medida se impone a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por

		• atender a la tipología del operador económico, • considerar el canal de venta (presencial, online, marketplace), ni • resultar coherente con una concepción real y efectiva de la accesibilidad universal. Este diseño puede dar lugar a situaciones de desigualdad entre operadores y limitar, de facto, la libertad de elección de las propias personas consumidoras con discapacidad. **<u>QUINTA</u>. Deficiencias en la tramitación y cooperación interadministrativa** Pese a afectar, al menos parcialmente, a competencias autonómicas en materia de consumo, el proyecto no ha sido sometido al análisis previo de la Sección de Normativa de la Comisión Sectorial de Consumo, lo que resulta contrario a los compromisos de participación autonómica asumidos en el Marco Estratégico de Consumo y a los principios de cooperación interadministrativa. **<u>SEXTA</u>. Necesidad de notificación conforme al procedimiento TRIS** El proyecto introduce requisitos técnicos obligatorios que inciden directamente en la actividad económica de los operadores comerciales, por lo que resulta necesaria su	poder constituir una carga desproporcionada. No obstante, los establecimientos de menores dimensiones pueden voluntariamente aplicar la medida. **QUINTA:** La Sección de Normativa ha sido puntualmente informada del desarrollo normativo de este Real Decreto, y sus miembros han tenido oportunidad de plantear observaciones y comentarios al mismo tanto en esa Sección, como en el trámite de audiencia e información pública, y en la petición formal de informe a través de la Conferencia Sectorial

		notificación conforme a la Directiva (UE) 2015/1535, a fin de garantizar su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea y evitar riesgos de inaplicabilidad o litigiosidad futura. **CONCLUSIÓN** Por todo lo expuesto, la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria: 1. Reitera su **apoyo al objetivo social** de la norma. 2. Considera, no obstante, que el proyecto requiere una **revisión sustancia**l, especialmente en: o el encaje competencial, o el régimen sancionador, o la proporcionalidad de las obligaciones técnicas impuestas, o y su correcta tramitación sectorial y europea. 3. En consecuencia, no puede manifestar conformidad con el texto en su redacción actual, estimando **necesario que se reconsidere** antes de su eventual elevación para aprobación.	de Consumo. **SEXTA:** **Se rechaza:** La norma plantea un etiquetado en punto de venta de forma independiente al envasado y etiquetado del producto, por lo que no se considera que suponga un obstáculo técnico al comercio.
Observaciones Generales	**Castilla y León**	En el artículo 1 del proyecto de Real Decreto se indica que el objeto es la regulación de un “etiquetado”, concepto que no es definido en esta	**Se rechaza:** El artículo 1 del proyecto indica que "el real decreto tiene por

		norma y que puede llevar a confusión pues parece que lo que se pretende regular es la forma de presentación de determinada información en la “etiqueta” del producto. Así en el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor se define «etiquetado» como “las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un alimento y que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho alimento”. En el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios aprobado por el Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, se define «etiquetado» como “toda información escrita, impresa o gráfica relativa a un producto industrial, que preceptivamente debe acompañar a este cuando se presenta para la venta al consumidor”. Es decir, el “etiquetado” de un producto es un concepto mucho más amplio que la “etiqueta” de un producto. Por ello, entendemos necesaria la inclusión en el	objeto la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal", concepto posteriormente definido en el artículo 2 Etiquetado accesible. Por lo tanto, no se considera necesario incluir más definiciones.

		texto, de un artículo en el que se definan, entre otros, el concepto de "etiquetado"	
Observaciones Generales	**Castilla y León**	En cuanto al resto del articulado, cabe señalar que: En el artículo 1 del proyecto de Real Decreto se establece que el objeto de la norma es la regulación de un “etiquetado”. No obstante, dicho concepto no se define en el texto, lo que puede inducir a confusión y llevar a presentación de determinada información en la “etiqueta” del producto. Conviene recordar que el concepto de etiquetado tiene un alcance jurídico amplio. Así, el artículo 2.2.j) del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor define «etiquetado» como “las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un alimento y que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho alimento”. Por su parte, el artículo 5.4 del Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los	**Se rechaza:** El artículo 1 del proyecto indica que "el real decreto tiene por objeto la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal", concepto posteriormente definido en el artículo 2 Etiquetado accesible. Por lo tanto, no se considera necesario incluir más definiciones.

		consumidores y usuarios, define «etiquetado» como “toda información escrita, impresa o gráfica relativa a un producto industrial, que preceptivamente debe acompañar a este cuando se presenta para la venta al consumidor”. Ambas definiciones evidencian que el término “etiquetado” es más amplio que el de “etiqueta”, al incluir toda la información que acompaña o se refiere al producto, con independencia del soporte físico concreto en el que se presente. Por ello, se considera necesaria la inclusión en el proyecto de un artículo de definiciones, en el que se recojan, entre otros, los conceptos de “etiquetado” y “etiqueta”, a fin de evitar interpretaciones divergentes y garantizar seguridad jurídica.	
Observaciones Generales	**Castilla y León**	A lo largo del texto se hace referencia en numerosas ocasiones a “bienes y productos”, sin que exista razón aparente que justifique esta distinción. Así, en el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se define el concepto «producto» como “todo bien	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará

		mueble conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil" y «bienes» "a las cosas muebles corporales". Podría decirse que todos los productos son bienes, al ser bienes muebles, aunque no todos los bienes son productos, pues los bienes inmuebles no son productos. En consecuencia, si lo que se desea es regular la forma de presentación de determinada información en la "etiqueta", a juicio de esta Dirección General, esta se referirá siempre a la etiqueta de un producto.	reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, se ha optado por mantener la misma terminología utilizada en dicha ley.
Observaciones Generales	**Castilla y León**	A lo largo del texto se observa el empleo reiterado de la expresión "bienes y productos", sin que parezca existir una justificación normativa o conceptual que exija esta distinción.	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece:

		Así, el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, define el concepto «producto» como “todo bien mueble conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil” y «bienes» “a las cosas muebles corporales”. De estas definiciones se infiere que todos los productos son bienes, al ser bienes muebles, aunque no todos los bienes son productos, dado que los bienes inmuebles no tienen la consideración de productos. En consecuencia, si la finalidad del proyecto es regular la forma de presentación de determinada información en la “etiqueta”, a juicio de esta Dirección General, dicha información debe referirse necesariamente a la etiqueta del producto, puesto que los bienes inmuebles no son susceptibles de etiquetado en el sentido jurídico que a esta figura otorga la normativa vigente. Con ello, se evita redundancia terminológica y se mejora la coherencia interna de la norma, recomendándose emplear únicamente el término “producto”.	"El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, se ha optado por mantener la misma terminología utilizada en dicha ley.
Observaciones Generales	**Castilla y León**	En consecuencia, de conformidad con las	No requiere

		alegaciones expuestas, especialmente con la relativa a la no procedencia de la inclusión en el régimen sancionador de la referencia al Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por parte de esta Dirección General se entiende necesaria una revisión del texto propuesto, la eliminación de las referencias a la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios y a las infracciones en esta materia, así como manifestar nuestra oposición a su aprobación por la Conferencia Sectorial de Consumo.	comentarios. Las aportaciones y respuesta se ven más adelante en el articulado
Observaciones Generales	**Castilla y León**	En consecuencia, y a la vista de las alegaciones expuestas —muy especialmente la relativa a la falta de procedencia de incluir en el régimen sancionador referencias al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre—, esta Dirección General considera necesaria una revisión del texto propuesto que incluya la eliminación de las referencias a la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios y la supresión de las infracciones vinculadas a dicha materia. No obstante, se desea dejar constancia de la	**Se rechaza:** Las autoridades de consumo mantienen sus competencias de control y sanción sobre el etiquetado no accesible.

		oposición expresa de esta Dirección General a la elevación del texto para su aprobación por la Conferencia Sectorial de Consumo.	
Observaciones Generales	**Galicia**	Con carácter previo debe indicarse que, tanto en la Exposición de Motivos como en el articulado del Proyecto de Real Decreto, se hace referencia al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, por lo que, en base a ello, puede considerarse que estamos ante una normativa que, al menos en parte, afecta a la protección del consumidor. En relación con esto, debe señalarse que reiteradamente desde la Sección de normativa de la Comisión Sectorial de Consumo (con un punto específico en el orden del día de la reunión de 25 de marzo de 2026) se ha indicado la necesidad de que todas las normas de protección de los consumidores sean sometidas a dicha sección para su participación en la elaboración de la misma, como por otra a parte ya se recogía en el l Marco Estratégico de Consumo de la Conferencia Sectorial de Consumo (2022-2025), que establecía en su OEA 3.1.3. Participación y seguimiento de la actividad normativa estatal de protección al	La Sección de Normativa ha sido puntualmente informada del desarrollo normativo de este Real Decreto, y sus miembros han tenido oportunidad de plantear observaciones y comentarios al mismo tanto en esa Sección, como en el trámite de audiencia e información pública, y en la petición formal de informe a través de la Conferencia Sectorial de Consumo.

		consumidor del Ministerio de Consumo, determinándose, como responsables del análisis, a la Dirección General de Consumo y Sección de Normativa y Asociacionismo de la Comisión Sectorial de Consumo. Pues bien, el indicado Proyecto de Real Decreto no ha sido sometido a la consideración de la Sección de Normativa indicada, por lo que debería remitírsele para su estudio y participación de todas las CCAA en su redacción, especialmente si se tiene en cuenta que su aplicación, al menos en parte, les correspondería a ellas.	

Observaciones Generales	**Madrid**	**1º Observaciones de carácter general.** **Primera:** El Decreto tiene por finalidad la regulación del etiquetado respecto de los bienes y productos que se relacionan en su Anexo I (productos cosméticos y de cuidado personal, detergentes y limpiadores, productos alimenticios). La competencia sobre los productos cosméticos radica en las autoridades sanitarias, en todas las comunidades autónomas (la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad en el caso de la Comunidad de Madrid), en virtud del Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos y el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. La competencia sobre los productos alimenticios corresponde, en algunas de las comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, a las autoridades con competencia en materia de salud pública, en nuestro caso a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. En consecuencia, debería instarse a las	**Primera_Se rechaza:** Las infracciones en el etiquetado de productos alimenticios y cosméticos no se han modificado, se seguirán sancionando de la misma manera que se venía haciendo hasta ahora. Únicamente se añaden como infracciones nuevas las relacionadas con el etiquetado accesible, las cuales son competencia de las autoridades en materia de discapacidad. **Segunda_ Se rechaza:** Únicamente tienen que trasladar al etiquetado accesible una parte de la información del etiquetado. **Tercera_ Se rechaza:**

		administraciones con competencias en sanidad y salud pública a realizar el análisis de la norma y a emitir las pertinentes observaciones, dado que el Anexo en el que se contienen los productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida sobre los que se exige la inclusión del etiquetado inclusivo previsto en la norma, incluye los productos cosméticos y los productos alimenticios. **Segunda.** En el proyecto inicial la obligación de facilitar este tipo de etiquetado recaía en las empresas fabricantes, y sus representantes legales en su caso, cuando introduzcan sus productos en el mercado. En el nuevo proyecto esta obligación recae en los establecimientos comerciales en territorio español con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2. Los distribuidores son responsables de los productos que ponen a la venta, pero quien conoce todas las características y propiedades del producto, no es el distribuidor sino el fabricante. Ahora se les traslada a los distribuidores la responsabilidad de transcribir correctamente las especificaciones del producto. Si esta transcripción no es correcta, pues la máquina encargada de ello incluye algún matiz que no es el adecuado, el responsable, de acuerdo con el proyecto, es el	La medida se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por poder constituir una carga desproporcionada, sin perjuicio de que establecimientos de superficie menor puedan aplicarla de manera voluntaria. Las personas con discapacidad visual pueden comprar en el comercio de su elección, pero únicamente se les ofrecerán los servicios incluidos en el Real Decreto en los de superficie superior a 1.000 m2.

		distribuidor. Se podría considerar que con ello se está imponiéndoles una obligación que excede de su capacidad. **Tercera.** La Ley 4/2022, de 25 febrero, no establece ninguna limitación al cumplimiento de esta obligación en función de la superficie de venta y exposición, por lo que cabe plantearse si los invidentes deben adquirir los productos sólo en los establecimientos de más de 400 m2. Esto supone una restricción a su capacidad de elección, que no concuerda con la accesibilidad universal pretendida por la Ley 4/2022, de 25 de febrero. **Cuarta.** La Ley 4/2022, de 25 de febrero, establece textualmente en su disposición adicional: “El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal”, es decir, que esta regulación no debe limitarse a establecer un etiquetado en alfabeto braille sino que debería incluir otros formatos que garanticen la accesibilidad universal. El proyecto remitido, aunque en la MAIN y en la exposición de motivos hace referencia a la utilización de otros formatos, lo cierto es que, al	**Cuarta_Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la ley especifica el braille como obligatorio, y deja libertad para elegir también entre otros formatos. **Quinta_ Se rechaza:** Se ha cuantificado en la MAIN el coste de la asistencia: El convenio de supermercados establece un número máximo de horas de trabajo anuales de 1.770, por lo que el coste por hora trabajada es de 14,74 €/hora. Por lo que si una persona visita el supermercado un máximo de 12 veces al mes se puede estimar un máximo de 25

		establecer la regulación en los artículos, se dispone como obligación, tan sólo, el acceso a través del alfabeto braille, y la utilización de fórmulas alternativas tan sólo se regula como una posibilidad, así de acuerdo con el artículo 2: “2. El etiquetado accesible hará uso del sistema braille. 3. Las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados podrán aplicarse de manera simultánea en un mismo producto.” De esta forma, se están limitando otras fórmulas de accesibilidad que permite la Ley y que tal vez sean más útiles a los invidentes y además, se priva a los establecimientos de adoptar la medida que consideren más oportuna tanto para el objeto de la norma, como para el desarrollo de su actividad. **Quinta.** La norma proyectada hace recaer todo el gasto necesario para implementar las medidas en los establecimientos comerciales y tiene un impacto económico y organizativo muy relevante, que se aplica de forma homogénea a todos los establecimientos afectados, sin modularse en función de variables como la tipología de comercio, el número de referencias afectadas, la rotación de productos, o la demanda real del servicio por parte de las personas consumidoras con discapacidad	millones de visitas al supermercado anuales de personas con discapacidad visual. Por lo tanto si cada visita dura aproximadamente media hora, podemos concluir que el coste anual de esta asistencia sería: 25 millones x 0,5 horas x 14,75€ = 184,37 millones de €. **Sexta_ Se rechaza:** La norma parte de un mandato legal. En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento

		visual. De acuerdo con la MAIN “estas obligaciones no supondrían un coste adicional dado que sería el propio personal del establecimiento quien realizaría esta función”. Se desconoce cómo se ha llegado a esta conclusión, ya que disponer de personal para realizar una actuación, es un gasto y es un gasto valorable. Además, supondría que ese personal abandonase su actividad para dedicarla a otra tarea y en ocasiones, los establecimientos necesitan que todo su personal se centre en una determinada actividad. No obstante, la MAIN insiste en que contratar un nuevo trabajador “no parece realista puesto que estas tareas podrían asumirla el personal que ya está contratado por el establecimiento”. La MAIN está opinando sobre cómo debe organizarse el establecimiento y dando por supuesto que la empresa puede prescindir de un trabajador para destinarlo en cualquier momento a una actuación puntual que además no podría posponerse, puesto que el invidente no solicita cita previa para acudir al establecimiento, aunque tal vez fuera ésta una opción. Si la norma permitiera limitar esta actuación a una franja horaria o a la solicitud de cita previa por parte del invidente, tal vez sería mucho más compatible con la organización de los trabajadores en estos establecimientos.	conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio. Respecto a los datos ofrecidos ofrecidos en la MAIN se ha procedido a revisar los mismos. **Séptima_ Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la

		La MAIN considera que, en cualquier caso, se podría contratar a otro trabajador, lo que supondría un coste para el sector de 316.397.250 euros. Esta medida parece bastante ineficiente, puesto que tal y como argumenta la MAIN, el trabajo que desempeñaría esta persona se limitaría a los supuestos en los que el invidente requiera su presencia durante el proceso de compra y, además, por un tiempo que la MAIN estima de media hora. Contratar a una persona por si, tal vez (ya que no es seguro), acude un invidente, para atenderlo media hora, es totalmente ineficiente a nivel empresarial y carece de toda lógica empresarial. Por tanto, no se acredita que estas obligaciones no supongan un coste adicional, tal y como dice la MAIN, siendo el coste excesivamente elevado para atender a alguna persona durante media hora. **Sexta.** Para el cumplimiento de esta obligación, los establecimientos deberán de disponer de una etiquetadora. De acuerdo con la MAIN, una etiquetadora, último modelo, cuesta 4.000 euros, lo que supone un gasto para el sector afectado de 52.000.000 euros.	accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria. **Octava_ Se rechaza:** La norma plantea un etiquetado en punto de venta de forma independiente al envasado y etiquetado del producto, por lo que no se considera que suponga un obstáculo técnico al comercio.

		La población que va a cubrir no queda clara, puesto que en la exposición de motivos del proyecto hace referencia a que en España hay 218.000 personas con discapacidad visual como primera deficiencia, pero en la MAIN al valorar la norma, no se recurre a esta cifra sino que parece que la valoración se realiza sobre otra cifra distinta que alcanza a 84.579 personas. Para poder hacer una valoración lo más real posible debería tenerse claro la población que trata de cubrir la norma. En cualquier caso, lo que sí se determina en la MAIN es que el número total de personas que utilizan el sistema braille es de 10.000 personas en España. Un gasto total de 368.397.250 euros para cubrir a una población de 10.000 personas que podría necesitar, o no, este servicio de forma esporádica, es absolutamente desproporcionado por lo excesivo que resulta. Por tanto, esta regulación no es proporcional al objetivo que trata de conseguir. **Séptima.** El objetivo de la norma es cubrir a las personas con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad visual, como personas consumidoras vulnerables, de tal forma que se consiga una “accesibilidad universal”. No obstante, si el número total de personas a atender es de 218.000 y sólo se va a prestar un servicio para 10.000 personas de entre ellos (de acuerdo con la	

		MAIN), no se cumple el objetivo de accesibilidad universal que proclama la norma proyectada que exige la Ley, y si no es posible cubrir a la mayoría de los destinatarios, la norma, por tanto, carece de eficacia y eficiencia. En consecuencia, se entiende que la regulación propuesta no es adecuada ni suficiente para los fines que se persiguen. **Octava**. El proyecto de Real Decreto introduce obligaciones técnicas específicas que afectan directamente a la actividad económica de los operadores comerciales, en particular mediante la exigencia de determinados medios materiales y organizativos para garantizar el acceso a la información en formatos accesibles. En este sentido, se considera necesario que, tal y como prevé la MAIN en su página 16, el proyecto se someta al procedimiento de notificación previsto en la Directiva (UE) 2015/1535, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de normas relativas a los servicios de la sociedad de la información (procedimiento TRIS). El proyecto contiene disposiciones que pueden calificarse como reglamentaciones técnicas, en la medida en que: • Establecen requisitos obligatorios de carácter	

		técnico aplicables a productos y a su información asociada. • Imponen condiciones concretas de prestación que inciden en la organización interna de los establecimientos comerciales. • Introducen obligaciones cuyo incumplimiento puede conllevar consecuencias jurídicas y sancionadoras. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el concepto de reglamentación técnica debe interpretarse de forma amplia cuando una norma condiciona de manera significativa el acceso o el ejercicio de una actividad económica. Las obligaciones previstas en el proyecto afectan especialmente a operadores comerciales de medianas y grandes superficies, cadenas con implantación en varias Comunidades Autónomas, y operadores que actúan en un entorno de libre competencia a escala nacional y europea. La introducción de requisitos técnicos específicos a nivel nacional puede generar efectos indirectos sobre el funcionamiento del mercado interior, al imponer cargas adicionales no armonizadas, lo que refuerza la necesidad de activar los mecanismos de información y control preventivo previstos en el	

		procedimiento TRIS. La notificación del proyecto en el marco del procedimiento TRIS permitirá garantizar la compatibilidad de la norma con el Derecho de la Unión Europea, recabar observaciones de la Comisión Europea y de otros Estados miembros, reducir el riesgo de impugnaciones posteriores, tanto en vía administrativa como jurisdiccional y reforzar la seguridad jurídica del texto final y su correcta aplicación. Debe recordarse que la ausencia de notificación de una reglamentación técnica cuando resulta exigible puede conllevar, conforme a la doctrina del TJUE, la inaplicabilidad de determinadas disposiciones frente a los operadores económicos.	

Observaciones Generales	**Murcia**	Necesidad mayor cooperación interadministrativa, mediante la participación efectiva de los órganos técnicos de coordinación en materia de consumo de las CCAA cuando la norma incide en su aplicación y control. Indicar que el proyecto no fue sometido a la Sección de Normativa, ni a la Sección de Control de Mercado.	**Se rechaza:** La Sección de Normativa ha sido puntualmente informada del desarrollo normativo de este Real Decreto, y sus miembros han tenido oportunidad de plantear observaciones y comentarios al mismo tanto en esa Sección, como en el trámite de audiencia e información pública, y en la petición formal de informe a través de la Conferencia Sectorial de Consumo.
Observaciones Generales	**Murcia**	Desplaza obligaciones desde fabricantes/importadores hacia establecimientos. Se advierte que el distribuidor debe transcribir información sensible que no genera (alérgenos,	**Se rechaza:** Únicamente tienen que trasladar al etiquetado accesible una parte de

		CLP, fechas), incrementando riesgo de error y de responsabilidad por terceros. Entendemos que los fabricantes/importadores son lo que tienen que disponer la información accesible estandarizada (digital o braille preimpreso cuando sea viable); y los distribuidores poner a disposición medios razonables y asistencia, sin convertirlos en “re-etiquetadores” responsables del contenido de origen.	la información del etiquetado.
Observaciones Generales	**Murcia**	**Se solitita:** Modificar la regulación proyectada, a fin de que la imposición de la obligación prevista (inversión necesaria en torno a los 4.000 euros para la adquisición de impresoras braille) no se base exclusivamente en la superficie del establecimiento, sino que tenga en cuenta criterios económicos objetivos, como el volumen de negocio, u otros indicadores que permitan una aplicación proporcionada de la norma, incluyendo medidas de flexibilización, gradualidad o exención para personas trabajadoras autónomas y microempresas, con el fin de evitar cargas económicas desproporcionadas y garantizar el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y adecuada regulación.	**Se rechaza:** Se ha considerado el criterio más objetivo.
Observaciones Generales			

Observaciones Generales			
PREÁMBULO			
Preámbulo	**Castilla y León**	En la exposición de motivos del referido proyecto de Real Decreto, se recoge, entre otros, el siguiente extremo: “Por tanto, asegurar los derechos de las personas con discapacidad ante el consumo es un factor determinante para la inclusión social de estas personas, conforme a los mandatos de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Así, el citado texto refundido indica en su artículo 6, relativo al respeto a la autonomía de las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad tienen derecho a la libre toma de decisiones, para lo cual la información y el consentimiento deberán efectuarse en formatos adecuados y de acuerdo con las circunstancias personales, siguiendo las reglas marcadas por el	El régimen sancionador está sectorialmente delimitado, haciendo referencia a normativa de distintas áreas para cada tipo de infracción y, en concreto, a la del sector de la discapacidad para la traslación del etiquetado general a su formato accesible.

		principio de diseño universal o diseño para todas las personas, de manera que les resulten accesibles y comprensibles. Y, precisamente, para garantizar esa accesibilidad universal, se prevé en su Título III la regulación del régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad" (énfasis añadido). Teniendo en cuenta que el marco competencial en el que se fundamenta y desenvuelve el proyecto objeto de informe, que no es otro que el de establecer un marco reglamentario específico para garantizar la accesibilidad universal en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y siendo la normativa de defensa de los consumidores y usuarios de carácter general, a juicio de esta Dirección General, la atribución de competencias inspectoras y sancionadoras a las autoridades de consumo no resulta procedente.	
Preámbulo	**Castilla y León**	En la exposición de motivos del mencionado proyecto de Real Decreto se recoge, entre otros, el siguiente extremo: "Por tanto, asegurar los derechos de las personas	El régimen sancionador está sectorialmente delimitado, haciendo referencia a normativa de distintas áreas para cada tipo de infracción

		con discapacidad ante el consumo es un factor determinante para la inclusión social de estas personas, conforme a los mandatos de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Así, el citado texto refundido indica en su artículo 6, relativo al respeto a la autonomía de las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad tienen derecho a la libre toma de decisiones, para lo cual la información y el consentimiento deberán efectuarse en formatos adecuados y de acuerdo con las circunstancias personales, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño universal o diseño para todas las personas, de manera que les resulten accesibles y comprensibles. Y, precisamente, para garantizar esa accesibilidad universal, se prevé en su Título III la regulación del régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad" (énfasis añadido).el marco competencial en el que se fundamenta y desarrolla la propuesta	y, en concreto, a la del sector de la discapacidad para la traslación del etiquetado general a su formato accesible.

		normativa, cuyo objeto es establecer un marco reglamentario específico para garantizar la accesibilidad universal en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. (énfasis añadido). Teniendo en cuenta dicho marco competencial y considerando que la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios tiene un carácter general, a juicio de esta Dirección General, no resulta procedente atribuir competenciasinspectoras y sancionadoras a las autoridades de consumo en el ámbito material regulado por el proyecto. En consecuencia, la competencia correspondería a la Dirección General que tenga atribuidas las funciones en materia de discapacidad, por ser el órgano especializado y sectorialmente competente para la supervisión, control y, en su caso, el ejercicio de la potestad sancionadora en este ámbito específico. A este respecto, conviene señalar que la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, en su artículo 17, reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la oferta al público de bienes y	

		servicios estableciendo la prohibición de cualquier trato discriminatorio —directo o indirecto— en el acceso, disfrute y utilización de dichos bienes y servicios. El citado precepto dispone: “1. Las administraciones públicas, las entidades, empresas o particulares que ofrezcan al público bienes y servicios, en el marco de una actividad comercial o profesional, tales como servicios financieros, de transporte, formación, ocio o similares, no podrán discriminar en el acceso a los mismos por las causas mencionadas en el artículo 2 de la presente ley. Lo previsto en el párrafo anterior no impedirá la existencia de organizaciones, actividades o servicios destinados exclusivamente a la promoción de grupos identificados por algunas de las causas mencionadas en el artículo 2. 2. No podrá denegarse el acceso a la contratación de seguros o servicios financieros afines ni establecerse diferencias de trato en las condiciones de los mismos por razón de alguna de las causas mencionadas en el artículo 2 salvo las que resulten proporcionadas a la finalidad del seguro o servicio y a las condiciones objetivas de las personas solicitantes en los términos previstos en la normativa en materia de seguros.	

		3. Los sitios web y las aplicaciones informáticas tenderán a cumplir los requisitos de accesibilidad para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores". Por su parte, el artículo 46 de la misma Ley 15/2022, de 12 de julio, relativo a su objeto y ámbito de aplicación establece: "1. El presente Título tiene por objeto establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de trato y no discriminación. Este régimen de condiciones básicas podrá ser objeto de desarrollo y tipificación específica, en el ámbito de sus competencias, por la legislación autonómica, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en materia de potestad sancionadora en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2. En aquellas comunidades autónomas en las que existan regímenes especiales de infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación, en cualquiera de los ámbitos de	

		aplicación de esta ley, los mismos resultarán de aplicación preferente al previsto en esta ley. En todo caso, en relación con las personas con discapacidad será de aplicación lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. En el orden social, el régimen aplicable será el regulado por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto". En concordancia con lo anterior, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, refuerza su atribución competencial. En concreto, su artículo 105, relativo a las Autoridades competentes, determina: "1. El órgano competente para iniciar el procedimiento será el órgano directivo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con rango de Dirección General, que tenga atribuidas las competencias en materia de discapacidad".	
Preámbulo	**Galicia**		**Se rechaza:**

		En la Exposición de Motivos del proyecto de Real Decreto se señala que contribuye a la gestión racional de los recursos públicos existentes y en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo se indica que "No afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales". Respecto a esto y en cuanto a las competencias de las Administraciones de Consumo de las Comunidades Autónomas, toda vez que se incorpora en el Proyecto de Real Decreto una previsión dentro del Régimen sancionador para las Autoridades de Consumo que, lógicamente supondrá unos costes de verificación para dichas Administraciones, lo que ha de tenerse en consideración.	La inspección que se contempla en la norma no hace necesario un aumento de los costes.
Preámbulo			
Preámbulo			
ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN			
Artículo 1.	**Castilla y León**		En el apartado 2 del

Objeto y ámbito de aplicación		En el apartado 2 del artículo 1 del proyecto se hace referencia a la exclusión del ámbito de aplicación a los productos “exclusivamente industriales o profesionales”. Esta redacción podría inducir a confusión, por cuanto de la misma podría deducirse que los productos industriales son los productos profesionales. Sin embargo en el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios aprobado por el Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, se define «productos industriales» como “todo bien, artículo u objeto de carácter duradero o fungible que, siendo resultado de un proceso industrial, esté destinado para su venta directa a los consumidores o usuarios o a través de su comercialización en establecimientos minoristas”. Por consiguiente, un “producto industrial” puede estar destinado a los consumidores.	artículo 1 no aparece dicha referencia.
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Galicia**	El cambio más significativo del actual proyecto de Real Decreto respecto al anterior, es que ahora (art. 1.2) se impone la obligación del etiquetado accesible, no a los fabricantes o importadores, sino	**Se acepta parcialmente** Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2

		a Los establecimientos comerciales con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2. Lo anterior podría suponer una discriminación entre el canal de venta físico y el **digital** además de no tener en cuenta la capacidad económica del operador, ya que una gran empresa podría tener una gran cantidad de establecimientos con superficie inferior a 400 m2, por lo que no estaría obligada a cumplir con la normativa y sin embargo un autónomo con una tienda de 401 m2 tendría que cumplir con la normativa. Por otra parte, tampoco se tiene en cuenta a las franquicias, y los franquiciadores como obligados.	
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Murcia**	El art. 1.2 limita las obligaciones a establecimientos ≥ 400 m². Ello puede generar situaciones arbitrarias de la diferencia de trato y apartarse del objetivo de “accesibilidad universal” invocado (p.ej., grandes operadores con múltiples tiendas por debajo del umbral vs. pequeño operador de 401 m²). **Se solicita:** Modificar el art. 1.2 suprimiendo o justificando adecuadamente el umbral de 400 m², sustituyéndolo por una regulación coherente con la	**Se acepta parcialmente** Se procede a aumentar la superficie de venta a los 1.000m2 Por ello, el punto 2 queda redactado de la siguiente forma: "2. Las previsiones contenidas en el presente real decreto

		finalidad del proyecto y con el mandato legal invocado.	se aplicarán a los operadores económicos que gestionen establecimientos comerciales en territorio español con una superficie de venta y exposición igual o superior a **1.000m2**, que serán los responsables de garantizar el cumplimiento de las obligaciones introducidas por esta norma"
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**			
ARTÍCULO 2. ETIQUETADO ACCESIBLE			
Artículo 2. **Etiquetado accesible**			
Artículo 2. **Etiquetado accesible**			
ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DE ACCESIBILIDAD			
Artículo 3.	**Castilla y León**		No existe dicha

Obligaciones de accesibilidad		En el artículo 3.1 letra h), respecto de la información que debe ser accesible se indica “Información sobre alérgenos o intolerancias e información nutricional”. A nuestro juicio, esta referencia carece de precisión por cuanto en el caso de los productos alimenticios, conforme a lo que se establece en el Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, la información a la que se refiere es la relativa a cualquier sustancia o producto que cause alergias o intolerancias y no a las alergias e intolerancias en sí.	referencia. Se hace la siguiente, en el artículo 3.2. 3º: "3º. Indicación de la referencia “a/i”, en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (...)"
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Galicia**	Al margen de lo anterior, pero en relación con ello, en el art. 3.3 del Proyecto de Real decreto se indica: 3. Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual.	**Se rechaza.** La propuesta podría implicar obstáculos al comercio interior de la Unión Europea

		Respecto a este apartado, no se considera aceptable limitarlo a los establecimientos de igual o más de 400 m2, considerando que al estar en una venta on line se podría extender a todo este tipo de venta. Por otra parte, el precepto parece incluir a los Marketplace, pero no lo aclara.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Galicia**	En relación con lo anterior, y toda vez que en el Proyecto se establece la “obligación” respecto a establecimientos, es esencial establecer qué personas o entidades serían las responsables de dicha obligación de los “establecimientos”.	**Se acepta.** La redacción del artículo 3.1 queda de la siguiente forma: " 1. Los **operadores económicos que gestionen** establecimientos comerciales ~~con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2~~, que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán garantizar los servicios mencionados en este artículo."
Artículo 3.	**Madrid**	En el apartado 3 del artículo 3 se establece que:	**Se acepta**

Obligaciones de accesibilidad		“Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual.” No se alcanza a entender cómo, a través de una opción en la web, podría llegar a garantizarse que los productos contratados por cauces electrónicos se entregarán con el etiquetado accesible previsto. Lo que podría es incorporarse en la web una opción a través de la que el consumidor pueda solicitar que el producto venga etiquetado en braille y con los requisitos del apartado 2.b), pero la opción, en sí misma, no garantiza que vaya a realizarse.	**parcialmente** Se modifica el artículo 3.3, quedando redactado de la siguiente forma: "3. Los establecimientos referenciados en el apartado 2, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, **que deberá ser accesible de conformidad con el artículo 2.2.f) de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas**

			altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual"
Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Madrid**	Conforme al artículo 3.b) 4º, en el que se establece que “Los establecimientos podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria”, se considera que, si bien podría ser de	**Se rechaza:** No se considera que exceda el objeto de la norma, es una opción

		ayuda a las personas con esta discapacidad, excedería del objeto de la norma que es regular el etiquetado. Y, en cualquier caso, si posteriormente se penaliza, sancionando, un posible error en esta información, no se estaría fomentando este tipo de ayuda destinada a las personas con discapacidad visual.	voluntaria.
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Murcia**	El art. 3.2.b impone “impresión en braille… en el momento de la compra” con contenido mínimo tasado, imponiendo un medio técnico rígido y desproporcionado (impresoras/etiquetadoras) en lugar de permitir soluciones de etiquetado accesible en origen de los productos de consumo, con el fin de garantizar acceso inmediato e información esencial en formato accesible, permitiendo alternativas técnicas equivalentes (braille preimpreso, plantillas, dispositivos accesibles, QR con accesibilidad real, asistencia, etc.), manteniendo el braille como estándar principal pero no único. **Se solicita:** Reformular el art. 2 y art. 3 para establecer una obligación de resultado en materia de accesibilidad, permitiendo soluciones equivalentes, sin imponer un único medio técnico.	En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio. **Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional

			primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el etiquetado en braille es obligatorio.
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Murcia**	Regulación incompleta y difícil exigibilidad en la	**Se rechaza.** La propuesta podría

		venta online y marketplaces: (riesgo por inseguridad jurídica). El art. 3.3 exige una “opción” en web para garantizar entrega con etiqueta braille. Se advierte imprecisión ya que el precepto parece incluir marketplaces pero no lo aclara, quién es el responsable en Marketplace (operador de la interfaz o el vendedor). **Se solicita:** Reescribir el art. 3.3 para concretar el alcance en venta electrónica y marketplace, estableciendo obligaciones verificables y asignación clara de responsabilidades.	implicar obstáculos al comercio interior de la Unión Europea
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**			
ARTÍCULO 4. FOMENTO DEL ETIQUETADO ACCESIBLE			
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**			
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**			
ARTÍCULO 5. ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE ETIQUETADO ACCESIBLE Y TRATO ADECUADO HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			

Artículo 5. **Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.**	**Madrid**	En el artículo 5 se establece la posibilidad de que las Administraciones Públicas competentes puedan solicitar la cooperación de la Comisión Braille Española y recibir el asesoramiento del Real Patronato sobre Discapacidad. Pues bien, debe recordarse que todas las obligaciones y gastos derivados se atribuyen a los distribuidores, por lo que se considera que este tipo de ayudas de asesoramiento y cooperación debería estar a disposición de ellos.	**Se rechaza**: Ya se contempla en el apartado 1 del mismo artículo.
Artículo 5. **Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.**			
ARTÍCULO 6. RÉGIMEN SANCIONADOR			
Artículo 6. **Régimen sancionador**	**Andalucía**	En relación con el texto del proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo, remitido a esta Consejería en trámite de informes, se hacen las siguientes observaciones al artículo 6.2, relativo al régimen sancionador: La referencia que se hace al artículo **47.1.g)** del	**Se acepta** la propuesta de modificación

		texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, es errónea tiene que ser al artículo **47.g).**	
Artículo 6. Régimen sancionador	**Aragón**	La materialización y aplicación real y efectiva de lo dispuesto en el proyecto, dependerá en gran medida de los mecanismos de supervisión, control e inspección que se articulen para garantizar su cumplimiento. Y si bien el proyecto contempla, en su artículo 6, un régimen sancionador en caso de incumplimiento, este precisa –a nuestro entender- de imprescindible revisión y concreción. El artículo 6.2 del proyecto de Real Decreto alude al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En concreto, versa lo siguiente: “cuando el incumplimiento se deba a la traslación a la parte accesible del etiquetado de defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto, este tendrá la consideración de infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios, de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1 g)del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real	**Se rechaza**: Los servicios de consumo deben supervisar "defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto", del mismo modo que vienen haciendo hasta ahora.

		Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y en la legislación autonómica aplicable en materia de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud, respectivamente". A este respecto, procede advertir que, en este ámbito autonómico, los servicios de Consumo no disponen de los recursos técnicos ni de los medios personales especializados necesarios para realizar la supervisión necesaria para comprobar que la información del etiquetado accesible a través del sistema braille previsto en el artículo 2.2 del proyecto, es adecuada, real y correcta. Si bien desde Consumo del Gobierno de Aragón se puede constatar la existencia de etiquetado en braille en un producto, no se puede garantizar que la información que a través del mismo se recoge y otorga al consumidor con discapacidad visual, sea veraz, correcta, eficaz, suficiente, completa y coincidente con la información facilitada en otros formatos. **Propuesta:** Por lo expuesto, y considerando que el espíritu de esta disposición permite avanzar en la protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias	

		vulnerables, garantizando el acceso a la información en condiciones de igualdad y reduciendo las desigualdades, **se considera necesaria la reformulación del artículo 6.2 del proyecto de Real Decreto objeto de este informe; entendiendo necesario concretar y atribuir este control a los servicios competentes en materia de inclusión social, igualdad, accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad.**	
Artículo 6. Régimen sancionador	**Castilla y León**	Así, en cuanto al régimen sancionador, el artículo 6 del proyecto objeto de informe establece lo siguiente: "1. [...] 2. Cuando el incumplimiento se deba a la traslación a la parte accesible del etiquetado de defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto, este tendrá la consideración de infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios o de defensa de la calidad alimentaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1. g) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y en legislación autonómica aplicable en materia de defensa de la calidad alimentaria, respectivamente" (énfasis añadido).	1. Los servicios de consumo deben supervisar "defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto", del mismo modo que vienen haciendo hasta ahora. 2. El texto del Real Decreto, en su artículo 6.2, ya contempla estas situaciones: "2. Cuando el incumplimiento se deba a la traslación a la

		Tal y como se ha expuesto en la anterior alegación, a juicio de esta Dirección General, no resulta procedente y carece de todo fundamento, atribuir a las autoridades competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios, funciones de control sobre si lo que figura en el etiquetado accesible efectivamente se corresponde con la información que se facilitaría en un etiquetado no accesible que presenta “defectos, incorrecciones u omisiones”. Así, para determinar este tipo de incumplimiento los servicios de inspección de consumo deberían analizar los posibles “defectos, incorrecciones u omisiones” que presenta un etiquetado no accesible y determinar si esos “defectos, incorrecciones u omisiones” han sido trasladados de “forma correcta” al etiquetado accesible, pues si han sido trasladados de forma que no sea fiel reflejo de la que se proporcione en el etiquetado por otros medios, tendrán la consideración de infracción en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tal y como se indica en el apartado 1 de este mismo precepto, y no de infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios.	parte accesible del etiquetado de defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto, este tendrá la consideración de infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios, de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud de acuerdo con lo previsto en el artículo 47. g) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y en la legislación autonómica aplicable en materia de

		Conclusiones: 1. En consecuencia, la atribución de funciones que se realiza a las autoridades de consumo carece de todo fundamento, siendo además de imposible cumplimiento, por cuanto su ejercicio implica unos conocimientos muy específicos a fin de determinar la información que se recoge en el etiquetado accesible. 2. Asimismo, se ha de tener en cuenta que los incumplimientos de etiquetado y publicidad en productos cosméticos no son competencia de las autoridades de consumo, sino de las autoridades sanitarias conforme a lo establecido en el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos y en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Tampoco es competencia de las autoridades de consumo, sino también de las sanitarias, la competencia sancionadora en virtud de lo que se establece en la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica.	defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud, respectivamente."

Artículo 6. Régimen sancionador	**Castilla y León**	En relación con el régimen sancionador previsto en el artículo 6.2. del citado proyecto de Real Decreto, en el que se califica como infracción en materia de defensa de los consumidores o de defensa de la calidad alimentaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.1.g) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, así como en la legislación autonómica aplicable en materia de defensa de la calidad alimentaria, lo siguiente: “Cuando el incumplimiento se deba a la traslación a la parte accesible del etiquetado de defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto” (el subrayado es nuestro). Tal y como se ha expuesto en la anterior alegación, a juicio de esta Dirección General no resulta procedente y carece de todo fundamento atribuir a las autoridades competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios, funciones de control orientadas a verificar si la información incluida en el etiquetado accesible corresponde efectivamente con la que figure en un etiquetado no accesible que presente “defectos,	1. Los servicios de consumo deben supervisar "defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto", del mismo modo que vienen haciendo hasta ahora. 2. El texto del Real Decreto, en su artículo 6.2, ya contempla estas situaciones: "2. Cuando el incumplimiento se deba a la traslación a la parte accesible del etiquetado de defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto, este tendrá la consideración de infracción en materia de defensa de los

		incorrecciones u omisiones". En efecto, para determinar este tipo de incumplimiento, los servicios de inspección de consumo deberían analizar previamente los posibles "defectos, incorrecciones u omisiones" del etiquetado no accesible y, posteriormente, comprobar y determinar si tales "defectos, incorrecciones u omisiones" han sido trasladados "de forma correcta" al etiquetado accesible. Sin embargo, si la información trasladada no constituye un reflejo fiel de la disponible en el etiquetado no accesible, la infracción resultante tendría la consideración de infracción en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tal y como se indica en el apartado 1 del citado artículo 6, y no una infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios. **Conclusiones:** 1. En consecuencia, la atribución de funciones a las autoridades de consumo carece de todo fundamento jurídico y resulta imposible de cumplir en la práctica, al exigir conocimientos técnicos muy específicos para determinar la correspondencia entre ambos tipos de etiquetado y la naturaleza de la información accesible que debe figurar.	consumidores y usuarios, de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1. g) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y en la legislación autonómica aplicable en materia de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud, respectivamente."

		2. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los incumplimientos relativos al etiquetado y a la publicidad de los productos cosméticos no son competencia de las autoridades de consumo, sino de las autoridades sanitarias, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos y, en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Del mismo modo, tampoco corresponde a las autoridades de consumo, sino a las sanitarias, la potestad sancionadora prevista en la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que la modifica.	
<u>Artículo 6</u>. Régimen sancionador	**Galicia**	En cuanto al Régimen sancionador del Proyecto de Real Decreto el art. 6. Régimen sancionador, establece: *2. Cuando el incumplimiento se deba a la traslación a la parte accesible del etiquetado de defectos,*	**Se aclara:** Se considerará infracción en materia de discapacidad cuando se incumplan las obligaciones de accesibilidad

		incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto, este tendrá la consideración de infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios, de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1. g) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y en la legislación autonómica aplicable en materia de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud, respectivamente. Respecto a este precepto y toda vez que ahora la obligación recae en los “establecimientos” pueden hacerse varias interpretaciones de este precepto: a). Incorporar una nueva infracción respecto a un incumplimiento en la “traslación” de la información, pero que deriva de “incorrecciones u omisiones” del etiquetado del producto. A la vista de la redacción de este precepto podrían llegar a producirse dos infracciones por el mismo hecho: -. Infracción en la traslación. -. Infracción en el etiquetado original.	contenidas en el artículo 3, así como la provisión de información por medios accesibles que no sea fiel reflejo de la que se proporcione en el etiquetado por otros medios, mientras que se considerará infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios, de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud cuando el incumplimiento se deba a la traslación a la parte accesible del etiquetado de defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible, pero no ambas a la vez.

		Actuando además dos Administraciones diferentes (Consumo y Calidad Alimentaria o de Protección de la Salud), lo ello podría llegar a suponer la imposición de hasta CUATRO infracciones por los mismos hechos. b). Otra interpretación sería que cuando en el precepto se indica “este tendrá la consideración de infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios”, ese “este” se refiere al “etiquetado original”. Por ello y considerando que la traslación errónea deriva de una información previa que incumple la normativa, no puede sancionarse la traslación como infracción independiente, existiendo ya una regulación y régimen sancionador para sancionar la información previa incumplidora. Además, si se sanciona la comerciante, podría alegarse la falta de culpabilidad, salvo que pusiera su marca en el producto. Así, con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de non bis in idem y seguridad jurídica, procede la eliminación de este apartado. Adelantándonos cualquier interpretación que se haga del precepto para concretar su alcance, debe señalarse que estando en fase de redacción del	

		mismo, el mero hecho de hacer una interpretación del texto iría en contra de la seguridad jurídica exigible, especialmente en el ámbito sancionador. Al margen de lo anterior, resulta sorprendente que se haga mención a la legislación autonómica aplicable en materia de defensa de la calidad alimentaria, obviando la existencia de normativa autonómica en materia de protección de los consumidores.	
<u>Artículo 6</u>. Régimen sancionador	**Madrid**	En el apartado 1 artículo 6 relativo al régimen sancionador se establece que: Cuando el incumplimiento se deba a la traslación a la parte accesible del etiquetado de defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto, este tendrá la consideración de infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios, de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1. g) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y en la legislación autonómica aplicable en materia de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud, respectivamente. Nada hay que objetar a que los defectos,	**Se rechaza:** Esta infracción se contempla en el apartado 1 del artículo 6. El apartado 2, al que se hace referencia en el escrito de alegaciones, aplica al etiquetado general.

		incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado, cuando además este se refiera a los detergentes y limpiadores, tengan la consideración de una infracción en materia de consumo, pero sí conviene advertir de la dificultad para saber, por parte de quienes, en el ejercicio de sus funciones, realizan tareas inspectoras y sancionadoras, si de esos errores, se ha hecho traslación al etiquetado braille al no ser este lenguaje de conocimiento universal.	
Artículo 6. **Régimen sancionador**	**Murcia**	**Se solicita:** Revisar el art. 6 para evitar riesgos de non bis in idem, dotar de tipicidad y seguridad jurídica al régimen sancionador y clarificar el reparto material competencial de las actuaciones inspectoras.	Se regula de manera compartida, ya que en el ámbito de control y sanción se hace referencia a normativa de distintos ámbitos, de consumo, discapacidad, sanitaria y alimentaria.
Artículo 6. **Régimen sancionador**	**Valencia**	**Interpretación del artículo 6.** El actual Proyecto normativo resulta, en términos generales, más viable desde el punto de vista de su aplicación práctica que su versión anterior. No obstante, dicha viabilidad queda condicionada a que la aplicación del régimen sancionador previsto en su artículo 6 se realice en los términos expuestos en la reunión de la Sección Normativa	**Se acepta parcialmente:** Se considera que la redacción dada aclara suficientemente las competencias relativas al control y sanción: 1. El incumplimiento de las obligaciones de

		celebrada el 25 de marzo de 2026, cuya coordinación corresponde a un órgano dependiente de la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En particular, se considera imprescindible que sea personal técnicamente competente y ajeno al ámbito de consumo quien determine y traslade al órgano competente en materia de consumo el contenido exacto de la información accesible del etiquetado, a fin de que dicho órgano —en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo— pueda verificar la existencia de defectos, incorrecciones u omisiones en el etiquetado. Por razones de seguridad jurídica, se estima conveniente que dicha delimitación competencial se recoja expresamente en el texto normativo, y no quede sujeta únicamente a una interpretación posterior.	accesibilidad contenidas en el artículo 3, así como la provisión de información por medios accesibles que no sea fiel reflejo de la que se proporcione en el etiquetado por otros medios, tendrán la consideración de infracción en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81.3. b) del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de

			noviembre.
<u>Artículo 6</u>. Régimen sancionador	**Valencia**	**Necesidad de remisión a la normativa autonómica en materia de consumo.** Asimismo, dicha verificación debería realizarse exclusivamente a los efectos de constatar la eventual comisión de una infracción en materia de etiquetado, conforme a la normativa aplicable en materia de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias. En este sentido, se estima más adecuado que el texto del proyecto no se circunscriba de forma expresa a la infracción tipificada en el artículo 47. g) (entendemos que la referencia al artículo "47.1 g)" es una errata) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, sino que remita a la aplicación de los regímenes sancionadores autonómicos en materia de consumo, de conformidad con las respectivas normativas propias. En el caso de la Comunitat Valenciana, los artículos 9 y 49.1.35.ª del Estatuto de Autonomía atribuyen competencia exclusiva a la Generalitat en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias. Esta técnica normativa resulta, además,	**Se rechaza**: No se considera necesario.

		plenamente coherente con el tratamiento que el propio proyecto dispensa a otros ámbitos —como la calidad alimentaria o la protección de la salud, materias ajenas al ámbito del consumo— en los que se reconoce expresamente la aplicación de la normativa autonómica correspondiente.	
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA			
Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille.			
Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille.			
Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille.			
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA			
Disposición transitoria única. Régimen transitorio			
Disposición transitoria única. Régimen transitorio			
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA			

Disposición final primera. Títulos competenciales			
Disposición final primera. Títulos competenciales			
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA			
Disposicion final segunda. Evaluación de la norma			
Disposicion final segunda. Evaluación de la norma			
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA			
Disposición final tercera. Desarrollo normativo			
Disposición final tercera. Desarrollo normativo			
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA			
Disposicion final cuarta. Entrada en vigor			
Disposicion final cuarta. Entrada en vigor			
ANEXO. PRODUCTOS DE CONSUMO DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y CALIDAD DE VIDA.			
Anexo. Productos de consumo de esperial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida.	**Castilla y León**	Por último, en el Anexo, en el que se determinan los productos de consumo que se consideran de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas, se incluye, conforme a la letra c), (todos) los productos alimenticios, por lo que r**esulta**	No existe la letra d).

		innecesaria la letra d) en la que se hace referencia a un tipo particular de productos alimenticios, pues todos los productos alimenticios se consideran de especial relevancia.	
Anexo. **Productos de consumo de esperial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida.**			
MAIN			
MAIN	**Murcia**	Impacto económico derivado de la inversión necesaria para la adquisición de impresoras braille, cuyo coste, según se recoge en el documento MAIN, se sitúa en torno a los 4.000 euros, así como por la necesidad de destinar personal a tareas específicas de atención, lo que podría generar costes adicionales. Dichos costes, en última instancia, podrían ser repercutidos en el precio final de los productos, con el consiguiente perjuicio para las personas consumidoras. Esta preocupación resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que el criterio adoptado para imponer la nueva obligación se basa exclusivamente en la superficie del establecimiento, sin atender al volumen de negocio de la empresa, circunstancia	Se revisará la evaluación del impacto económico

		que no siempre guarda una relación directa ni proporcional. En este contexto, adquiere particular relevancia el impacto que dichas obligaciones pueden suponer para las personas trabajadoras autónomas y las microempresas, para las cuales el esfuerzo económico exigido podría resultar claramente desproporcionado.	
MAIN	**Valencia**	**Impacto económico y el criterio de los 400 m²** Se manifiesta preocupación por el impacto económico derivado de la inversión necesaria en impresoras braille —cuyo coste, según el documento MAIN, se sitúa en torno a los 4.000 euros— así como por la dedicación de personal a tareas específicas de atención, lo que podría generar costes adicionales susceptibles de ser repercutidos en el precio final de los productos, en detrimento de las personas consumidoras. Esta preocupación se acentúa teniendo en cuenta que el criterio elegido para imponer la nueva obligación es exclusivamente la superficie del establecimiento, y no el volumen de negocio de la empresa, circunstancia que no siempre guarda una relación directa. Especialmente relevante resulta el impacto que estas obligaciones pueden suponer para personas trabajadoras autónomas y microempresas, para las que el esfuerzo económico podría resultar desproporcionado.	Se procede a revisar la evaluación del impacto económico. Por otro lado, el establecer como criterio la superficie del supermercado se ha considerado como el criterio más objetivo. Finalmente, y con respecot a la venta online, la propuesta podría implicar obstáculos al comercio interior de la Unión Europea

		Asimismo, resulta especialmente problemática la aplicación de este criterio en relación con el comercio electrónico. El proyecto extiende las obligaciones previstas a los establecimientos que, además de contar con una superficie física igual o superior a 400 m², realizan actividades de venta online; sin embargo, excluye de su ámbito de aplicación a aquellas empresas que operan exclusivamente por internet, con independencia de su volumen de ventas o de su posición efectiva en el mercado. Esta diferenciación no parece plenamente coherente con los objetivos perseguidos por la norma en materia de accesibilidad, en la medida en que la ausencia de un establecimiento físico con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m² no constituye, por sí misma, un criterio adecuado para modular las obligaciones en el ámbito del comercio electrónico, especialmente cuando se trata de operadores con una implantación y un alcance significativamente superiores a los de muchos establecimientos físicos sujetos a la regulación.	
Artículo	**Interesado**	**Posición / Respuesta**	**Valoración**
OBSERVACIONES GENERALES			
Observaciones Generales	**Ministerio de Agricultura, Pesca**	**1.- Incompatibilidad con el marco**	**Se rechaza:** El Real Decreto

	y Alimentación	**comunitario armonizado.** Ya existe en la Unión Europea un marco regulatorio horizontal respecto a la información alimentaria facilitada al consumidor, establecido mediante el Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, y su reglamentación conexa. Imponer requisitos nacionales de información (aunque sea en el punto de venta y en braille) sobre materias ya armonizadas vulnera el artículo 38 del citado Reglamento, que impide a los Estados miembros introducir normas nacionales adicionales en estos ámbitos. Imponer braille como obligación nacional infringiría también los artículos 9 y 12, al añadir requisitos sobre la forma y colocación de la información obligatoria y porque se añaden cargas y costes innecesarios sobre productos que ya cumplen la normativa armonizada europea. Además, el proyecto de real decreto vulnera el artículo 34 del TFUE, al imponer requisitos unilaterales (uso obligatorio de braille) que no existen en otros Estados miembros. Solamente Portugal cuenta con una normativa (Decreto-Lei n.º 10/2015), que establece obligaciones relativas a	incorpora medidas nacionales contempladas en el artículo 39 del Reglamento (UE) Nª 1169/2011, "Medidas nacionales sobre las menciones obligatorias adicionales", en concreto por protección de la salud (letra a) del artículo 39). Dicha obligación no entra en contradicción con el Reglamento ya que se trata de información a suministrar en el punto de venta, no en el envase del producto. Por tanto, todos los productos independientemente de su procedencia están igualmente obligados. Por el mismo motivo, tampoco constituye

		personas con incapacidad visual menos exigentes, limitando la responsabilidad a las empresas que posean más de cinco establecimientos que funcionen bajo una misma insignia, con un área superior a 300 m² cada uno y solamente en al menos uno de sus establec imientos ubicado en cada municipio. La imposición de un etiquetado en braille que sea exclusivo para el mercado español podría vulnerar los principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea, concretamente el principio de mercado interior y la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. Las obligaciones establecidas en el proyecto resultan un agravio comparativo que resta competitividad a nuestro sector alimentario. Ello constituye una restricción equivalente a las medidas cuantitativas, generando costes adicionales, cargas regulatorias, riesgos de error y pérdida de competitividad. A su vez, existe una falta de proporcionalidad de la medida (artículo 36 TFUE), al no demostrarse que el braille sea el medio más eficaz, existiendo alternativas menos restrictivas y tecnológicas (códigos QR, NaviLens, aplicaciones accesibles)	ninguna restricción cuantitativa a la importación, como indica el artículo 34 del TFUE.

		que ya garantizan la accesibilidad. Por consiguiente, **se solicita la exclusión de los productos alimenticios del ámbito de aplicación de este real decreto**.	
Observaciones Generales	**Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**	**2.- Impacto económico en la distribución y falta de proporcionalidad.** El proyecto normativo contempla que los establecimientos comerciales con una superficie de venta superior a 400 m² estén obligados a proporcionar atención personalizada y un servicio gratuito de impresión en braille de determinada información en las etiquetas de alimentos a demanda del consumidor en el momento de la compra. En este sentido, es importante observar que el proyecto se centra, prácticamente de forma exclusiva, en el etiquetado braille, cuando, en España, y según datos del INE1, sólo 11.400 personas con discapacidad visual utilizan el sistema Braille. Por tanto, está estableciendo una serie de obligaciones, centradas en un determinado sistema, cuando sólo alcanza, como máximo, al 1,16 % de la población con discapacidad visual2, lo que hace perder todo el sentido a la norma y cuestiona gravemente la proporcionalidad de la medida, en contra de lo dispuesto por el artículo 5	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en un formato que minimiza al mínimo el impacto.

		de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Además, el requisito de “impresión a demanda” genera una nueva carga logística y económica significativa para el sector de la distribución, en el que el coste de equipamientos (impresoras braille) y contratación y formación de persona, afectando a la competitividad del sector en España. La memoria económica de la propia propuesta normativa estima un impacto superior a 360 millones de euros para el sector de la distribución — considerando la adquisición de máquinas etiquetadoras y la necesidad de personal adicional — un coste difícil de justificar para atender al número de usuarios -11.400-, que, además, disponen de otros medios alternativos, tal como se recoge en este informe. Estos sistemas alternativos permitirían llegar también a un número mayor de personas con discapacidad visual que no saben alfabeto braille, cumpliendo con mayor eficacia y eficiencia la misión del proyecto.	

Observaciones Generales	**Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**	**3.- Preferencia por soluciones tecnológicas.** El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defiende la importancia del uso de la tecnología para conseguir los fines perseguidos por este proyecto normativo. En particular, las soluciones basadas en las tecnologías digitales, como los códigos QR, códigos NaviLens, lectores de pantalla, etc., permiten a las empresas facilitar la accesibilidad de los consumidores vulnerables a la información relativa a sus productos. De hecho, estas soluciones digitales están ya siendo ampliamente usadas por parte de las empresas, así como por parte de los consumidores. El preámbulo del proyecto alude a que la finalidad es cumplir con el mandado contenido en la disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, es decir: “desarrollar reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables”.	**Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica establece: "etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal", por lo tanto, el uso del braille es de obligado cumplimiento. No obstante, el artículo 4 del Proyecto da la posibilidad de utilizar también otros formatos, como pueden ser los códigos QR o sistemas análogos.

		También se hace referencia a los “avances tecnológicos”, y en concreto a los códigos de respuesta rápida (QR) que, objetivamente, podrían ser un instrumento adecuado para poder cumplir con el mandato. Sin embargo, se prioriza la etiqueta en papel antes que este tipo de tecnología, obviando que, por ejemplo, existen ya códigos de respuesta rápida (QR) accesibles para invidentes, como el “QR Accesibles NaviLens” del que informa la propia página web de la ONCE3. Además, la simplificación de la información del etiquetado a imprimir en braille propuesta en el articulado podría comprometer la fidelidad de la información del consumidor si existe un error humano en la transcripción o impresión por parte del personal del establecimiento. A diferencia de las soluciones tecnológicas (QR o NaviLens), donde la información proviene directamente de la fuente original (fabricante), la intervención de un tercero en la cadena de información aumenta el riesgo de inexactitud en datos críticos como alérgenos o fechas de caducidad. Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que el etiquetado en braille no debe establecerse	

		de forma obligatoria, sino como una medida opcional y voluntaria, siendo deseable, al mismo tiempo, que se establezcan mecanismos para incentivar su implantación en aquellas empresas que lo deseen (p. ej.: líneas de ayuda o subvenciones). De nuevo, abogamos por los sistemas basados en la tecnología digital para garantizar la accesibilidad de los consumidores vulnerables a la información relativa a los bienes y productos de consumo, como solución más adecuada y sostenible, que permitirá evitar cualquier perjuicio sobre las empresas y su competitividad.	
Observaciones Generales	**Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**	**4.- Riesgo de traslación de la carga al productor.** A pesar de que el ámbito de aplicación recaiga sobre el comercio minorista, existe el riesgo real de que los grandes establecimientos, para evitar los costes operativos y logísticos de la impresión en tienda, exijan contractualmente a los fabricantes o importadores que comercializan productos en el mercado español que sus productos ya lleguen etiquetados en braille, lo que se acabaría convirtiéndose en un obstáculo encubierto a la libre circulación de mercancías. A falta de normas armonizadas a escala de la UE	**Se rechaza:** El Real Decreto establece claramente sobre qué agentes recaen las obligaciones.

		que regulen requisitos de información específicos, la obligación de «marcar» cada producto, podría exigir a los productores enfrentarse a costes específicos para ajustar sus productos únicamente al mercado español.	
Observaciones Generales	**Ministerio de Economía, Comercio y Empresa**	**1. Consideraciones relativas al cumplimiento de la normativa europea.** La primera cuestión a tener en cuenta es que este departamento considera que el texto del proyecto de real decreto analizado cumpliría las condiciones para ser considerado un reglamento técnico en los términos establecidos en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de septiembre de 2015 por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, y, por lo tanto, debería ser comunicado a TRIS. Los requisitos establecidos en el proyecto de real decreto encajan plenamente en la definición de reglamento técnico recogida en el artículo 1 de la Directiva mencionada, dado que introducen obligaciones relativas al etiquetado accesible de productos de consumo (artículos 1 y 2 del real decreto), y fijan características que debe reunir la	**1) Se rechaza:** Se entiende que el proyecto de Real Decreto no contiene ninguna disposición que pudiera ser objeto de obstáculo técnico al comercio. **2) Se aclara:** Es el operador económico el que transforma el local en establecimiento comercial, por lo tanto, las obligaciones recaen sobre el operador económico.

		etiqueta, como el uso del sistema braille, que constituyen “especificaciones técnicas” en el sentido de la letra f), al regular características que deben cumplir los productos o sus etiquetas, y también “otros requisitos” conforme a la letra g), al imponer condiciones vinculadas al ciclo de vida comercial del producto, como la forma en la que debe presentarse la información para permitir su puesta a disposición y uso en el mercado, o las condiciones de comercialización y puesta a disposición que deben cumplir los establecimientos (artículo 3). Además, el hecho de que estas obligaciones sean de cumplimiento obligatorio para determinados operadores económicos, y para productos incluidos en el anexo del propio texto normativo, las convierte en reglamentación técnica de carácter imperativo, cuyo incumplimiento tiene consecuencias jurídicas, encajando plenamente en el concepto de reglamento técnico cuya notificación y control de transparencia exige la Directiva 2015/1535. No resulta ser suficiente que la propuesta en sí hubiera pasado previamente por dicho procedimiento TRIS, por cuanto su contenido es completamente diferente al de la propuesta inicial, contemplándose ahora de nuevas un nuevo régimen de obligaciones que debe ser controlado	

		técnicamente por dicho procedimiento. **2. Observaciones sobre la necesidad de diferenciar el concepto de establecimiento comercial por el de operador económico dedicado a la actividad comercial.** El texto del real decreto, tal y como se encuentra actualmente redactado, no contravendría la normativa estatal que regula la ordenación de la actividad comercial, esta es, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. El motivo atiende a que, en los términos en que está redactado el artículo 1.2 y el artículo 3.1, las obligaciones de etiquetado recaerán exclusivamente en el establecimiento comercial y no en el operador comercial. Esto supone que el ámbito subjetivo de aplicación de la norma es el titular/propietario del establecimiento donde se lleva a cabo la actividad comercial y no el titular de la actividad (empresa o autónomo). Pese a que el artículo 1 relativo al ámbito de aplicación se extiende únicamente a los establecimientos comerciales, parece que existe una contradicción a la hora de redactar los artículos 4.1, 4.2 y 5.1 al recogerse a los “operadores económicos que gestionen establecimientos comerciales” o a los “operadores	

		económicos que comercialicen productos”, por lo que se aconseja una mejora de redacción o una delimitación de conceptos a efectos de aplicación de esta norma. De mantenerse la redacción actual, podemos considerar que no hay vulneración de normativa estatal de carácter básico ni impacto directo sobre la ordenación de la distribución comercial. No obstante, se deben considerar las posibles consecuencias económicas de mantener esta redacción: el coste adicional que asumiría en su totalidad el titular/propietario del establecimiento (coincida o no en el mismo que titular de la actividad comercial), y el impacto inflacionista que podría generar: a) el precio del alquiler de los locales comerciales; sería un gasto que podría verse repercutido en la renta arrendaticia que ha de satisfacer el titular de la actividad (operador/distribuidor comercial) al propietario del local, lo que posiblemente suponga un aumento del precio final de venta a los consumidores. b) reticencia por parte de los propietarios de locales de alquilarlos para el desarrollo de una actividad comercial. Esta disminución de la oferta, con una misma demanda de alquiler, generaría también una subida del precio de los alquileres de	

		locales para uso comercial, lo que posiblemente también suponga un aumento del precio final de venta a los consumidores.	
Observaciones Generales			
PREÁMBULO			
Preámbulo	**Ministerio de Industria y Turismo**	Se ha detectado una errata en el noveno párrafo del apartado I del preámbulo, ya que “Gobierno” debe escribirse con mayúscula al hacer referencia a que “Este real decreto da cumplimiento a la mencionada disposición adicional a través de la implantación del etiquetado accesible como medida para garantizar la accesibilidad universal en el proceso de adquisición de los bienes y productos de consumo regulados, cumpliendo así el **Gg**obierno de España con el compromiso de promover un consumo más accesible e inclusivo para las personas con discapacidad.”.	**Se acepta.**
Preámbulo	**Ministerio de Industria y Turismo**	Se sugiere incluir en el párrafo cuarto del apartado III del preámbulo una **mención del contenido de la disposición final cuarta** del proyecto de real decreto, relativa a su entrada en vigor.	**Se acepta.**
Preámbulo			

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN			
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación	**Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**	**Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación**. Se mantiene la inclusión de los **productos alimenticios** -anexo, letra c)- dentro de las obligaciones de accesibilidad en el punto de venta. Existe un marco regulatorio horizontal en la Unión Europea (Reglamento UE 1169/2011) que armoniza íntegramente la información alimentaria. La imposición de requisitos nacionales adicionales sobre materias ya armonizadas vulnera los artículos 38 y 39 de dicho Reglamento. Asimismo, al afectar a productos agrícolas regulados por la Organización Común de Mercados (Reglamento UE 1308/2013), cualquier disposición nacional que altere las condiciones de venta o añada costes específicos es incompatible con los principios de la OCM.	**Se rechaza:** El Real Decreto incorpora medidas nacionales contempladas en el artículo 39 del Reglamento (UE) Nª 1169/2011, "Medidas nacionales sobre las menciones obligatorias adicionales", en concreto por protección de la salud (letra a) del artículo 39). Dicha obligación no entra en contradicción con el Reglamento ya que se trata de información a suministrar en el punto de venta, no en el envase del producto. Por tanto, todos los productos independientemente de su procedencia están igualmente obligados.

			Asimismo, no se están alterando las condiciones de venta ni añadiendo costes específicos a los productos, únicamente introduciendo obligaciones de información.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación			
ARTÍCULO 2. ETIQUETADO ACCESIBLE			
Artículo 2. Etiquetado accesible	**Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**	**Artículo 2. Etiquetado accesible.** El proyecto reduce el concepto de etiquetado accesible casi exclusivamente al sistema braille, desplazando las soluciones tecnológicas como una opción a incorporar (artículo 4), cuando el braille debería establecerse como una medida opcional y voluntaria dada su escasa penetración en el conjunto de potenciales consumidores afectados por la medida.	**Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica establece: "etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la

			accesibilidad universal", por lo tanto, el uso del braille es de obligado cumplimiento.
Artículo 2. **Etiquetado accesible**			
ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DE ACCESIBILIDAD			
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Ministerio de Sanidad**	De conformidad con lo establecido en el artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en relación con el texto recibido relativo al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo, una vez consultados los centros directivos y organismos adscritos de este Departamento, se formula la siguiente observación: Se observa que el etiquetado accesible se aplicará a los detergentes y limpiadores que, aunque tienen su legislación específica, también están sujetos al Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. A este respecto, de conformidad con el artículo 3.2	**Se acepta.** Se elimina "p="

		b) del proyecto de Real Decreto, se incluirá la indicación de “p=” en la etiqueta generada en braille en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. Se recuerda que, para las sustancias o mezclas vendidas al público en general y clasificadas en las clases de peligro más preocupantes, el propio Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, ya establece disposiciones específicas relativas a la advertencia detectable al tacto. Por ello, cuando los detergentes y limpiadores vendidos al público estén clasificados en esas clases de peligro, la indicación de “p=” propuesta podría resultar redundante.	
Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**	Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. La imposición del modelo de «impresión a demanda» traslada al sector de la distribución una carga financiera y logística desproporcionada que, al obligar a los establecimientos a hacerse cargo íntegramente la adquisición de tecnología braille y la formación técnica de personal, afecta a la competitividad de los operadores españoles frente al mercado único europeo.	**Se rechaza:** La persona con discapacidad visual puede requerir una atención superior a la de un consumidor sin la misma, por lo que la atención debe ser personalizada para poder acceder a los

		Se propone modificar el artículo 3.2 a) de modo que pase a decir: “Atención ~~personalizada~~ a personas con discapacidad visual acreditada en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra. Esta asistencia se articulará atendiendo a los recursos humanos y técnicos que se dispongan, velando por que la ayuda sea efectiva sin comprometer la seguridad operativa del centro.”. La MAIN asume erróneamente que estas tareas pueden ser absorbidas por el personal actual sin evaluar el impacto en la prevención de riesgos laborales y la organización del trabajo. La propuesta de articular esta asistencia en función de los recursos disponibles optimiza la organización, ya que permite adaptarla al funcionamiento normal del establecimiento con tal de evitar interrupciones en los pasillos. La redacción propuesta permite cumplir con el objetivo de accesibilidad sin imponer una carga operativa que resulte inasumible para el volumen de artículos y para la planificación de la plantilla actual o que ponga en riesgo la seguridad y el normal funcionamiento del establecimiento en cuestión.	productos con las mismas garantías. Por otra parte, la impresión de los alérgenos se establece a demanda para reducir los costes de impresión únicamente a los casos en que el consumidor con discapacidad visual lo solicite.

		La obligación de implantar técnicamente una opción de etiquetado físico en braille para la **venta por vía electrónica** añade una complejidad logística crítica en las fases de recogida y reparto, desplazando una carga económica desproporcionada hacia los canales digitales de los operadores españoles. Esos mismos productos vendidos on-line en una empresa que no tenga presencia física tampoco se verán afectados por la norma, puesto que viene referida la obligación a establecimientos “físicos”, creando nuevamente otra discriminación en la venta electrónica entre los que tienen establecimiento físico y los que no lo tienen -plataformas digitales con sede en otro país no tienen que cumplir con la norma-, creando una carga burocrática más a aquellos que tienen establecimiento físico. Esta obligación vulnera, de forma muy clara, el principio de libertad de empresa y el de seguridad jurídica, resulta completamente desproporcionado y, además, establece una discriminación injustificada. La impresión "a demanda" de **datos críticos** como alérgenos ("a/i") y fechas de caducidad por parte del personal de la tienda supone un riesgo de error humano en la transcripción de datos de seguridad	

		alimentaria. Este artículo impone a algunos operadores de distribución una obligación desproporcionada, tanto por su complejidad de aplicación como por su coste. La impresión en braille por producto, a demanda, en tienda física y también en el canal online no se adecúa a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Lo conveniente sería establecer no solo la voluntariedad de la medida sino también diferentes alternativas entre las que los operadores pudieran escoger la que mejor se adapte a sus necesidades y garantice que la mayoría de los consumidores con discapacidad visual podrán acceder a la información alimentaria obligatoria.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Ministerio de Economía, Comercio y Empresa**	En relación con el artículo 3, Obligaciones de accesibilidad, se insta a **valorar la eliminación en el apartado 2.a)** de la palabra “acreditada” de la referencia a personas con discapacidad visual como forma de agilizar la prestación práctica de la obligación de atención personalizada.	**Se acepta**: Se acepta la eliminación de la obligación de la acreditación al entenderse que únicamente aquellas personas con discapacidad visual que lo precisen harán uso

			de esta ayuda. La obligación de acreditación, además, puede demorar los tiempos de la prestación y tener implicaciones, además, en la protección de datos de la persona consumidora. La disposición quedaría redactada del siguiente modo: "4. Todos los establecimientos comerciales, con independencia de su superficie de venta y exposición, que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán ofrecer atención personalizada a personas con discapacidad visual ~~**acreditada**~~ en el acceso a los productos

			expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra, en los términos previstos en el artículo 11 del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad			
ARTÍCULO 4. FOMENTO DEL ETIQUETADO ACCESIBLE			
Artículo 4.	**Ministerio de**	Artículo 4. Fomento del etiquetado accesible.	**Se rechaza:**

Fomento del etiquetado accesible	**Agricultura, Pesca y Alimentación**	Se relega las soluciones tecnológicas (como códigos QR o sistemas digitales) a una adopción meramente facultativa. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defiende que las soluciones basadas en **tecnologías digitales** (QR, NaviLens, lectores de pantalla) son la solución "más adecuada y sostenible". Por lo tanto, el artículo 4 deberá permitir que la implantación de estos sistemas tecnológicos **exima al establecimiento comercial** de la obligación de impresión manual en braille, incentivando así la inversión en soluciones digitales más precisas.	La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica establece: "etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal", por lo tanto, el uso del braille es de obligado cumplimiento.
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**			
ARTÍCULO 5. ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE ETIQUETADO ACCESIBLE Y TRATO ADECUADO HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Agencia Española de Protección de Datos**	(…) En este contexto, **la incidencia del proyecto en materia de protección de datos de carácter personal es accesoria y de naturaleza instrumental**, pues no constituye una norma reguladora autónoma del tratamiento de datos personales, ni establece un régimen específico en	**Se rechaza:** Así se entiende, no se estima necesario. Asimismo, en el artículo 4.2 se establece: "El acceso a esta información en ningún caso podrá

		esta materia. De la norma se infiere únicamente la posible realización de determinados tratamientos de datos como consecuencia del proceso de asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado, así como por la necesidad de dispensar un trato adecuado a las personas con discapacidad. (...) En consecuencia, puede afirmarse que el impacto del proyecto de Real Decreto en materia de protección de datos personales es inexistente o, incluso, residual y de carácter eventual. El proyecto no regula ni habilita tratamientos de datos personales de forma directa, ni establece obligaciones de recogida o comunicación de información personal, ni tampoco configura relaciones jurídicas que requieran el tratamiento sistemático de datos de personas físicas. (...) No obstante, según se ha expuesto, desde una perspectiva estrictamente preventiva, no puede descartarse de forma absoluta que, en la aplicación práctica de la norma, pudieran producirse tratamientos de datos personales de carácter accesorio o eventual. Así, por ejemplo,	requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario."

		determinados operadores económicos podrían articular mecanismos internos de gestión de solicitudes de etiquetado accesible, de atención personalizada o de comercialización electrónica que, indirectamente, impliquen el tratamiento de datos personales, aun cuando ello no venga impuesto ni directamente regulado por el Real Decreto. Dichas circunstancias, a su vez, podrían venir determinadas por las normas regulatorias derivadas reglamentariamente de lo previsto en la norma que se informa, que, según su Disposición final tercera —Desarrollo normativo—, "faculta a la persona titular del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto". No obstante, en el supuesto de que llegaran a producirse tratamientos de datos personales de carácter eventual, su licitud debería analizarse a la luz de las bases de legitimación previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679. (...) (...) No obstante lo anterior, y sin perjuicio de dicha conclusión, resulta oportuno introducir	

		determinadas cautelas normativas de carácter preventivo o tuitivo, en línea con lo que viene siendo práctica habitual en otros textos normativos, con el fin de garantizar que, en el hipotético caso de que la aplicación del Real Decreto pudiera dar lugar, de forma indirecta o accesoria, a algún tratamiento de datos personales, este se ajuste plenamente a la normativa vigente. En este sentido, debe tenerse en cuenta que, aunque la norma no prevé expresamente tratamientos de datos, no puede excluirse de manera absoluta que, en la práctica, determinadas actuaciones puedan implicar, en casos concretos, el tratamiento de datos personales. Así podría suceder, por ejemplo, si los operadores económicos decidieran implementar sistemas de gestión de solicitudes, historiales de atención o mecanismos de personalización del servicio que implicasen la recogida de información sobre las personas usuarias. Del mismo modo, en el ámbito del comercio electrónico, podría producirse la inclusión de la solicitud del etiquetado accesible integrada en sistemas más amplios de gestión de pedidos que sí impliquen tratamiento de datos personales. Por ello, aun tratándose de una hipótesis remota y	

		no directamente derivada del texto normativo, se considera conveniente incorporar una previsión expresa que garantice la sujeción de cualquier eventual tratamiento de datos personales a la normativa aplicable. Esta previsión tendría carácter meramente preventivo, complementario y de refuerzo de la seguridad jurídica, sin que ello implique reconocer la existencia de tratamientos en el diseño actual de la norma. En este contexto, se considera adecuado proponer la **incorporación de un nuevo apartado en el artículo 5** del proyecto de Real Decreto, **como último apartado de este**, con una redacción similar a la siguiente: “**Las actuaciones reguladas en este Real Decreto se llevarán a cabo con el debido cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el resto**	

		de normativa aplicable a la materia. **Asimismo, los tratamientos de datos personales que, en su caso, pudieran derivarse de la aplicación de este Real Decreto se ajustarán a los principios relativos al tratamiento establecidos en el artículo 5 del citado Reglamento, en particular a los de licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad y confidencialidad. De igual modo, el responsable del tratamiento adoptará las medidas técnicas y organizativas apropiadas previstas en el artículo 32 del Reglamento para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental.**” La incorporación de esta cláusula resulta coherente con el enfoque general del ordenamiento jurídico en materia de protección de datos, en la medida en que permite reforzar la seguridad jurídica y garantizar la plena aplicación de la normativa vigente en aquellos supuestos en los que, de forma sobrevenida o indirecta, pudieran generarse tratamientos de datos	

		personales. (...) En definitiva, el texto proyectado no plantea objeciones desde la perspectiva de la normativa de protección de datos personales, en la medida en que no regula ni implica, en su configuración actual, el tratamiento de datos de carácter personal. No obstante, por razones de prudencia normativa y de refuerzo de la seguridad jurídica, se considera conveniente incorporar una previsión expresa que garantice la plena sujeción a dicha normativa en caso de que, como consecuencia de su aplicación, pudieran derivarse tratamientos de datos personales de carácter accesorio o eventual, pudiendo adoptarse, a dichos efectos, la cláusula propuesta en el Punto anterior de este informe.	
Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.			
ARTÍCULO 6. RÉGIMEN SANCIONADOR			

Artículo 6. **Régimen sancionador**			
Artículo 6. **Régimen sancionador**			
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA			
Disposición adicional única. **Exención por etiquetado preexistente en braille.**	**Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**	Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille. Aunque la medida se destine al comercio minorista, esta "obligación de marcado" corre el riesgo de ser **transferida, contractual o de facto**, por los minoristas a los fabricantes e importadores. Esto obligaría a los productores a ajustar sus productos y envases únicamente para el mercado español, generando costes específicos que complican la comercialización y distribución, actuando como un obstáculo encubierto a la libre circulación de mercancías (artículo 34 TFUE).	**Se rechaza:** El Real Decreto establece claramente sobre qué agentes recaen las obligaciones.
Disposición adicional única. **Exención por etiquetado preexistente en braille.**			
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA			
Disposición transitoria única. **Régimen transitorio**	**Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**	Disposición transitoria única. Régimen transitorio. El plazo de un año fijado se considera insuficiente para permitir una adaptación técnica y económica adecuada de los establecimientos.	**Se acepta parcialmente.** Se procede a ampliar el plazo a 18meses

<u>Disposición transitoria única</u>. Régimen transitorio	**Ministerio de Industria y Turismo**	Se sugiere ponderar la calificación de la disposición transitoria única, en la medida en que no parece fijar ningún régimen transitorio, por si su contenido pudiera incluirse en el texto bajo otro precepto.	**Se rechaza.** De acuerdo con las DTN el objetio de una disposición transitoria es la de facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación. Este RD tiene por objeto, el garantizar que los supermercados de superficie igual o superiro a los 1.000m2 etiqueten de la forma que se indica en la normativa, para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la información. Puesto que supone un cambio tanto en la forma de trabajar como en la necesidad de adquirir la maquinaria y materiales necesarios, resulta necesario establecer un periodo transitorio para que

			puedan adaptarse a la misma.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio			
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA			
Disposición final primera. Títulos competenciales			
Disposición final primera. Títulos competenciales			
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA			
Disposicion final segunda. Evaluación de la norma			
Disposicion final segunda. Evaluación de la norma			
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA			
Disposición final tercera. Desarrollo normativo			
Disposición final tercera. Desarrollo normativo			
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA			
Disposicion final cuarta. Entrada en vigor			
Disposicion final cuarta. Entrada en vigor			
ANEXO. PRODUCTOS DE CONSUMO DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y CALIDAD DE VIDA.			

Anexo. **Productos de consumo de esperial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida.**			
Anexo. **Productos de consumo de esperial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida.**			
MAIN			
MAIN	**Ministerio de Industria y Turismo**	1). En el apartado “Estructura de la norma” de la ficha de resumen ejecutivo debe **incluirse una mención a la disposición adicional única del proyecto de real decreto**. 2). El apartado referente al objetivo parece contener el objeto, pese a que se refiere a él como “objetivo”. Faltaría **mencionar el objetivo o finalidad de la norma**, es decir, para qué se está regulando el etiquetado accesible. 3). El apartado referente a las alternativas **no analiza alternativa alguna**.	**1) Se acepta.** **2) Se rechaza:** El artículo 1 se refiere al objeto de la norma y expone cuál es el objeto y el ámbito de aplicación. **3) Se rechaza:** Debido a que la disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, insta al gobierno a regular reglamentariamente un

			etiquetado en braille, se considera que un RD es la herramienta más adecuada para dar cumplimiento a lo establecido, no habiendo otras formas de proceder.
MAIN	**Ministerio de Economía, Comercio y Empresa**	**Observaciones al impacto económico de la norma.** Con independencia de que se mantenga o no la redacción actual mencionada en el punto anterior, conforme a los datos proporcionados en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (en adelante, MAIN) que acompaña a la propuesta normativa, se valora desfavorable la medida por resultar desproporcionada al objetivo perseguido: - esta obligación afecta a un 83% de la superficie de venta en España, lo que supone, aproximadamente un total de 13.339 establecimientos comerciales afectado, - el coste medio de una etiquetadora braille está en unos 4.000€; lo que implica un coste total de la medida de 52.000.000€ (4.000€ X 13.000), según la MAIN, cálculo estimado a la baja - el número total de personas con discapacidad visual que utilizan el sistema braille es de 10.000	Se revisará la evaluación del impacto económico

		personas en España, conforme a la información aportada por la Comisión Braille Española. Se considera que hay una desproporción entre el volumen de posibles beneficiados por la medida impuesta: 10.000 personas con discapacidad visual que usan el sistema braille y 13.339 establecimientos que vendrían obligados a cumplir con la medida, nos deja en 0,75 persona por establecimiento que vaya a utilizar este sistema. El hecho de que menos de una persona por establecimiento vaya a utilizar este sistema, supone que los establecimientos realizarán más inversión anual (52 M€) que el coste de uso de la máquina por cada usuario potencial, (5.200€ por cada posible destinatario de la medida vs 4.000€ el coste de la maquina). Asimismo, este proyecto se basa en el actual sistema de etiquetado braille aplicado en Portugal. En concreto, en el caso de Portugal, de las 161.250 personas con discapacidad visual, tan solo 8.000 personas conocen y utiliza el sistema braille (4.96%). La normativa portuguesa establece obligaciones para establecimientos comerciales que venden productos alimentarios y no alimentarios; sin embargo, la exigencia no se impone de forma	

		generalizada a todos los establecimientos, sino que se articula mediante un modelo de implantación limitada, consistente en la disponibilidad de al menos un establecimiento por municipio dotado con impresora braille. Este sistema reduce significativamente la carga económica para el sector comercial, limitando la obligación a aproximadamente 4.800 establecimientos en todo el país, frente a una implantación universal como se pretende en España. Con estos datos, nos encontramos que cada establecimiento correspondería aproximadamente a 1–2 personas usuarias de braille (más que la media ponderada en España >1 persona por establecimiento), y aun existiendo en Portugal más potenciales usuarios de la medida que en España, según la información disponible, el uso efectivo de estas impresoras en establecimientos comerciales ha sido prácticamente inexistente, no habiéndose registrado solicitudes de uso por parte de consumidores. La comparación con el modelo aplicado en Portugal pone de manifiesto que, incluso en un contexto en el que el número potencial de usuarios por establecimiento sería superior al previsto en	

		España, la implantación de este sistema se ha articulado mediante un modelo de obligación limitada y territorialmente concentrada, evitando su extensión generalizada a todos los establecimientos comerciales. Asimismo, la experiencia portuguesa evidencia que, pese a la existencia de un mayor número relativo de potenciales usuarios por establecimiento, la utilización efectiva del sistema en el ámbito comercial ha sido prácticamente inexistente, lo que refuerza las dudas sobre la proporcionalidad y eficacia de una implantación universal de la medida. En consecuencia, estos antecedentes comparados parecen aconsejar la adopción de un modelo de implantación más gradual o focalizado, que permita garantizar la accesibilidad perseguida por la norma sin imponer una carga económica desproporcionada al conjunto del sector comercial, en línea con los criterios de proporcionalidad y eficiencia que deben regir la intervención normativa. En consecuencia, este centro directivo no se opone a la operatividad de la medida ni a su finalidad, sino a su practicidad y recuperación económica. Por ello, y, **para que resulte rentable la**	

		compra y uso de la máquina, se propone que la obligación se extienda solo a los municipios que cuenten con más de 20.000 habitantes, por ser este el umbral que establece la Ley de Bases de Régimen Local para obligar a estos municipios a contar con servicios sociales (lo que aseguraría su uso por parte de potenciales usuarios). Supletoriamente, **se podría valorar la posibilidad de que en aquellos municipios que cuenten con menos de 20.000 habitantes, la obligación se extienda a aquellos establecimientos comerciales que pertenezca a operadores económicos con una presencia mínima del 10% en la provincia a la que pertenezca dicho municipio**. En el caso de que el **departamento proponente opte por mantener la redacción actual** de la regulación descrita anteriormente, sugerimos que se reconsidere **reforzar la evaluación del impacto económico contenida en la MAIN mediante un análisis más exhaustivo de la necesidad y proporcionalidad de la obligación de etiquetado en braille, así como un análisis de los efectos sobre la competencia al introducir esta obligación a partir de determinados umbrales de superficie**	

		comercial. El objeto de norma responde a la necesidad de garantizar las relaciones de consumo en condiciones de seguridad y de igualdad para las personas con discapacidad. Este objetivo podría vincularse a razones imperiosas de interés general de protección de la salud pública, los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores y los objetivos de la política social y cultural, entre otros.	
MAIN	**Agencia Española de Protección de Datos**	(...) Por otra parte, y en coherencia con la inexistencia de tratamientos de datos personales previstos en la norma, debe señalarse expresamente que **no resulta exigible la realización de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos**. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, la obligación de llevar a cabo una evaluación de impacto surge únicamente cuando un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. Dado que el proyecto de Real Decreto no prevé la realización de tratamientos de datos personales, ni	**No procede establecer comentario**

		mucho menos tratamientos de alto riesgo, no concurre el presupuesto habilitante para la exigencia de dicha evaluación. **Incluso en el hipotético caso de que pudieran producirse tratamientos accesorios de carácter limitado, estos no presentarían, en principio, un nivel de riesgo que justificase la realización de una evaluación de impacto, al tratarse de tratamientos puntuales, no sistemáticos y de escasa entidad, vinculados a la prestación de servicios concretos y no a la creación de sistemas de información complejos o masivos**. En consecuencia, puede concluirse que **el proyecto de Real Decreto presenta un impacto nulo o muy reducido en materia de protección de datos personales, no resultando necesaria la adopción de medidas adicionales más allá de la inclusión de la cláusula preventiva anteriormente propuesta**. En definitiva, el texto proyectado no plantea objeciones desde la perspectiva de la normativa de protección de datos personales, en la medida en que no regula ni implica, en su configuración actual, el tratamiento de datos de carácter	

		personal. No obstante, por razones de prudencia normativa y de refuerzo de la seguridad jurídica, se considera conveniente incorporar una previsión expresa que garantice la plena sujeción a dicha normativa en caso de que, como consecuencia de su aplicación, pudieran derivarse tratamientos de datos personales de carácter accesorio o eventual, pudiendo adoptarse, a dichos efectos, la cláusula propuesta en el Punto anterior de este informe.	
Artículo	**Interesado**	**Posición / Respuesta**	**Valoración**
OBSERVACIONES GENERALES			
Observaciones Generales	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	Con el fin de dar respuesta al trámite de audiencia, previsto en el artículo 26.6 de Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, este Consejo realiza las siguientes observaciones: (…) Nuestro compromiso como asociaciones de personas consumidoras y usuarias es asegurar la existencia de un marco normativo que permita garantizar la accesibilidad de la información sobre los bienes y productos de consumo a dichas personas. En este sentido apoyamos medidas que pretendan mejorar la accesibilidad de la información para las personas con discapacidad, en especial, las personas con discapacidad visual,	No se hace necesario incluir comentarios

		siempre al amparo del marco regulatorio europeo en esta materia. A este respecto, debemos indicar aspectos clave a considerar en tal propuesta normativa para evitar, en la medida de lo posible, su retirada nuevamente en el procedimiento TRIS (Technical Regulation Information System). La Comisión Europea emitió un dictamen razonado sobre el proyecto presentado con anterioridad, que suponía obstáculos injustificados al mercado único de la Unión Europea, en especial en los productos y bienes de consumo afectados. Con el dictamen emitido por la Comisión Europea se produjo la suspensión automática del procedimiento, obligando a España a revisar en profundidad el contenido, no solo por los riesgos de posibles fragmentaciones del mercado único, al ser únicamente una existencia a nivel nacional pero no armonizada en el ámbito europeo, y, por otra parte, por la desproporcionalidad a nivel técnico de las medidas propuestas, junto con los impactos económicos y operativos de las mismas en relación con los envases de estos productos de consumo. Por consiguiente, la propuesta normativa debe analizarse a la luz de los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y adecuación	

		al Derecho de la Unión Europea. En todo caso, el propósito de garantizar la accesibilidad es compartido; las dudas se ubican en el instrumento elegido y en su adecuación a los principios de necesidad y proporcionalidad, así como a la coherencia con el acervo europeo en materia de información de producto y accesibilidad. En este sentido, destacamos que la seguridad de la persona consumidora se basa en la existencia de una base de datos electrónica, fiable y normalizada, que proporciona datos completos y actualizados de los productos. La modificación de esta estandarización puede suponer un incremento sustancial de riesgo y complejidad para las personas consumidoras ya que requeriría la captura manual de datos variables (lote, fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, alergenos, peligrosidad…), lo que impediría facilitar un consumo seguro a las personas con discapacidad visual. Otra consideración general importante es la preminencia del sistema braille en el Proyecto de Real Decreto. Así, la baja prevalencia del sistema Braille entre la población con discapacidad visual, que tiende a apoyarse en otras soluciones de	

		lectura y reconocimiento, reforzaría la conveniencia de priorizar canales digitales accesibles que sí dieran cobertura a la totalidad del colectivo objetivo y vulnerable. La propia memoria de impacto normativo establece la poca utilización de este sistema entre las personas con discapacidad de visión, estimando los posibles usuarios en no más de 10.000. De esta manera, la utilización del sistema Braille resuelve el tema solo para las personas que sepan usarlo, que son solo una parte, pequeña y decreciente, de los que tienen discapacidad visual, dejando sin solución a las que no lo sepan, lo cual generaría una discriminación entre las personas con discapacidad visual según sepa o no usar el sistema Braille, algo que va en contra de la vocación y espíritu de la norma. Una solución diferente, por el contrario, basada en un código QR u otro tipo de soporte de datos digital normalizado, no solo es absolutamente inclusiva de todas las personas con discapacidad visual, sino que también es una ayuda para otros colectivos vulnerables, como por ejemplo personas con baja visión, o personas mayores que no sean capaces de leer con comodidad la letra pequeña de los envases o etiquetado, etc. Por último, el empleo de un código QR u otro tipo de soporte de datos, digital normalizado y abierto,	

		que permita obtener información relevante sobre el producto envasado, no solo es compatible, sino que ofrece una solución técnica para atender otras necesidades y obligaciones, como, por ejemplo, el uso de otras lenguas oficiales. Todo lo anterior, sin perjuicio de reiterar que compartimos con el legislador el objetivo y la iniciativa regulatoria, porque eleva los niveles de protección de las personas con discapacidad visual, favorece su inclusión social y su autonomía personal y facilita el ejercicio de sus derechos como consumidores en condiciones de igualdad.	
Observaciones Generales	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	**Artículo xx (nuevo). Definiciones.** Dado que la futura norma incorpora términos, conceptos y expresiones que conviene precisar, consideramos adecuado incluir un nuevo artículo dedicado a definiciones, aportará mayor claridad y exactitud al contenido normativo. Sin perjuicio de otras, deben figurar las definiciones correspondientes a dispositivo móvil generalizado y a bien y producto de consumo de especial relevancia; esta última, fundamentalmente, por si en un futuro se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto a otros bienes y productos de consumo.	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal

			de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, se ha optado por mantener la misma terminología utilizada en dicha ley.
Observaciones Generales	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	**Artículo xxx (Nuevo). Observatorio de Seguimiento del Etiquetado Accesible.** <u>Se propone:</u> Para el correcto desarrollo, aplicación, fomento, análisis y seguimiento del etiquetado accesible consideramos necesario la creación del Observatorio de Seguimiento del Etiquetado Accesible, como órgano consultivo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.	**Se rechaza.** No se considera necesario el crear un Observatorio de seguimiento pues se presupone que con los medios de los que ya se disponen, se puede garantizar todo lo indicado en el propio Real Decreto.

		El Observatorio debe ser un espacio de participación y co-gobernanza en el que confluyan, junto con las administraciones públicas competentes, representantes de las organizaciones de personas consumidoras -por designación del Consejo de Consumidores y Usuarios-, de las entidades del Tercer Sector, asociaciones sectoriales y representantes de los operadores económicos que gestionan establecimientos comerciales, así como de la Comisión Braille Española El Observatorio tendría encomendadas, al menos, las siguientes funciones: • Realizar seguimiento de las actividades e iniciativas emprendidas en aplicación del artículo 4.1 y artículo 5.1 y 2 y sus resultados. • Debatir, analizar y realizar seguimiento de las necesidades sociales de cada momento y la correcta aplicación del etiquetado accesible. • Acordar la elaboración y difusión de materiales informativos y campañas de comunicación sobre la correcta implementación del etiquetado accesible y educación de las personas consumidoras y usuarias en la materia. • Colaborar y prestar apoyo al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la elaboración del informe de balance sobre la aplicación del Real Decreto y la situación y	

		evolución del etiquetado accesible, con especial atención a la del etiquetado en el sistema braille. • Formular propuestas de desarrollo o modificación del etiquetado accesible para favorecer el óptimo cumplimiento de los objetivos perseguidos con la norma. • Fomentar y favorecer el diálogo y la comunicación entre los diferentes agentes implicados. Es por todo ello, por lo que se realiza una propuesta de adición con la incorporación de un nuevo artículo que regule la creación, objetivos, composición y funciones del Observatorio de Seguimiento del Etiquetado Accesible.	
Observaciones Generales	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Confederación Autismo España (CONFAE)**	Justificación general: Después de analizar el proyecto de real decreto que se somete a información y consulta pública, se ha detectado un importante protagonismo de una dimensión específica del paradigma de la accesibilidad universal, la accesibilidad visual, como así se reconoce en diferentes puntos del proyecto de articulado para la norma que se traslada. Este excesivo protagonismo de la accesibilidad visual puede hacernos perder la oportunidad de crear una norma que verdaderamente responda al principio de accesibilidad universal que ordena	No aplica. Las observaciones a artículos concretos se abordarán en los mismos.

		nuestro ordenamiento jurídico en materia de accesibilidad (artículo 2, entre otros, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social o en el II Plan Nacional de Accesibilidad Universal: España país accesible). Para ello, se ve Importante avanzar en la apuesta por la accesibilidad cognitiva. Además, se cree importante poner en relación el contenido del proyecto de articulado con los preceptos incluidos en otras normas imperativas vigentes, como la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, cuyo artículo 7.7 establece la obligación de las personas fabricantes de ofrecer etiquetado que siga “los criterios del lenguaje claro”. Así como otras normas, como el actual proyecto de Reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva que coordina el Real Patronato sobre Discapacidad a través del Centro Español de Accesibilidad	

		Cognitiva. Por ello, se ofrecen diversas aportaciones y propuestas de modificación de diferentes partes del articulado trasladado como proyecto de Real Decreto que esperamos puedan ser tenidas en cuenta. De otro lado, se detecta un uso algo confuso de algunos términos empleados para establecer obligaciones en materia de accesibilidad cognitiva, lo cual puede generar confusión, por ello, se recurre al contenido del artículo 2 de la citada Ley General de Personas con Discapacidad para ofrecer aportaciones y modificaciones al respecto.	

Observaciones Generales	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Experta nacional y Directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española**	<u>Argumentación general</u> Las propuestas formuladas se fundamentan en el marco jurídico vigente en materia de accesibilidad universal y no discriminación. En particular, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España y parte integrante del ordenamiento jurídico, establece en sus artículos 9 y 21 la obligación de garantizar el acceso a la información y a la comunicación en condiciones de igualdad. Asimismo, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, reconoce la lengua de signos española, y la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico, como un medio de comunicación esencial para las personas sordas y sordociegas, exigiendo a los poderes públicos la adopción de medidas que aseguren su utilización efectiva. En coherencia, el presente proyecto de real decreto, orientado a garantizar la accesibilidad universal en el ámbito del consumo, puede integrar de manera proporcionada la dimensión de accesibilidad a la información y comunicación mediante la lengua de signos, a través de soluciones tecnológicas flexibles que no alteren su objeto ni impongan cargas desproporcionadas.	No aplica. Las observaciones a artículos concretos se abordarán en los mismos.

Observaciones Generales	**Consejo Nacional de la Discapacidad - DG Agenda 2030. Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.**	**1. Análisis del alineamiento del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030** El ámbito de aplicación del Real decreto se encuentra altamente alineado con los siguientes principios transversales de la Agenda 2030: - Integración: los ODS están interrelacionados entre sí. - Sostenibilidad: equilibrio entre los aspectos económico, social y medioambiental. - Participación: colaboración de múltibles actores (gobiernos, sociedad civil, agentes sociales, academia, sector privado, etc). - No dejar a nadie atrás: priorridad a los grupos más vulnerables. A fin de llevar a cabo la implementación en España de la Agenda 2030, con el objetivo de afrontar la pobreza, la exclusión y la desigualdad social, en nuestro país contamos con la acción multiplicadora de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los 4 retos país definidos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS). Así, el Proyecto de Real Decreto por el que se	No aplica. Las observaciones a artículos concretos se abordarán en los mismos.

		regula el etiquetado accesible de productos de consumo se alinea fundamentalmente con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030: - ODS3: Salud y Bienestar (facilita información a personas consumidoras vulnerables sobre productos de consumo relevantes para su seguridad, integridad y calidad de vida). - ODS10: Reducción de las desigualdades (accesibilidad universal y utilización del sistema de lectoescritura Braille). - ODS12: Consumo y producción sostenibles (hace posible el consumo responsable de las personas consumidoras vulnerables). Los ODS en los que existe un mayor margen de mejora respecto a su integración por parte del Real Decreto son: - ODS5: Igualdad de género. - ODS16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas. **2. Análisis del alineamiento del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo con los Nuevos Retos País de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Revisada (EDSr)** El Proyecto de Real Decreto por el que se regula el	

		etiquetado accesible de productos de consumo se encuentra altamente alineado con 3 de los 4 ejes estratégicos de la EDSr. Concretamente con los siguientes: - Reto de País 4 Vidas libres, iguales y en comunidad. El Real Decreto enlaza directamente con algunas de las ideas-fuerza del Reto País 4 y, en particular, con la lucha contra todas las formas de discriminación (incluida la discriminación interseccional o por acumulación de variables de discriminación), la igualdad de género, y el favorecimiento de una ciudadanía activa. - Reto País 2 Un sistema económico circular generador de bienestar y justicia social, laboral y ambiental. La conexión es intensa en lo que afecta al modo de producción y consumo sostenibles. **3. Valoración global del alineamiento del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo con la Agenda 2030 y la EDSr 2026** 3.1 Principales elementos de alineamiento - El Real Decreto tiene un impacto directo en varios aspectos clave del eje estratégico de la EDSr dedicado a Vidas libres, iguales y en	

		comunidad (Reto País 4), en particular, en lo que afecta a la lucha contra todas las formas de discriminación (incluida la discriminación interseccional o por acumulación de variables de discriminación) y los derechos de la ciudadanía. En este ámbito aparece regulado un aspecto clave para garantizar la accesibilidad universal a la información del etiquetado de las personas con discapacidad visual: la utilización del sistema de lectoescritura Braille. - El Real Decreto sintoniza también con la preocupación ecológica presente en el Reto País 2 Un sistema económico circular generador de bienestar y justicia social, laboral y ambiental. Así, conecta con el modo de producción y consumo sostenible auspiciado por el Reto País 2 de la EDSr, haciendo posible el consumo responsable (es decir, la compra de productos consciente y con menos embalaje) para las personas consumidoras vulnerables (fundamentalmente, personas con discapacidad, mayores y personas con bajos niveles de renta). La atención a este colectivo socialmente vulnerable prestada por el Real Decreto, se encuentra en línea con la atención prestada a las políticas sociales y a los colectivos sociales más vulnerables en la EDSr.	

		3.2 Principales áreas de mejora - La EDSr concede un papel central a la evidencia, la evaluación y los sistemas de seguimiento, en coherencia con el marco de la Agenda 2030. Por su parte, la disposición final segunda del Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo establece la elaboración por parte del Ministerio DSCA, en un plazo de dos años desde la aprobación del RD, de un informe de balance sobre la aplicación del etiquetado accesible. En ese sentido se echa en falta la referencia explícita a un sistema de indicadores que permita monotorizar la aplicación real de los contenidos regulados por el Real Decreto y el nivel de consecución de su objetivo último (la accesibilidad universal al etiquetado inclusivo). - Como sabemos, uno de los principales elementos de valor de la EDSr es la incorporación de un enfoque transversal de igualdad de género, diversidad y no discriminación (Reto País 1 y Reto País 4). Respecto a este enfoque de trasversalidad, el Real Decreto podría enriquecerse regulando el uso del lenguaje sexista e incorporando algunas medidas orientadas a detectar y corregir la posible brecha de género existente en la accesibilidad	

		universal al etiquetado inclusivo. En este mismo sentido, se recomienda prestar atención al posible impacto de la interseccionalidad (acumulación de variables de discriminación, como género, raza, clase, edad, u orientación sexual, en un mismo segmento poblacional) en la accesibilidad universal al etiquetado inclusivo. - Se detecta un relevante margen de mejora en el Real Decreto respecto a la incorporación del enfoque transversal de coherencia de políticas públicas auspiciado por la Revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDSr). La EDSr incorpora el enfoque intersectorial y la necesidad de coherencia de políticas públicas, promoviendo sistemas de implementación integrados que trascienden las actuaciones aisladas. Con ello, el Sistema Integral de Coherencia de Políticas de Desarrollo Sostenible, garantiza la alineación transversal de todas las políticas públicas con los ODS de la Agenda 2030. Adicionalmente, la EDSr incorpora, a través del Sistema Integral de Coherencia de Políticas (CPDS), la contratación pública socialmente responsable y sostenible como herramienta clave para la aplicación del enfoque de coherencia en las políticas públicas. En este sentido, no se observa una referencia específica en el Real Decreto a la consideración de riesgos	

		medioambientales ni al fomento de la contratación pública sostenible y responsable. - Se recomienda la intensificación del fomento de la participación social, de la ciudadanía y de la sociedad civil españolas, a través de la incorporación de mecanismos específicos y efectivos de participación social en todo el ciclo de diseño, implementación y evaluación del etiquetado inclusivo. Todo ello en coherencia con los principios de cooperación multiactor, gobernanza democrática y rendición de cuentas de la EDSr. - Resulta aconsejable la realización de un esfuerzo adicional por parte del Real Decreto para asegurar que la implementación del etiquetado accesible responda a la diversidad territorial de nuestro país, atendiendo al objetivo de alcanzar la cohesión social con vertebración territorial auspiciada por la EDSs. Todo ello en línea con el Reto país 3 de la EDSr: Vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y afrontar la emergencia climática.	
Observaciones Generales	**Consejo Nacional de la Discapacidad - DG Agenda 2030. Ministerio Derechos Sociales,**	**Propuestas para el reforzamiento de la integración de la Agenda 2030 y la EDSr en el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo** Las siguientes propuestas tienen como objetivo	**1) Se ha incluido mención, quedando redactado de la siguiente forma (Parte III, párrafo 9):** **"Con este real decreto se avanza en el**

	Consumo y Agenda 2030.	optimizar la alineación del Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo con la Agenda 2030 (en particular con los ODS 5, 10, 12 y 16) y la EDSr. En particular, persiguen fortalecer aspectos clave para el desarrollo sostenible como la reducción de las desigualdades sociales y la mejora de la igualdad de oportunidades, la rendición de cuentas y la gobernanza multiactor. Todo ello con el fin último de optimizar el nivel de coherencia del Real Decreto con la EDSr 2026 y de asegurar su contribución a la transición social, digital y verde, comprometida por el Gobierno de España, en el nuevo ciclo estratégico para el desarrollo sostenible formulado en la EDSr 2026. **- PROPUESTA 1** Incorporación al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo de un párrafo específico sobre la alineación de la misma con la Agenda 2030 y la EDSr. Una posible redacción tentativa sería la siguiente: “El Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo se alinea con los compromisos asumidos por España en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, contribuyendo de forma transversal, entre otros, a	**cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, principalmente de los ODS 10 (Reducción de las desigualdades) y 12 (Producción y consumo responsables)."** **2)** Se evaluará el desarrollar toda una serie de indicadores para cumplir con la "Disposición final segunda" de este RD Por otro lado, y en relación con la propuesta de incorporar un mecanismo de reclamación para los consumidores vulnerables, el propio RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes

		los ODS 3, 10 y 12: 3 (Salud y bienestar), 10 (Reducción de las desigualdades), y 12 (Consumo y producción sostenibles). Asimismo, se integra en la Revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDSr) como instrumento de apoyo a los Retos País relativos al desarrollo de: Vidas libres, iguales y en comunidad (Reto País 4), y Un sistema económico circular generador de bienestar y justicia social, laboral y ambiental (Reto País 2). **PROPUESTA 2** La EDSr concede un papel central a la evidencia, la evaluación y los sistemas de seguimiento, en coherencia con el marco de la Agenda 2030. Para ello, la EDSr desarrolla marcos de seguimiento y evaluación de políticas públicas, basados en la Agenda 2030, incorporando una batería de metas cuantificables e indicadores cuantitativos de progreso asociados. En esa línea, se propone la definición, y acceso público al menos con frecuencia anual, de una batería de indicadores de impacto sobre el desarrollo sostenible y la accesibilidad universal al etiquetado inclusivo de los colectivos sociales más desfavorecidos. Los indicadores tendrán como objetivo aportar	complementarias; recoge en su artículo 21; así como determinada normativa autonómica, establece la posibilidad de que toda persona ponga reclamación en un establecimiento. De esta manera, no se hace necesario el incluir dicha propuesta de incorporar en el artículo 6 de este proyecto de RD un mecanismo de reclamación para los consumidores vulnerables. **3)** Esta normativa ha sido evaluada desde la perspectiva de la igualdad de género. Por ello, **no se considera necesario el incluir una prohibición explícita del uso de lenguaje/mensajes sexistas pues la infomación que contiene el etiquetado accesible será el**

		información relevante sobre aspectos como: % de establecimientos comerciales en una zona geográfica que incorporan en los productos que comercializan etiquetado accesible para las personas consumidoras vulnerables (fundamentalmente, personas con discapacidad, mayores y personas con bajos niveles de renta), % productos afectados por el RD que incorporan etiquetado accesible según categoría, nº de reclamaciones sobre etiquetado accesible resueltas/no resueltas, presencia de la brecha de género (% de mujeres que usan productos con etiquetado accesible), presencia de otros sesgos socialmente discriminatorios vinculados a la interseccionalidad, uso correcto del lenguaje en el etiquetado y no presencia de lenguaje sexista, entre otros posibles. Recordamos que, en algunos casos, como la Estrategia de Pobreza Energética (ENPE) estos indicadores se crean en un proceso iniciado a partir de la entrada en vigor del citado texto. Así mismo, se propone la inclusión y seguimiento de los citados indicadores en el informe de balance bianual previsto en el RD sobre la aplicación del etiquetado accesible. Finalmente parece necesario incorporar al art. 6 del Real Decreto un mecanismo de reclamación para los consumidores vulnerables, disponible en	**indicado en este Proyecto de RD** **4) No resulta necesario** incluir dichas menciones en el articulado del RD. No se considera necesario pues la colocación del etiquetado accesible propuesto se considera que no se va a desviar de la propia actuación de etiquetado habitual de un producto, al cual ya se le aplican estos principios y prácticas respetuosas. **5) No es necesario** crear un Consejo Social Consultivo para hacer seguimiento al cumplimiento y desarrollo de este RD. Se considera que los medios de los que ya se disponen, son suficientes para garantizar la aplicación de este RD **6) No resulta necesario.**

		los establecimientos comerciales (vía telefónica, página web o/y presencialmente), que les permite reportar las deficiencias detectadas en la implantación del etiquetado accesible y que facilite su seguimiento por parte de la administración competente a fin de introducir posibles medidas correctoras. **PROPUESTA 3** Con el objetivo de reforzar la incorporación transversal de la perspectiva de género al Real Decreto, se propone la inclusión de medidas específicas como: - la prohibición explícita del lenguaje sexista y de los mensajes sexistas en el etiquetado accesible. - el análisis de la posible brecha de género existente en la accesibilidad universal al etiquetado inclusivo, mediante la obtención de datos desagregados de acceso por género, y también a través de la atención a los posibles impactos diferenciados de la interseccionalidad en grupos de mujeres específicos (mujeres con discapacidad y/o mayores y/o migrantes y/o jóvenes, entre otras variables determinantes). Este es un aspecto también que se puede construir en el tiempo vía recogida de datos y finalizar con una propuesta desagregada para posteriores mejoras según impacto de género.	En el caso de los productos alimenticios, no solo deberán cumplir con este nuevo RD sino también con la normativa comunitaria y nacional existente. En este sentido cabe hacer mención al RD 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios; donde, en su artículo 18, Lenguas en el etiquetado, se establece lo siguiente: " Las indicaciones obligatorias del etiquetado de los productos alimenticios que se comercialicen en España se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los

		PROPUESTA 4 Con el objetivo de contribuir al desarrollo del Sistema Integral de Coherencia de Políticas (CPDS), incorporado por la EDSr a través de la herramienta clave de la contratación pública socialmente responsable y sostenible, se propone la introducción de cláusulas sociales y medioambientales referidas al etiquetado accesible como criterio vinculante y auditable en licitaciones y convenios. Algunos de los criterios a considerar para verificar la aplicación real de esas nuevas cláusulas de contratos, convenios, concesiones y patrocinios públicos pueden ser: % compras públicas con etiqueta accesible impresa, % compras públicas con etiqueta accesible impresa según categoría de producto, % de pliegos de contratación que incorporan el etiquetado accesible como requisito para licitadores, entre otros. Además, conectando con el Reto País 2 de la EDSr (Un sistema económico circular generador de bienestar y justicia social, laboral y ambiental), en lo que respecta al fomento de una transición justa verde y digital, se recomienda introducir una mención en el articulado del RD al fomento de prácticas respetuosas con el medio ambiente en el	productos tradicionales elaborados y distribuidos exclusivamente en el ámbito de una Comunidad Autónoma con lengua oficial propia." **7) ....**

		etiquetado accesible (ecolabel, ecodiseño, gestión de residuos, y pasaporte de producto con datos medioambientales, de proveedores y trazabilidad completa del producto etiquetado). También resulta pertinente la incorporación en la regulación normativa del etiquetado accesible de algunos estándares ambientales en el soporte del etiquetado (materiales no dañinos, reciclabilidad, indicación de riesgos por utilización de sustancias químicas, etc) y de requisitos que eviten la corta vida útil de los productos etiquetados (favoreciendo, por el contrario, ciclos de vida más largos, reparabilidad y durabilidad). **PROPUESTA 5** Con el doble objetivo de reforzar la eficacia social del etiquetado inclusivo y de articular la participación de la sociedad civil (entidades representantes de las personas con discapacidad, tercer sector, academia y organizaciones cívicas) en su definición e implementación, se propone la creación de un consejo social consultivo o integrar el seguimiento del RD en los consejos sociales consultivos existentes, con representación de las principales entidades del tercer sector, de la sociedad civil y de los colectivos socialmente vulnerables, a fin de disponer de un canal de comunicación estable.	

		PROPUESTA 6 El art 2 del RD establece que las indicaciones obligatorias que aparezcan en el etiquetado deben figurar, al menos, en castellano. A fin de atender a la diversidad cultural y territorial de nuestro país se recomienda hacer obligatorio el uso de las lenguas cooficiales en el etiquetado accessible, o tener en cuenta este aspecto par un desarrollo posterior del texto legislativo, de los productos afectados por el Real Decreto, seleccionando su uso en función del ámbito territorial en el que se distribuyan comercialmente los productos. Ello enlaza con el Reto país 3 de la EDSr: Vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y afrontar la emergencia climática. **PROPUESTA 7** A fin de robustecer la regulación de la accesibilidad universal del etiquetado en el Real Decreto se propone reforzar el uso de formatos accesibles en el etiquetado de los productos regulados por el RD, ampliando el uso del Braille previsto en la normativa, con la incorporación adicional de formatos cognitivos accesibles de lectura fácil en el etiquetado (sin tecnicismos, con apoyo visual, letra grande y clara, frases cortas, etc).	

Observaciones Generales	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	**Anotaciones:** El CERMI recuerda que el concepto de etiquetado inclusivo no se limita al uso del Braille para personas con discapacidad visual, sino que abarca un enfoque más amplio de accesibilidad universal, incorporando soluciones adecuadas a los distintos tipos de discapacidad. El CERMI defiende que el etiquetado inclusivo debe incorporar no solo el Braille, sino también soluciones tecnológicas accesibles -como la generalización de soluciones tecnológicos como los códigos QR que remitan a entornos digitales plenamente accesibles-, así como otros sistemas que faciliten la interacción de consumo a personas con discapacidad intelectual, trastornos del espectro del autismo, parálisis cerebral, etc.	No se hace necesario incluir comentarios
Observaciones Generales			

Observaciones Generales			
Observaciones Generales			
PREÁMBULO			
Preámbulo	**Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)**	En el 8º párrafo del apartado I inicial (segunda página), se indica, respecto al año de referencia de la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad del IMSERSO, que “El último informe publicado es del año 2024, la deficiencia sensorial, visual, auditiva, sordoceguera o dolor en el que hay 389.424. La diferencia con el año 2022, es que con la entrada en vigor del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, ha supuesto que hasta el año 2022 las comunidades y ciudades autónomas utilizaban para codificar los diagnósticos la codificación establecida por el IMSERSO, y a partir del 20 de abril de 2023, se valore con la codificación internacional CIE10”: "Actualmente, 4.300.000 personas en España tienen algún tipo de discapacidad según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2020, del	**Se acepta.** Se procede a modificar y actualizar los datos propuestos.

		Instituto Nacional de Estadística y, por lo tanto, se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo. Esto se debe a que, en numerosas ocasiones, el mercado de bienes y productos carece de condiciones de accesibilidad universal. Asimismo, las personas con discapacidad suelen tener dificultades en el acceso a la información, especialmente las personas con discapacidad visual en relación con el acceso a la información que incorporan las etiquetas de los bienes y productos de uso cotidiano. De acuerdo con la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en el **año 2022**, más de 218.000 personas tenían discapacidad visual como primera deficiencia." **Comentario:** El ultimo informe publicado es del año 2024, la deficiencia Sensorial, visual, auditiva, sordoceguera o dolor en el que hay 389.424. La diferencia con el año 2022, es que con la entrada en vigor del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, ha supuesto que hasta el año 2022 las comunidades y ciudades	

		autónomas utilizaban para codificar los diagnósticos la codificación establecida por el IMSERSO, y a partir del 20 de abril de 2023, se valore con la codificación internacional CIE10.	

Preámbulo	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	Hace referencia la Exposición de motivos del Real Decreto, párrafo tercero, al artículo 51 de la Constitución Española cuando alude al mandato dirigido a los poderes públicos en orden a garantizar la defensa de las personas consumidoras y usuarias protegiendo mediante procedimientos eficaces su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos, promoviendo también la información y la educación de estas. En párrafos siguientes, se menciona la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y la modificación que trajo consigo al introducir en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (en adelante LGDCU) la definición del concepto de «persona consumidora vulnerable». No obstante, echa en falta este Consejo **referencia explícita en la Exposición de motivos al artículo 8, apartado d) de la LGDCU**, motor impulsor que también subyace bajo la presente iniciativa normativa, al incluir como uno de los derechos básicos de todas las personas consumidoras el de la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios en formatos que garanticen su accesibilidad, así como el derecho a la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute, así como la toma de decisiones óptimas	**Se rechaza**: Se considera adecuada la redacción propuesta de este RD.

Preámbulo	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Confederación Autismo España (CONFAE)**	En la Exposiciones de motivos: Para incluir la dimensión de la accesibilidad cognitiva sería importante incluir en la exposición de motivos del Real Decreto la referencia a otras leyes en materia de accesibilidad que atienden a las condiciones de comprensión y accesibilidad del etiquetado, como la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, importante ley que transpone a derecho nacional la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios o Directiva Europea de Accesibilidad. Cuyo artículo 7.7, entre otros, establece la obligación de los fabricantes de que su etiquetado siga “los criterios del lenguaje claro”. También se pueden aludir a los artículos que abordan la dimensión de la accesibilidad cognitiva incluidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las	**Se acepta parcialmente.** En el preámbulo ya se hace mención al RDL 1/2013, de 29 de noviembre, considerándose así suficiente y no siendo necesario incluir el resto de normativa propuesta pues podría generar confusión. Se considera que la redacción actual aporta claridad expositiva y un mensaje concreto y adecuado.

		personas con discapacidad y de su inclusión social tras la reforma introducida por la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.	

Preámbulo	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Experta nacional y Directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española**	**1. Inclusión de la lengua de signos en el preámbulo del real decreto** Se propone modificar el preámbulo, en el apartado I, incorporando un nuevo inciso, marcado en azul, tras el párrafo relativo a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, con la siguiente redacción: Por tanto, asegurar los derechos de las personas con discapacidad ante el consumo es un factor determinante para su inclusión social y su autonomía personal, conforme a los mandatos de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española y en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Asimismo, se tendrá en cuenta la accesibilidad a la información y a la comunicación, incluyendo el uso de la lengua de signos como medio reconocido legalmente, de conformidad con lo previsto en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 674/2023, de 18 de julio. **Argumentación** El preámbulo del proyecto fundamenta la norma en la accesibilidad universal y el acceso a la	**Se rechaza.** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el proyecto se

		información y la comunicación en condiciones de igualdad, conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este contexto, este tipo de accesibilidad constituye una dimensión esencial de la accesibilidad universal, especialmente para las personas sordas y sordociegas. La lengua de signos española, y la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico, es un medio de comunicación reconocido legalmente en la Ley 27/2007 y desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 674/2023, configurándose como un instrumento necesario para garantizar el acceso a la información en igualdad de condiciones. Su incorporación en el preámbulo refuerza la coherencia normativa sin alterar el objeto del real decreto, y contribuye a una interpretación más inclusiva del concepto de accesibilidad universal en el ámbito del consumo.	centra en la discapacidad visual.
Preámbulo	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Confederación Estatal Personas Sordas (CNSE)**	Desde la Confederación Estatal de Personas Sordas consideramos que, con el fin de que el proyecto de real decreto de etiquetado accesible cumpla con el principio de diseño universal, el documento no puede limitar la accesibilidad únicamente al sistema braille o al lenguaje claro. Para alcanzar el objetivo que persigue el RD, creemos necesario incorporar la dimensión	**Se rechaza:** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin

		lingüística de las personas sordas para garantizar así su seguridad y plena autonomía en el consumo y en la toma de decisiones mediante el acceso a la información en lengua de signos. En este sentido, realizamos las observaciones que a continuación se detallan. 1. Preámbulo. Después del párrafo 9. "…cumpliendo así el gobierno de España con el compromiso de promover un consumo más accesible e inclusivo para las personas con discapacidad." **Propuesta de aportación:** Se propone añadir el siguiente texto: "En este sentido, se tendrá en cuenta también la accesibilidad del etiquetado en lengua de signos mediante el uso de sistemas como pueden ser códigos QR que den acceso a videos con la información traducida a esta lengua." **Justificación legislativa:** El artículo 2 de la Ley 27/2007 habla del derecho al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas y de los medios de apoyo a la comunicación oral. Reconoce el derecho de libre opción de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de	embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.

		signos españolas, y a los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, en los términos establecidos en esta Ley. El artículo 4 del RD 674/2023 define la accesibilidad a la información como la dimensión que permite que los productos sean comprensibles en formatos adecuados, citando explícitamente la lengua de signos. La ausencia de lengua de signos en información crítica genera aislamiento y pérdida de autonomía.	
Preámbulo	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Instituto de la Mujer. Ministerio de Igualdad**	Se propone desagregar los datos por sexo, siempre que se utilicen datos estadísticos o estudios. En España, hay más mujeres que hombres con discapacidad según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2020 del INE, que, por tanto, encuentran más dificultades para desenvolverse en la rutina diaria y en este caso, en los hábitos de consumo. En este caso, en el apartado I del Preámbulo, se sugiere modificar el texto para incluir lo señalado en rojo. Se aprovecha para actualizar los datos de la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), al año 2024: “Actualmente, **4.380.000** personas en España (**1.810.000 hombres y 2.570.000 mujeres**)	**Se acepta.** Se procede a modificar y actualizar los datos.

		tienen algún tipo de discapacidad según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2020, del Instituto Nacional de Estadística y, por lo tanto, se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo. Esto se debe a que, en numerosas ocasiones, el mercado de bienes y productos carece de condiciones de accesibilidad universal. Asimismo, las personas con discapacidad suelen tener dificultades en el acceso a la información, especialmente las personas con discapacidad visual en relación con el acceso a la información que incorporan las etiquetas de los bienes y productos de uso cotidiano. De acuerdo con la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en el año **2024** ~~2022~~, más de ~~218.000~~ **404.644** personas (**193.471 hombres y 211.173 mujeres**) tenían discapacidad visual como primera deficiencia.” **Justificación:** El artículo 20 letra a) de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece lo siguiente: “Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y	

		estudios. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.” Por su parte, el artículo 36.1 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, establece que los poderes públicos elaborarán estudios o estadísticas siempre que afecten a la igualdad de trato o discriminación de las personas (ámbito subjetivo de aplicación contenido en el artículo 2.1 de la misma Ley 15/2022, de 12 de julio). “Artículo 36. Estadísticas y estudios. 1. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta ley y en la legislación específica en materia de igualdad de trato y no discriminación, los poderes públicos elaborarán estudios, memorias o estadísticas, siempre que se refieran o afecten a aspectos relacionados con la igualdad de trato, y de acuerdo con los estándares	

		internacionales existentes, que permitan un mejor conocimiento de las causas, extensión, evolución, naturaleza y efectos de la discriminación por razón de las causas previstas en esta ley.”. Enlace a la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2020, del INE Notas de prensa INE Enlace a Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad (año 2024) Base de datos IMSERSO_2024.pdf	
Preámbulo	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Instituto de la Mujer. Ministerio de Igualdad**	Se propone modificar el apartado I del Preámbulo para incluir lo señalado en rojo o redacción similar, en el siguiente párrafo: “Así pues, el artículo 3.2 de la citada norma establece que “tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad”. En consecuencia, las	**Se rechaza.** No se considera necesario añadir dicha precisión en la redacción pues ya se encuentra incluido en el concepto de "(..) en condiciones de igualdad y no discriminación"

		personas con discapacidad deben considerarse personas consumidoras vulnerables cuando las quiebras de accesibilidad en este ámbito comprometan el ejercicio de sus derechos como consumidoras y usuarias en condiciones de igualdad y no discriminación. Asimismo, debe considerarse cómo la vulnerabilidad tiene un componente transversal de género, como menciona la misma Ley” **Justificación:** En consonancia con el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los siguientes términos: Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.”	

		Según el Preámbulo de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, a la edad y al género debe asociarse la discapacidad como factores que aumentan la vulnerabilidad: “Asimismo, se visibiliza cómo la vulnerabilidad también tiene un componente transversal de género, puesto que en España las mujeres cuya edad está comprendida entre los 65 y los 99 años constituyen el 57 % frente a los hombres. Además, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto de las Mujeres, las mujeres de edad avanzada viven solas con más frecuencia que los hombres, tienen ingresos más bajos, sufren, en mayor medida, enfermedades crónicas, y tienen peor percepción subjetiva de su salud y calidad de vida. A la edad y al género debe asociarse igualmente la discapacidad que, en los supuestos de personas mayores y, especialmente, de mujeres mayores, agrava la situación de vulnerabilidad, aumentando el riesgo de exclusión. En el caso de las mujeres con discapacidad, nuevamente, el riesgo de exclusión es acusadamente mayor” El art. 7 apartado 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con	

		discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, dice: “4. Asimismo, las administraciones públicas protegerán de manera singularmente intensa a aquellas personas o grupo de personas especialmente vulnerables a la discriminación múltiple como las niñas, niños y mujeres con discapacidad, mayores con discapacidad, mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, personas con pluridiscapacidad u otras personas con discapacidad integrantes de minorías.” El Libro Blanco sobre las personas con discapacidad sobrevenida en España 2025 (CERMI) manifiesta que: “Los anteriores datos estadísticos ponen de manifiesto que las mujeres en España soportan desequilibrios estructurales en todos los ámbitos vitales. El sexo se revela como un factor que segrega y desencadena brechas de género. Existe una manifiesta disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a recursos, derechos y oportunidades. Estas diferencias impactan de dos maneras a las mujeres a quienes sobreviene una discapacidad. Por una parte, tales brechas pueden actuar como factores que desencadenan discapacidades en la	

		población femenina. Por otra parte, las condiciones de desigualdad por razón de género se agudizan y cronifican cuando a la mujer le sobreviene una discapacidad”	
Preámbulo	**Consejo Nacional de la Discapacidad - DG Función Pública. Ministerio Transformación Digital y Función Pública**	1: Se propone la supresión del segundo “se incluye” en la página 4: “En virtud de la disposición final única, se incluye una excepción en la aplicación de la norma para aquellos productos ya etiquetados en braille, así como ~~se incluye~~ una disposición transitoria por la que se establece un plazo transitorio de un año para la adaptación a la norma”. 2: Se propone sustituir “así como” en el primer párrafo de la página 4 por “y”, para agilizar un poco la lectura: Además, la norma responde al principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas y contribuye a la gestión racional de los recursos públicos existentes. Por último, este real decreto cumple con el principio de transparencia, ya que se identifican claramente los objetivos perseguidos y se ofrece una explicación completa de su contenido. En su elaboración se han mantenido consultas estrechas con las organizaciones representativas de los	**Se rechaza.** No se considera necesario.

		ámbitos de consumo y discapacidad, con las organizaciones sectoriales, ~~así como~~ **y** se ha facilitado la participación de la ciudadanía a través de los trámites de consulta pública previa y audiencia e información pública. Asimismo, el texto ha sido informado por el Consejo de Consumidores y Usuarios y por el Consejo Nacional de la Discapacidad.	
Preámbulo			
Preámbulo			
Preámbulo			
Preámbulo			
ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN			
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	**Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación** El artículo 1 delimita su aplicación a los bienes y productos de consumo siguientes: a) Productos cosméticos y de cuidado personal, de conformidad con el Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos, y, en lo que resulte aplicable, el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos. b) Detergentes y limpiadores, de acuerdo con el Real Decreto 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.	**Se rechaza.** La medida se imponía a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por poder constituir una carga desproporcionada. Considerar la superficie para establecer a qué establecimientos se refiere se considera adecuado al ser un criterio

		c) Productos alimenticios, según lo establecido en la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria. En cuanto a los operadores afectados y los responsables de garantizar el cumplimiento de las obligaciones introducidas por esta norma se establece que serán los establecimientos comerciales en territorio español con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2. Desde la perspectiva de protección de las personas consumidoras vulnerables, esta condición puede resultar excesivamente restrictiva, ya que: • una parte significativa de la comercialización de productos de consumo se realiza en establecimientos de menor superficie. • falta de coherencia con la realidad del mercado: el creciente peso del comercio electrónico hace que limitar las obligaciones a establecimientos físicos de cierto tamaño resulte desalineado con los hábitos actuales de consumo. • determinados sectores comerciales con fuerte implantación territorial pueden quedar fuera de la regulación. <u>Propuesta:</u>	objetivo. Por otro lado, y con respecto a la adquisicion de productos online, el RD ya contempla en el artículo 3.3 que los establecimientos a los que aplica esta norma, tengan venta por vía electrónica también cumplan con lo establecido con respecto al etiquetado accesible.

		1. Reducir el umbral de superficie comercial, o 2. Introducir un modelo de aplicación progresiva, que permita extender gradualmente las obligaciones a otros establecimientos. 3. Ampliar el ámbito de aplicación al comercio electrónico Asimismo, **se sugiere valorar la inclusión de criterios alternativos** como: • volumen de facturación, • pertenencia a cadenas comerciales o franquicias.	
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - DG Función Pública. Ministerio Transformación Digital y Función Pública**	El artículo 1.2 y el artículo 3.1 se repiten un poco. Se propone su refundición de alguna manera, dejándolo sólo en uno de los dos preceptos.	**Se rechaza.** Se considera adecuada la forma en la que se redactan ambos artículos pues no regulan lo mismo. Mientras que el artículo 1.2 regula el ámbito de aplicación, el artículo 3.1 establece cuál es la oblicación para esos establecimientos.
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**			

Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**			
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**			
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**			
ARTÍCULO 2. ETIQUETADO ACCESIBLE			
Artículo 2. Etiquetado accesible	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	**Artículo 2 Etiquetado accesible** El artículo 2 define el etiquetado accesible y establece el uso del sistema braille como instrumento principal. El Proyecto establece la utilización obligatoria del sistema braille como elemento central del etiquetado accesible, aunque permite aplicar varios medios o herramientas alternativos de accesibilidad en el etiquetado. Esta imposición obligatoria del braille no se justifica adecuadamente en términos de necesidad, especialmente cuando existen alternativas tecnológicas más amplias e inclusivas.	**Se rechaza.** Dicha indicación se encuentra recogida más adelante. No se hace necesario, por tanto, duplicar la información.

		El propio texto reconoce la existencia de múltiples fórmulas de accesibilidad aplicables simultáneamente, lo que evidencia que el braille no es el único medio idóneo para garantizar la accesibilidad en la información proporcionada en estos productos de consumo. El sistema braille no cubre a la totalidad de personas con discapacidad visual ni a otros colectivos de personas vulnerables, lo que limita su eficacia real y a nivel práctica. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje total de personas con discapacidad de visión que utilizan braille es ínfimo, especialmente entre la población de más de 65 años y prácticamente nulo en la de más de 80 años. Es más, la supresión de esos sistemas alternativos al braille deja sin sentido el número 3 del artículo 2 del Proyecto de Real Decreto cuando hace referencia a “Las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados podrán aplicarse de manera simultánea en un mismo producto” pues, mantiene la misma redacción que la versión del PRD de 2024, que mencionaba expresamente esas diferentes fórmulas de accesibilidad, cuando se han eliminado actualmente. Recordemos que el propio texto indica “que las diferentes fórmulas de accesibilidad de los	

		etiquetados podrán aplicarse de manera simultánea en un mismo producto.” Por lo que da por hecho la existencia de otras tecnologías y sistemas que permitan la accesibilidad al etiquetado de estos productos para obtener información que es igualmente relevante a la hora de comprar y consumir un producto (composición, instrucciones de uso, duración una vez abierto, en los productos alimenticios, los ingredientes, fechas de consumo, alérgenos, etc.). No se llega a comprender la supresión de las opciones que ofrecía el PRD 2024, también en el artículo 2.2, en cuanto al uso de “(…) código de respuesta básica (QR), u otro sistema análogo, deberá estar debidamente identificado con señales táctiles o en relieve, de forma que las personas usuarias. Por tanto, la aplicación simultánea de otras fórmulas de accesibilidad diferentes al sistema braille de los etiquetados implica que en todo caso estos sistemas ofrecerán a información relevante sobre el producto a las personas con discapacidad. puedan identificar de forma sencilla el lugar donde está ubicado el etiquetado accesible”; lo que a juicio de este Consejo rebaja el número de potenciales beneficiarios del etiquetado accesible, fundamentalmente porque el sistema braille, tal y como comentó en su día el CCU, no es de uso generalizado por la población con discapacidades	

		de visión. <u>Propuesta</u> Se propone que se reincorpore al Proyecto de Real Decreto el contenido del número 2 del artículo 2 del PRD de 2024, quedando redactada la versión final del siguiente modo: “Artículo 2.2. El etiquetado accesible podrá hacer uso del sistema braille, de los códigos de respuesta rápida (QR) en relieve o mediante señal táctil, o de elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva, a la información y la comunicación, así como de cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, garantice la accesibilidad universal “ Además, las dificultades técnicas en estos productos de pequeño tamaño hay que tenerlo en consideración al hilo de la normativa de aplicación en materia de envases. En otro orden de cosas, se considera que el concepto de etiquetado accesible debería incorporar de forma más explícita el principio de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, reconocido en la normativa sobre discapacidad, Se propone añadir una referencia expresa a que el etiquetado accesible deberá ajustarse a los principios de accesibilidad y diseño	

		universales, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013. Asimismo, se recomienda clarificar la redacción recogida en el apartado 1, evitando redundancias o inexactitudes terminológicas, como hablar de “bienes y productos” en lugar de “productos” o de “bienes y servicios”. 1. Se entiende por etiquetado accesible el que permita que las personas con discapacidad, con especial atención a las que tienen discapacidad visual, accedan, de forma inequívoca, clara y comprensible, a la información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los productos que debe contener cualquier etiquetado.	

Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social**	**Artículo 2. 3** **Propuesta de modificación:** 3. Los~~as~~ diferentes f~~órmulas de accesibilidad,~~ elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos o no tecnológicos, aseguren la accesibilidad universal de los etiquetados, podrán aplicarse de manera simultánea en un mismo producto. **Comentario:** En este párrafo se incluye el listado enumerado en el articulo 4.2, referido a la accesibilidad (un código QR, Navilens u otro quedaria incluido en los medios tecnológicos). De esta forma, se explicitan mejor a qué formulas de accesibilidad se refiere cuando dice que se podrán aplicar de manera simultánea. Ademas, incluiría los no tecnológicos, como un cartel o similar que informara en lectura fácil sobre un producto y se colocara en una estantería próximo a este.	**Se rechaza.** La modificación propuesta supondría una duplicidad de la información.

Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	**Artículo 2. Etiquetado accesible.** **Propuesta de modificación:** En el apartado 2, se propone añadir al final del párrafo “, complementado, según proceda, con la información necesaria mediante un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve. El contenido del mencionado código deberá ser accesible según lo establecido en la Ley 11/2023, de 8 de mayo.”, quedando el párrafo de la siguiente manera: 2. El etiquetado accesible hará uso del sistema braille, complementado, según proceda, con la información necesaria mediante un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve. El contenido del mencionado código deberá ser accesible según lo establecido en la Ley 11/2023, de 8 de mayo. **Justificación:** Como todo el braille no va a ser posible incorporarlo en el envase, con el fin de garantizar que las personas ciegas puedan acceder de forma clara y autónoma a la información esencial del producto, es necesaria la incorporación de un código QR o similar accesible, situado en un área visible y fácilmente escaneable. Se considera imprescindible que los códigos QR u	**Se rechaza.** Dicha indicación se encuentra recogida más adelante. No se hace necesario, por tanto, duplicar la información.

		otros soportes digitales incorporen una marca táctil identificable, que permita a la persona ciega detectar, en primer lugar, para saber que dicho código existe y, en segundo lugar, para localizarlo. Es importante que se recoja expresamente la referencia a la Ley 11/2023 para que el contenido al que remita el código QR cumpla criterios de accesibilidad, garantizando que la información pueda ser utilizada de manera efectiva.	
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Confederación Autismo España (CONFAE)**	En el artículo 2.2: Con el de reforzar el papel del lenguaje claro, como técnica de la accesibilidad cognitiva más idónea según las condiciones del etiquetado de un producto a disposición del público, se propone una redacción alternativa como la que sigue: "2. El etiquetado accesible hará uso del sistema braille y del lenguaje claro, según la Norma UNE-ISO 24495-1.	**Se rechaza.** Se está regulando un etiquetado en braille y otros modelos accesibles.

Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Confederación Estatal Personas Sordas (CNSE)**	Artículo 2. Etiquetado accesible. **Propuesta de aportación:** Se propone añadir el siguiente punto: “El etiquetado accesible hará uso de sistemas que permitan el acceso a la información mediante la lengua de signos.” **Justificación legislativa:** El artículo 2 de la Ley 27/2007 habla del derecho al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas y de los medios de apoyo a la comunicación oral. Reconoce el derecho de libre opción de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas, y a los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, en los términos establecidos en esta Ley. El artículo 4 del RD 674/2023 define la accesibilidad a la información como la dimensión que permite que los productos sean comprensibles en formatos adecuados, citando explícitamente la lengua de signos. La ausencia de lengua de signos en información crítica genera aislamiento y pérdida de autonomía.	**Se rechaza.** No se considera necesario añadir dicha propuesta ya que las personas sordomudas, su principal problema, no es la lectura del etiquetado. De manera que pueden acceder a la información del producto en cualquier momento con la lectura.

Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 2. Etiquetado accesible. **Propuesta de modificación:** En el apartado 2, se propone añadir al final del párrafo “, complementado, según proceda, con la información necesaria mediante un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve. El contenido del mencionado código deberá ser accesible según lo establecido en la Ley 11/2023, de 8 de mayo.”, quedando el párrafo de la siguiente manera: 2. El etiquetado accesible hará uso del sistema braille, complementado, según proceda, con la información necesaria mediante un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve. El contenido del mencionado código deberá ser accesible según lo establecido en la Ley 11/2023, de 8 de mayo. **Justificación:** Como todo el braille no va a ser posible incorporarlo en el envase, con el fin de garantizar que las personas ciegas puedan acceder de forma clara y autónoma a la información esencial del producto, es necesaria la incorporación de un código QR o similar accesible, situado en un área visible y fácilmente escaneable.	**Se rechaza:** Esta previsión se ha añadido como voluntaria en el artículo 4.2: “2. Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario.” En su momento, se

		Se considera imprescindible que los códigos QR u otros soportes digitales incorporen una marca táctil identificable, que permita a la persona ciega detectar, en primer lugar, para saber que dicho código existe y, en segundo lugar, para localizarlo. Es importante que se recoja expresamente la referencia a la Ley 11/2023 para que el contenido al que remita el código QR cumpla criterios de accesibilidad, garantizando que la información pueda ser utilizada de manera efectiva.	planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.

Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Plataforma Tercer Sector**	Tipo de Enmienda: de adición Artículo: Artículo 2.2. Etiquetado accesible. Página: 6 **Texto original:** (…) 2. El etiquetado accesible hará uso del sistema braille. (…) **Texto modificado:** (…) 2. El etiquetado accesible hará uso del sistema braille, complementado, según proceda, con la información necesaria mediante un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve. El contenido del mencionado código deberá ser accesible según lo establecido en la Ley 11/2023, de 8 de mayo. (…) **Justificación:** Se Como todo el braille no va a ser posible incorporarlo en el envase, con el fin de garantizar que las personas ciegas puedan acceder de forma clara y autónoma a la información esencial del producto, es necesaria la incorporación de un código QR o similar accesible, situado en un área visible y fácilmente escaneable. Se considera imprescindible que los códigos QR u otros soportes digitales incorporen una marca táctil identificable, que permita a la persona ciega	**Se rechaza:** Esta previsión se ha añadido como voluntaria en el artículo 4.2: “2. Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario.” En su momento, se

		detectar, en primer lugar, para saber que dicho código existe y, en segundo lugar, para localizarlo. Es importante que se recoja expresamente la referencia a la Ley 11/2023 para que el contenido al que remita el código QR cumpla criterios de accesibilidad, garantizando que la información pueda ser utilizada de manera efectiva	planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.
Artículo 2. **Etiquetado accesible**			
ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DE ACCESIBILIDAD			
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Consejo Nacional de la Discapacidad**	Inclusión de protocolos de comunicación para el colectivo sordociego Artículo/Apartado: Artículo 3.2.a). Propuesta: Se propone añadir el siguiente texto: "**En el caso de personas consumidoras sordociegas, los establecimientos garantizarán medios de comunicación adecuados, tales como personal con nociones en sistemas dactilológicos o acceso**	**Se rechaza** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta

		a servicios de mediación/interpretación, previa solicitud". Justificación: El proyecto reconoce a las personas sordociegas como usuarios intensivos de estos recursos , pero la atención personalizada genérica no cubre sus necesidades específicas de comunicación táctil, indispensables para su autonomía en el proceso de compra.	ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el RD se centra en la discapacidad visual.

Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Consejo Nacional de la Discapacidad**	Estandarización técnica de la ubicación del etiquetado Braille Artículo/Apartado: Artículo 3.2.b). Propuesta: Incluir una instrucción técnica que indique: "**La etiqueta en sistema braille deberá colocarse en una ubicación estandarizada del envase o incorporar una marca física de relieve que facilite su localización inmediata por parte de la persona usuaria**". Justificación: Sin una ubicación predecible, la persona con discapacidad visual debe realizar una exploración táctil completa del producto, lo que resulta ineficiente y puede comprometer la integridad de otros elementos del envase.	**Se rechaza** La etiqueta únicamente se colocará en el envase si su estructura lo permite, y no se delimitará la ubicación debido a la variabilidad existente en las tipologías de envases.
Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Consejo Nacional de la Discapacidad**	Ampliación de la información mínima para garantizar la igualdad económica Artículo/Apartado: Artículo 3.2.b).	**Se rechaza** El Real Decreto da cumplimiento a la

		Propuesta: Añadir un **nuevo punto: "5. Precio por unidad de medida".** Justificación: Para que la protección como "persona consumidora vulnerable" sea efectiva, se debe garantizar el acceso a la información económica básica que permita comparar productos en igualdad de condiciones, tal como prevé el TRLGDCU.	Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." El texto propuesto no se refiere ni a la seguridad, ni a la integridad, ni a la calidad de vida.

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	**Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad** El artículo 3 establece las obligaciones de accesibilidad, debiendo, los establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma en proyecto, facilitar la impresión en braille de determinada información a solicitud de la persona consumidora con discapacidad visual. Sin embargo, este modelo puede resultar insuficiente para garantizar una verdadera accesibilidad en condiciones de igualdad, por cuanto: • obliga a la persona consumidora a solicitar asistencia, • limita la autonomía en el proceso de compra, • puede generar situaciones de dependencia del personal del establecimiento. Se considera positivo que se establezcan protocolos de atención personalizada, bajo demanda, que permitan ayudar a los colectivos de personas con discapacidad en general (lecturas de los etiquetados o envases de los productos, asistencia con herramientas digitales, etc.) dado que pueden proporcionar soluciones inclusivas que favorece la autonomía de las personas con discapacidad, reduce los riesgos o la exposición a errores a nivel practico, y se alinea esta norma con	**Se rechaza** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual parte de la información accesible se proporcionaría en braille y el resto podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.

		la evolución tecnológica existente. Por otra parte, la propuesta, como se indica en este mismo informe, no aborda la accesibilidad del etiquetado en cuando a las compras de estos mismos productos afectados realizadas a través de plataformas de comercio electrónico o marketplaces, con independencia del tamaño de los establecimientos a los que se hace referencia. Esta forma de distribución es cada vez más utilizada por las personas consumidoras por lo que, a nuestro juicio, no está suficientemente justificada la imposición de las obligaciones solo a los establecimientos comerciales con una superficie de venta física, que comercialicen los bienes y productos de consumo afectados. Por las razones aludidas **se propone el fomento del etiquetado accesible integrado en el propio producto**, especialmente en los bienes de consumo de mayor rotación; **promover la adopción de sistemas complementarios de información accesible**, incluidos los de carácter tecnológico, **y establecer una implantación progresiva de soluciones estructurales de accesibilidad**, más allá del sistema de impresión bajo demanda.	

Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	**Artículo 3.2.b)** Información mínima en braille Como ya se ha referido se considera imprescindible la utilización de otras técnicas o herramientas, diferentes al braille, para garantizar la accesibilidad al etiquetado de estas personas con discapacidad visual . El proyecto establece que la información en braille incluirá, entre otros elementos: tipo de producto y marca; advertencias de peligro; información sobre alérgenos y fecha de caducidad o consumo preferente en alimentos. La información que se obliga a proporcionar constituye un mínimo razonable, pero puede resultar insuficiente para la identificación adecuada de determinados productos Propuesta Se propone valorar la incorporación tanto al braille como a otras herramientas de accesibilidad, otros elementos informativos relevantes, como la variedad o tipo específico del producto, el volumen o cantidad, y las advertencias esenciales de seguridad.	**Se rechaza.** Se incluye información obligatoria referente a la seguridad, la integridad, y a la calidad de vida. Se puede incluir más información de forma voluntaria: "(...) Los establecimientos comerciales podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria."

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	**Artículo 3.3. Comercio electrónico** El artículo 3.3 prevé que los establecimientos con venta electrónica deberán ofrecer la opción de entrega de productos con etiqueta accesible a solicitud de la persona consumidora. Propuesta Se propone que el real decreto incorpore una referencia expresa a que: - los sitios web de comercio electrónico deberán cumplir los requisitos de accesibilidad digital, - la información accesible del producto deberá poder consultarse antes de la compra, no únicamente en el momento de la entrega.	**Se rechaza.** La propuesta regula el etiquetado accesible, no los requisitos de las páginas web.
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentale**	**Artículo 3** **1) Punto 2.a Propuesta de modificación:** a) Atención personalizada a personas con discapacidad visual acreditada en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la	**1) Se rechaza.** Se considera innecesario incluir dicha obligatoriedad para los establecimientos de venta

	s de Acción Social	ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra. A tal efecto, el establecimiento señalizará, de manera universalmente accesible y comprensible, el espacio donde se ofrece dicha atención, e incluirá esta información en formatos accesibles en su sitio web, a fin de que conocer previamente dónde dirigirse para solicitarla. **Comentario:** Creo que es importante que se identifique el espacio o lugar donde se ofrece dicha atención, ¿en atención al cliente? ¿en una caja de pago concreta? ¿en todas? ¿hay una persona de la plantilla encargada de esta tarea concreta? El texto queda abierto a que el comercio habilite cómo hacerlo, pero si la persona no sabe dónde dirigirse, esta atención puede verse comprometida, máxime si tiene que solicitar la impresión en braille de una etiqueta. Además, debe informarse en el sitio web del comercio, para que la persona pueda saber, con anticipación, donde ir para solicitar la atención y cómo se ofrece esta. Tomando en cuenta que esta información debe ofrecerse de manera accesible, quienes soliciten ayuda y no tengan discapacidad visual, podrán beneficiarse de comprender y acudir a esta atención personalizada.	de productos. **2) Se rechaza.** No se considera necesario modificar la redacción.

		2) Punto 2.b Propuesta de modificación: b) La impresión en braille, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información, de manera clara y comprensible: **Comentario:** El espacio que la etiqueta no será muy amplio, por lo tanto el diseño en la presentación de la información tiene que ser claro y comprensible, sobre todo aquella que pueda añadirse adicionalmente. Si no se elabora de manera clara, puede distraer, confundir y no ayudar a la comprensión del contenido de la etiqueta en su conjunto.	

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	**Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad.** **Propuesta de modificación:** Se propone la fusión de los apartados 1 y principio del 2, y en consecuencia, modificación de la numeración de los apartados de este artículo, quedando el nuevo apartado 1 redactado de la siguiente manera: 1. Los establecimientos comerciales con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2, que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán garantizar los siguientes servicios: **Justificación:** El punto 1 y el inicio del punto 2 son redundantes. Al eliminar un apartado, se simplifica la redacción del RD.	**Se rechaza:** El apartado 1 se refiere a los obligados, mientras el apartado 2 se refiere a las obligaciones.

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	**Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad.** **Propuesta de modificación:** En el apartado 2 b), se propone añadir " y su adhesión o unión al producto" quedando redactado de la siguiente manera: b) La impresión en braille y su adhesión o unión al producto, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información: **Justificación:** No se establece la obligación de que la etiqueta accesible quede adherida o unida de forma segura al producto, lo que implica que, una vez en el domicilio, la persona ciega tendrá que realizar exactamente lo mismo que en la actualidad: preguntar a qué producto corresponde cada etiqueta, perdiéndose el objetivo de identificación autónoma.	**Se rechaza.** En el propio artículo 3. 2. b), apartado 4º, 2º párrafo, se establece que: "La etiqueta podrá adherirse al propio producto o en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente." teniéndose en cuenta la posible dificulta de adherir la etiqueta dependiendo de las características del envase.

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	**Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad.** **Propuesta de modificación:** En el apartado 2 b) 2º., sustituir “Indicación de “p=”” por “Indicación de “p=” o de la palabra “peligro”, si el espacio lo permite,” quedando de la siguiente manera: 2º Indicación de “p=” o de la palabra “peligro”, si el espacio lo permite, en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. **Justificación:** La palabra completa, si el espacio lo permite es mucho más garante de que la persona va a entender que el producto es peligroso. No obstante, se observa que el CLP ya exige que los envases de sustancias y mezclas peligrosas destinadas al público lleven un aviso táctil de peligro. Además. La ISO/EN 11683 define donde debe colocarse el símbolo táctil obligatorio	Se elimina punto del texto

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	**Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. Propuesta de modificación:** En el apartado 2 b) 3º, se traslada al final del párrafo el texto " Indicación de la referencia "a/i", y se une al párrafo que se añade al final "En caso de existir espacio disponible, se hará referencia al alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia," y añadir al final del párrafo "En caso contrario, indicación de la referencia "a/i", en cuyo caso, deberá incluirse en el envase un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve, que identifique de forma inequívoca los alérgenos y coadyuvantes presentes en el producto." Además, se añade al principio del párrafo " En caso de existir espacio disponible" y se sustituye "en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias," por "se hará referencia al nombre completo del alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia," Quedando de la siguiente manera: 3º. En caso de existir espacio disponible, se hará referencia al nombre completo del alérgeno o	**Se rechaza** Se considera que la redacción actual es adecuada

		coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. En caso contrario, indicación de la referencia "a/i", en cuyo caso, deberá incluirse en el envase un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve, que identifique de forma inequívoca los alérgenos y coadyuvantes presentes en el producto. **Justificación:** Con el fin de garantizar que las personas ciegas puedan acceder de forma clara y autónoma a la información esencial del producto, es necesaria la incorporación en el etiquetado del alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia y si no hay que implementar un código QR o similar accesible en el envase, situado	

		en un área visible y fácilmente escaneable. Además, el QR deberá enlazar a un contenido digital plenamente accesible, compatible con lectores de pantalla y estructurado de forma clara, de acuerdo con las necesidades de acceso a la información para usuarios ciegos. Las personas ciegas, al no poder leer la etiqueta impresa de manera visual, dependen exclusivamente de la accesibilidad técnica del contenido para conocer esta información, que resulta crítica para preservar la salud, prevenir reacciones alérgicas, y garantizar un uso seguro del producto.	

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	**Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad.** **Propuesta de modificación:** En el apartado 2 b) 4º, se propone añadir al final del primer párrafo “, cosméticos y de cuidado personal”, y “pudiendo incorporarse esta información en un código QR o similar”. ”, quedando la redacción de la siguiente manera: 4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios, cosméticos y de cuidado personal, pudiendo incorporarse esta información en un código QR o similar. **Justificación:** La incorporación en braille de la fecha de caducidad puede suponer un problema para los distribuidores, se da como alternativa la opción de hacerlo mediante QR o similar accesible. La fecha de caducidad o consumo preferente solo se contempla para los productos alimenticios, sin tener en cuenta que los productos cosméticos y de cuidado personal también pueden llevar fechas de caducidad o de uso preferente, información esencial para la seguridad y la salud.	**Se acepta parcialmente:** La posibilidad se incluye en el artículo 4.

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	**Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad.** **Propuesta de modificación:** En el apartado 3, se propone añadir “adherida o unida a cada producto”, y “la información”, quedando el texto de la siguiente manera: 3. Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta adherida o unida a cada producto y la información prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual. **Justificación:** No se establece la obligación de que la etiqueta accesible quede adherida o unida de forma segura al producto, lo que implica que, una vez en el domicilio, la persona ciega tendrá que realizar exactamente lo mismo que en la actualidad: preguntar a qué producto corresponde cada etiqueta, perdiéndose el objetivo de identificación autónoma. Además, toda la información no tiene por qué venir en la etiqueta, es posible que haya un código QR complementándola.	**Se rechaza.** En el propio artículo 3. 2, apartado 4º, 2º párrafo, se establece que: "La etiqueta se adherirá al propio producto o se proporcionará en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente."

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Confederación Autismo España (CONFAE)**	En el artículo 3.2.b): Con el de reforzar el papel del lenguaje claro, como técnica de la accesibilidad cognitiva más idónea según las condiciones del etiquetado de un producto a disposición del público, se propone una redacción alternativa como la que sigue: “b) La impresión en braille y en lenguaje claro, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información:”	**Se rechaza** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el RD se

			centra en la discapacidad visual.
<u>Artículo 3</u>. **Obligaciones de accesibilidad**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Experta nacional y Directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española**	2. Modificación del artículo 3.2.a) para incluir medios de comunicación accesibles Se propone modificar el artículo 3.2.a), añadiendo una referencia a la accesibilidad a la comunicación. Propuesta de redacción (añadido final del apartado a): Atención personalizada a personas con discapacidad visual acreditada en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra, garantizando, cuando sea necesario, el acceso a medios de comunicación accesibles, incluida la lengua de signos. **Argumentación** El artículo 3.2.a) contempla la atención personalizada a personas con discapacidad visual, pero no incorpora de forma expresa otras dimensiones de la accesibilidad, en particular la accesibilidad a la información y la comunicación. Sin embargo, el principio de accesibilidad universal exige atender a la diversidad de necesidades de las personas con discapacidad, incluidas las	**Se rechaza** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables."

		personas sordas y sordociegas. En este sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 9 la obligación de los Estados de garantizar la accesibilidad, incluyendo expresamente la información y las comunicaciones, así como otros servicios abiertos al público, incorporando entre las medidas pertinentes el uso de la lengua de signos. Asimismo, el artículo 21 de la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la información y a la comunicación en igualdad de condiciones, incluyendo el uso de la lengua de signos. Por su parte, el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, establece la accesibilidad universal como un principio rector y reconoce el derecho a la accesibilidad en la comunicación y la información como condición para la igualdad de oportunidades. La redacción propuesta introduce una obligación flexible y proporcionada, compatible con el diseño del proyecto del real decreto y con el principio de proporcionalidad recogido en el mismo, al permitir	Por lo tanto, el RD se centra en la discapacidad visual.

		su implementación mediante soluciones adaptadas y no necesariamente estructurales.	
Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. **Propuesta de modificación:** Se propone la fusión de los apartados 1 y principio del 2, y en consecuencia, modificación de la numeración de los apartados de este artículo, quedando el nuevo apartado 1 redactado de la siguiente manera: 1. Los establecimientos comerciales con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2, que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán garantizar los siguientes servicios: **Justificación:** El punto 1 y el inicio del punto 2 son redundantes. Al eliminar un apartado, se simplifica la redacción del RD.	**Se rechaza:** El apartado 1 se refiere a los obligados, mientras el apartado 2 se refiere a las obligaciones.

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. **Propuesta de modificación:** En el apartado 2 b), se propone añadir “y su adhesión o unión al producto” quedando redactado de la siguiente manera: b) La impresión en braille y su adhesión o unión al producto, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información: **Justificación:** No se establece la obligación de que la etiqueta accesible quede adherida o unida de forma segura al producto, lo que implica que, una vez en el domicilio, la persona ciega tendrá que realizar exactamente lo mismo que en la actualidad: preguntar a qué producto corresponde cada etiqueta, perdiéndose el objetivo de identificación autónoma.	**Se rechaza.** En el propio artículo 3. 2, apartado 4º, 2º párrafo, se establece que: "La etiqueta se adherirá al propio producto o se proporcionará en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente."

Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. **Propuesta de modificación:** En el apartado 2 b), se propone añadir “a distancia (online, telefónica, teletienda, etc.)”, quedando de la siguiente manera: b) La impresión en braille, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra a distancia (online, telefónica, teletienda, etc.), y en una etiqueta por producto, de la siguiente información: **Justificación:** La generación de etiquetas en braille en tienda requiere equipamiento específico, escaso, complejo y delicado, cuyo mantenimiento y uso adecuado no resulta sencillo en un entorno comercial. Su utilización exige formación especializada en braille y, por tanto, una estabilidad del personal contratado difícil de garantizar en el sector de la distribución. El proceso que se plantea introduce retrasos inevitables en la operación de compra, que afectarán directamente a la persona ciega, comprometiendo la agilidad y normalidad de la experiencia. Todo esto convierte esta obligación en muy difícil	**Se rechaza:** La previsión de venta a distancia ya se incluye en el artículo 3.3.

		de cumplir en la práctica, lo que previsiblemente se traducirá en numerosas quejas e incidencias y, finalmente, en un rechazo por parte de las propias personas ciegas, que difícilmente percibirán este sistema como útil para su autonomía.	

Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. **Propuesta de modificación:** En el apartado 2 b) 2º., sustituir “Indicación de “p=”” por “Indicación de “p=” o de la palabra “peligro”, si el espacio lo permite,” quedando de la siguiente manera: 2º Indicación de “p=” o de la palabra “peligro”, si el espacio lo permite, en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. **Justificación:** La palabra completa, si el espacio lo permite es mucho mas garante de que la persona va a entender que el producto es peligroso. No obstante, se observa que el CLP ya exige que los envases de sustancias y mezclas peligrosas destinadas al público lleven un aviso táctil de peligro. Además. La ISO/EN 11683 define donde debe colocarse el símbolo táctil obligatorio.	Se elimina punto del texto

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. **Propuesta de modificación:** En el apartado 2 b) 3º, se traslada al final del párrafo el texto " Indicación de la referencia "a/i", y se une al párrafo que se añade al final "En caso de existir espacio disponible, se hará referencia al alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia," y añadir al final del párrafo "En caso contrario, indicación de la referencia "a/i", en cuyo caso, deberá incluirse en el envase un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve, que identifique de forma inequívoca los alérgenos y coadyuvantes presentes en el producto." Además, se añade al principio del párrafo "En caso de existir espacio disponible" y se sustituye "en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias," por "se hará referencia al nombre completo del alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia", quedando de la siguiente manera: 3º. En caso de existir espacio disponible, se hará referencia al nombre completo del alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento	**Se rechaza** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual parte de la información accesible se proporcionaría en braille y el resto podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.

		Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. En caso contrario, indicación de la referencia “a/i”, en cuyo caso, deberá incluirse en el envase un código QR o similar, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve, que identifique de forma inequívoca los alérgenos y coadyuvantes presentes en el producto. **Justificación:** Con el fin de garantizar que las personas ciegas puedan acceder de forma clara y autónoma a la información esencial del producto, es necesaria la incorporación en el etiquetado del alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia y si no hay que implementar un código QR o similar accesible en el envase, situado en un área visible y fácilmente escaneable. Además, el QR deberá enlazar a un contenido	

		digital plenamente accesible, compatible con lectores de pantalla y estructurado de forma clara, de acuerdo con las necesidades de acceso a la información para usuarios ciegos. Las personas ciegas, al no poder leer la etiqueta impresa de manera visual, dependen exclusivamente de la accesibilidad técnica del contenido para conocer esta información, que resulta crítica para preservar la salud, prevenir reacciones alérgicas, y garantizar un uso seguro del producto.	

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. **Propuesta de modificación:** En el apartado 2 b) 4º, se propone añadir al final del primer párrafo “, cosméticos y de cuidado personal”, y “pudiendo incorporarse esta información en un código QR o similar”, quedando la redacción de la siguiente manera: 4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios, cosméticos y de cuidado personal, pudiendo incorporarse esta información en un código QR o similar. **Justificación:** La incorporación en braille de la fecha de caducidad puede suponer un problema para los distribuidores, se da como alternativa la opción de hacerlo mediante QR o similar accesible. La fecha de caducidad o consumo preferente solo se contempla para los productos alimenticios, sin tener en cuenta que los productos cosméticos y de cuidado personal también pueden llevar fechas de caducidad o de uso preferente, información esencial para la seguridad y la salud.	**Se rechaza** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual parte de la información accesible se proporcionaría en braille y el resto podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. **Propuesta de modificación:** En el apartado 3, se propone añadir “adherida o unida a cada producto”, y “la información”, quedando el texto de la siguiente manera: 3. Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta adherida o unida a cada producto y la información prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual. **Justificación:** No se establece la obligación de que la etiqueta accesible quede adherida o unida de forma segura al producto, lo que implica que, una vez en el domicilio, la persona ciega tendrá que realizar exactamente lo mismo que en la actualidad: preguntar a qué producto corresponde cada etiqueta, perdiéndose el objetivo de identificación autónoma. Además, toda la información no tiene por qué venir en la etiqueta, es posible que haya un código QR complementándola.	**Se rechaza.** En el propio artículo 3. 2, apartado 4º, 2º párrafo, se establece que: "La etiqueta se adherirá al propio producto o se proporcionará en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente."

Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - DG Función Pública. Ministerio Transformación Digital y Función Pública**	**Se propone la reformulación del artículo 3.3**. sobre venta por vía electrónica, en términos como los siguientes: “Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, además de cumplir con los requisitos marcados por la European Accessibility Act (EAA), transpuesta principalmente por la Ley 11/2023, deberán incluir, en su respectivo sitio web y de forma fácilmente localizable durante el proceso de compra, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual”. Además, se podría añadir la referencia a la European Accesibility Act porque parece que desde el año pasado es de obligado cumplimiento que los sitios de e-commerce sean accesibles para personas con discapacidad visual (entre otros) y la alusión al marco normativo, al menos en la Exposición de Motivos, podría respaldar este precepto. Se propone el inciso “de forma fácilmente localizable durante el proceso d e compra” porque, si es una opción que se halla escondida o que no	**Se rechaza.** La norma regula el etiquetado, no el diseño web.

		pueden leer los lectores de pantalla durante el proceso de compra, dejaría de tener sentido porque esta medida sería de difícil o imposible aplicación.	

Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Plataforma Tercer Sector**	Tipo de Enmienda: de adición Artículo: Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad. Página: 6 **Texto modificado:** 1. Los establecimientos comerciales con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m2, que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán garantizar los **siguientes** servicios: ~~mencionados en el apartado 2 de este artículo.~~ ~~2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior deberán ofrecer los siguientes servicios:~~ a) Atención personalizada a personas con discapacidad visual acreditada en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra. (…) **Justificación:** Se propone la fusión de los apartados 1 y principio del 2, y en consecuencia, modificación de la numeración de los apartados de este artículo, puesto que el punto 1 y el inicio del punto 2 son redundantes. Al eliminar un apartado, se simplifica la redacción del RD.	**Se rechaza:** El apartado 1 se refiere a los obligados, mientras el apartado 2 se refiere a las obligaciones.

Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Plataforma Tercer Sector**	Tipo de Enmienda: de adición Artículo: Artículo 3. 2. b. Obligaciones de accesibilidad. Página: 6 Texto modificado: (...)2. Los establecimientos comerciales mencionados en el apartado anterior deberán ofrecer los siguientes servicios: (...) b) La impresión en braille **y su adhesión o unión al producto**, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, de la siguiente información: (...) Justificación: No se establece la obligación de que la etiqueta accesible quede adherida o unida de forma segura al producto, lo que implica que, una vez en el domicilio, la persona ciega tendrá que realizar exactamente lo mismo que en la actualidad: preguntar a qué producto corresponde cada etiqueta, perdiéndose el objetivo de identificación autónoma.	**Se rechaza.** En el propio artículo 3. 2, apartado 4º, 2º párrafo, se establece que: "La etiqueta se adherirá al propio producto o se proporcionará en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente."

Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Plataforma Tercer Sector**	Tipo de Enmienda: de adición Artículo: Artículo 3.2. b.2º. Obligaciones de accesibilidad. Página: 7 **Texto modificado:** (…) 2º. Indicación de "p=" **o de la palabra "peligro", si el espacio lo permite**, en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. (…) **Justificación:** Se La palabra completa, si el espacio lo permite es mucho más garante de que la persona va a entender que el producto es peligroso. No obstante, se observa que el CLP ya exige que los envases de sustancias y mezclas peligrosas destinadas al público lleven un aviso táctil de peligro. Además. La ISO/EN 11683 define donde debe colocarse el símbolo táctil obligatorio	Se elimina punto del texto

Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Plataforma Tercer Sector**	Tipo de Enmienda: de adición Artículo: Artículo 3.2. b. 3º. Obligaciones de accesibilidad. Página: 7 Texto modificado: (…) 3º. ~~Indicación de la referencia "a/i", en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias~~ **En caso de existir espacio disponible, se hará referencia al nombre completo del alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia**, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. **En caso contrario, indicación de la referencia "a/i", en cuyo caso, deberá incluirse en el envase un código QR o similar, ubicado en el**	**Se rechaza** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual parte de la información accesible se proporcionaría en braille y el resto podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.

		interior del espacio de un ángulo en relieve, que identifique de forma inequívoca los alérgenos y coadyuvantes presentes en el producto. (…) Justificación: Con el fin de garantizar que las personas ciegas puedan acceder de forma clara y autónoma a la información esencial del producto, es necesaria la incorporación en el etiquetado del alérgeno o coadyuvante tecnológico que cause alergia o intolerancia y si no hay que implementar un código QR o similar accesible en el envase, situado en un área visible y fácilmente escaneable. Además, el QR deberá enlazar a un contenido digital plenamente accesible, compatible con lectores de pantalla y estructurado de forma clara, de acuerdo con las necesidades de acceso a la información para usuarios ciegos. Las personas ciegas, al no poder leer la etiqueta impresa de manera visual, dependen exclusivamente de la accesibilidad técnica del contenido para conocer esta información, que resulta crítica para preservar la salud, prevenir reacciones alérgicas, y garantizar un uso seguro del producto.	

Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Plataforma Tercer Sector**	Tipo de Enmienda: de adición Artículo: Artículo 3.2. b. 4º. Obligaciones de accesibilidad. Página: 7 Texto modificado: (…) 4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios, **cosméticos y de cuidado personal, pudiendo incorporarse esta información en un código QR o similar**. La etiqueta podrá adherirse al propio producto o en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente. Los establecimientos comerciales podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria. (…) **Justificación**: La incorporación en braille de la fecha de caducidad puede suponer un problema para los distribuidores, se da como alternativa la opción de hacerlo mediante QR o similar accesible. La fecha de caducidad o consumo preferente solo se contempla para los productos alimenticios, sin tener en cuenta que los productos cosméticos y de cuidado personal también pueden llevar fechas de caducidad o de uso preferente, información	**Se rechaza:** Esta posibilidad de incluir un QR de forma voluntaria ya se contemple en el artículo 4.2.

Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Plataforma Tercer Sector**	Tipo de Enmienda: de adición Artículo: Artículo 3. 3. Obligaciones de accesibilidad. Página: 7 **Texto modificado:** (…) 3. Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta **adherida o unida a cada producto y la información** prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual. (…) **Justificación:** Se No se establece la obligación de que la etiqueta accesible quede adherida o unida de forma segura al producto, lo que implica que, una vez en el domicilio, la persona ciega tendrá que realizar exactamente lo mismo que en la actualidad: preguntar a qué producto corresponde cada etiqueta, perdiéndose el objetivo de identificación autónoma. Además, toda la información no tiene por qué venir en la etiqueta, es posible que haya un código QR complementándola.	**Se rechaza.** En el propio artículo 3. 2, apartado 4º, 2º párrafo, se establece que: "La etiqueta se adherirá al propio producto o se proporcionará en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente."

Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad			
Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad			
Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad			
ARTÍCULO 4. FOMENTO DEL ETIQUETADO ACCESIBLE			

Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Consejo Nacional de la Discapacidad**	Carácter preceptivo de los formatos digitales (QR/NaviLens) Artículo/Apartado: Artículo 4.2. Propuesta: Modificar el carácter de "fomento" a "obligatoriedad progresiva" para los bienes de especial relevancia detallados en el Anexo. Justificación: Los datos del INE muestran que la gran mayoría de las personas con discapacidad visual no utilizan el sistema braille (aprox. 1.034.500 personas frente a 14.400 usuarios de braille) , por lo que la accesibilidad digital es el medio más eficaz para alcanzar a la mayoría del colectivo.	**Se rechaza.** Se debe establecer cierta flexibilidad para los operadores encuanto a cómo deben informar a los consumidores y usuarios.

Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	**Artículo 4. Fomento del etiquetado accesible** El artículo 4 prevé medidas de fomento por parte de las Administraciones Públicas y contempla el uso de códigos QR u otros sistemas tecnológicos. Se propone que la norma establezca que: - la información accesible mediante QR u otros sistemas deberá cumplir estándares de accesibilidad digital, - el acceso a dicha información deberá ser gratuito, inmediato y sin necesidad de identificación o tratamiento de datos personales.	**Se acepta**: Ya se recoge lo solicitado.
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	**Artículo 4. Fomento del etiquetado accesible. Propuesta de modificación:** En el apartado 2, se propone añadir “si procede” y sustituir, en la primera línea, “podrán” por “deberán”. Además, se propone añadir “ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve” Quedando de la siguiente manera:	**Se rechaza:** El QR debe ser voluntario. En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información

		2. Los operadores económicos, si procede, ~~podrán~~ deberán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. **Justificación:** La redacción actual elimina la obligatoriedad del código QR accesible dejándolo en una opción voluntaria. No es suficiente. Existe el riesgo de que, en la práctica, no se implemente, siendo en casos de alergias o intolerancias, obligatorio. Los códigos deben estar identificados mediante señal táctil o en relieve, requisito imprescindible para que una persona ciega pueda localizarlo de forma autónoma. Esta condición es clave, ya que un código que no puede encontrarse al tacto no es accesible, aunque su contenido sí lo sea.	accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.
Artículo 4. **Fomento del etiquetado**	**Comité Español de**	**Artículo 4.2. Fomento del etiquetado accesible**	**Se rechaza:** No se considera relevante incluir

accesible	**Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	**Se propone modificar el punto 2 del artículo 4 tal como se indica:** 2. Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva, entre ellos pictogramas y versión de texto en lectura fácil, o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. **Justificación:** La propuesta especifica el formato de los elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva, desarrollando así el mandato expreso de la Disposición adicional primera. de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que claramente emplaza a tener presente otros formatos que otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida,	los ejemplos.

		especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.	

Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Confederación Autismo España (CONFAE)**	En el artículo 4: Se proponen las siguientes adiciones para reforzar y aclarar las obligaciones en materia de accesibilidad cognitiva incluidas en el Real Decreto: “Artículo 4. Fomento del etiquetado accesible. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la toma de conciencia entre los fabricantes de productos, los operadores económicos que gestionen establecimientos comerciales y las asociaciones sectoriales sobre la necesidad de extender el etiquetado accesible, con especial atención al etiquetado en el sistema braille y en lenguaje claro, a todos los productos y bienes de consumo. Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, u otros elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva, como la lectura fácil, o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario.”	**Se rechaza.** Ya se establece por norma que la información que se facilita a los consumidores y usuarios se haga de forma clara y comprensible, no siendo necesario duplicarlo.

Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Experta nacional y Directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española**	Inclusión de la lengua de signos en el artículo 4.1 (fomento del etiquetado accesible) Se propone modificar el artículo 4.1 para incorporar expresamente la lengua de signos como formato de accesibilidad (en azul). **Propuesta de redacción:** 1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la toma de conciencia entre los fabricantes de productos, los operadores económicos que gestionen establecimientos comerciales y las asociaciones sectoriales sobre la necesidad de extender el etiquetado accesible, con especial atención al etiquetado en el sistema braille y a otros formatos que garanticen la accesibilidad universal, incluida la lengua de signos, a todos los productos y bienes de consumo. **Argumentación** El artículo 4.1 ya contempla la extensión del etiquetado accesible. La inclusión de la lengua de signos refuerza el enfoque de accesibilidad universal sin generar obligaciones jurídicas directas, al tratarse de una medida de fomento.	**Se rechaza** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el RD se centra en la discapacidad

Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Experta nacional y Directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española**	Inclusión de la lengua de signos en el artículo 4.2 (sistemas digitales como QR) Se propone modificar el artículo 4.2 para incorporar expresamente la lengua de signos como formato de accesibilidad (en azul). **Propuesta de redacción:** Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal, incluyendo la incorporación de contenidos en lengua de signos. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. **Argumentación** El artículo 4.2 prevé el uso de medios tecnológicos, como códigos de respuesta rápida (QR) u otros sistemas análogos, para facilitar la accesibilidad a la información y a la comunicación. En este contexto, la incorporación de contenidos en lengua de signos se ajusta a este enfoque y contribuye a mejorar el acceso a la información	**Se rechaza** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el RD se

		por parte de las personas sordas y sordociegas. Su inclusión resulta coherente con el objetivo general de la norma y no altera su carácter ni su naturaleza no obligatoria.	centra en la discapacidad visual.

Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Confederación Estatal Personas Sordas (CNSE)**	Artículo 4. Fomento del etiquetado accesible. **Propuesta de aportación:** Se propone la modificación del punto 2. 2. Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, con especial atención a la accesibilidad en lengua de signos, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. **Justificación legislativa:** El Artículo 4.l del Reglamento de la Ley 27/2007) habla entre otras cosas de recursos tecnológicos que facilitan el acceso a la lengua de signos española.	**Se rechaza** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, que establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el RD se centra en la discapacidad

Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 4. Fomento del etiquetado accesible. **Propuesta de modificación:** En el apartado 2, se propone añadir “si procede” y sustituir, en la primera línea, “podrán” por “deberán”. Además, se propone añadir “ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve”. Quedando de la siguiente manera: 2. Los operadores económicos, si procede, deberán ~~podrán~~ incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. **Justificación:** La redacción actual elimina la obligatoriedad del código QR accesible dejándolo en una opción voluntaria. No es suficiente. Existe el riesgo de que, en la práctica, no se implemente, siendo en casos de alergias o intolerancias, obligatorio.	**Se rechaza:** No se contempla la posibilidad de introducir la obligación de etiquetar los productos con un código QR. Esto ya fue objeto de un dictamen circunstanciado por parte de la Comisión en el marco del procedimiento TRIS, donde se consideró que introducía obstáculos al libre comercio.

		Los códigos deben estar identificados mediante señal táctil o en relieve, requisito imprescindible para que una persona ciega pueda localizarlo de forma autónoma. Esta condición es clave, ya que un código que no puede encontrarse al tacto no es accesible, aunque su contenido sí lo sea.	
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - DG Función Pública. Ministerio Transformación Digital y Función Pública**	En el artículo 4.2 se propone cambiar la redacción del último inciso: “El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario”. Por la siguiente: “El acceso a esta información ~~en ningún caso~~ no podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para la persona beneficiaria en ningún caso”. O por la siguiente: “El acceso a esta información ~~en ningún caso~~ no podrá requerir en ningún caso identificación, tratamiento de datos o coste alguno para la persona beneficiaria”.	**Se rechaza.** Se considera que la redacción actual es la adecuada, siendo clara y fácil de comprender.

Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - DG Función Pública. Ministerio Transformación Digital y Función Pública**	Parece que la información básica es menor que la que requerida por el Reglamento (UE) 1169/2011 para el etiquetado de productos (GUIA ETIQUETADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS) ya que se limita a Tipo de producto y marca, indicación de pictograma, indicador de alérgenos o ingredientes que causen intolerancias y fecha de caducidad o consumo preferente. Tal vez habría que valorar la adición de más datos como la cantidad, o la forma de preparación del producto para su consumo, si es necesaria, como es el caso de muchas comidas precocinadas.	**Se rechaza** En muchas ocasiones, y debido al tamaño de las etiquetas, se hace dificil el que contengan gran cantidad de información. Por ello, y debido a esta limitación, se ha considerado que la información que se ha establecido como obligatoria es suficiente (tipo de producto/marca comercial; indicación de peligro; referencia a alergias/intolerancias; fecha de caducidad) Si bien, y tal y como se recoge en párrafos posteriores, se deja abierta la posibilidad para que los establecimientos comerciales incluyan cuanta información adicional consideren necesaria.
Artículo 4.	**Plataforma**	Tipo de Enmienda: de adición	**Se rechaza:** El QR debe

Fomento del etiquetado accesible	**Tercer Sector**	Artículo: Artículo 4.2. Fomento del etiquetado accesible. Página: 7 **Texto modificado:** inclusiva. (…) 2. Los operadores económicos, **si procede**, ~~podrán~~ incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, **ubicado en el interior del espacio de un ángulo en relieve** o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva, **entre ellos pictogramas y versión de texto en lectura fácil**, o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. **Justificación:** Por un lado, la redacción actual elimina la obligatoriedad del código QR accesible dejándolo en una opción voluntaria. No es suficiente. Existe el riesgo de que, en la práctica, no se implemente, siendo en casos de alergias o intolerancias, obligatorio. Los códigos deben estar identificados mediante	ser voluntario. En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.

		señal táctil o en relieve, requisito imprescindible para que una persona ciega pueda localizarlo de forma autónoma. Esta condición es clave, ya que un código que no puede encontrarse al tacto no es accesible, aunque su contenido sí lo sea. Por otro, la propuesta especifica el formato de los elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva, desarrollando así el mandato expreso de la Disposición adicional primera. de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que claramente emplaza a tener presente otros formatos que otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.	
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**			
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**			

Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**			
ARTÍCULO 5. ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE ETIQUETADO ACCESIBLE Y TRATO ADECUADO HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
Artículo 5. **Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.**	**Consejo Nacional de la Discapacidad**	Formación reglada del personal de los establecimientos Artículo/Apartado: Artículo 5.1. Propuesta: Establecer que los marcos de colaboración incluyan programas de formación obligatoria para el personal de los establecimientos sujetos a la norma (≥400 m²). Justificación: La eficacia de la atención personalizada y del uso de herramientas técnicas (impresoras braille) depende directamente de la capacitación del personal en el trato adecuado y conocimiento de las barreras de accesibilidad	**Se rechaza** Se considera que con la obligatoriedad recogida en el art.3.4 es suficiente al establecer que los establecimientos comerciales deberán ofrecer atención personalizada a personas con discapacidad visual y prestar ayuda puntual cuando se requiera. Con eso ya se da a entender que los establecimientos tendrán que tener personal formado al respecto.
Artículo 5.	**Consejo Estatal**	**Artículo 5, punto 3.**	**Se acepta.**

Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social**	**Propuesta de modificación:** 3. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con la Comisión Braille Española en cuestiones relacionadas, entre otras, con el ámbito de aplicación del real decreto, así como recibir el asesoramiento del Real Patronato sobre Discapacidad, a través de sus Centros Asesores, en los términos previstos en el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad y demás normativa reguladora, así como del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Imserso, **Comentario:** Considero que esto debemos ponerlo, no tanto por el etiquetado en braille, que la Comisión es experta, sino por todo lo demás que se refiera a la accesibilidad.	La redacción queda de la siguiente manera: 3. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad en cuestiones relacionadas, entre otras, con el ámbito de aplicación del real decreto, así como recibir el asesoramiento del Real Patronato sobre Discapacidad, a través de sus Centros Asesores, en los términos previstos en el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad y demás normativa reguladora **así como del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Imserso.**

Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	Artículo 5. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. **Propuesta de modificación:** **En el apartado 1, se propone sustituir** "con la Comisión Braille Española" por "con la ONCE, a través de la Comisión Braille Española como órgano asesor competente en materia de braille," quedando de la siguiente manera: 1.Los operadores económicos que gestionen establecimientos comerciales, a título individual o a través de sus organizaciones de representación empresarial colectiva, podrán establecer marcos de colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad, entre sí, con la ~~Comisión Braille Española~~ con la ONCE, con las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad y con las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, a los efectos de impulsar la protección de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad. **Justificación:** La CBE no tiene entidad jurídica propia.	**Se acepta parcialmente** La redacción del punto 2 queda de la siguiente manera: "1. (…) entre sí, con la ONCE, a través de la Comisión Braille Española, con (…)"

Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	Artículo 5. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. **Propuesta de modificación:** **En el apartado 2, se propone sustituir** "Comisión Braille Española" **por el texto " ONCE, a través de la Comisión Braille Española como órgano asesor competente en materia de braille,"** quedando de la siguiente manera: 2. Sin perjuicio del resto de actuaciones que otros poderes públicos puedan llevar a cabo en el ámbito concreto de sus competencias, las Administraciones Públicas competentes podrán solicitar la cooperación de la ONCE, a través de la Comisión Braille Española como órgano asesor competente en materia de braille, de las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad y de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias en el fomento, promoción, difusión y garantía del buen uso del sistema braille en el ámbito de consumo, todo ello en los términos establecidos en el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles. **Justificación:** ~~La CBE no tiene entidad jurídica propia.~~	**Se acepta parcialmente** La redacción del punto 2 queda de la siguiente manera: "2. (…) de la ONCE, a través de la Comisión Braille Española, de (…)"

Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	Artículo 5. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. **Propuesta de modificación:** **En el apartado 3, se propone sustituir** "Comisión Braille Española" por "ONCE". quedando de la siguiente manera: 3. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con la ~~Comisión Braille Española~~ ONCE en cuestiones relacionadas, entre otras, con el ámbito de aplicación del real decreto, así como recibir el asesoramiento del Real Patronato sobre Discapacidad, a través de sus Centros Asesores, en los términos previstos en el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad y demás normativa reguladora. **Justificación:** Además de que la CBE no tiene entidad jurídica propia, su ámbito se restringe al uso del braille y a la simbología en relieve, los temas de tiflotecnología o tecnología accesible y autonomía corresponden a otras áreas dentro de ONCE.	**Se rechaza.** Si bien se procede a modificar la redacción quedando de la siguiente forma: "3. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con **las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad** ~~la Comisión Braille Española~~ en cuestiones relacionadas (...)"

<u>Artículo 5</u>. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS)**	Artículo 5. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad 3. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con la Comisión Braille Española en cuestiones relacionadas, entre otras, con el ámbito de aplicación del real decreto, así como recibir el asesoramiento del Real Patronato sobre Discapacidad, a través de sus Centros Asesores, en los términos previstos en el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad y demás normativa reguladora y de las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad. **Justificación:** La adición propuesta responde a la necesidad de reconocer de forma expresa el papel esencial que desempeñan las entidades del Tercer Sector de acción social de la discapacidad como agentes clave en la promoción, defensa y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Las entidades de la discapacidad cuentan con un conocimiento técnico y una experiencia práctica imprescindibles para garantizar la accesibilidad y el trato adecuado a las personas con discapacidad.	**Se acepta parcialmente.** Si bien se procede a modificar la redacción la cual queda de la siguiente manera: 3. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con **las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad** en cuestiones relacionadas, entre otras, con el ámbito de aplicación del real decreto, así como recibir el asesoramiento del Real Patronato sobre Discapacidad, a través de sus Centros Asesores, en los términos previstos en el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad y demás normativa reguladora **así como del Centro de Referencia Estatal de**

		Asimismo, la inclusión expresa de estas entidades en el apartado 3 refuerza el principio de diálogo civil y participación activa de las organizaciones representativas, en línea con lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En consecuencia, la enmienda propuesta asegura una regulación más coherente, fortalece la calidad del asesoramiento a las Administraciones Públicas y contribuye a una gobernanza más inclusiva y eficaz en materia de discapacidad.	**Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Imserso.**

<u>Artículo 5</u>. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Confederación Estatal Personas Sordas (CNSE)**	Artículo 5. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. **Propuesta de Aportación:** Incorporar al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) como órgano asesor para validar la calidad de la traducción a la lengua de signos de la información contenida en las etiquetas de los productos. **Justificación Legislativa:** La Disposición adicional tercera del RD 674/2023 establece que el CNLSE es el centro de referencia para la validación y seguimiento de la calidad de los servicios de accesibilidad en lengua de signos española.	**Se rechaza.** No es necesario indicar de manera precisa a dicha organización ya que el CNLSE es un centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aprobado por la Ley 27/2007, de 23 de octubre por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; y el propio articulado ya hace mención al Real Patronato sobre Discapacidad.

<u>Artículo 5</u>. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 5. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. **Propuesta de modificación:** En el apartado 1, se propone sustituir “con la Comisión Braille Española“ por “con la ONCE, a través de la Comisión Braille Española como órgano asesor competente en materia de braille,” quedando de la siguiente manera: 1.Los operadores económicos que gestionen establecimientos comerciales, a título individual o a través de sus organizaciones de representación empresarial colectiva, podrán establecer marcos de colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad, entre sí, con la **ONCE**, con las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad y con las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, a los efectos de impulsar la protección de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad. **Justificación:** La CBE no tiene entidad jurídica propia.	**Se acepta parcialmente** La redacción del punto 2 queda de la siguiente manera: "1. (…) entre sí, con la ONCE, a través de la Comisión Braille Española, con (…)"

Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 5. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. **Propuesta de modificación:** En el apartado 2, se propone sustituir “Comisión Braille Española” por el texto “ONCE, a través de la Comisión Braille Española como órgano asesor competente en materia de braille,” quedando de la siguiente manera: 2. Sin perjuicio del resto de actuaciones que otros poderes públicos puedan llevar a cabo en el ámbito concreto de sus competencias, las Administraciones Públicas competentes podrán solicitar la cooperación de la **ONCE**, de las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad y de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias en el fomento, promoción, difusión y garantía del buen uso del sistema braille en el ámbito de consumo, todo ello en los términos establecidos en el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles. **Justificación:** La CBE no tiene entidad jurídica propia.	**Se acepta parcialmente** La redacción del punto 2 queda de la siguiente manera: "2. (…) de la ONCE, a través de la Comisión Braille Española, de (…)"

Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Artículo 5. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. **Propuesta de modificación:** En el apartado 3, se propone sustituir “Comisión Braille Española” por “ONCE”, quedando de la siguiente manera: 3. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con la **ONCE** en cuestiones relacionadas, entre otras, con el ámbito de aplicación del real decreto, así como recibir el asesoramiento del Real Patronato sobre Discapacidad, a través de sus Centros Asesores, en los términos previstos en el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad y demás normativa reguladora. **Justificación:** Además de que la CBE no tiene entidad jurídica propia, su ámbito se restringe al uso del braille y a la simbología en relieve, los temas de tiflotecnología o tecnología accesible y autonomía corresponden a otras áreas dentro de ONCE.	**Se rechaza.** Si bien se procede a modificar la redacción quedando de la siguiente forma: "3. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con **las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad** ~~la Comisión Braille Española~~ en cuestiones relacionadas (...)"

Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Plataforma Tercer Sector**	Tipo de Enmienda: de adición Artículo: Artículo 5.1. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. Página: 8 **Texto modificado:** 1. Los operadores económicos que gestionen establecimientos comerciales, a título individual o a través de sus organizaciones de representación empresarial colectiva, podrán establecer marcos de colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad, entre sí, con la ~~Comisión Braille Española~~ **ONCE**, con las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad y con las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, a los efectos de impulsar la protección de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad. (…) **Justificación:** La Comisión Braille Española no tiene entidad jurídica propia.	**Se acepta parcialmente** La redacción del punto 2 queda de la siguiente manera: "1. (…) entre sí, con la ONCE, a través de la Comisión Braille Española, con (…)"

Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Plataforma Tercer Sector**	Tipo de Enmienda: de adición Artículo: Artículo 5.2. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. Página: 8 **Texto modificado:** (...) 2. Sin perjuicio del resto de actuaciones que otros poderes públicos puedan llevar a cabo en el ámbito concreto de sus competencias, las Administraciones Públicas competentes podrán solicitar la cooperación **de la ONCE, a través** de la Comisión Braille Española **como órgano asesor competente en materia de braille**, de las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad y de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias en el fomento, promoción, difusión y garantía del buen uso del sistema braille en el ámbito de consumo, todo ello en los términos establecidos en el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles. (...) **Justificación:** La Comisión Braille Española no tiene entidad jurídica propia.	**Se acepta parcialmente** La redacción del punto 2 queda de la siguiente manera: "2. (...) de la ONCE, a través de la Comisión Braille Española, de (...)"

Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.	**Plataforma Tercer Sector**	Tipo de Enmienda: de adición Artículo: Artículo 5.3. Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. Página: 8 **Texto modificado:** (...) 3. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con la ~~Comisión Braille Española~~ **ONCE** en cuestiones relacionadas, entre otras, con el ámbito de aplicación del real decreto, así como recibir el asesoramiento del Real Patronato sobre Discapacidad, a través de sus Centros Asesores, en los términos previstos en el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad y demás normativa reguladora. **Justificación:** Además de que la Comisión Braille Española no tiene entidad jurídica propia, su ámbito se restringe al uso del braille y a la simbología en relieve, los temas de tiflotecnología o tecnología accesible y autonomía corresponden a otras áreas dentro de ONCE.	**Se rechaza.** Si bien se procede a modificar la redacción quedando de la siguiente forma: "3. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios con **las entidades del tercer sector de acción social de la discapacidad** ~~la Comisión Braille Española~~ en cuestiones relacionadas (...)"

Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.			
Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.			
Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.			
ARTÍCULO 6. RÉGIMEN SANCIONADOR			
Artículo 6. Régimen sancionador			
Artículo 6. Régimen sancionador			

Artículo 6. Régimen sancionador			
Artículo 6. Régimen sancionador			
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA			

Disposición adicional única. **Exención por etiquetado preexistente en braille.**	**Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)**	Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille. **Propuesta de modificación:** **Se propone añadir el texto** "en la forma indicada", quedando el párrafo de la siguiente manera: Quedan eximidos del cumplimiento de las obligaciones de etiquetado accesible reguladas en los apartados 2.b) y 4 del artículo 3, aquellos productos que ya estén etiquetados en braille, siempre y cuando incluyan en la forma indicada, al menos, la información mínima contenida en el artículo 3.2.b). **Justificación:** Al incluir parte de la información en QR, si la fecha de caducidad ya estuviera en el QR o similar, también cumplirían con la norma. A los fabricantes que ya incluyen el braille en sus productos se les da la posibilidad de una opción más sencilla.	**Se rechaza.** No es necesario incluir dicha modificación.

<u>Disposición adicional única</u>. Exención por etiquetado preexistente en braille.	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Grupo social ONCE**	Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille. **Propuesta de modificación:** Se propone añadir el texto “en la forma indicada”, quedando el párrafo de la siguiente manera: Quedan eximidos del cumplimiento de las obligaciones de etiquetado accesible reguladas en los apartados 2.b) y 4 del artículo 3, aquellos productos que ya estén etiquetados en braille, siempre y cuando incluyan **en la forma indicada**, al menos, la información mínima contenida en el artículo 3.2.b). **Justificación:** Al incluir parte de la información en QR, si la fecha de caducidad ya estuviera en el QR o similar, también cumplirían con la norma. A los fabricantes que ya incluyen el braille en sus productos se les da la posibilidad de una opción más sencilla.	**Se rechaza.** No es necesario incluir dicha modificación.

<u>Disposición adicional única</u>. Exención por etiquetado preexistente en braille.	**Plataforma Tercer Sector**	Tipo de Enmienda: de adición Artículo: Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille. Página: 9 **Texto modificado:** Quedan eximidos del cumplimiento de las obligaciones de etiquetado accesible reguladas en los apartados 2.b) y 4 del artículo 3, aquellos productos que ya estén etiquetados en braille, siempre y cuando incluyan **en la forma indicada**, al menos, la información mínima contenida en el artículo 3.2.b). **<u>Justificación:</u>** Al incluir parte de la información en QR, si la fecha de caducidad ya estuviera en el QR o similar, también cumplirían con la norma. A los fabricantes que ya incluyen el braille en sus productos se les da la posibilidad de una opción más sencilla.	**Se rechaza.** No es necesario incluir dicha modificación.

Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille.			
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA			
Disposición transitoria única. Régimen transitorio	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	**Disposición transitoria única** El proyecto establece un plazo de adaptación de un año desde la entrada en vigor de la norma. La entrada en vigor de la norma debería ser acompañada de campañas de información a operadores económicos; programas de formación del personal de los establecimientos, y acciones de divulgación dirigidas a las personas consumidoras.	**Se acepta parcialmente:** La norma se dará a conocer mediante su publicación en el BOE y por los medios que considere oportunos el departamento ministerial.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio			
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA			

Disposición final primera. **Títulos competenciales**			
Disposición final primera. **Títulos competenciales**			
Disposición final primera. **Títulos competenciales**			
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA			

Disposicion final segunda. **Evaluación de la norma**	**Consejo Nacional de la Discapacidad - Confederación Estatal Personas Sordas (CNSE)**	Disposición final segunda. Evaluación de la norma. **Propuesta de aportación:** Se propone la modificación del texto. “En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 elaborará junto con las entidades representantes de las personas con discapacidad, un informe de balance sobre su aplicación y la situación y evolución del etiquetado accesible, a los efectos de servir de base para futuras propuestas de desarrollo o modificación del mismo.” **Justificación legislativa:** El artículo 6 del RD 674/2023 establece la creación de una comisión de seguimiento que impulsa y vela por el cumplimiento de las medidas contenidas en ese reglamento y, por ende, en aquellos ámbitos en el que el RD sea de aplicación como es el caso del RD que regula la accesibilidad de la información contenida en el etiquetado.	**Se rechaza.** No es necesario incluir dicha especificación.

Disposicion final segunda. Evaluación de la norma			
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA			
Disposición final tercera. Desarrollo normativo			
Disposición final tercera. Desarrollo normativo			
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA			
Disposicion final cuarta. Entrada en vigor			
Disposicion final cuarta. Entrada en vigor			
ANEXO. PRODUCTOS DE CONSUMO DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y CALIDAD DE VIDA.			

Anexo. **Productos de consumo de esperial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida.**	**Consejo de Consumidores y Usuarios**	**ANEXO** Se propone completar las menciones normativas del apartado c), para una mejor protección de las personas consumidoras y usuarias con discapacidad: “ c) Productos alimenticios, según lo establecido en la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria; en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, y en el Reglamento (CE) no 1924/2006 del parlamento europeo y del consejo de 20 de diciembre de 2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos.”	**Se rechaza.** No se considera necesario incluir dichas menciones pues lo que se busca es establecer la definición de "productos alimenticios" la cual se encuentra recogida en la Ley 28/2015, de 30 de julio, tal y como se indica en el anexo. Ni la Ley 17/2011, de 5 de julio; ni el Reglamento 1924/2006, de 20 de diciembre de 2006, definen lo que se considera un "producto/s alimenticio/S"
Anexo. **Productos de consumo de esperial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida.**			

MAIN			
MAIN			
MAIN			
MAIN			

Artículo	Interesado	Posición / Respuesta	Valoración

OBSERVACIONES GENERALES			
Observaciones Generales	**Comunidad de Aragón DG Igualdad de Oportunidades**	Desde la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, se observa que en consonancia con la Ley Accesibilidad Cognitiva Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación, en el objeto del presente Real Decreto y a lo largo del mismo, **no se hace alusión de manera explícita a la accesibilidad cognitiva** que se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin.	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, : "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las

			personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, sin perjuicio que se contemplen igualmente otras discapacidades, el texto aborda principalmente la situación de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables
Observaciones Generales	**Comunidad de Aragón DG de Comercio, Ferias y Artesanía**	Se recomienda someter el proyecto al procedimiento de notificación TRIS para garantizar su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea. La ausencia de este trámite podría derivar en impugnaciones y en la invalidez de la aplicación de determinadas disposiciones, generando inseguridad jurídica para los operadores comerciales.	**Se rechaza:** Se entiende que el proyecto de Real Decreto no contiene ninguna disposición que pudiera ser objeto de obstáculo técnico al comercio.
Observaciones Generales	**Comunidad Autónoma Principado de Asturias**	4. Débil integración con el sistema autonómico de servicios sociales **4-1. Escasa conexión normativa con los servicios sociales comunitarios** El texto del Real Decreto se construye fundamentalmente desde una lógica de	**4.1) Se rechaza.** Se entiende que la redacción dada tiene una conexión indirecta con las políticas sociales.

		consumo y mercado, sin una articulación expresa con: • El sistema público de servicios sociales. • Los servicios de promoción de la autonomía personal. • Las estrategias autonómicas de inclusión social. Esta desconexión limita la posibilidad de integrar el etiquetado accesible como una herramienta preventiva dentro de las políticas sociales. **4-2. Falta de reconocimiento del papel autonómico en la evaluación social** La evaluación ex post prevista se asigna exclusivamente a la Administración General del Estado, sin prever: • Informes autonómicos. • Indicadores sociales territoriales. • Participación estructurada de los sistemas públicos de servicios sociales. Ello reduce la capacidad de las Comunidades Autónomas para influir en la evolución futura de la norma desde una perspectiva social y territorial.	4.2**) Se rechaza.** Las CCAA han participado en la elaboración de la norma a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales y SAAD y se dará debido conocimiento sobre su evaluación en la Comisión Delegada de Discapacidad dependeinte del mencionado Consejo Territorial.
Observaciones	**Comunidad**	**Conclusiones**	No requiere comentarios.

Generales	**Autónoma Principado de Asturias**	Del análisis anterior se puede considerar que existen limitaciones y riesgos desde la óptica de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, en particular: 1.Genera un riesgo de desigualdad territorial efectiva al excluir al pequeño comercio. 2.Ofrece una visión parcial de la accesibilidad, centrada prioritariamente en el braille. 3.Subestima los impactos indirectos sobre los servicios sociales autonómicos. 4.No integra suficientemente la norma en el ecosistema de políticas sociales autonómicas.	Las aportaciones y respuesta se ven más adelante en el articulado
Observaciones Generales	**Comunidad de Madrid**	(...), también resulta insuficiente la motivación de las respuestas dadas a las observaciones formuladas en la consulta pública, lo que debilita la calidad del expediente y evidencia una tramitación poco sólida en una materia especialmente sensible. Sin perjuicio del carácter informativo de los asuntos incluidos en el orden del día, la Comunidad de Madrid interesa que estas observaciones sean tenidas en cuenta en la ulterior tramitación de ambas iniciativas, a fin de reforzar su adecuación al marco competencial, su seguridad jurídica, su viabilidad técnica y su aplicación efectiva.	No requiere comentarios. Las aportaciones y respuesta se ven más adelante en el articulado

		Asimismo, considera necesario que las comunidades autónomas continúen conociendo las sucesivas versiones de los proyectos y sigan participando en su tramitación, dada su incidencia en la colaboración interadministrativa y en el ejercicio de sus competencias. (...) En cuanto al proyecto de real decreto, **debe revisarse con mayor detenimiento**: - su impacto económico y organizativo, - la suficiencia del periodo transitorio, - la atribución de responsabilidades, - su encaje con la normativa europea sectorial y - la motivación de la memoria y de las respuestas dadas durante la tramitación, a fin de evitar incertidumbres jurídicas y efectos económicos no suficientemente justificados.	
Observaciones Generales	**Conunidad Autónoma del País Vasco**	Esta C.A remite sus observaciones a través de Plena inclusión España, que es una organización representativa de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias con implantación en todo el territorio nacional cuya misión es contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual	1) Se entiende de la propia redacción de la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y

		o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. El movimiento asociativo Plena inclusión está compuesto por 19 federaciones autonómicas, 3 socios de ámbito nacional y 935 organizaciones en toda España y reúne en torno a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias que les prestan apoyo, así como otras personas asociadas y simpatizantes. Plena inclusión se ha convertido en un referente para las instituciones del Estado y para gran parte de los agentes sociales cuando toca hablar de discapacidad intelectual y del desarrollo. La lucha por reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias es una de las prioridades de la acción que desarrolla, a través de estrategias muy diversas, en toda España. En el año 2021 Plena inclusión ha realizado numerosas presentaciones de observaciones, reuniones con los diferentes Ministerios y grupos parlamentarios, así como 12	económica: "desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille", que la inclusión del braille es obligatorio. 2) 2.1. Respecto del etiquetado en braill, se entiende que la superficie prevista garantiza la proporcionalidad de la norma. Y, por otro lado, el servicio de asistencia deberá garantizarse en todos los establecimientos. 2.2. Se considera que queda bien reflejado quién es el responsable del cumplimiento de esta norma 2.3 No solo se debe tener en cuenta el coste-beneficio del incumplimiento de la norma, sino también el efecto que puede tener en el consumidor.

		aportaciones a enmiendas de proyectos de Ley y de normas. A su vez, representantes del movimiento asociativo han comparecido 6 veces en el Senado y Congreso. Por todo ello, y en relación con la audiencia pública publicada con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, Plena inclusión España ha elaborado las aportaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo que a continuación se detallan. **Comentario general 1: Incorporación de medidas de accesibilidad cognitiva** La accesibilidad cognitiva es la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos que permiten la fácil comprensión y la comunicación. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social define a la accesibilidad universal como: “la condición que deben cumplir los entornos,	2.4 No se considera que esta actividad suponga la generación de un residuo excesivo

		procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. En la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, la comunicación e interacción a todas las personas. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse." La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, reconoce a la accesibilidad como uno de los principios generales de la Convención en su artículo 3, así como de especial importancia para que las personas con discapacidad puedan	

		gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es importante también, destacar que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en las observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España, de 9 de abril de 2019, relativos al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, llama la atención sobre la necesidad de que «el Estado parte adopte todas las medidas legislativas y presupuestarias necesarias para garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos y en todo el país, incluidos los espacios privados abiertos al público y los edificios y servicios públicos, como son el transporte, la información y la comunicación». El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece en su artículo 29 bis que: “Las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva son el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas,	

		parámetros y pautas que se consideran precisos para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con todos los entornos, productos, bienes y servicios, así como de los procesos y procedimientos.” Las personas con discapacidad se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo. En tal sentido, están más expuestas a la quiebra y vulneración de sus derechos como personas consumidoras, por cuanto en muchas ocasiones el mercado de bienes, productos y servicios carece de condiciones de accesibilidad universal, dificultando su desempeño como consumidores protegidos. En este sentido, la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica establece en su artículo 8 como derecho básico de los consumidores y usuarios la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios en formatos que garanticen su accesibilidad y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute, así como la toma de decisiones óptimas para sus	

		intereses. También la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece en su artículo 18 que el etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzca a error al consumidor y usuario. Además, reconoce que todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán ser de fácil acceso y comprensión, ofrecidos en formatos que garanticen su accesibilidad y, en todo caso, incorporar, acompañar o, en último caso, permitir obtener, de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz, suficiente y accesible sobre sus características esenciales. Por todo ello consideramos esencial garantizar la accesibilidad cognitiva en la presente norma, como dimensión inapelable de la accesibilidad universal. **Comentario general 2: Propuestas para la garantía de la accesibilidad universal en origen.**	

		De manera general, se considera que la responsabilidad de un correcto etiquetado accesible no debe recaer sobre la superficie comercial sino en el fabricante por los siguientes motivos: **1.Vulneración del principio de igualdad y discriminación territorial** El actual borrador, al vincular la obligatoriedad de la medida únicamente a superficies superiores a 400m2, genera una brecha de accesibilidad basada en la residencia del ciudadano. La mayoría de los establecimientos en zonas rurales o de baja densidad demográfica no alcanzan dicha superficie. Esto condena a las personas con discapacidad en estas zonas a desplazarse largas distancias para ejercer su derecho a la información básica, contraviniendo el principio de cohesión territorial. Asimismo, se crea una jerarquía de consumidores donde solo aquellos que tienen acceso a grandes núcleos urbanos disfrutan de plena autonomía en la compra. **2.Ineficiencia de la responsabilidad delegada (Fabricante vs. Distribuidor)** La responsabilidad debe recaer en el fabricante	

		(en origen) y no en el distribuidor (en destino) por razones de trazabilidad y economía de escala: La manipulación de etiquetas por parte de la superficie comercial puede comprometer la visibilidad de otras informaciones obligatorias (lote, caducidad, alérgenos) o la integridad del envase. Del mismo modo, es más eficiente que un fabricante adapte una línea de producción para millones de unidades que obligar a miles de comercios a implementar procesos manuales o tecnológicos individuales. **3.Insuficiencia del régimen sancionador y riesgo de incumplimiento rentable** Existe el riesgo de que las grandes superficies realicen un análisis de coste-beneficio. Si la sanción administrativa es inferior al coste operativo de implementar sistemas de etiquetado accesible (personal, tecnología, tiempos), las empresas podrán optar por la provisión de fondos para multas, dejando el derecho ciudadano desatendido. **4.Sostenibilidad y residuos:**	

		El re-etiquetado en el punto de venta genera un desperdicio adicional de materiales (plásticos, adhesivos, energía) que se evitaría si el diseño universal se aplicara en la fase de envasado original.	
Observaciones Generales			
PREÁMBULO			
Preámbulo	**Conunidad Autónoma del País Vasco**	Modificación de redactado. Apartado I, párrafo 8: <u>Texto original:</u> Actualmente, 4.300.000 personas en España tienen algún tipo de discapacidad según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2020, del Instituto Nacional de Estadística y, por lo tanto, se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo. **Propuesta de redacción:** Actualmente, 4.300.000 personas en España tienen algún tipo de discapacidad según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2020, del Instituto Nacional de Estadística. **A ellas deben sumarse aquellas personas que tienen**	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, : "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen

		dificultades de comprensión y, por lo tanto, precisan de la accesibilidad cognitiva para acceder en igualdad de condiciones a las demás y desenvolverse en las relaciones de consumo. Hablamos de falta de comprensión por cuestiones de origen y falta de acceso al idioma, personas con dificultades de comprensión lectora a causa de analfabetismo, dislexia u otras; deterioro cognitivo a causa de la edad, problemas de salud mental y cualquier persona en un momento determinado. y, por lo tanto, Todas ellas se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo. **Justificación:** La modificación propuesta se justifica por la necesidad de superar el enfoque estrictamente médico de la discapacidad para adoptar el modelo social de accesibilidad universal, el cual reconoce que las barreras de comprensión afectan a un espectro de población mucho más amplio que el reflejado en las estadísticas oficiales. Esta propuesta encuentra su base jurídica en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto	la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, sin perjuicio que se contemplen igualmente otras discapacidades, el texto aborda principalmente la situación de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables

		refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que protege de forma específica la figura del consumidor vulnerable ante situaciones de desventaja o indefensión. Al incorporar a personas con dificultades de comprensión lectora, barreras idiomáticas o deterioro cognitivo, el texto se alinea, además, con la Ley 6/2022, de 31 de marzo, que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para establecer de forma explícita que la accesibilidad cognitiva es una dimensión esencial de la accesibilidad universal y de obligado cumplimiento. De este modo, la norma deja de ser una medida asistencial para convertirse en un estándar de seguridad jurídica y autonomía individual que protege a sectores transversales de la población, incluyendo a la población de edad avanzada y a personas con discapacidades invisibles que, sin contar necesariamente con un certificado administrativo de discapacidad, sufren la misma exclusión ante un etiquetado ininteligible o complejo.	
Preámbulo	**Comunidad Autónoma de**	Se aprecia que en la exposición de motivos apartado III párrafo 11 del Real Decreto por el	Se acepta la propuesta

	Melilla	que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo, se hace mención en este apartado lo siguiente: "Se ha contado con el parecer de las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Consumo, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios y demás asociaciones de personas consumidoras y usuarias, así como de las organizaciones empresariales, inscritas en los registros o depósitos correspondientes en cada caso." **Cuando sería deseable que pareciera lo siguiente:** "Se ha contado con el parecer de las comunidades autónomas **y ciudades de Ceuta y Melilla**, a través de la Conferencia Sectorial de Consumo, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios y demás asociaciones de personas consumidoras y usuarias, así como de las organizaciones empresariales, inscritas en los registros o depósitos correspondientes en cada caso".	

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN			
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación	**Comunidad Autónoma Principado de Asturias**	El análisis se realiza sin cuestionar la finalidad general de la norma, que se considera legítima y alineada con el marco constitucional e internacional, sino identificando déficits normativos, riesgos de implementación y efectos colaterales que pueden afectar negativamente a la actuación autonómica en el ámbito de los servicios sociales. **1. Limitación del ámbito subjetivo y territorial de aplicación: riesgo de desigualdad territorial** 1-1 Restricción a establecimientos comerciales de 400 m² o más. El artículo 1.2 del Proyecto de Real Decreto limita su ámbito de aplicación a los establecimientos comerciales con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m², atribuyéndoles las obligaciones principales en materia de etiquetado accesible. Desde la perspectiva de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, esta delimitación presenta importantes efectos adversos, especialmente en Comunidades Autónomas con una elevada presencia de:	**Se rechaza:** La medida se imponía en principio a supermercados, que son aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por poder constituir una carga desproporcionada, sin perjuicio de que establecimientos de superficie menor puedan aplicarla de manera voluntaria. Las personas con discapacidad visual pueden comprar en el comercio de su elección, pero únicamente se les ofrecerán los servicios incluidos en el Real Decreto en los de superficie superior a 1.000 m2.

		• Pequeño comercio. • Zonas rurales o rurales dispersas. • Municipios de tamaño reducido y población envejecida, como es el caso de Asturias. **1-2. Impacto específico en el contexto asturiano** El modelo de implantación comercial del Principado de Asturias se caracteriza por una alta dependencia del comercio de proximidad, en particular entre: • Personas mayores. • Personas con discapacidad. • Personas con movilidad reducida o con redes sociales limitadas. La exclusión del pequeño comercio del ámbito obligatorio de aplicación del Real Decreto implica que una parte significativa de la población objetivo de la norma quedará, de facto, fuera de su protección efectiva, generando: • Desigualdad territorial en el acceso a la información accesible. • Brecha entre entornos urbanos y rurales. • Incoherencia con las políticas autonómicas de lucha contra la despoblación y la soledad no deseada.	

		Además, esta restricción puede entrar en tensión con el principio de igualdad real y efectiva recogido en el artículo 49 de la Constitución Española, en la medida en que el disfrute del derecho a la accesibilidad depende del lugar de residencia y del tipo de establecimiento disponible. **1-3. Consecuencias para los servicios sociales autonómicos** La limitación señalada puede provocar un efecto desplazamiento hacia los servicios sociales comunitarios, ya que las personas afectadas: • Continuarán dependiendo de terceras personas para la identificación de productos. • Solicitarán apoyo social o institucional para tareas básicas de la vida diaria relacionadas con el consumo. Ello supone una externalización indirecta de costes sociales hacia el sistema de servicios sociales autonómico, sin que la norma reconozca ni compense dicho efecto.	

<u>Artículo 1</u>. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Comunidad Autónoma Principado de Asturias**	2. Enfoque excesivamente centrado en el sistema braille: insuficiente atención a la diversidad de perfiles de discapacidad **2-1. Predominio del braille como eje de la obligación** El Proyecto de Real Decreto establece el braille como elemento central del etiquetado accesible, contemplando otros formatos como complementarios o voluntarios. Esta opción normativa, aunque coherente con el mandato de la Ley 4/2022, resulta limitada desde una perspectiva de accesibilidad universal. Los propios datos recogidos en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo evidencian que: • El número de personas usuarias habituales del braille es proporcionalmente reducido. • La mayoría de las personas con discapacidad visual no utilizan el braille como sistema principal de acceso a la información. **2-2. Invisibilización de la accesibilidad cognitiva** El texto normativo no incorpora obligaciones específicas en materia de: • Lectura fácil. • Pictogramas accesibles. • Diseño cognitivo universal.	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, : "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con

		Esta omisión resulta especialmente problemática para colectivos que son usuarios habituales de los servicios sociales autonómicos, tales como: • Personas con discapacidad intelectual. • Personas con trastornos del neurodesarrollo. • Personas mayores con deterioro cognitivo leve. • Personas con bajo nivel de alfabetización funcional. Esta carencia reduce el impacto social efectivo de la norma, al no atender de forma suficiente a perfiles con elevada prevalencia en Asturias. **2-3. Riesgo de interpretación restrictiva de la accesibilidad universal** El énfasis en un único formato puede consolidar una interpretación reduccionista del concepto de accesibilidad universal, contraria a: • El artículo 2 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. • El principio de diseño para todas las personas. Ello limita el margen de actuación autonómica para promover soluciones más inclusivas, si no se explicita claramente la posibilidad de	discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, sin perjuicio que se contemplen igualmente otras discapacidades, el texto aborda principalmente la situación de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables

		desarrollo complementario por parte de las Comunidades Autónomas.	
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Comunidad Valenciana**	Se valora positivamente el proyecto, por cuanto desarrolla la disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y supone un avance relevante en la garantía del derecho a la información accesible de las personas con discapacidad, particularmente en el ámbito del consumo, en coherencia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 49 de la Constitución Española. **1).** Sin embargo, se considera adecuado que el etiquetado accesible **no se limite exclusivamente al sistema braille**, incorporando también otros formatos basados en soluciones tecnológicas (como códigos QR u otros sistemas análogos), así como elementos de accesibilidad cognitiva, lo que permite dar respuesta a la diversidad de necesidades existentes dentro del colectivo de personas con discapacidad. Por lo que se propone que en el artículo 4 punto 2 sería deseable sustituir “Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, : "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida,

		sistema análogo…" por " "Los operadores económicos deberán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo…". **2).**Con respecto a las personas con discapacidad visual y sordoceguera, se sugiere **reforzar**, en el desarrollo e implementación de la norma, **la atención a las personas con sordoceguera y a aquellas personas con discapacidad visual que no utilizan el sistema braille de forma habitual**, garantizando que los formatos alternativos sean efectivamente accesibles y utilizables para estos perfiles. **3).** Se considera conveniente reforzar las actuaciones de **formación y sensibilización del personal de los establecimientos comerciales**, a fin de garantizar una atención adecuada, no discriminatoria y centrada en la autonomía de las personas con discapacidad durante el proceso de compra.	especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, sin perjuicio que se contemplen igualmente otras discapacidades, el texto aborda principalmente la situación de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Comunidad de Madrid**	En relación con este proyecto normativo, y sin perjuicio de las observaciones formuladas por la Comunidad de Madrid en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo, adscrita	**1)Se rechaza.** La medida se imponía en principio a supermercados, que son

		igualmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se considera que la norma supone, en términos generales, un avance en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad visual. No obstante, **su alcance resulta claramente insuficiente**. 1). La limitación del artículo 3 a los establecimientos de más de **400 m² reduce** de forma injustificada su efectividad, al supeditar una condición básica de accesibilidad al tipo de establecimiento en el que se realiza la compra. 2). Además, el modelo previsto, basado en la impresión o entrega de etiquetas en braille a solicitud y producto a producto, convierte la **accesibilidad en una prestación condicionada, introduce obstáculos operativos innecesarios e impide, en la práctica, una experiencia de compra plenamente autónoma**. Se configura así una regulación restrictiva, con efectos difícilmente conciliables con los principios de igualdad y no discriminación que dice proteger. 3). El proyecto también suscita dudas relevantes sobre la correcta **identificación del sujeto obligado**, especialmente en relación con los productos alimentarios. Conforme al	aquellos de superficie mayor a 400 m2 según la clasificación establecida por la CNMC, dejando fuera a autoservicios y tiendas de proximidad, por poder constituir una carga desproporcionada, sin perjuicio de que establecimientos de superficie menor puedan aplicarla de manera voluntaria. Las personas con discapacidad visual pueden comprar en el comercio de su elección, pero únicamente se les ofrecerán los servicios incluidos en el Real Decreto en los de superficie superior a 1.000 m2. **2) Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de

		artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 1169/2011, la responsabilidad de la información alimentaria corresponde al operador con cuyo nombre o razón social se comercializa el producto o, en su caso, al importador. Frente a ello, el proyecto atribuye la obligación a los establecimientos comprendidos en su ámbito de aplicación, desplazando de hecho la carga del etiquetado accesible al distribuidor o establecimiento comercial, sin un encaje claro con la normativa europea aplicable. En consecuencia, debe **revisarse el ámbito de aplicación** de la obligación, valorarse su extensión a un conjunto más amplio de establecimientos o, al menos, a productos especialmente relevantes para la seguridad y la calidad de vida de las personas consumidoras, y contemplarse soluciones complementarias, incluidas herramientas digitales accesibles y medidas de apoyo que eviten una traslación desproporcionada de costes.	protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, : "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." **3) Se acepta.** Se modifica la redacción

Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Comunidad Autónoma de Extremadura**	Por último, se quiere dejar constancia de las novedades introducidas en este Proyecto con respecto al Borrador del mismo de febrero de 2025: **• Limitación del ámbito subjetivo de responsabilidad:** Mientras que el Artículo 1 del Borrador aludía a las “empresas fabricantes”, a los “importadores” y a “los distribuidores”, el artículo 1 del Proyecto parece imponer obligaciones exclusivamente a los “establecimientos comerciales”. Sin duda, ello permite identificar con mayor facilidad al sujeto responsables de eventuales infracciones, si bien lógicamente supone una limitación de posibles responsables.	No requiere de evaluación
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**	**Conunidad Autónoma del País Vasco**	Artículo 1 apartado 1 -y posteriores- Texto original: El presente real decreto tiene por objeto la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad visual, como personas	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y

		consumidoras vulnerables. **Propuesta de redacción:** El presente real decreto tiene por objeto la regulación de un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad y otras personas con necesidades de accesibilidad, en especial de las personas con discapacidad ~~, en especial de las personas con discapacidad~~ visual **y necesidades de accesibilidad cognitiva**, como personas consumidoras vulnerables. NOTA: Esta sustitución se propone para todos aquellos apartados del Real Decreto que apelen a las personas que precisan de estas medidas. **Justificación:** La modificación del objeto del real decreto para incluir explícitamente a otras personas con necesidades de accesibilidad se justifica por la voluntad de dotar a la norma de una eficacia real y transversal, acorde con el concepto de diseño para todas las personas. Esta ampliación permite que el marco normativo no se limite exclusivamente a	económica, : "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, sin perjuicio que se contemplen igualmente otras discapacidades, el texto aborda principalmente la situación de las personas

		quienes poseen un grado de discapacidad administrativamente reconocido, sino que ampare también a colectivos que enfrentan barreras idénticas en su vida cotidiana, como las personas mayores con pérdida de facultades sensoriales, personas con dificultades de comprensión lectora o aquellos ciudadanos con limitaciones cognitivas de carácter transitorio. Jurídicamente, esta redacción se fundamenta en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que define la vulnerabilidad de forma amplia y situacional, y se refuerza con la Ley 6/2022, de 31 de marzo, que reconoce la accesibilidad cognitiva como una dimensión fundamental de la accesibilidad universal. Al incorporar este matiz, la norma garantiza que la seguridad y la autonomía en el consumo sean derechos efectivos para cualquier ciudadano que presente una necesidad de apoyo en la interacción con el etiquetado, evitando así que el criterio burocrático de la discapacidad se convierta en una barrera excluyente para el ejercicio de los derechos fundamentales de los consumidores.	ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables

Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**			
Artículo 1. **Objeto y ámbito de aplicación**			
ARTÍCULO 2. ETIQUETADO ACCESIBLE			
Artículo 2. Etiquetado accesible	**Comunidad de Aragón** **DG Comercio, Ferias y Artesanía**	En relación con la redacción del artículo 2, apartado 2, se propone una modificación que permita mayor flexibilidad. Texto actual: "El etiquetado accesible hará uso del sistema braille, de los códigos..." **Propuesta de modificación:** "El etiquetado accesible podrá usar sistema braille, códigos de lectura o cualquier otra solución técnica equivalente..." Esta redacción permite que las empresas seleccionen el sistema más adecuado y eficiente para ofrecer la información, sin restringir la innovación tecnológica ni imponer soluciones obsoletas o excesivamente gravosas. En el proyecto inicial la obligación de facilitar este tipo de etiquetado recaía en las empresas fabricantes, y sus representantes legales en su caso, cuando introduzcan sus productos en el mercado. En el nuevo proyecto esta obligación	**Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica establece: "etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal", por lo tanto, el uso del braille es de obligado cumplimiento.

		recae en los establecimientos comerciales en territorio español con una superficie de venta y exposición igual o superior a 400 m². Esto supone una discriminación entre formatos comerciales por tamaño y por venta física o digital. Así mismo restringe la capacidad de elección de los ciudadanos con discapacidad visual. Los distribuidores son responsables de los productos que ponen a la venta, pero quien conoce todas las características y propiedades del producto, no es el distribuidor sino el fabricante. Ahora se les traslada a los distribuidores la responsabilidad de transcribir correctamente las especificaciones del producto. Si esta transcripción no es correcta, pues la máquina encargada de ello incluye algún matiz que no es el adecuado, el responsable, de acuerdo con el proyecto, es el distribuidor. Se podría considerar que con ello se está imponiéndoles una obligación que excede de su capacidad. La Ley 4/2022, de 25 febrero, no establece ninguna limitación al cumplimiento de esta obligación en función de la superficie de venta y	

		exposición, por lo que cabe plantearse si los invidentes deben adquirir los productos sólo en los establecimientos de más de 400 m². Esto supone una restricción a su capacidad de elección, que no concuerda con la accesibilidad universal pretendida por la Ley 4/2022, de 25 de febrero.	
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Conunidad Autónoma del País Vasco**	Artículo 2 apartado 1: Etiquetado Accesible Texto original: Se entiende por etiquetado accesible las menciones, indicaciones, marcas, dibujos o signos relacionados con un bien o producto que figuren en cualquier etiqueta que acompañe o se refiera a dicho bien o producto y que permita que las personas con discapacidad, con especial atención a las que tienen discapacidad visual, obtengan, de forma inequívoca, clara y comprensible, la identificación, información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de estos bienes o productos. **Propuesta:** Se entiende por etiquetado accesible ~~las menciones, indicaciones, marcas, dibujos o signos relacionados con un bien o producto que figuren en~~ cualquier etiqueta que acompañe o se refiera a dicho bien o producto y que **incorpore medidas de accesibilidad**	**Se rechaza:** Se intenta definir "etiquetado accesible" de la forma más precisa posible.

		universal para facilitar ~~permita que las personas con discapacidad, con especial atención a las que tienen discapacidad visual~~, obtengan, de forma inequívoca, clara y comprensible, la identificación, información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de estos bienes o productos. **Justificación:** La modificación de la definición de etiquetado accesible se justifica por la necesidad de dotar a la norma de una mayor precisión técnica y jurídica, sustituyendo una descripción para enfocarla en el cumplimiento de estándares de accesibilidad universal. En este sentido, se elimina la enumeración restrictiva de menciones o dibujos -que además no se vinculan con herramientas específicas de accesibilidad- y se centra la definición en la incorporación de medidas de accesibilidad universal, asegurando que el concepto sea neutro y capaz de adaptarse a futuras innovaciones sin necesidad de reformar el reglamento. Estas modificaciones ligeras, consideramos, evitan un enfoque segregador que señala a	

		colectivos específicos, optando en su lugar por un estándar de calidad del producto que beneficia de forma transversal a todos los consumidores, garantizando que las características esenciales de los bienes sean comunicadas de manera objetiva y autónoma bajo el marco del Real Decreto Legislativo 1/2013 de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.	
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Conunidad Autónoma del País Vasco**	Artículo 2 apartado 2: Etiquetado Accesible Texto original: El etiquetado accesible hará uso del sistema braille. **Propuesta:** El etiquetado accesible hará uso del sistema braille **y lectura fácil**. **Justificación:** La propuesta de incorporar la lectura fácil junto al sistema Braille se justifica por la necesidad de garantizar una accesibilidad universal efectiva que atienda a la diversidad de la población, superando un enfoque centrado exclusivamente en la discapacidad sensorial visual. Mientras que el Braille garantiza el acceso a la información para aquellas personas ciegas que emplean esta herramienta, la lectura fácil	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen

		resulta imprescindible para asegurar la comprensión de millones de personas con discapacidad intelectual, dificultades de aprendizaje, deterioro cognitivo asociado a la edad o barreras lingüísticas, sectores que conforman una parte significativa de los consumidores vulnerables. Esta modificación es imperativa para cumplir con la Ley 6/2022, de 31 de marzo, la cual establece que la accesibilidad cognitiva es una dimensión inseparable de la accesibilidad universal y que la comunicación debe ser comprensible y de fácil acceso para todas las personas. Al unificar ambos sistemas, el Real Decreto deja de ofrecer una solución parcial para proporcionar una respuesta integral y coherente con el principio de diseño para todas las personas, asegurando que la información esencial del producto llegue de manera autónoma y veraz a todos los ciudadanos bajo los estándares de calidad exigidos por el Real Decreto Legislativo 1/2013 de derechos de las personas con discapacidad.	la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, es necesario incidir en que el etiquetado accesible hará uso del sistema braille, sin especificar otras opciones.

Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Conunidad Autónoma del País Vasco**	Artículo 2 apartado 3: Etiquetado Accesible Texto original: Las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados podrán aplicarse de manera simultánea en un mismo producto. **Propuesta:** Las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados ~~podrán~~ **deberán** aplicarse de manera simultánea en un mismo producto. **Justificación**: Mientras que el Braille garantiza el acceso a la información para aquellas personas ciegas que emplean esta herramienta, la lectura fácil resulta imprescindible para asegurar la comprensión de millones de personas con discapacidad intelectual, dificultades de aprendizaje, deterioro cognitivo asociado a la edad o barreras lingüísticas, sectores que conforman una parte significativa de los consumidores vulnerables. Esta modificación es imperativa para cumplir con la Ley 6/2022, de 31 de marzo, la cual establece que la accesibilidad cognitiva es una dimensión inseparable de la accesibilidad universal y que la comunicación debe ser comprensible y de fácil acceso para todas las personas.	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con

		Al unificar ambos sistemas, el Real Decreto deja de ofrecer una solución parcial para proporcionar una respuesta integral y coherente con el principio de diseño para todas las personas, asegurando que la información esencial del producto llegue de manera autónoma y veraz a todos los ciudadanos bajo los estándares de calidad exigidos por el Real Decreto Legislativo 1/2013 de derechos de las personas con discapacidad.	discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el único etiquetado accesible obligatorio es el braille.
Artículo 2. **Etiquetado accesible**	**Conunidad Autónoma del País Vasco**	Artículo 2 apartado 3: Etiquetado Accesible Texto original: Las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados podrán aplicarse de manera simultánea en un mismo producto. **Propuesta:** Las diferentes fórmulas de accesibilidad de los etiquetados ~~podrán~~ **deberán** aplicarse de manera simultánea en un mismo producto. **Justificación:** La sustitución del término "podrán" por el imperativo "deberán" se justifica por la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo del principio de accesibilidad universal y evitar que la protección de los consumidores vulnerables quede sujeta a la voluntad o arbitrio del sujeto obligado.	**Se rechaza:** El Real Decreto da cumplimiento a la Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros

		Al establecer la simultaneidad de las fórmulas de accesibilidad como una obligación, se asegura que el etiquetado sea verdaderamente inclusivo y no segregador, permitiendo que un mismo producto sea accesible para personas con diferentes tipos de discapacidad, como la visual y la cognitiva, de forma concurrente. Esta obligatoriedad es coherente con el espíritu del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que define la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos y productos para ser comprensibles y utilizables por todas las personas de la manera más natural y autónoma posible. Jurídicamente, el uso de fórmulas imperativas es indispensable para dotar a la norma de seguridad y fuerza coercitiva, impidiendo que la coexistencia de medidas de accesibilidad sea percibida como una opción secundaria o facultativa, y reafirmando que la accesibilidad integral es un derecho fundamental y un estándar de calidad obligatorio en el mercado actual para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación.	formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, el único etiquetado accesible obligatorio es el braille.
Artículo 2. Etiquetado accesible	**Conunidad Autónoma del**	Artículo 2 apartado 4: Etiquetado Accesible Texto original:	**No resulta necesario.** En el caso de los

	País Vasco	Sin perjuicio de las excepciones previstas legal o reglamentariamente, las indicaciones obligatorias del etiquetado accesible deberán figurar, al menos, en castellano. **Propuesta:** Sin perjuicio de las excepciones previstas legal o reglamentariamente, las indicaciones obligatorias del etiquetado accesible deberán figurar, al menos, en castellano **y en la lengua cooficial de cada territorio**. **Justificación:** La modificación propuesta se justifica por la necesidad de garantizar que el derecho a la información accesible sea efectivo en todo el territorio nacional, respetando el marco constitucional y los estatutos de autonomía que reconocen la cooficialidad de las lenguas. Al eliminar la expresión "al menos" e imponer la obligatoriedad de incluir la lengua cooficial de cada territorio, se asegura que el etiquetado accesible no sea solo una traducción técnica, sino una herramienta de inclusión real que respete la lengua habitual y de comprensión del consumidor vulnerable en su entorno cotidiano. Esta medida es coherente con el Real Decreto	productos alimenticios, no solo deberán cumplir con este nuevo RD sino también con la normativa comunitaria y nacional existente. En este sentido cabe hacer mención al RD 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios; donde, en su artículo 18, Lenguas en el etiquetado, se establece lo siguiente: " Las indicaciones obligatorias del etiquetado de los productos alimenticios que se comercialicen en España se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los productos tradicionales

		Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece el derecho de los consumidores a recibir información veraz en términos comprensibles, lo cual, en las comunidades con lengua propia, implica necesariamente el uso de dicha lengua para evitar cualquier barrera cognitiva o de exclusión. Además, fortalece la seguridad del consumidor vulnerable al garantizar que el acceso a productos de especial relevancia para su integridad y calidad de vida se produzca sin discriminación lingüística, cumpliendo así con el mandato de accesibilidad universal que exige la adaptación de los canales de información a la realidad social y cultural de cada ciudadano en su propio territorio.	elaborados y distribuidos exclusivamente en el ámbito de una Comunidad Autónoma con lengua oficial propia."
Artículo 2. **Etiquetado accesible**			
Artículo 2. **Etiquetado accesible**			
Artículo 2. **Etiquetado accesible**			
ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DE ACCESIBILIDAD			
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Conunidad Autónoma del País Vasco**	Artículo 3. 2 apartado a. Obligaciones de accesibilidad. Texto original:	**Se acepta parcialmente**: Se acepta la eliminación

		Atención personalizada a personas con discapacidad visual acreditada en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra. **Propuesta de redacción:** Atención personalizada a personas con **necesidades de accesibilidad,** discapacidad visual acreditada en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, **cuando la** soliciten durante el proceso de compra. **Justificación:** La propuesta de modificar este apartado se justifica por la necesidad de eliminar el requisito de "acreditación" de la discapacidad, el cual constituye una carga administrativa desproporcionada y un obstáculo para el ejercicio inmediato de los derechos del consumidor en el punto de venta. Al sustituir la mención a la discapacidad visual acreditada por el concepto más amplio de "necesidades de accesibilidad", la norma se	de la obligación de la acreditación al entenderse que únicamente aquellas personas con discapacidad visual que lo precisen harán uso de esta ayuda. La obligación de acreditación, además, puede demorar los tiempos de la prestación y tener implicaciones, además, en la protección de datos de la persona consumidora. La disposición quedaría redactada del siguiente modo: "4. Todos los establecimientos comerciales, con independencia de su superficie de venta y exposición, que comercialicen los bienes y productos de consumo incluidos en el Anexo de esta norma, deberán ofrecer atención personalizada a personas

		adapta a la realidad del consumo, donde la vulnerabilidad puede ser temporal, situacional o no estar sujeta a un reconocimiento administrativo formal, como ocurre en el caso de personas mayores con pérdida de autonomía o personas con discapacidades invisibles. Asimismo, se considera que esta redacción es más coherente con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que insta a los poderes públicos a garantizar una protección reforzada a los consumidores vulnerables sin imponer trabas que dificulten su acceso a los bienes. Además, al eliminar la referencia a la "ayuda puntual por razón de discapacidad" y centrarla en la solicitud del cliente por necesidades de accesibilidad, se garantiza un trato digno y no discriminatorio, transformando la asistencia de un acto asistencial condicionado en un derecho de atención al cliente que lo precisa.	con discapacidad visual ~~**acreditada**~~ en el acceso a los productos expuestos. Asimismo, se prestará la ayuda puntual que requieran aquellas personas que, por razón de su discapacidad, la soliciten durante el proceso de compra, en los términos previstos en el artículo 11 del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
Artículo 3. Obligaciones de accesibilidad	**Conunidad Autónoma del País Vasco**	Artículo 3. 2 apartado b. Obligaciones de accesibilidad. Texto original: La impresión en braille, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta	**1) Se rechaza:** La Disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios

		por producto, de la siguiente información: 1º. Tipo de producto y marca comercial. 2º. Indicación de “p=”, en el caso de que el producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 3º. Indicación de la referencia “a/i”, en el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del	frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, establece: "El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables." Por lo tanto, la inclusión del braille es obligatoria.

		Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. 4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios. La etiqueta podrá adherirse al propio producto o en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente. Los establecimientos comerciales podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria. **Propuesta:** La **etiqueta accesible deberá estar, al menos, en formatos de** impresión en braille **y lectura fácil**, a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual en el momento de la compra, y en una etiqueta por producto, **y deberán contener, al menos,** ~~de~~ la siguiente información: 1º. Tipo de producto y marca comercial. 2º. Indicación de “p=”, En el caso de que el	

		producto incluya un pictograma de peligro de los previstos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. **En el caso de etiqueta braille Indicación de "p=".** 3º. Indicación de la referencia "a/i", En el caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias, incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. **En el caso de etiqueta braille,**	

		indicación de la referencia “a/i”. 4º. Fecha de caducidad o de consumo preferente, según corresponda, en el caso de productos alimenticios. La etiqueta podrá adherirse al propio producto o en un etiquetado adicional en el caso de que la superficie del producto no sea adecuada o suficiente. Los establecimientos comerciales podrán incluir en braille la información adicional que se considere necesaria. **Justificación:** La modificación de este apartado se justifica por la necesidad de garantizar que la accesibilidad sea una característica intrínseca y permanente del producto, eliminando la barrera que supone obligar al consumidor a solicitar la información de manera expresa en el momento de la compra. Al suprimir la frase "a solicitud de la persona consumidora", la norma pasa de un modelo de asistencia bajo demanda a un modelo de autonomía plena, en cumplimiento con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de	

		noviembre, que exige que los productos sean utilizables por todas las personas de forma independiente. Asimismo, la incorporación de la lectura fácil como formato obligatorio, junto al Braille, responde al mandato de la Ley 6/2022, de 31 de marzo, asegurando que la información sobre peligrosidad y alérgenos sea comprensible para personas con discapacidad cognitiva o dificultades de comprensión. La modificación de la situación de los códigos simplificados en el caso del Braille al final del párrafo responde a una cuestión de mejora de la comprensión del texto al incorporar otras medidas de accesibilidad, como la lectura fácil.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**	**Conunidad Autónoma del País Vasco**	Artículo 3. 3. Obligaciones de accesibilidad. Texto original: Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual. **Propuesta de redacción:**	No se propone modificación

		Los establecimientos referenciados en el apartado 1, que tengan servicio de venta por vía electrónica, deberán incluir, en su respectivo sitio web, una opción que garantice que los productos adquiridos por ese medio se entregan con la etiqueta prevista en el apartado 2.b), a solicitud de la persona consumidora y usuaria con discapacidad visual. **Justificación:** Misma justificación de apartados anteriores.	
Artículo 3. **Obligaciones de accesibilidad**			
ARTÍCULO 4. FOMENTO DEL ETIQUETADO ACCESIBLE			
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Comunidad Valenciana**	Para una mejor accesibilidad cognitiva y comprensión de la información, se recomienda **fomentar**, en el marco del artículo 4, **el uso de sistemas de apoyo a la comprensión** (lenguaje claro, pictogramas u otros elementos de accesibilidad cognitiva), especialmente relevantes para personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o dificultades de comprensión.	**Se rechaza.** El artículo 2.1 ya lo contempla
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**	**Conunidad Autónoma del País Vasco**	Artículo 4. 2. Fomento del etiquetado accesible Texto original: Los operadores económicos podrán incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida	**Se rechaza:** En su momento, se planteó un modelo con el etiquetado accesible ya integrado en el envase, en

		(QR) u otro sistema análogo, o elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios tecnológicos, promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. **Propuesta:** Los operadores económicos ~~podrán~~ **deberán** incorporar al etiquetado de los productos que comercialicen un código de respuesta rápida (QR) u otro sistema análogo, o **y** elementos vinculados a la accesibilidad cognitiva o **para facilitar** a la accesibilidad a la información y a la comunicación, así como cualquier otro que, a través de medios **humanos y** tecnológicos, que promuevan la accesibilidad universal. El acceso a esta información en ningún caso podrá requerir identificación, tratamiento de datos o coste alguno para el beneficiario. **Justificación:** La sustitución del término "podrán" por "deberán" en este apartado se justifica por la necesidad de asegurar que la incorporación de medidas de accesibilidad no sea una opción	el cual gran parte de la información accesible podía desplegarse en un código QR o similar. Sin embargo, tras su paso por el procedimiento conocido como TRIS, la Comisión Europea determinó que la norma presentaba obstáculos técnicos al comercio.

		discrecional para el operador, sino un compromiso. Al obligar a la incorporación de sistemas análogos, se garantiza que la información detallada del producto esté disponible en formatos dinámicos y adaptables a las necesidades de cada persona, de acuerdo con el diseño universal. Se considera fundamental la inclusión de la referencia a los "medios humanos", ya que la tecnología por sí sola puede suponer una nueva brecha para personas con escasas competencias digitales o sin acceso a dispositivos inteligentes; la combinación de apoyo técnico y humano asegura una accesibilidad universal real y sin exclusiones.	
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**			
Artículo 4. **Fomento del etiquetado accesible**			
ARTÍCULO 5. ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE ETIQUETADO ACCESIBLE Y TRATO ADECUADO HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
Artículo 5. **Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado**			

accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.			
Artículo 5. Asesoriamiento y colaboración en materia de etiquetado accesible y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.			
ARTÍCULO 6. RÉGIMEN SANCIONADOR			
Artículo 6. Régimen sancionador	**Comunidad de Aragón DG Protección de Consumidores y Usuarios**	Por otro lado, desde la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, la materialización y aplicación real y efectiva de lo dispuesto en el proyecto, dependerá en gran medida de los mecanismos de supervisión, control e inspección que se articulen para garantizar su cumplimiento. Y si bien el proyecto contempla, en su artículo 6, un régimen sancionador en caso de incumplimiento, este precisa –a nuestro entender- de imprescindible revisión y concreción. El artículo 6.2 del proyecto de Real Decreto alude al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En concreto, versa lo siguiente: “cuando el incumplimiento se	**Se rechaza**: Los servicios de consumo deben supervisar "defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto", del mismo modo que vienen haciendo hasta ahora.

		deba a la traslación a la parte accesible del etiquetado de defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto, este tendrá la consideración de infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios, de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1 g) del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y en la legislación autonómica aplicable en materia de defensa de la calidad alimentaria o de protección de la salud, respectivamente". A este respecto, procede advertir que, en este ámbito autonómico, **los servicios de Consumo no disponen de los recursos técnicos ni de los medios personales especializados necesarios para realizar la supervisión necesaria para comprobar que la información del etiquetado accesible a través del sistema braille previsto en el artículo 2.2 del proyecto, es adecuada, real y correcta**. Si bien desde Consumo del Gobierno de Aragón se puede constatar la existencia de etiquetado	

		en braille en un producto, no se puede garantizar que la información que a través del mismo se recoge y otorga al consumidor con discapacidad visual, sea veraz, correcta, eficaz, suficiente, completa y coincidente con la información facilitada en otros formatos. **Propuesta:** Por lo expuesto, y considerando que el espíritu de esta disposición permite avanzar en la protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias vulnerables, garantizando el acceso a la información en condiciones de igualdad y reduciendo las desigualdades, se considera **necesaria la reformulación del artículo 6.2 del proyecto de Real Decreto objeto de este informe; entendiendo necesario concretar y atribuir este control a los servicios competentes en materia de inclusión social, igualdad, accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad**.	
Artículo 6. Régimen sancionador	**Comunidad Autónoma de Extremadura**	Desde el Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX), en relación a la convocatoria del Consejo Territorial de Servicios Sociales del 27 de abril de 2026, se solicita: De conformidad con lo recogido en el artículo	**Se rechaza**: Los servicios de consumo deben supervisar "defectos, incorrecciones u omisiones que consten en el etiquetado no accesible del producto",

		26.5 de la Ley de Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y del articulo 6.1 letra a) de la Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Consumo, por la que se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento, se confiere plazo de 10 días hábiles para informar Memoria del Análisis de Impacto Normativo y Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo. En este sentido, analizados los anteriores documentos, se reitera la misma consideración que ya se efectuó con ocasión del trámite de alegaciones al Borrador del Proyecto de Real Decreto y que no es otra que pedir **que el artículo 6 (“Régimen Sancionador”) recoja una delimitación competencial concreta que permita a las Comunidades Autónomas ejercer la potestad sancionadora de forma adecuada y por parte de la autoridad que resulte competente en cada caso**. Tal y como ya se expuso en el momento en que se tuvo conocimiento del Borrador del Proyecto, debe tenerse en cuenta que estamos ante una norma reglamentaria que incide en dos ámbitos competenciales que en muy pocas ocasiones se	del mismo modo que vienen haciendo hasta ahora.

		encuentran residenciados en el mismo órgano administrativo, como son la atención a la discapacidad y la defensa de las personas consumidoras o la inspección de consumo. Esta falta de coincidencia en el mismo órgano puede provocar conflictos en orden a determinar a quien corresponde sancionar las conductas lesivas de los intereses de las personas con alguna discapacidad, que además de esta circunstancia, son personas consumidoras vulnerables. Más allá de la anterior consideración, debe ponerse igualmente de manifiesto que lo exigido por el Proyecto de Real Decreto **impone a las Comunidades Autónomas una obligación de supervisión para la que en muchos casos no están capacitadas**. Este es el caso de Extremadura que en el momento actual carece de personal con funciones de inspección de consumo con los conocimientos necesarios para determinar si el etiquetado accesible se ajusta o no a las exigencias reglamentarias, ni siquiera si éste es fiel reflejo del etiquetado estándar. Sin duda, al menos en el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ello supondrá la necesidad de dotarse de personal acreditado y capacitado a	

		tal efecto, debiendo así asumir un coste económico para la aplicación de las exigencias del Real Decreto.	
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA			
Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille.	**Comunidad Autónoma de Extremadura**	• **Inclusión de una Disposición adicional única:** No prevista inicialmente en el borrador y que viene a eximir del cumplimiento de las obligaciones de etiquetado accesible a productos que ya estuvieran etiquetados en braille cuando, al menos, incluyan la información mínima contenida en el artículo 3.2.b.	No se requiere comentario al respecto pues no hay propuesta
Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille.			
Disposición adicional única. Exención por etiquetado preexistente en braille.			
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA			
Disposición transitoria única. Régimen transitorio	**Comunidad Autónoma de Extremadura**	• **Nueva redacción de la Disposición transitoria única:** Sin duda, la nueva redacción se encuentra íntimamente relacionada con la nueva Disposición adicional única, de modo que, si bien pareciera que se impone una exigencia mayor que con respecto a lo previsto en el	**Se acepta parcialmente.** Se procede a ampliar el plazo a 18meses

		Borrador, esta exigencia se mitiga con la exención a la que se ha aludido anteriormente. No obstante, para todos los productos a los que no se aplique la mencionada exención, la nueva Disposición Transitoria reduce a la mitad el plazo de tiempo en el que se va a exigir el cumplimiento de esta norma: mientras que el borrador otorgaba un plazo de 2 años para vender productos puestos a la venta antes de la entrada en vigor de este Real Decreto pese a no cumplir las exigencias reglamentarias, la nueva redacción reduce este plazo a 1 año para que “los establecimientos comerciales….para adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento…” Se valora negativamente esta redacción como quiera que pueda incidir negativamente en los operadores económicos y, con ello, en las personas consumidoras que pueden ver reducido en gran media el número de bienes y productos ofertados en el mercado. Debe tenerse en cuenta que la exigencia de adopción de medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de este Real Decreto se encuentra dirigida a los titulares de establecimientos comerciales que en la gran	

		mayoría de los casos no son los responsables de la fabricación de los productos.	
Disposición transitoria única. Régimen transitorio			
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA			
Disposición final primera. Títulos competenciales			
Disposición final primera. Títulos competenciales			
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA			
Disposicion final segunda. Evaluación de la norma	**Comunidad Valenciana**	Por último, respecto del seguimiento y evaluación, se estima oportuno que la evaluación ex post prevista en la norma en su disposición final segunda **se incorpore indicadores específicos** para su evaluación y en concreto se pueda valorar el impacto real del etiquetado accesible en la autonomía personal, la seguridad y la igualdad de trato de las personas con discapacidad en el ámbito del consumo.	**Se rechaza.** No se estima necesario detallar el contenido de dicho informe.
Disposicion final segunda. Evaluación de la norma			
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA			
Disposición final tercera. Desarrollo normativo			
Disposición final tercera. Desarrollo normativo			

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA			
Disposicion final cuarta. Entrada en vigor			
Disposicion final cuarta. Entrada en vigor			
ANEXO. PRODUCTOS DE CONSUMO DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y CALIDAD DE VIDA.			
Anexo. Productos de consumo de esperial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida.			
Anexo. Productos de consumo de esperial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida.			
MAIN			
MAIN	**Comunidad de Aragón DG Comercio, Ferias y Artesanía**	Por último, la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, señala: El proyecto normativo se centra en tres categorías de productos: cosméticos, productos peligrosos y alimentos susceptibles de generar alergias o intolerancias. Si bien se comparte el objetivo de promover la accesibilidad universal en cumplimiento de la Ley 4/2022, se advierte que la propuesta actual presenta rigideces que comprometen la viabilidad económica, la	El servicio de impresión en braille será a solicitud de la persona consumidora y dicha información se adherirá al producto o se proporcionará en un etiquetado adicional. Lo cual, esto no va a suponer la necesidad de aumentar el tamaño del

		operatividad del sector comercial discrimina injustamente entre operadores y restringe la libertad de elección de los ciudadanos con discapacidad visual. El borrador centra la obligación de accesibilidad casi exclusivamente en el uso del sistema Braille. Sin embargo, los propios colectivos afectados indican que, si bien es útil, este sistema es minoritario. Se propone considerar otras alternativas más eficaces, como los códigos NaviLens (códigos de lectura), que permiten acceder a la información completa del producto y ser reproducida mediante locución. Limitaciones del Braille: La imposición de este sistema puede obligar a incrementar el tamaño de los envases, lo cual genera un coste desproporcionado y afecta negativamente a la competitividad de las empresas. Propuesta de mejora: Se sugiere el uso de un marco o cuadrado con relieve que facilite la localización de la información, permitiendo que esta se actualice de manera rápida y eficiente. Información crítica: Es imperativo distinguir entre información genérica e información	envase Por otro lado, se procede a revisar el impacto económico.

		crítica. La fecha de consumo preferente y de caducidad debe figurar obligatoriamente en el envase, mientras que el resto de la información complementaria puede gestionarse a través de soportes digitales. El proyecto normativo adolece de un estudio económico real que valore el impacto por tipo de empresa o sector. La memoria económica actual se centra exclusivamente en el sector del envase y etiquetado, obviando que los costes reales recaerán sobre los sectores industriales (agroalimentario, farmacéutico, metalúrgico, etc.), quienes deberán asumir este sobrecoste o trasladarlo al precio final. Desigualdad en los sectores: No todas las industrias operan con los mismos márgenes de beneficio, por lo que la generalización de estas obligaciones sin modular según el sector resulta ineficiente. Riesgos de desincentivación: El incremento de costes operativos puede desincentivar la producción nacional y la distribución de ciertos productos, situando a las empresas españolas en una posición de desventaja competitiva frente a operadores de otros países donde no existen tales requerimientos.	

		Mercado Único y Medio Ambiente: Al no existir una directiva europea que armonice esta norma, corremos el riesgo de fragmentar el mercado único. Además, la necesidad de adaptar etiquetas específicas para el mercado nacional —con costes estimados de hasta el 35%— implica un aumento en el consumo de recursos, generación de residuos y un impacto ambiental negativo innecesario, al obligar a fabricar etiquetas múltiples para un mismo producto.	
MAIN	**Comunidad Autónoma Principado de Asturias**	3. Subestimación del impacto en las administraciones autonómicas **3-1. Declaración de impacto presupuestario nulo** La Memoria del Análisis de Impacto Normativo declara que la aplicación del Real Decreto no tiene impacto presupuestario para las Administraciones Públicas. Desde una perspectiva formal esta afirmación puede resultar correcta, sin embargo, desde un enfoque material y operativo presenta importantes déficits analíticos ya que la implementación efectiva de la norma	Se procede a revisar la evaluación del impacto económico

		previsiblemente generará impactos indirectos como los siguientes: • Incremento de demandas de información y acompañamiento social. • Necesidad de formación y sensibilización, directa o indirecta, de personas usuarias de servicios sociales. • Requerimientos de coordinación con entidades del tercer sector. Estas actuaciones forman parte de las competencias habituales de la Consejería, pero su intensificación sin recursos adicionales puede afectar: • A la capacidad de respuesta de los servicios sociales de base. • A la priorización de otras políticas sociales estratégicas.	
MAIN	**Comunidad de Madrid**	Tampoco resulta aceptable que se afirme, sin una justificación sólida, que la medida carece de impacto sobre la competencia. No basta con atender al porcentaje de operadores afectados si la norma impone obligaciones y sobrecostes a unos y no a otros, pudiendo generar ventajas competitivas no justificadas. La memoria exige, por ello, una motivación mucho más rigurosa.	La evaluación realizada se considera adecuada y queda reflejada en la MAIN